



3 1761 07513660 6



COLECCION
DE
PACTOS INTERNACIONALES
DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
IV

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

COLECCION
DE
TRATADOS, CONVENCIONES
Y
OTROS PACTOS INTERNACIONALES
DE LA
REPUBLICA ORIENTAL EL URUGUAY



PUBLICACION OFICIAL
TOMO IV
(1891 — 1905)

MONTEVIDEO

Imp. "El Siglo Ilustrado"

Calle San José, 938

1926

1891

Uruguay-Gran Bretaña

Convención Postal

*Celebrada en Montevideo, el 22 de Enero de 1891 y
en Londres el 23 de Febrero del mismo año (*)*

La Dirección de Correos del Uruguay y la Dirección de Correos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda convienen en efectuar el canje de bultos no asegurados y sin gravamen de reembolso, entre la República del Uruguay y la Gran Bretaña, bajo las bases que se estipularán más adelante.

Las condiciones en que se efectuará el canje de esos bultos, ya sean bultos canjeados directamente entre la República Oriental del Uruguay y la Gran Bretaña, o ya sean bultos en tránsito, serán determinadas por los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

1. Podrán expedirse bajo la denominación de bultos postales no asegurados y sin gravamen de reem-

(*) Véase el Convenio de fecha 14 de Mayo y 1.º de Julio de 1901.

bolso de la Gran Bretaña al Uruguay, hasta la concurrencia de 11 libras "avoir du poids" y del Uruguay al Reino Unido hasta la concurrencia de 5 kilogramos

2. Las dos Administraciones determinarán bajo qué condiciones podrán circular los bultos, refiriéndose en esto a la manera de envolver los bultos, dimensiones, etc., como también qué clase de artículos son prohibidos.

ARTÍCULO II

1. Cada uno de los países contratantes garantiza el tránsito de bultos por su territorio, ya sea que salgan o que entren a cualquier país con el cual la Parte Contratante tenga algún arreglo postal sobre bultos; y las Oficinas que tomen parte en la conducción son responsables en los límites determinados por el artículo VIII siguiente.

2. No habiendo ningún arreglo entre las Oficinas referidas, la conducción de bultos postales canjeados, de esta manera, entre países no limítrofes, se efectuará por medio de bolsas, cajones o cestos.

ARTÍCULO III

El franqueo previo de los bultos postales es obligatorio.

ARTÍCULO IV

La tarifa de bultos del Reino Unido al Uruguay y viceversa, será como sigue:

	Pes.
Tasa territorial británica	1.60
Tasa marítima.	2.50
Tasa territorial uruguaya	1.25
Total	5.35

ARTÍCULO V

1. Los bultos originarios de cualesquiera de los países contratantes, dirigidos al otro país contratante, no podrán ser gravados con otros derechos que no sean los previstos por el artículo IV anterior y artículo VI subsiguiente.

2. Las dos Administraciones postales fijarán de común acuerdo las condiciones en que se pueda efectuar el canje entre sus Oficinas respectivas de bultos originarios o con destino a países extranjeros y mandados en tránsito por uno u otro país.

ARTÍCULO VI

La reexpedición de los bultos postales de un país a otro, a consecuencia de cambio de residencia de los destinatarios, así como la devolución de los bultos postales caídos en rezago, dará lugar a la percepción suplementaria de las tasas fijadas por el artículo IV a cargo de los destinatarios, o llegado el caso, de los remitentes; sin perjuicio a la reclamación del reembolso de los derechos de Aduana.

ARTÍCULO VII

Queda prohibido expedir por vía del Correo bultos conteniendo, sea cartas o notas con carácter de correspondencia, sea objetos cuya admisión no está autorizada por las leyes o reglamentos de Aduana de los países respectivos.

ARTÍCULO VIII

1. Salvo caso de fuerza mayor, cuando un bulto postal fuese perdido, expoliado o averiado, el remitente, o en su defecto a pedido de éste, el destinatario, tendrá derecho a una indemnización correspondiente al importe real de la pérdida o de la avería, sin que esa indemnización, no obstante, pueda exceder de 25 francos por bulto. El remitente de un bulto perdido tendrá, además, derecho a la restitución de los gastos de franqueo.

2. La obligación de pagar la indemnización incumbirá a la Administración de la cual dependa la Oficina remitente. Estará reservado a esta Administración el recurso contra la Administración responsable, es decir, contra la Administración en cuyo territorio o servicio, la pérdida o avería tuviere lugar.

3. Hasta prueba de lo contrario, la responsabilidad incumbirá a la Administración que habiendo recibido el bulto sin hacer observación, no pueda efectuar la entrega al destinatario, ni, si hubiese lugar a ello, la transmisión regular a la Administración siguiente.

4. El pago de la indemnización por la Administra-

ción remitente, se hará a la brevedad posible y, a más tardar, en el plazo de un año a contar del día de la reclamación.

La Administración responsable está obligada a reembolsar, sin demora, a la Administración remitente, el importe de la indemnización adeudada por ella.

5. Queda entendido que la reclamación no será admitida sino en el plazo de un año a contar del día de depósito del bulto en el Correo; pasado este término, el reclamante no tendrá derecho a ninguna indemnización.

6. Las Administraciones cesarán de ser responsables de los bultos postales de los cuales los destinatarios hubiesen aceptado la entrega.

ARTÍCULO IX

La legislación interna de cada uno de los países contratantes será aplicable en todo aquello que no está previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convención.

ARTÍCULO X

Las Administraciones de Correos de los países contratantes designarán las oficinas o localidades habilitadas al cambio internacional de bultos postales, reglamentarán el modo de transmisión de esos bultos y fijarán todas las demás medidas de detalle y de orden necesarias para asegurar la ejecución de la presente Convención.

ARTÍCULO XI

La presente Convención entrará en vigor el día 1.º de Abril de 1891 y permanecerá en vigencia hasta que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra, mediante un aviso dado con anticipación de un año, su intención de anularla.

En fe de lo cual los abajo firmados, debidamente autorizados para este acto, firman y sellan la presente Convención.

En Montevideo, el día veintidós de Enero de mil ochocientos noventa y uno y en Londres, el día veintitrés de Febrero de mil ochocientos noventa y uno.

CIPRIANO HERRERA.

HENRY CECIL RAIKES.

1891

Uruguay—Gran Bretaña

Protocolo adicional al Tratado de Extradición de Criminales.

Celebrado en Montevideo el 20 de Marzo de 1891.

Canjeadas las ratificaciones en Montevideo el 17 de Julio de 1891.

En Montevideo, a los veinte días del mes de Marzo del año de 1891, reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, SS. EE. el Señor Doctor don Manuel Herrero y Espinosa, Ministro del Ramo, y el Señor don Ernesto Satow, Miembro de la muy distinguida Orden de San Miguel y San Jorge, Ministro Residente y Cónsul General de Su Majestad Británica en la República, con el objeto de establecer la ampliación del término fijado en el artículo IX del Tratado de Extradición de Criminales vigente entre ambos Países para la detención preventiva de las personas perseguidas por alguno de los crímenes o delitos especificados en dicho Tratado; después de canjeados sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, convinieron en hacer la siguiente de-

claración que se considerará parte integrante del referido Pacto Internacional:

Siendo notoriamente insuficiente el término de treinta días que establece el artículo IX del Tratado de Extradición de Criminales vigente entre la República Oriental del Uruguay y la Gran Bretaña, para la detención preventiva de las personas perseguidas por alguno de los crímenes o delitos especificados en el referido Tratado, ambos Gobiernos convienen en que dicho plazo quede fijado desde luego en sesenta días.

En fe de lo cual los Señores Plenipotenciarios hicieron labrar el presente Protocolo por duplicado, cuyos ejemplares firmaron y sellaron con sus sellos en la fecha arriba expresada.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) ERNESTO MASON SATOW.

Uruguay—Alemania y los protectorados alemanes —EE. UU. de América —Argentina —Austria—Hungria—Bélgica—Bolivia—Brasil—Bulgaria—Chile — Colombia — Estado independiente del Congo—Costa Rica—Dinamarca y colonias danesas—República Dominicana—Egipto—Ecuador—España y colonias españolas—Francia y colonias francesas—Gran Bretaña y diversas colonias británicas—Colonias británicas de Australia—Canadá—India Británica—Grecia—Guatemala—Haití—Hawái—Honduras — Italia—Japón—Liberia—Luxemburgo—Méjico — Montenegro—Nicaragua—Noruega — Paraguay —Países Bajos y colonias neerlandesas — Perú—Persia—Portugal y colonias portuguesas — Rumania—Rusia —Salvador - Servia - Siam - República Sudafricana - Suecia - Suiza - Túnez - Turquía - Estados Unidos de Venezuela.

Convención Postal Universal

Celebrada en Viena el 4 de Julio de 1891. ()*

Ratificada por el Uruguay en el año 1893.

El Uruguay y Alemania, los protectorados alemanes, Estados Unidos de América, República Argentina, Austria-Hungria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria,

(*) Véase la Convención de 15 de Junio de 1897.

Chile, República de Colombia, Estado independiente del Congo, República de Costa Rica, Dinamarca y colonias danesas, República Dominicana, Egipto, Ecuador, España y colonias españolas, Francia y colonias francesas, Gran Bretaña y diversas colonias británicas, Colonias británicas de Australia, Canadá, India británica, Grecia, Guatemala, República de Haití, Reino de Hawai, República de Honduras, Italia, Japón, República de Liberia, Luxemburgo, Méjico, Montenegro, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Países Bajos y colonias neerlandesas, Perú, Persia, Portugal y colonias portuguesas, Rumania, Rusia, Salvador, Servia, Reino de Siam, República Sudafricana, Suecia, Suiza, Regencia de Túnez, Turquía y Estados Unidos de Venezuela.

Los abajo firmados, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países arriba enumerados, habiéndose reunido en Congreso en Viena, en virtud del artículo XIX de la Convención Postal Universal celebrada en París el 1.º de Junio de 1878, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han revisado la mencionada Convención, así como también el Acta adicional relativa a la misma, labrada en Lisboa el 21 de Marzo de 1885, en la forma consignada en las disposiciones siguientes:

ARTÍCULO I

Los países entre los cuales se ha celebrado la presente Convención, así como los que se adhieran a ella en adelante, formarán bajo la denominación de “Unión Postal Universal”, un solo territorio para el cambio

recíproco de correspondencias entre sus oficinas de correos.

ARTÍCULO II

Las disposiciones de esta Convención comprenden las cartas, las tarjetas postales sencillas y con respuesta paga, los impresos de toda clase, los papeles de negocios y las muestras de mercancías, originarios de uno de los países de la Unión y con destino a otro de dichos países. Se refieren también al cambio postal de los objetos arriba enunciados entre los países de la Unión y los países extraños a ella, siempre que este cambio se efectúe, cuando menos, por medio de los servicios de dos de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO III

1—Las Administraciones de Correos de los países limítrofes o que estén en aptitud de comunicar directamente entre sí, sin usar de los servicios de una tercera Administración, determinarán, de común acuerdo, las condiciones del transporte de sus valijas recíprocas a través de la frontera o de una frontera a otra.

2—Salvo arreglo contrario, se consideran como servicios de tercero los transportes marítimos efectuados directamente entre dos países por medio de paquetes o buques dependientes de uno de ellos; y estos transportes, así como aquellos que se efectúen entre dos oficinas de un mismo país por medio de servicios marítimos o territoriales dependientes de otro, están regidos por las disposiciones del artículo siguiente.

ARTÍCULO IV

1—La libertad de tránsito queda garantida en todo el territorio de la Unión.

2—En consecuencia, las diversas Administraciones postales de la Unión pueden dirigirse recíprocamente, por intermedio de una o varias de entre ellas, tanto valijas cerradas como correspondencias al descubierto, según las necesidades del tráfico y las conveniencias del servicio postal.

3—Las correspondencias que se cambien entre dos Administraciones de la Unión, sea al descubierto, sea en valija cerrada, por medio de los servicios de una o varias Administraciones de la Unión, quedan sujetas, en provecho de cada uno de los países recorridos, o cuyos servicios hubiesen tomado parte en el transporte, a los derechos de tránsito siguientes:

1.° Por el tránsito territorial, 2 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y 25 céntimos por kilogramo de otros objetos;

2.° Por el tránsito marítimo, 15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y 1 franco por kilogramo de otros objetos.

4—Queda entendido, sin embargo:

1.° Que donde el tránsito sea gratuito en la actualidad o esté sujeto a condiciones más ventajosas, este régimen queda subsistente, salvo en el caso previsto en el inciso 3.° siguiente;

2.° Que donde los derechos del tránsito maríti-

mo están fijados actualmente en 5 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y en 50 céntimos por kilogramo de otros objetos, esos precios quedan subsistentes;

3.º Que todo tránsito marítimo que no exceda de 300 millas marinas es gratuito, si la Administración interesada tiene ya derecho, por los despachos o correspondencias que han participado de ese tránsito, a la remuneración correspondiente al tránsito territorial; en caso contrario es retribuido a razón de 2 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y de 25 céntimos por kilogramo de otros objetos;

4.º Que en caso de transporte marítimo efectuado por dos o más Administraciones, los gastos del tránsito total no pueden exceder de 15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y de 1 franco por kilogramo de otros objetos; estos gastos, en caso ocurrente, serán repartidos entre esas Administraciones a prorrata de las distancias recorridas, sin perjuicio de otro arreglo entre las partes interesadas;

5.º Que los precios especificados en el presente artículo no son aplicables a los transportes efectuados por medio de servicios dependientes de Administraciones extrañas a la Unión, ni a los transportes que se verifican en la Unión por medio de servicios extraordinarios creados o mantenidos especialmente por una Administración, en interés o a pedido de una o de varias Administraciones. Las condiciones de estas dos categorías

de transportes serán arregladas de común acuerdo entre las Administraciones interesadas.

5—Los gastos de tránsito estarán a cargo de la Administración del país de origen.

6—La cuenta general de estos gastos será hecha sobre la base de los cuadros estadísticos levantados cada tres años durante un período de 28 días, que se determinará en el Reglamento de ejecución previsto por el artículo XX siguiente.

7—Quedan exentos de todo derecho de tránsito territorial o marítimo: la correspondencia de las Administraciones postales entre sí, las tarjetas postales con respuesta devueltas al país de origen, los objetos reexpedidos o mal dirigidos, los rezagos, los avisos de recepción, los giros postales y todos los demás documentos relativos al servicio postal.

ARTÍCULO V

1—Las tasas por el transporte de los envíos postales en todo el territorio de la Unión, comprendiendo su envío al domicilio de los destinatarios en los países de la Unión donde el servicio de distribución está o será organizado, quedan fijadas como sigue:

1.° Para las cartas, 25 céntimos en caso de franqueo y el doble en caso contrario, por cada carta y por cada peso de 15 gramos o fracción de 15 gramos;

2.° Para las tarjetas postales 10 céntimos por

tarjeta sencilla o por cada una de las dos partes de la tarjeta con respuesta paga;

Las tarjetas postales sin franqueo están sujetas a la tasa de las cartas sin franqueo;

3.º Para los impresos de toda naturaleza, los papeles de negocios y las muestras de mercaderías, 5 céntimos por cada objeto o paquete que lleve una dirección particular y por cada peso de 50 gramos o fracción de 50 gramos, siempre que este objeto o paquete no contenga ninguna carta o nota manuscrita que tenga el carácter de correspondencia actual y personal, y esté acondicionado de manera que se pueda verificar con facilidad;

La tasa de los papeles de negocios no puede ser inferior a 25 céntimos por envío y la de las muestras a 10 céntimos por envío.

2—Se puede percibir, además de las tasas fijadas por el inciso precedente:

1.º Por todo envío sujeto a gastos de tránsito marítimo de 15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales, y de 1 franco por kilogramo de otros objetos, y en todas las relaciones a que estos gastos de tránsito son aplicables, una sobretasa que no puede exceder de 25 céntimos por porte sencillo, uniforme para las cartas, 5 céntimos por tarjeta postal y 5 céntimos por cada 50 gramos o fracción de 50 gramos, para los otros objetos;

2.º Por todo objeto transportado por medio de

servicios dependientes de Administraciones extrañas a la Unión, o por medio de servicios extraordinarios en la Unión que den lugar a gastos especiales, una sobretasa en relación con estos gastos.

3—En caso de insuficiencia de franqueo, los objetos de correspondencia de toda especie estarán sujetos, a cargo de los destinatarios, a una tasa doble del monto de la insuficiencia, sin que esta tasa pueda exceder de la que se percibe en el país de destino por las correspondencias no franqueadas, de la misma especie, peso y origen.

4—Los demás objetos que no sean cartas o tarjetas postales deberán franquearse siquiera en parte.

5—Los paquetes de muestras de mercaderías no podrán contener ningún objeto que tenga un valor comercial; no deberán exceder del peso de 250 gramos, ni presentar dimensiones superiores a 30 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de espesor, o, si tienen la forma de rollo, de 30 centímetros de largo y 15 centímetros de diámetro. Sin embargo, las Administraciones de los países interesados quedan autorizadas para adoptar, de común acuerdo, para sus cambios recíprocos, límites de peso o de dimensiones superiores a los prefijados.

6—Los paquetes de papeles de negocios y de impresos no podrán sobrepasar el peso de 2 kilogramos, ni presentar, en ninguno de sus lados, una dimensión superior a 45 centímetros. Se puede, sin embargo, admitir al transporte por correo los paquetes en forma

de rollo cuyo diámetro no exceda de 10 centímetros y cuyo largo no exceda de 75 centímetros.

ARTÍCULO VI

1—Los objetos designados en el artículo V, pueden ser expedidos bajo recomendación.

2—Todo envío recomendado está sujeto, a cargo del remitente:

1.º Al porte de franqueo ordinario del envío, según su naturaleza;

2.º A un derecho fijo de recomendación de 25 céntimos como máximo, comprendiendo en él la entrega de un certificado de depósito al expedidor.

3—El remitente de todo objeto recomendado puede obtener un aviso de recepción de dicho objeto, pagando de antemano un derecho fijo de 25 céntimos como máximo.

ARTÍCULO VII

1—Las correspondencias recomendadas podrán expedirse gravadas de reembolso hasta el monto de 500 francos en las relaciones entre los países cuyas Administraciones estén de acuerdo para introducir ese servicio. Estos objetos estarán sometidos a las formalidades y a las tasas de los envíos recomendados.

2—El monto cobrado al destinatario deberá ser transmitido al remitente por medio de un giro postal, después de deducir la tasa de los giros ordinarios y un derecho de ingreso en caja de 10 céntimos.

ARTÍCULO VIII

1—En caso de pérdida de un objeto recomendado y salvo caso de fuerza mayor, el remitente, o, a pedido de éste, el destinatario, tiene derecho a una indemnización de 50 francos.

2—La obligación de pagar la indemnización incumbe a la Administración de que depende la oficina remitente. A esta Administración le está reservado el recurso contra la Administración responsable, es decir, contra la Administración en cuyo territorio o en cuyo servicio ha tenido lugar la pérdida.

3—Hasta prueba de lo contrario, la responsabilidad incumbe a la Administración que, habiendo recibido el objeto sin hacer observación alguna, no puede probar ni la entrega al destinatario ni, llegado el caso, la transmisión regular a la Administración inmediata.

En los envíos dirigidos a la *poste restante*, la responsabilidad cesa por la entrega a una persona que haya justificado, según las disposiciones vigentes en el país de destino, que su nombre y calidad están conformes con las indicaciones contenidas en la dirección del envío.

4—El pago de la indemnización por la Administración remitente deberá efectuarse a la brevedad posible y a más tardar en el plazo de un año, a contar del día de la reclamación. La Administración responsable está obligada a reembolsar sin retardo a la Administración remitente, el monto de la indemnización pagada por ésta. En el caso en que la Administración responsable hubiera notificado a la remitente que no

efectuara el pago, deberá reembolsar a esta última Administración los gastos que se originaran por esa falta de pago.

5—Queda entendido que la reclamación no se admitirá sino en el plazo de un año, desde el depósito en el correo del envío recomendado; pasado ese término, el reclamante no tiene derecho a ninguna indemnización.

6—Si la pérdida ha tenido lugar en el curso del transporte sin que sea posible establecer en qué territorio el hecho tuvo lugar, las Administraciones en causa pagarán la indemnización por partes iguales.

7—Las Administraciones cesan de ser responsables de los envíos recomendados cuyos destinatarios han otorgado recibo y tomado posesión de ellos.

ARTÍCULO IX

1—El remitente de un objeto de correspondencia puede hacerlo retirar del servicio o hacer modificar su dirección, siempre que este objeto no haya sido entregado al destinatario.

2—El pedido que se formule con tal objeto se transmitirá por vía postal o telegráfica por cuenta del remitente, quien debe pagar lo siguiente:

1.º Para todo pedido por vía postal, la tasa correspondiente a una carta sencilla recomendada;

2.º Para todo pedido por vía telegráfica, la tasa del telegrama según la tarifa ordinaria.

3—Las disposiciones del presente artículo no son obligatorias para los países cuya legislación no per-

mite al remitente disponer de un envío en curso de transporte.

ARTÍCULO X

Los países de la Unión que no tienen el franco por unidad monetaria, fijarán en sus monedas respectivas el equivalente de las tasas determinadas por los artículos V y VI que preceden. Estos países tienen la facultad de redondear las fracciones con arreglo al cuadro inserto en el Reglamento de ejecución, mencionado en el artículo XX de la presente Convención.

ARTÍCULO XI

1—El franqueo de todo envío, cualquiera que sea, no puede efectuarse sino por medio de timbres postales, válidos en el país de origen para la correspondencia de los particulares. Sin embargo, serán igualmente consideradas como debidamente franqueadas las tarjetas con respuesta que contengan timbres postales del país de emisión de esas tarjetas.

2—Las correspondencias oficiales relativas al servicio de correos y cambiadas entre las Administraciones postales, son las únicas exentas de esta obligación y admitidas libres de porte.

3—La correspondencia depositada en alta mar en el buzón de un paquete o en manos del Comandante del buque, puede ser franqueada con timbres postales del país a que pertenece o de que depende dicho paquete y según la tarifa vigente en el mismo. Si el depósito a bordo tiene lugar durante la estada en los puntos

extremos del trayecto o en una de sus escalas intermedias, el franqueo no es válido si no se efectúa con timbres postales del país en cuyas aguas se encuentra el paquete y según la tarifa que en dicho país rija.

ARTÍCULO XII

1—Cada Administración guardará íntegras para sí las sumas que haya percibido en virtud de los artículos V, VI, VII, X y XI que anteceden, con excepción de lo que corresponda abonar por los giros previstos en el inciso 2 del artículo VII.

2—En consecuencia, no ha lugar, por tal concepto, a cuenta alguna entre las diversas Administraciones de la Unión, excepto el caso previsto en el inciso que antecede.

3—Las cartas y demás envíos postales no podrán ser gravados en el país de origen, ni en el de destino, con porte o derecho postal alguno a cargo de los remitentes o de los destinatarios, fuera de los previstos por los artículos arriba citados.

ARTÍCULO XIII

1—Los objetos de correspondencia de toda naturaleza serán, a pedido del remitente, remitidos a domicilio por un mandadero especial inmediatamente después de la llegada, en los países de la Unión que consientan establecer ese servicio en sus relaciones recíprocas.

2—Estos envíos, calificados *expresos*, están sometidos a una tasa especial de entrega a domicilio, fijada

en 30 céntimos, que deberá ser abonada íntegra y adelantada por el remitente, además del porte ordinario, quedando a beneficio de la Administración del país de origen.

3—Cuando el objeto esté destinado a una localidad en donde no exista oficina de correos, la Administración de Correos destinataria puede percibir una tasa complementaria, cuyo máximo no excederá del precio fijado para el envío por expreso en su servicio interno, deduciendo la tasa fija abonada por el remitente o su equivalente en la moneda del país que percibe ese complemento.

4—Los objetos expresos insuficientemente franqueados en cuanto al monto total de las tasas pagaderas adelantadas, serán distribuídos por los medios ordinarios.

ARTÍCULO XIV

1—No puede percibirse ningún suplemento de tasa por la reexpedición de envíos postales en el interior de la Unión.

2—Las correspondencias caídas en rezago no dan lugar a la restitución de los derechos de tránsito correspondientes a las Administraciones intermediarias por el transporte anterior de dichas correspondencias.

3—Las cartas y las tarjetas postales sin franqueo y las correspondencias de toda naturaleza insuficientemente franqueadas, que vuelvan al país de origen a causa de reexpedición o de rezago, estarán sujetas, a cargo de los destinatarios o de los remitentes, a las mismas tasas que los objetos similares directamente dirigidos del país de primer destino al país de origen.

ARTÍCULO XV

1—Pueden cambiarse valijas cerradas entre las oficinas de correos de uno de los países contratantes y los comandantes de divisiones navales o buques de guerra de ese mismo país que estén de estación en el extranjero, por medio de los servicios territoriales o marítimos dependientes de otros países.

2—Las correspondencias de toda naturaleza contenidas en esas valijas, deben ser dirigidas exclusivamente a los Estados Mayores y a las dotaciones de los buques destinatarios o expedidores de las valijas, o procedentes de ellos; las tarifas y condiciones de envío que les sean aplicables serán determinadas, según sus reglamentos internos, por la Administración de Correos del país a que pertenecen los buques.

3—Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, la Administración postal remitente o destinataria de las valijas de que se trata, es deudora para con las Administraciones intermediarias de los gastos de tránsito, calculados de acuerdo con las disposiciones del artículo IV.

ARTÍCULO XVI

1—No se dará curso:

- a) A los papeles de negocios, muestras e impresos que no estén franqueados por lo menos parcialmente o que no estén acondicionados de manera que permitan una verificación fácil del contenido;

- b) A los objetos de las mismas categorías que sobrepasen los límites de peso y de dimensiones fijados en el artículo V;
- c) A las muestras de mercaderías que tengan valor comercial.

2—Llegado el caso, los envíos mencionados en el inciso que antecede, deben ser devueltos al punto de origen y entregados, si es posible, al remitente.

3—Queda prohibido:

1.º Expedir por el Correo:

- a) Muestras y otros objetos que por su naturaleza puedan ofrecer peligro para los empleados postales, ensuciar o deteriorar las correspondencias;
- b) Materias explosivas, inflamables o peligrosas, animales e insectos vivos o muertos, salvo las excepciones previstas por el Reglamento de detalle.

2.º Incluir en las correspondencias ordinarias o recomendadas depositadas en el Correo:

- a) Piezas de moneda que tengan curso legal;
- b) Objetos sujetos a derechos de Aduana;
- c) Materias de oro o de plata, pedrerías, alhajas y otros objetos preciosos, pero solamente en el caso en que su inserción o expedición fuera prohibida por la legislación de los países interesados.

4—Los envíos comprendidos en las prohibiciones del inciso 3 que antecede, que hubieran sido indebidamente admitidos a la expedición, deberán ser devueltos al punto de origen, salvo el caso en que la Administración del país de destino estuviera autorizada por sus leyes o reglamentos internos para disponer de ellos de otra manera.

5—Por lo demás, queda reservado al Gobierno de cada país de la Unión el derecho de no efectuar, dentro de su territorio, el transporte o la distribución, tanto de los objetos que disfrutan de la reducción de tasa y respecto de los cuales no se hubiese cumplido con las leyes, ordenanzas o decretos que regulen las condiciones de su publicación o de su circulación en ese país, como de las correspondencias de toda especie que lleven de una manera ostensible inscripciones, dibujos, etc., prohibidos por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en ese mismo país.

ARTÍCULO XVII

1—Las Administraciones de la Unión que están en relación con países situados fuera de ella, permitirán que las demás Administraciones de la Unión se aprovechen de esas relaciones para el cambio de correspondencias con dichos países.

2—Las correspondencias cambiadas al descubierto entre un país de la Unión y otro extraño a ésta por intermedio de otro país de la misma, serán tratadas, en lo concerniente a su transporte más allá de los límites de la Unión, con sujeción a las Convenciones, arreglos

o disposiciones particulares que rijan las relaciones postales entre este último país y el país extraño a la Unión.

3—Respecto de los gastos de tránsito en el interior de la Unión, las correspondencias originarias de un país extraño o con destino a él, serán asimiladas a las que expida o reciba el país de la Unión que mantenga relaciones con aquél.

4—Respecto de los gastos de tránsito fuera de los límites de la Unión, las correspondencias destinadas a un país extraño a ella quedan sometidas, en provecho del país de la Unión que mantenga relaciones con ese país extraño, a los gastos de tránsito siguientes:

- a) Para los trayectos marítimos fuera de la Unión, 20 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y 1 franco por kilogramo de otros objetos;
- b) Para los trayectos territoriales fuera de la Unión, si los hubiese, los gastos por cada kilogramo notificados por el país de la Unión que mantiene relaciones con el país extraño que sirve de intermediario.

5—En caso de transporte marítimo efectuado por dos o más Administraciones, los gastos del trayecto marítimo total en el interior de la Unión y fuera de ella no podrán ser mayores de 20 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y de 1 franco por kilogramo de otros objetos; esos gastos, llegado el caso, serán repartidos entre esas Administraciones a prorrata de las distancias recorridas, sin perjuicio de

otros arreglos que puedan celebrarse entre las partes interesadas.

6—Los gastos de tránsito fuera de la Unión serán de cargo de la Administración del país de origen. Se aplicarán a todas las correspondencias expedidas, sea al descubierto, sea en valija cerrada; pero en el caso de valijas cerradas remitidas de un país de la Unión con destino a otro país extraño a ella, o de un país extraño a la Unión con destino a otro país de la Unión, debe establecerse previamente entre las Administraciones interesadas un arreglo acerca del modo cómo ha de efectuarse el pago de los gastos que este tránsito origine.

7—La cuenta general de los gastos de tránsito de las correspondencias cambiadas entre un país de la Unión y un país extraño a ella, por intermedio de otro país de la Unión, se establecerá sobre la base de los cuadros estadísticos que se levanten al mismo tiempo que los que se formulen en virtud del artículo IV para la fijación de los gastos de tránsito en la Unión.

8—Las tasas que hayan de percibirse en un país de la Unión por las correspondencias procedentes de un país extraño a ella o destinadas a ese país, utilizando los servicios de otro país de la Unión, no podrán ser nunca inferiores a la tarifa normal de ésta. Esas tasas pertenecerán íntegramente al país que las perciba.

ARTÍCULO XVIII

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar las medidas necesarias, o a proponerlas a sus Legislaturas respectivas, para castigar el empleo frau-

dulento de timbres postales falsificados o que hayan sido ya usados en el franqueo de correspondencias; y para prohibir y reprimir las operaciones fraudulentas de fabricación, venta o distribución de diseños y estampillas en uso en el servicio de correos, falsificados o imitados de tal modo que puedan confundirse con los diseños y estampillas emitidos por la Administración de uno de los países adheridos a la presente Convención.

ARTÍCULO XIX

Los servicios de cartas y cajas con valores declarados, de giros postales, de bultos postales, de valores a cobrar, de libretas de identidad, de suscripción a periódicos, etc., serán objeto de arreglos particulares entre los diversos países o agrupaciones de países de la Unión.

ARTÍCULO XX

1—Las Administraciones postales de los diferentes países que componen la Unión tienen facultad para establecer, de común acuerdo, en un Reglamento de ejecución, todas las medidas de orden y detalle que juzguen necesarias.

2—Dichas Administraciones pueden, además, estipular entre sí los arreglos necesarios respecto de los asuntos que no conciernen a la Unión en conjunto, siempre que esos arreglos no deroguen la presente Convención.

3—Las Administraciones interesadas pueden, sin

embargo, ponerse de acuerdo para la adopción de tasas reducidas en un radio de 30 kilómetros.

ARTÍCULO XXI

1—La presente Convención no altera la legislación de cada país en todo lo que no está previsto por las estipulaciones que contiene.

2—No restringe el derecho de las Partes Contratantes para mantener y celebrar tratados, así como para sostener y establecer uniones más estrechas, con el fin de mejorar las relaciones postales.

ARTÍCULO XXII

1—Queda subsistente, bajo el nombre de *Oficina Internacional de la Unión Postal Universal*, la oficina central que funciona bajo la alta vigilancia de la Administración de Correos de Suiza, cuyos gastos serán sufragados por todas las Administraciones de la Unión.

2—Esa Oficina queda encargada de reunir, coordinar, publicar y distribuir los datos de toda especie que interesen al servicio internacional de correos; de emitir, a pedido de las partes interesadas, su opinión sobre las cuestiones litigiosas; de noticiar los pedidos que se hagan sobre modificación de los actos del Congreso; de notificar los cambios adoptados, y, en general, de proceder a los estudios y trabajos que considere útiles para la Unión Postal.

ARTÍCULO XXIII

1—En caso de desacuerdo entre dos o más miembros de la Unión, relativamente a la interpretación de la presente Convención o a la responsabilidad de una Administración por la pérdida de un envío recomendado, la cuestión en litigio será resuelta por juicio arbitral. Para tal efecto, cada una de las Administraciones interesadas designará a otro miembro de la Unión que no esté directamente interesado en el asunto.

2—La decisión de los árbitros será tomada por mayoría absoluta de votos.

3—En caso de empate, los árbitros designarán, para transar la cuestión, otra Administración igualmente desinteresada en el litigio.

4—Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a todos los convenios celebrados en virtud del artículo XIX que antecede.

ARTÍCULO XXIV

1—Los países que no han tomado parte en la presente Convención serán admitidos como adherentes a ella siempre que lo pidan.

2—Esta adhesión se notificará por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación Suiza, y por este Gobierno a todos los países de la Unión.

3—Trae consigo virtualmente la aquiescencia a todas las cláusulas y la admisión a todas las ventajas que se estipulan en la presente Convención.

4—Corresponde al Gobierno de la Confederación Suiza determinar, de común acuerdo con el Gobierno del

país interesado, la parte con que la Administración de este último país ha de contribuir a los gastos de la Oficina Internacional, y si hay lugar a ello, las tasas que pueda percibir esta Administración, de conformidad con el artículo X que antecede.

ARTÍCULO XXV

1—Se convocarán, según la importancia de las cuestiones a resolver, Congresos de plenipotenciarios de los países contratantes o simples Conferencias administrativas, cuando la propuesta de reunión haya sido hecha o aprobada, cuando menos, por las dos terceras partes de los Gobiernos o Administraciones.

2—Deberá, sin embargo, celebrarse un Congreso por lo menos cada cinco años.

3—Cada país puede hacerse representar por uno o más delegados, o bien por la delegación de otro país; pero queda entendido que el delegado o delegados de un país no pueden ser encargados sino de la representación de dos, comprendido en ellos el que representan.

4—En las deliberaciones cada país dispone de un solo voto.

5—Cada Congreso fijará el punto de reunión del Congreso subsiguiente.

6—Para las Conferencias, las Administraciones fijarán el punto de reunión a propuesta de la Oficina Internacional.

ARTÍCULO XXVI

1—En el lapso de tiempo que transcurre entre la reunión de dos Congresos o Conferencias, cada Admi-

nistración de Correos de la Unión tiene derecho a dirigir a las otras Administraciones copartícipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al régimen de la Unión.

2—Toda proposición será sometida al siguiente procedimiento:

Las Administraciones de la Unión dispondrán de un plazo de cinco meses para examinarla y comunicar a la Oficina Internacional, llegado el caso, sus observaciones, enmiendas o contraposiciones. Las contestaciones serán recopiladas por la Oficina Internacional y comunicadas a las Administraciones, invitándolas a pronunciarse en pro o en contra. Aquellas que no hubieran remitido su voto en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la segunda circular de la Oficina Internacional notificando las observaciones recibidas, serán consideradas como abstenidas.

3—Para que puedan tener fuerza ejecutiva esas proposiciones deberán obtener:

- 1.º Unanimidad de votos, si se trata de añadir nuevos artículos o de modificar disposiciones del presente artículo y de los artículos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV y XVIII.
- 2.º Dos terceras partes de votos, si se trata de la modificación de las disposiciones de la Convención que no sean las de los artículos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIX, XII, XIII, XV, XVIII y XXVI.
- 3.º Simple mayoría absoluta, si se trata de la interpretación de las disposiciones de la Conven-

ción, excepto el caso de litigio previsto por el artículo XXIII que precede.

4—Las resoluciones válidas serán consagradas, en los dos primeros casos, por una declaración diplomática que el Gobierno de la Confederación Suiza queda encargado de formular y transmitir a los Gobiernos de todos los países contratantes, y, en el tercer caso, por una mera notificación de la Oficina Internacional a todas las Administraciones de la Unión.

5—Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá fuerza ejecutiva antes de dos meses, por lo menos, después de su notificación.

ARTÍCULO XXVII

Para la aplicación de los artículos XXII, XXV y XXVI que preceden, se consideran como un solo país o una sola Administración, según el caso:

- 1.º El Imperio de la India británica.
- 2.º El dominio del Canadá.
- 3.º El conjunto de las colonias británicas de Australia.
- 4.º El conjunto de las colonias danesas.
- 5.º El conjunto de las colonias españolas.
- 6.º El conjunto de las colonias francesas.
- 7.º El conjunto de las colonias neerlandesas.
- 8.º El conjunto de las colonias portuguesas.

ARTÍCULO XXVIII

La presente Convención será puesta en vigencia el 1.º de Julio de 1892 y regirá por tiempo indetermina-

do; pero cada Parte Contratante tiene el derecho de retirarse de la Unión, mediante aviso dado por su Gobierno al de la Confederación Suiza con un año de anticipación.

ARTÍCULO XXIX

1—Quedan derogadas, desde el día en que se ponga en vigor la presente Convención, todas las disposiciones de los tratados, convenciones, arreglos u otros actos celebrados anteriormente entre los diferentes países o Administraciones, en cuanto no sean conciliables esas disposiciones con los términos de la presente Convención y sin perjuicio de los derechos reservados por el artículo XXI que antecede.

2—La presente Convención será ratificada tan pronto como se pueda. Las actas de ratificación serán canjeadas en Viena.

3—En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los países arriba enumerados han firmado la presente Convención en Viena, el 4 de Julio de mil ochocientos noventa y uno.

Por el Uruguay: FEDERICO SUSVIELA GUARCH,
José G. BUSTO. Por la Alemania y los
protectorados alemanes: DR. V. STEPHAN.
SACHSE, FRITSCH. Por la República Ar-
tina: CARLOS CALVO. Por los Estados Uni-
dos de América: N. M. BROOKS, WILLIAM
POTTER. Por el Austria: OBENTRAUT,
DR. HOFMANN, DR. LILIENAU, HABBERGER.
Por la Hungría: P. HEIM, S. SCHRIMPF.
Por la Bélgica: LICHTERVELDE. Por Boli-

via: Por el Brasil: LUIS BETIM PAES LEME. Por la Bulgaria: P. M. MATTHEEFF. Por Chile: Por la República de Colombia: G. MICHELSEN. Por el Estado independiente del Congo: STASSIN, LICHTERVELDE, GARANT, DE CRAENE. Por la República de Costa Rica: Por Dinamarca y las colonias danesas: LUND. Por la República Dominicana: Por el Egipto: I. SABA. Por el Ecuador: Por la España y las colonias españolas: FEDERICO BAS. Por la Francia: MONTMARIN, J. DE SELVES, ANSAULT. Por las Colonias francesas: G. GABRIÉ. Por la Gran Bretaña y diversas colonias británicas: S. A. BLACKWOOD, H. BUXTON FORMAN. Por las Colonias británicas de Australia: Por el Canadá: Por la India británica: H. M. KISCH. Por la Grecia: J. GEORGANTAS. Por Guatemala: DR. GOLTZ MEYER. Por las Colonias neerlandesas: JOHS J. PERK. Por el Perú: D. C. URREA. Por la Persia: GENERAL N. SEMINO. Por el Portugal y las colonias portuguesas: GUILLERMINO AUGUSTO DE BARROS. Por la Rumania: CORONEL A. GORJEAN, S. DIMÍTRESCU. Por la Rusia: GENERAL DE BESACK, A. SKALKOVSKY. Por el Salvador: LOUIS KEHLMANN. Por la Servia: SVETOZAR GROZDITCH, ET. U. POPOVITCH. Por el Reino de Siam: LUANG SURIYA NU-

VATR, KEUCHENIUS. Por la República Sud-africana: Por la Suecia: E. VON KRUSENSTJERNA. Por la Suiza: ED. HÖHN, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: MONTMARIN. Por la Turquía: E. PETACCI, A. FAHRI. Por los Estados Unidos de Venezuela: CARLOS MATZENAUER.

Protocolo final

Al proceder a firmar las Convenciones celebradas por el Congreso Postal de Viena, los Plenipotenciarios suscritos han convenido lo siguiente:

I

Alterando la disposición del artículo VI de la Convención que fija en 25 céntimos el máximo del derecho de recomendación, se ha convenido en que los Estados fuera de Europa están autorizados para elevar ese máximo a 50 céntimos, comprendiendo en él el comprobante de depósito que se entregará al remitente.

II

Alterando las disposiciones del artículo VIII de la Convención, se ha convenido en que, como medida de transición, las Administraciones de los países fuera de Europa cuya legislación sea actualmente contraria al principio de la responsabilidad, conserven la facultad de aplazar la aplicación de ese principio hasta el día en que obtengan del Poder Legislativo autorización para introducirla. Hasta entonces, las otras Adminis-

traciones de la Unión no están obligadas a pagar indemnización por la pérdida, en sus respectivos servicios, de envíos recomendados con destino a dichos países o procedentes de ellos.

III

No habiéndose hecho representar en este Congreso Bolivia, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Haití, Honduras y Nicaragua, que forman parte de la Unión Postal, queda abierto el protocolo para que puedan adherirse a las Convenciones que han sido celebradas en el mismo.

El protocolo queda igualmente abierto para las Colonias británicas de Australia, cuyos delegados han declarado que esos países tienen la intención de entrar en la Unión Postal Universal desde el 1.º de Octubre de 1891.

Queda también abierto para la República Sudafricana, cuyo delegado ha manifestado el propósito que tiene ese país de adherirse a la Unión Postal Universal, reservándose fijar ulteriormente la fecha de su entrada en ella.

Por último, el protocolo queda igualmente abierto para los otros países que están todavía fuera de la Unión Postal Universal, a fin de facilitar su entrada en ella.

IV

El protocolo permanece asimismo abierto para los países cuyos representantes no han firmado hoy más que la Convención principal, o solamente cierto núme-

ro de Convenciones celebradas por el Congreso, a fin de que puedan adherirse, si lo desean, a las otras Convenciones firmadas en este día.

V

Las adhesiones previstas por el artículo III que precede, deberán ser notificadas al Gobierno Imperial y Real de Austria-Hungría por los Gobiernos respectivos y por la vía diplomática. El plazo que se les acuerda para esta notificación expirará el 1.º de Julio de 1892.

VI

En el caso en que una o varias de las Partes Contratantes de las Convenciones postales firmadas hoy en Viena no ratificasen una u otra de esas Convenciones, esta Convención no será por eso menos válida para los Estados que la hubiesen ratificado.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios que firman han labrado el presente protocolo final, que tendrá la misma fuerza y el mismo valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo de las Convenciones a que se refiere, y lo han firmado en un ejemplar que quedará depositado en los archivos del Gobierno Austriaco, y cuya copia será remitida oportunamente a cada una de las partes.

Hecho en Viena, el cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y uno.

Por el Uruguay: FEDERICO SUSVIELA GUARCHI,
JOSÉ G. BUSTO. Por la Alemania y los

protectorados alemanes: DR. V. STEPHAN, SACHSE, FRITSCH. Por los Estados Unidos de América: N. M. BROOKS, WILLIAM POTTER. Por la República Argentina: CARLOS CALVO. Por el Austria: OBENTRAUT, DR. HOFMANN, DR. LILIENAU, HABBERGER. Por la Hungría: P. HEIM, S. SCHRIMPF. Por la Bélgica: LICHTERVELDE. Por Bolivia: Por el Brasil: LUIS BETIM PAES LEME. Por la Bulgaria: P. M. MATTHEEFF. Por Chile: Por la República de Colombia: G. MICHELSEN. Por el Estado independiente del Congo: STASSIN, LICHTERVELDE, GARANT, DE CRAENE. Por la República de Costa Rica: Por Dinamarca y las colonias danesas: LUND. Por la República Dominicana: Por el Egipto: I. SABA. Por el Ecuador: Por la España y las colonias españolas: FEDERICO BAS. Por la Francia: MONTMARIN, J. DE SELVES, ANSAULT. Por las Colonias francesas: G. GABRIÉ. Por la Gran Bretaña y diversas colonias británicas: S. A. BLACKWOOD, H. BUXTON FORMAN. Por las Colonias británicas de Australia: Por el Canadá: Por la India británica: H. M. KISCH. Por la Grecia: J. GEORGANTAS. Por Guatemala: DR. GOLTZ MEYER. Por la República de Haití: Por el Reino de Hawai: EUGENIO BOREL. Por la República de Honduras:

..... Por la Italia: EMIDIO CHIARADIA, FELICE SALIVETTO. Por el Japón: INDO, FUJITA. Por la República de Liberia: BN. DE STEIN, W. KOENTZER, C. GOEDEL. Por el Luxemburgo: MONGENAST. Por Méjico: L. BRETÓN Y VEDRAL. Por el Montenegro: OBENTRAUT, DR. HOFMANN, DR. LILIENAU, HABBERGER. Por Nicaragua: Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por el Paraguay: Por los Países Bajos: HOFSTEDÉ, BARÓN VAN DER FELTZ. Por las colonias neerlandesas: JOHS J. PERK. Por el Perú: D. C. URREA. Por la Persia: GENERAL N. SEMINO. Por el Portugal y las colonias portuguesas: GUILLERMINO AUGUSTO DE BARROS. Por la Rumania: CORONEL A. GORJEAN, S. DIMITRESCU. Por la Rusia: GENERAL DE BESACK, A. SKALKOVSKY. Por el Salvador: LOUIS KEHLMANN. Por la Servia: SVETOZAR GROZDITCH, ET. U. POPOVITCH. Por el Reino de Siam: LUANG SURIYA NU-VATR, H. KEUCHENIS. Por la República Sudafricana: Por la Suecia: E. VON KRUSENSTJERNA. Por la Suiza: ED. HÖHN, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: MONTMARIN. Por la Turquía: E. PETACCI, A. FABRI. Por los Estados Unidos de Venezuela: CARLOS MATZENAUER.

1891

Uruguay—Alemania—República Argentina—Austria—Hungria—Bélgica—Brasil—Bulgaria—Chile—Colombia—Costa Rica—Dinamarca y colonias danesas—Egipto—España—Francia y colonias francesas—Grecia—Italia—Liberia—Luxemburgo—Montenegro—Noruega—Paraguay—Países Bajos y colonias neerlandesas—Portugal y colonias portuguesas—Rumania—Salvador—Servia—Siam—Suecia—Suiza—Túnez—Turquía—Venezuela.

**Convención concerniente al canje de Bultos
Postales**

Celebrada en Viena el 4 de Julio de 1891.

Ratificada por el Uruguay en el año 1893.

El Uruguay y Alemania, República Argentina, Austria-Hungria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, República de Colombia, Costa Rica, Dinamarca y colonias danesas, Egipto, España, Francia y colonias francesas, Grecia, Italia, República de Liberia, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Paraguay, Países Bajos y colonias neerlandesas, Portugal y colonias portuguesas, Rumania, Salvador, Servia, Reino de Siam, Suecia, Suiza, Regencia de Túnez, Turquía y Estados Unidos de Venezuela.

Los abajo firmados, plenipotenciarios de los gobiernos de los países arriba mencionados, en virtud de lo establecido por el artículo XIX de la Convención Principal, han celebrado la Convención siguiente, bajo reserva de ratificación:

ARTÍCULO I

1—Podrá expedirse bajo la denominación de bultos postales, de uno de los países arriba mencionados para otro de esos países, bultos con o sin valor declarado hasta el peso de cinco kilogramos. Esos bultos pueden ser gravados de reembolso.

Excepcionalmente queda permitido a cada país:

- a) Limitar a 3 kilogramos el peso de los bultos que admita en su servicio.
- b) No encargarse de bultos con valor declarado, gravados de reembolso, o embarazosos. Cada país fijará, en la parte que le concierne, el límite máximo de la declaración de valor y del reembolso, el que no podrá en ningún caso bajar de 500 francos.

En las relaciones entre dos o más países que hayan adoptado máximum diferente, el límite más bajo es el que deberá recíprocamente observarse.

2—El Reglamento de ejecución establecerá las demás condiciones en que los bultos son admitidos al transporte y determinará con claridad los que deban ser considerados embarazosos.

ARTÍCULO II

1—La libertad de tránsito queda garantida en el territorio de cada uno de los países adherentes a esta Convención, y la responsabilidad de las Administraciones que tomen parte en el transporte, queda comprometida en los límites determinados por el artículo XIII siguiente.

2—Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, la trasmisión de bultos postales entre países no limítrofes, se efectuará al descubierto.

ARTÍCULO III

1—La Administración del país de origen será deudora para con cada una de las Administraciones que tomen parte en el tránsito territorial, de un derecho de 50 céntimos por bulto.

2—Además, si hay uno o varios transportes marítimos, la Administración del país de origen abonará a cada una de las Administraciones cuyos servicios tomen parte en el transporte marítimo, un derecho cuya tasa por bulto es la siguiente:

- 25 céntimos por todo trayecto que no exceda de 50 millas marinas;
- 50 céntimos por todo trayecto superior a 500 millas marinas, pero que no exceda de 1,000;
- 1 franco por todo trayecto superior a 1,000 millas marinas, pero que no exceda de 3,000;
- 2 francos por todo trayecto superior a 3,000 millas marinas, pero que no exceda de 6,000;

3 francos por todo trayecto superior a 6,000 millas marinas.

Esos trayectos serán calculados, llegado el caso, según la distancia media entre los puertos respectivos de los dos países correspondientes.

3—Para los bultos embarazosos, los derechos a cobrar fijados por los incisos 1 y 2 que preceden, se aumentarán en un 50 %.

4—Independientemente de esos gastos de tránsito, la Administración del país de origen abonará a cada Administración que tome parte con responsabilidad en el tránsito territorial o marítimo, a título de prima de seguro por los bultos con valor declarado, un derecho proporcional igual al percibido por las cartas con valor declarado.

ARTÍCULO IV

Es obligatorio el franqueo de los bultos postales.

ARTÍCULO V

1—La tasa de los bultos postales se compone de un derecho que comprende, para cada bulto, tantas veces 50 céntimos o su equivalente en la moneda de cada país, como Administraciones haya que tomen parte en el transporte territorial, agregando, si hubiese lugar a ello, el derecho marítimo previsto por el inciso 2 del artículo III que precede y las tasas y derechos mencionados en los incisos siguientes. Los equivalentes serán fijados por el Reglamento de ejecución.

2—Los bultos embarazosos serán sometidos a una

tasa adicional de 50 % que se redondeará, llegado el caso, con 5 céntimos.

3—Para los bultos con valor declarado se agregará un derecho de seguro igual al que se percibe por las cartas con valor declarado.

4—El remitente de un bulto gravado de reembolso pagará un derecho especial que no podrá exceder de 20 céntimos por cada fracción indivisible de 20 francos del monto del reembolso.

La Administración de origen abonará a la Administración de destino un 1|2 por ciento del monto de cada reembolso, sustituyendo las fracciones de 1|2 décimo (5 céntimos) por medio décimo entero. La cuota de la Administración destinataria no podrá ser en ningún caso inferior a 10 céntimos por reembolso.

5—Como medida de transición, cada uno de los países contratantes tiene la facultad de aplicar a los bultos postales procedentes de sus oficinas o con destino a ellas, una sobretasa de 25 céntimos por bulto.

Excepcionalmente esa sobretasa puede ser elevada como máximum a 75 céntimos por la República Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, las colonias neerlandesas, Paraguay, Persia, el Salvador, Siam, Suecia, la Turquía de Asia, el Uruguay y Venezuela.

6—El transporte entre la Francia continental por una parte, y Argel y la Córcega por otra, dará igualmente lugar a una sobretasa de 25 céntimos por bulto.

7—El remitente de un bulto postal podrá obtener un aviso de recepción, pagando adelantado un derecho fijo de 25 céntimos como máximum. Ese derecho quedará por entero a favor de la Administración del país de origen.

ARTÍCULO VI

La Administración remitente abonará por cada bulto:

- a) A la Administración destinataria, 50 céntimos, agregando, si hubiese lugar a ello, las sobretasas previstas en los incisos 2, 5 y 6 del artículo V que precede, la cuota del derecho de reembolso fijado en el inciso 4 de ese artículo y un derecho de 5 céntimos por cada suma de 300 francos o fracción de 300 francos de valor declarado.
- b) Eventualmente, a cada Administración intermediaria, los derechos fijados por el artículo III.

ARTÍCULO VII

El país de destino podrá percibir por comisión y formalidades de aduana, una tasa cuyo importe total no podrá exceder de 25 céntimos por bulto. Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, esta tasa se percibirá del destinatario en el momento de entregarle el bulto.

ARTÍCULO VIII

1—A pedido de los remitentes, los bultos serán llevados a domicilio por un mandadero especial, inmediatamente después de su llegada, en los países de la Unión cuyas Administraciones convengan en hacerse cargo de ese servicio en sus relaciones recíprocas.

Esos envíos, llamados *expresos*, quedan sometidos

1.—Una tasa especial, fijada en 50 céntimos, que debe ser abonada por entero y de antemano por el remitente, a más del porte ordinario, aunque el bulto sea o no remitido al destinatario o designado únicamente como *expreso* en el país de destino. Dicha tasa corresponderá por entero a este país.

2.—Cuando el bulto sea destinado a un paraje que carezca de oficina de correos, la Administración destinataria podrá percibir por la entrega del bulto o por el aviso llamando al destinatario a retirarlo, una tasa suplementaria que puede elevarse hasta el importe del precio fijado para el envío por expreso en su servicio interno, deduciendo el porte fijo pagado por el remitente o su equivalente en la moneda del país que perciba esta tasa suplementaria.

3.—La entrega o el envío de un aviso llamando al destinatario no se efectuará sino una sola vez. Si esta gestión no diera resultado, el bulto cesará de ser considerado como *expreso* y su entrega se efectuará en las condiciones establecidas para los bultos ordinarios.

4.—Si un bulto de esta especie fuera reexpedido a otro país, a consecuencia de cambio de domicilio del destinatario, sin que la entrega por expreso haya sido tentada, la tasa fija pagada por el remitente se abonará al nuevo país de destino si éste ha consentido en encargarse de la entrega por expreso; en caso contrario, esa tasa quedará en poder del país del primer destino, de la misma manera que la de los bultos caídos en rezago.

ARTÍCULO IX

1—Los bultos a que se refiere la presente Convención no podrán ser gravados con ningún otro derecho postal que los previstos por los artículos III, V y VII que anteceden y por el artículo XI siguiente.

2—Los derechos de Aduana deberán pagarse por los destinatarios de los bultos. Sin embargo, en las relaciones entre Administraciones que se hayan puesto de acuerdo a este respecto, los remitentes podrán tomar a su cargo los derechos de que se trata, previa declaración en la oficina de salida. En este caso deberán pagar sucesivamente las sumas indicadas por la oficina de destino cuando ésta lo solicitase.

ARTÍCULO X

1—El remitente de un bulto postal podrá retirarlo del servicio o hacer modificar su dirección en las condiciones establecidas para las correspondencias por el artículo IX de la Convención principal; además, si el remitente pide la reexpedición o devolución de un bulto, estará obligado a garantizar de antemano el pago del porte debido por la nueva transmisión.

2—Toda Administración está autorizada para restringir el derecho de modificación de dirección en los bultos cuya declaración de valor no pase de 500 francos.

ARTÍCULO XI

1—La reexpedición de bultos postales de un país a otro, a consecuencia de cambio de residencia de los

destinatarios, así como la devolución de bultos postales caídos en rezago, dará lugar a la percepción suplementaria de las tasas fijadas por los incisos 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo V, a cargo de los destinatarios o, llegado el caso, de los remitentes, sin perjuicio del reembolso de los derechos de aduana u otros gastos especiales (almacenaje, formalidades de aduana, etc.).

2—En caso de reexpedición de un bulto gravado de reembolso, la cuota del derecho de reembolso que debe abonar la Administración de origen a la del primer destino, debe ser satisfecha por la mencionada Administración a la del destino definitivo.

ARTÍCULO XII

1—Queda prohibido expedir por el correo bultos que contengan cartas o notas con carácter de correspondencia, u objetos cuya admisión no esté autorizada por las leyes y reglamentos de aduana u otros. Queda igualmente prohibido expedir dinero, materias de oro, plata y otros objetos preciosos, en los bultos sin valor declarado con destino a países que admitan la declaración de valor. Sin embargo, se podrá incluir en el envío la factura abierta reducida a sus indicaciones más elementales.

2—En el caso de que un bulto que contravenga alguna de esas prohibiciones fuese entregado por una de las Administraciones de la Unión a otra Administración de la Unión, ésta procederá en la forma prevista por su legislación y por sus reglamentos internos.

ARTÍCULO XIII

1—Salvo caso de fuerza mayor, cuando un bulto postal haya sido perdido, violado o averiado, el remitente, y en defecto o a pedido de éste, el destinatario, tendrá derecho a una indemnización correspondiente al importe real de la pérdida o de la avería, sin que esta indemnización pueda exceder de 15 o 25 francos para los bultos ordinarios, según que su peso no exceda o exceda de 3 kilogramos; y para los bultos con valor declarado el monto de este valor.

El remitente de un bulto perdido tendrá, además, derecho a la restitución de los gastos de expedición.

2—Los países que estén dispuestos a responsabilizarse por los riesgos que pudieran provenir del caso de fuerza mayor, quedan autorizados para cobrar por tal concepto, sobre los bultos con valor declarado, una sobretasa en las condiciones determinadas por el artículo 11, inciso 2 del arreglo concerniente al cambio de cartas y cajas con valor declarado.

3—La obligación de pagar la indemnización incumbe a la Administración de que depende la oficina remitente. Queda reservado a esta Administración el recurso contra la Administración responsable, es decir, contra la Administración en cuyo territorio o servicio ha tenido lugar la pérdida, violación o avería.

En el caso en que la Administración responsable hubiese notificado a la remitente que no efectuase el pago, deberá reembolsar a esta última los gastos que originase la falta de pago.

4—Mientras no se pruebe lo contrario, la responsa-

bilidad incumbirá a la Administración que, habiendo recibido el bulto sin hacer observación, no pueda doblar la entrega al destinatario, ni, si hubiese lugar a ello, la transmisión regular a la Administración siguiente.

5—El pago de la indemnización por la Administración remitente se hará a la brevedad posible y, a más tardar, en el plazo de un año a contar del día de la reclamación.

La Administración responsable estará obligada a reembolsar sin demora a la Administración remitente el importe de la indemnización abonada por ella.

6—Queda entendido que la reclamación no será admitida sino en el plazo de un año a contar del día del depósito del bulto en el correo; pasado ese término, el reclamante no tendrá derecho a ninguna indemnización.

7—Si la pérdida o la avería tuviese lugar en el curso del transporte entre las oficinas de cambio de dos países limítrofes, sin que sea posible establecer en cuál de los dos territorios el hecho tuvo lugar, las dos Administraciones en cuestión satisfarán la indemnización por mitad.

8—La responsabilidad de las Administraciones cesa desde el momento en que los bultos hayan sido entregados a sus destinatarios.

ARTÍCULO XIV

Es prohibida toda declaración fraudulenta de valores superiores al valor real del contenido de un bulto. En caso de que se haga, el remitente perderá

todo derecho a indemnización, sin perjuicio de las gestiones judiciales que sean compatibles con la legislación del país de origen.

ARTÍCULO XV

Cada Administración, en circunstancias extraordinarias que justifiquen la medida, podrá suspender temporalmente el servicio de bultos postales de una manera general o parcial, a condición de dar inmediatamente aviso, por telégrafo en caso necesario, a la Administración o Administraciones interesadas.

ARTÍCULO XVI

La legislación interna de cada uno de los países contratantes será aplicable en todo aquello que no esté previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convención.

ARTÍCULO XVII

1—Las estipulaciones de la presente Convención no restringen el derecho de las partes contratantes para mantener y celebrar convenciones especiales, así como para mantener y establecer uniones más estrechas, con el fin de mejorar el servicio de bultos postales.

2—Sin embargo, las Administraciones de los países que suscriban la presente Convención y que mantengan un cambio de bultos postales con países no contratantes, permitirán que las demás Administraciones de la Unión aprovechen esas relaciones para el mismo cambio con esos países.

ARTÍCULO XVIII

1—Los países de la Unión Postal Universal que no hayan tomado parte en la presente Convención, serán admitidos a adherirse a ella siempre que lo soliciten en la forma prescrita por el artículo XXIV de la Convención principal en la parte referente a las adhesiones a la Unión Postal Universal.

2—No obstante, si el país que desee adherirse a la presente Convención reclama la facultad de percibir una sobretasa superior a 25 céntimos por bulto, el Gobierno de la Confederación Suíza someterá el pedido de adhesión a todos los países contratantes. Este pedido será considerado como admitido, si en un plazo de seis meses no se ha presentado objeción alguna.

ARTÍCULO XIX

Las Administraciones de Correos de los países contratantes designarán las oficinas o localidades encargadas del cambio internacional de bultos postales, reglamentarán la forma de trasmisión de esos bultos y fijarán todas las demás medidas de detalle y de orden necesarias para asegurar la ejecución de la presente Convención.

ARTÍCULO XX

La presente Convención será sometida a las condiciones de revisión determinadas por el artículo XXV de la Convención principal.

ARTÍCULO XXI

1—En el intervalo que trascurra entre las reuniones previstas por el artículo XXV de la Convención principal, toda Administración de Correos de uno de los países contratantes tiene el derecho de dirigir a las demás Administraciones copartícipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al servicio de bultos postales.

2—Toda proposición se someterá al procedimiento prescrito por el inciso 2 del artículo XXVI de la Convención principal.

3—Para que tengan fuerza ejecutiva, esas proposiciones deberán reunir:

- a) Unanimidad de votos si se trata de agregar nuevos artículos o de modificar disposiciones de éste y de los artículos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XX y XXII de la presente Convención.
- b) Dos terceras partes de votos si se trata de modificar disposiciones de la presente Convención que no sean las de los artículos precitados y las de este artículo.
- c) Simple mayoría absoluta si se trata de interpretar disposiciones de la presente Convención, excepto el caso de litigio a que se refiere el artículo XXIII de la Convención principal.

4—Las resoluciones válidas serán consagradas en los dos primeros casos por una declaración diplomática, y en el tercero por una notificación administrativa,

en la forma indicada por el artículo 26 de la Convención principal.

Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá carácter ejecutivo hasta dos meses, cuando menos, después de su notificación.

ARTÍCULO XXII

1—La presente Convención entrará a regir el 1.º de Julio de 1892.

2—Tendrá la misma duración que la Convención principal, sin perjuicio del derecho que tiene cada una de las partes contratantes para retirarse de ella, mediante aviso dado con un año de anticipación por su Gobierno al de la Confederación Suiza.

3—Quedan derogadas, a contar del día en que la presente Convención entre en vigor, todas las disposiciones convenidas anteriormente entre los diversos países contratantes o sus Administraciones, siempre que no sean conciliables con las cláusulas de la presente Convención y sin perjuicio de los derechos reservados por los artículos XVI y XVII que anteceden.

4—Esta Convención será ratificada tan pronto como sea posible. Las actas de ratificación serán canjeadas en Viena.

En fe de lo cual los plenipotenciarios de los países arriba mencionados han firmado la presente Convención en Viena, el 4 de Julio de mil ochocientos noventa y uno.

Por el Uruguay: FEDERICO SUSVIELA GUARCH,
JOSÉ G. BUSTO. Por la Alemania y los

protectorados alemanes: DR. V. STEPHAN, SACHSE, FRITSCH. Por la República Argentina CARLOS CALVO. Por el Austria: OBENTRAUT, DR. HOFMANN, DR. LILIENAU, HABBERGER. Por la Hungría: P. HEIM, S. SCHRIMPF. Por la Bélgica: LICHTERVELDE. Por el Brasil: LUIS BETÍM PAES LEME. Por la Bulgaria: P. M. MATTHEFF. Por Chile: Por la República de Colombia: G. MICHELSEN. Por la República de Costa Rica: Por Dinamarca y las colonias danesas: LUND. Por el Egipto: I. SABA. Por la España y las colonias españolas: FEDERICO BAS. Por la Francia: MONTMARIN, J. DE SELVES, ANSAULT. Por las colonias francesas: G. GABRIÉ. Por la Grecia: J. GEORGANTAS. Por la Italia: EMIDIO CHIARADIA, FELICE SALIVETTO. Por la República de Liberia: BN. DE STEIN, W. KOENTZER, C. GOEDELTE. Por el Luxemburgo: MONGENAST. Por el Montenegro: OBENTRAUT, DR. HOFMANN, DR. LILIENAU, HABBERGER. Por la Noruega: THE. HEYERDAHL. Por el Paraguay: Por los Países Bajos: HOFSTEDE, BARÓN VAN DER FELTZ. Por las colonias neerlandesas: JOHS. J. PERK. Por el Portugal y las colonias portuguesas: GUILLERMINO AUGUSTO DE BARROS. Por la Rumania: CORONEL A. GORJEAN, S. DIMÍTRESCU. Por el Salvador: LUIS KEHLMANN. Por

la Servia: SVETOZAR GROTZDITCH, ET. W. POPOVITCH. Por el Reino de Siam: LUANG SURIYA NUVATR, H. KEUCHENIUS. Por la Suecia: E. VON KRUSENSTJERNA. Por la Suiza: ED. HÖHN, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: MONTMARÍN. Por la Turquía: E. PETACCI, A. FAHRI. Por los Estados Unidos de Venezuela: CARLOS MATZENAÜER.

Protocolo final

En el momento de proceder a firmar la Convención celebrada con fecha de hoy, relativa al cambio de bultos postales, los plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:

Todo país donde el correo no se encargue actualmente del transporte de pequeños bultos y que se adhiera a la mencionada Convención, tendrá la facultad de hacer ejecutar sus cláusulas por las empresas de ferrocarriles y de navegación.

Podrá al mismo tiempo limitar ese servicio a los bultos procedentes de o con destino a las localidades servidas por esas empresas.

La Administración postal de ese país deberá entenderse con las empresas de ferrocarriles y de navegación para asegurar la completa ejecución, por parte de estas últimas, de todas las cláusulas de esta Convención y especialmente para organizar el servicio de cambio en sus fronteras.

Además les servirá de intermediaria para todas sus relaciones con las Administraciones postales de los demás países contratantes y con la Oficina Internacional.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmados han labrado el presente Protocolo final, que tendrá la misma fuerza y valor que si sus disposiciones estuvieran incluídas en la Convención, y lo han firmado en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Gobierno Austriaco y del que se remitirá copia a cada una de las partes.

Viena, cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y uno.

Por el Uruguay: FEDERICO SUSVIELA GUARCH,
JOSÉ G. BUSTO. Por la Alemania: DR. V.
STEPHAN, SACHSE, FRITSCH. Por la Repú-
blica Argentina: CARLOS CALVO. Por
el Austria: OBENTRAUT, DR. HOFMANN,
DR. LILIENAU, HABBERGER. Por la Hun-
gría: P. HEIM, S. SCHRIMPF. Por la Bél-
gica: LICHTERVELDE. Por el Brasil: LUIS
BETÍM PAES LEME. Por la Bulgaria: P. M.
MATHEEFF. Por Chile: Por la Re-
pública de Colombia: G. MICHELSEN. Por
la República de Costa Rica: Por la
Dinamarca y las colonias danesas: LUND.
Por el Egipto: I. SABA. Por la España:
FEDERICO BAS. Por la Francia: MONTMA-
RIN, J. DE SELVES, ANSAULT. Por las co-
lonias francesas: G. GABRIÉ. Por la Gre-

cia: J. GEORGANTAS. Por la Italia: EMI-
DIO CHIARADIA, FELICE SALIVETTO. Por la
República de Liberia: BN. DE STEIN, W.
KOENTZER, C. GOEDEL. Por el Luxem-
burgo: MONGENAST. Por el Montenegro:
OBENTRAUT, DR. HOFMANN, DR. LILIENAU,
HABBERGER. Por la Noruega: THB. HEYER-
DAHL. Por el Paraguay: Por los
Países Bajos: HOFSTEDE, BARÓN VAN DER
FELTZ. Por las colonias neerlandesas:
JOHS. J. PERK. Por el Portugal y las co-
lonias portuguesas: GUILLERMINO AUGUS-
TO DE BARROS. Por la Rumania: CORONEL
A. GORJEAN, S. DIMITRESCU. Por el Sal-
vador: LUIS KEHLMANN. Por la Servia:
SVETOZAR J. GVOZDITCH, ET. W. POPO-
VITCH. Por el Reino de Siam: LUANG SU-
RIYA NUVATR, H. KEUCHENIUS. Por la Sue-
cia: E. VON KRUSENSTJERNA. Por la Sui-
za: ED. HÖHN, C. DELESSERT. Por la Re-
gencia de Túnez: MONTMARIN. Por la Tur-
quía: E. PETACCI, A. FAHRI. Por los Es-
tados Unidos de Venezuela: CARLOS MAT-
ZENAÚER.

1891

Uruguay — Alemania — República Argentina — Austria — Hungría — Bélgica — Brasil — Bulgaria — Chile — Costa Rica — Dinamarca y colonias danesas — Egipto — Francia y colonias francesas — Italia — Japón — Liberia — Luxemburgo — Noruega — Países Bajos y colonias neerlandesas — Portugal y colonias portuguesas — Rumania — Salvador — Siam — Suecia — Suiza — Túnez — Turquía.

Arreglo concerniente al Servicio de Giros Postales

Celebrado en Viena el 4 de Julio de 1891.

Ratificado por el Uruguay en el año 1893.

El Uruguay y Alemania, República Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, República de Costa Rica, Dinamarca y colonias danesas, Egipto, Francia y colonias francesas, Italia, Japón, República de Liberia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y colonias neerlandesas, Portugal y colonias portuguesas, Rumania, Salvador, Reino de Siam, Suecia, Suiza, Regencia de Túnez y Turquía.

Los abajo firmados, plenipotenciarios de los Gobiernos de los países arriba enumerados, en cumplimiento

del artículo XIX de la Convención principal, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han celebrado el Arreglo siguiente:

ARTÍCULO I

El cambio de remesas de fondos por vía postal y por medio de giros, entre los países contratantes cuyas Administraciones convengan en establecer este servicio, será regido por las disposiciones del presente Arreglo.

ARTÍCULO II

1—En principio, el monto de los giros deberá ser entregado por los remitentes y pagado a los destinatarios en numerario; pero cada Administración tendrá la facultad de recibir y emplear para este efecto, todo papel moneda que tenga curso legal en su país, bajo reserva de tomar en cuenta, llegado el caso, la diferencia de cambio.

2—Ningún giro podrá exceder de la suma de 500 francos efectivos o de una suma aproximada en la moneda respectiva de cada país.

3—Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, el monto de cada giro será expresado en la moneda metálica del país en el cual debe tener lugar el pago. A este efecto la Administración del país de origen determinará llegado el caso, la tasa de conversión de su moneda en moneda metálica del país de destino.

La Administración del país de origen determinará también, si hubiere lugar a ello, el tipo de cambio que

haya de pagar el remitente cuando ese país y el de destino posean el mismo sistema monetario.

4—Queda reservado a cada uno de los países contratantes el derecho de declarar trasmisible por endoso, en su territorio, la propiedad de los giros postales provenientes de cualesquiera de aquellos países.

ARTÍCULO III

1—La tasa general que ha de pagar el remitente por cada remesa de fondos efectuada en virtud del artículo precedente, queda fijada en un valor metálico de 25 céntimos por cada 25 francos o fracción de 25 francos, o su equivalente en la moneda respectiva de los países contratantes, con facultad de redondear las fracciones, si las hubiere.

Quedan exentos de toda tasa los giros de oficio relativos al servicio de correos y cambiados entre las Administraciones postales.

2—La Administración que haya hecho giros acreditará a la Administración que los haya abonado, un derecho de $1\frac{1}{2}$ por ciento sobre el monto total de los giros pagados, abstracción hecha de los de oficio.

3—Los giros postales y los recibos de estos giros, así como los resguardos entregados a los depositarios, no podrán ser sometidos a cargo de los remitentes ni al de los destinatarios de los fondos, a ningún otro derecho o tasa que el ya percibido en virtud del inciso 1 del presente artículo, excepto el derecho de porte a domicilio, si lo hubiere.

4—El remitente de un giro podrá obtener un aviso de pago del mismo, abonando de antemano un dere-

cho fijo igual al que se perciba en el país de origen por los avisos de recepción de las correspondencias recomendadas, quedando ese derecho en provecho exclusivo de la Administración del citado país.

5—Siempre que un giro postal no haya sido entregado al destinatario, el remitente podrá hacerlo retirar del servicio o modificar su dirección, en las condiciones y con las reservas determinadas para las correspondencias ordinarias por el artículo IX de la Convención principal.

6—El remitente podrá también solicitar la entrega de los fondos a domicilio por mandadero especial, inmediatamente de llegado el giro, dentro de las condiciones fijadas por el artículo XIII de la citada Convención principal.

7—La Administración del país de destino tendrá no obstante la facultad de hacer entregar por expreso, en lugar de fondos, un aviso de la llegada del giro o el giro mismo, cuando sus reglamentos internos lo permitan.

ARTÍCULO IV

1—Los giros postales podrán ser transmitidos por telégrafo en las relaciones entre las Administraciones cuyos países están ligados por un telégrafo del Estado o que convengan en utilizar para este efecto el telégrafo privado; en este caso se calificarán de *giros telegráficos*.

2—Los giros telegráficos, como los telegramas ordinarios y en las mismas condiciones que éstos, podrán ser sometidos a las formalidades de urgencia,

contestación paga, repetición, acuse de recibo, transmisión por el correo o entrega por expreso; podrán asimismo dar lugar a pedidos de avisos de pago, que se entregarán y se remitirán por el correo.

3—El remitente de un giro telegráfico pagará:

- a) La tasa ordinaria de los giros postales y si solicitare un aviso de pago, el precio fijo de este aviso;
- b) La tasa del telegrama.

4—Los giros telegráficos no serán gravados con otros derechos que los previstos en el presente artículo o los que puedan ser percibidos de conformidad con los reglamentos telegráficos internacionales.

ARTÍCULO V

Podrán reexpedirse giros ordinarios entre los países signatarios de este Arreglo cuando el destinatario haya cambiado de residencia.

Cuando el país de nuevo destino tuviera otro sistema monetario que el del primer destino, la conversión del importe del giro en moneda del primero de esos países será efectuada por la oficina reexpedidora según la tasa convenida para los giros con destino a ese país y procedentes del país del primer destino. No se percibirá ningún suplemento de tasa por la reexpedición, pero el país de nuevo destino cobrará en provecho suyo en todos los casos, la cuota de tasa que le correspondería si el giro le hubiese sido primitivamente dirigido, aun en el caso de que a consecuencia

de un arreglo especial celebrado entre el país de origen y el del primer destino, la tasa percibida en efectivo fuera inferior a la prevista por el artículo III del presente Arreglo.

ARTÍCULO VI

1—Las Administraciones de Correos de los países contratantes procederán en las épocas fijadas por el Reglamento anexo, a la formación de las cuentas, en las que se recapitularán todas las sumas pagadas por sus oficinas respectivas, y estas cuentas, después de haber sido discutidas y aprobadas serán saldadas, salvo arreglo contrario, en moneda de oro del país acreedor, por la Administración que haya resultado deudora y dentro del plazo fijado por el mismo Reglamento.

2—A este efecto, cuando los giros hayan sido pagados en monedas diferentes el crédito menor será convertido en la misma moneda que el crédito mayor, tomando por base de la conversión el tipo medio del cambio en la capital del país deudor durante el período a que dicha cuenta se refiere.

3—En caso de que no se pagara el saldo de una cuenta en los plazos fijados, ese saldo producirá intereses, a contar desde el día del vencimiento de dichos plazos hasta el en que tuviera lugar el pago. Estos intereses se calcularán a razón de 5 % anual y serán llevados al débito de la Administración retardataria en su próxima cuenta.

ARTÍCULO VII

1—Se garantizará a los depositantes las sumas que conviertan en giros postales, hasta el momento en que sean regularmente pagadas a los destinatarios o a sus mandatarios.

2—Las sumas recibidas por cada Administración en cambio de giros postales cuyo importe no haya sido reclamado por los interesados en los plazos fijados por las leyes o reglamentos del país de origen, quedarán definitivamente a favor de la Administración que libre los giros.

ARTÍCULO VIII

Las estipulaciones del presente Arreglo no restringen el derecho de las partes contratantes para mantener y celebrar arreglos especiales, así como para mantener y establecer uniones más estrechas con el fin de mejorar el servicio de giros postales internacionales.

ARTÍCULO IX

Cada Administración, en circunstancias extraordinarias que justifiquen la medida, podrá suspender temporalmente el servicio de giros internacionales, de una manera general o parcial, a condición de dar inmediato aviso, por telégrafo si fuese menester, a la Administración o Administraciones interesadas.

ARTÍCULO X

Los países de la Unión que no hayan tomado parte en el presente Arreglo, serán admitidos a adherirse

a él, siempre que lo soliciten en la forma prescrita por el artículo XXIV de la Convención principal en la parte referente a las adhesiones a la Unión Postal Universal.

ARTÍCULO XI

Las Administraciones de Correos de los países contratantes designarán, cada una por su parte, las oficinas que deban expedir y pagar los giros que se emitan en virtud de los artículos precedentes; reglamentarán la forma de trasmisión de los giros, la de las cuentas designadas en el artículo VI y toda otra medida de detalle o de orden necesaria para asegurar la ejecución del presente Arreglo.

ARTÍCULO XII

1—En el intervalo que transcurra entre las reuniones previstas por el artículo XXV de la Convención principal, toda Administración de Correos de uno de los países contratantes tiene el derecho de dirigir a las demás Administraciones copartícipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al servicio de giros postales.

2—Toda proposición se someterá al procedimiento prescrito por el inciso 2 del artículo XXVI de la Convención principal.

3—Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones, deberán reunir:

- 1.º Unanimidad de votos, si se trata de agregar nuevos artículos o de modificar las disposicio-

nes de éste y las de los artículos I, II, III, IV, VI y XIII;

2.º Dos terceras partes de votos, si se trata de modificar otras disposiciones que las de los artículos precitados;

3.º Simple mayoría absoluta, si se trata de interpretar disposiciones del presente Arreglo, excepto el caso de litigio a que se refiere el artículo XXIII de la Convención principal.

4—Las resoluciones válidas serán consagradas, en los dos primeros casos, por una declaración diplomática, y en el tercero por una notificación administrativa, en la forma indicada por el artículo XXVI de la Convención principal.

5—Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá fuerza ejecutiva hasta dos meses, cuando menos, después de su notificación.

ARTÍCULO XIII.

1—El presente Arreglo entrará en vigor el 1.º de Julio de 1892.

2—Tendrá la misma duración que la Convención principal, sin perjuicio del derecho que tiene cada país para retirarse de él, mediante aviso dado por su Gobierno al de la Confederación Suiza, con un año de anticipación.

3—Quedan derogadas, a contar del día en que se ponga en ejecución el presente Arreglo, todas las disposiciones convenidas anteriormente entre los Gobiernos o Administraciones de las partes contratantes, en

cuanto no sean conciliables con los términos del citado Arreglo y sin perjuicio de los derechos reservados por el artículo VIII.

4—Este Arreglo será ratificado tan pronto como sea posible. Las actas de ratificación serán canjeadas en Viena.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios de los países arriba enumerados han firmado el presente Arreglo en Viena, el cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y uno.

Por el Uruguay: FEDERICO SUSVIELA GUARCH,
JOSÉ G. BUSTO. Por la Alemania: DR. v.
STEPHAN, SACHSE, FRITSCH. Por la República Argentina: CARLOS CALVO. Por el Austria: OBENTRAUT, DR. HOFMANN, DR. LILIENAU, HABBERGER. Por la Hungría: P. HEIM, S. SCHRIMPF. Por la Bélgica: LICHTERVELDE. Por el Brasil: LUIS BETÍM PAES LEME. Por la Bulgaria: P. M. MATHEEFF. Por Chile: Por la República de Costa Rica: Por la Dinamarca y las colonias danesas: LUND. Por el Egipto: I. SABA. Por la Francia: MONTMARIN, J. DE SELVES, ANSAULT. Por las colonias francesas: G. GABRIÉ. Por la Italia: EMIDIO CHIARADIA, FELICE SALIVETTO. Por el Japón: INDO, FUJITA. Por la República de Liberia: BN. DE STEIN, W. KOENTZER, C. GOEDEL. Por el Luxemburgo: MONGENAST. Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por los Países Bajos: HOFES-

TEDE, BARÓN VAN DER FELTZ. Por las colonias neerlandesas: JOHS. J. PERK. Por el Portugal y las colonias portuguesas: GUILLERMINO AUGUSTO DE BARROS. Por la Rumania: CORONEL A. GORJEAN, S. DIMITRESCU. Por el Salvador: LUIS KEHLMANN. Por el Reino de Siam: LUANG SURIYA NUVATR, H. KEUCHENIUS. Por la Suecia: E. VON KRUSENSTJERNA. Por la Suiza: ED. HÖHN, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: MONTMARIN. Por la Turquía: E. PETACCI, A. FABRI.

1891

Uruguay—Alemania — Austria-Hungría — Bélgica
—Brasil— Bulgaria — Colombia — Dinamarca—
Egipto —Liberia—Luxemburgo—Noruega—Per-
sia—Portugal y colonias portuguesas—Ruma-
nia —Suecia —Suiza —Turquía.

**Arreglo concerniente a la Intervención del Correo
en el abono a los diarios y publicaciones periódicas.**

Celebrado en Viena el 4 de Julio de 1891.

Ratificado por el Uruguay en el año 1893.

El Uruguay y Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Bulgaria, República de Colombia, Dinamarca, Egipto, República de Liberia, Luxemburgo, Noruega, Persia, Portugal y colonias portuguesas, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía.

Los abajo firmados, plenipotenciarios de los Gobiernos de los países arriba enumerados, en cumplimiento del artículo XIX de la Convención principal, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación han celebrado el Arreglo siguiente:

ARTÍCULO I

El servicio postal de abono a los diarios y publicaciones periódicas entre los países contratantes cuyas

Administraciones postales han acordado establecer recíprocamente ese servicio, será regido por las disposiciones del presente Arreglo.

ARTÍCULO II

Las oficinas de correos de cada país recibirán las suscripciones del público a los diarios y obras periódicas publicados en los diversos países contratantes.

Este servicio se extenderá igualmente a las publicaciones de los demás países que algunas Administraciones estuvieran en condiciones de suministrar, siempre que se ajuste a las disposiciones del artículo 16 de la Convención principal.

ARTÍCULO III

1—El precio del abono deberá exigirse adelantado en el momento en que la suscripción se efectúe y por todo el período que comprenda.

2—No podrán solicitarse abonos sino por los períodos fijados en las listas oficiales.

ARTÍCULO IV

Las Administraciones de correos que se encarguen de abonos a título de intermediarias, no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a las cargas y obligaciones que incumben a los editores.

No estarán tampoco obligadas a ningún reembolso en caso de cese o interrupción de una publicación durante el curso del abono.

ARTÍCULO V

El servicio internacional de abonos se efectuará por intermedio de las oficinas de cambio que designe respectivamente cada Administración.

ARTÍCULO VI

1—Cada Administración fijará los precios que cobrará a las demás Administraciones por sus publicaciones nacionales y, si hubiere lugar a ello, por las de cualquier otro origen.

No obstante, esos precios no podrán ser en ningún caso, superiores a los que se cobren a los abonados en el interior, excepto la adición de los derechos de tránsito correspondientes a las Administraciones intermediarias, en lo que concierne a las relaciones entre países no limítrofes.

2—Los derechos de tránsito se establecerán de antemano y de común acuerdo, tomando por base el grado de periodicidad combinado con el peso medio de los periódicos.

ARTÍCULO VII

1—La Administración de correos del país destinatario fijará el precio que haya de pagar el abonado, agregando al precio de costo establecido en virtud del artículo VI que precede, la tasa, derecho de comisión o entrega que juzgue conveniente adoptar; pero estos derechos no sobrepasarán a aquellos que perciba por sus abonos en el interior. Agregará también, si lo re-

quiere el caso, el derecho de timbre fijado por la legislación de su país.

2—Cuando dos países que estén en relación no tengan el mismo sistema monetario, la Administración del país de destino cobrará el precio de costo en moneda de ese país. Si las Administraciones se hubiesen adherido al Arreglo concerniente a los giros, el equivalente de la moneda se fijará según el tipo que se aplique a los giros postales, a menos que conviniesen en otro tipo medio de conversión.

ARTÍCULO VIII

Las tasas o derechos establecidos en virtud de los artículos VI y VII que preceden, no darán lugar a ninguna cuenta especial entre las Administraciones corresponsales.

ARTÍCULO IX

Cuando se formen los cuadros estadísticos destinados a fijar las cuentas de gastos de tránsito (artículos XXIV y XXV del Reglamento de orden y detalle de la Convención principal), los periódicos suministrados por abono postal serán pesados conjuntamente con los demás impresos.

ARTÍCULO X

Las Administraciones postales estarán obligadas a dar curso, sin gasto alguno para los abonados, a toda reclamación fundada concerniente a retardos o irregularidades que se produzcan en este servicio.

ARTÍCULO XI

1—Las cuentas de los abonos servidos y pedidos se formularán trimestralmente y se saldarán en moneda del país acreedor, después de ser discutidas y aprobadas por las Administraciones interesadas.

2—Para este efecto y salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, cuando dos países que estén en relación no tengan el mismo sistema monetario, el crédito menor será convertido en moneda del país del crédito mayor, conforme al artículo VI del Arreglo concerniente a los giros, y la diferencia se saldará por giro postal a la brevedad posible.

3—Los giros postales emitidos con este fin estarán exentos de todo derecho y podrán sobrepasar el máximo establecido por este Arreglo.

4—Los saldos atrasados devengarán interés a razón de 5 % al año, en provecho de la Administración acreedora.

ARTÍCULO XII

Las disposiciones del presente Arreglo no restringen el derecho de las partes contratantes para mantener y celebrar arreglos especiales con el fin de mejorar, facilitar o simplificar el servicio de abonos internacionales.

ARTÍCULO XIII

Los países de la Unión que no hayan tomado parte en el presente Arreglo, serán admitidos a adherirse a él siempre que lo soliciten en la forma prescrita por

el artículo XXIV de la Convención principal en la parte referente a las adhesiones a la Unión Postal Universal.

ARTÍCULO XIV

Las Administraciones de Correos de los países contratantes decidirán la forma de las cuentas de que trata el artículo XI que antecede, fijarán las épocas en que han de ser formuladas y reglamentarán las demás medidas de orden y detalle necesarias para asegurar la ejecución del presente Arreglo.

ARTÍCULO XV

Queda entendido que a falta de disposición expresa de este Arreglo, cada Administración queda facultada para aplicar las disposiciones que rigen la materia en su servicio interno.

ARTÍCULO XVI

1—En el intervalo que transcurra entre las reuniones previstas por la Convención principal, toda Administración de correos de cada uno de los países contratantes tiene el derecho de dirigir a las demás Administraciones copartícipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al servicio de abono a los periódicos.

2—Toda proposición será sometida al procedimiento determinado por el inciso 2 del artículo XXVI de la Convención Principal.

3—Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones, deberán reunir:

- 1.º Unanimidad de votos si se trata de agregar nuevos artículos o de modificar las disposiciones de éste y las de los artículos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII del presente Arreglo;
- 2.º Dos terceras partes de votos si se trata de modificar el artículo XIV;
- 3.º Simple mayoría absoluta si se trata de interpretar disposiciones del presente Arreglo, salvo el caso de litigio a que se refiere el artículo XXIII de la Convención Principal.

4—Las resoluciones válidas serán consagradas en los dos primeros casos por una declaración diplomática, y en el tercero por una notificación administrativa, en la forma indicada por el artículo XXVI de la Convención Principal.

5—Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá fuerza ejecutiva hasta dos meses, cuando menos, después de su notificación.

ARTÍCULO XVII

El presente Arreglo entrará en vigor el 1.º de Julio de 1892.

Tendrá la misma duración que la Convención principal, sin perjuicio del derecho que tiene cada país para retirarse de él mediante aviso dado por su Gobierno al de la Confederación Suiza con un año de anticipación.

Los abonos corrientes deberán servirse en las con-

diciones establecidas por este Arreglo, hasta que termine el plazo por el que han sido pedidos.

ARTÍCULO XVIII

Quedan derogadas, a contar desde el día en que el presente Arreglo se ponga en ejecución, todas las disposiciones sobre la materia convenidas anteriormente entre los Gobiernos o Administraciones de las partes contratantes, en cuanto no sean conciliables con las cláusulas del citado Arreglo, sin perjuicio de los derechos reservados por el artículo XII.

Este Arreglo se ratificará tan pronto como sea posible. Las actas de ratificación se canjearán en Viena.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios de los países arriba enumerados han firmado el presente Arreglo en Viena, el cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y uno.

Por el Uruguay: FEDERICO SUSVIELA GUARCH,
JOSÉ G. BUSTO. Por la Alemania: DR. V.
STEPHAN, SACHSE, FRITSCH. Por el Aus-
tria: OBENTRAUT, DR. HOFMANN, DR. LI-
LIENAU, HABBERGER. Por la Hungría: P.
HEIM, S. SCHRIMPF. Por la Bélgica: LICH-
TERVELDE. Por el Brasil: LUIS BETÍM PAES
LEME. Por la Bulgaria: P. M. MATHEEFF.
Por la República de Colombia: G. MI-
CHELSEN. Por la Dinamarca: LUND. Por
el Egipto: I. SABA. Por la República de
Liberia: BN. DE STEIN, W. KOENTZER, C.
GOEDEL. Por el Luxemburgo: MONGENAST.

Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por la Persia: GENERAL N. SEMINO. Por el Portugal y las colonias portuguesas: GUILLERMINO AUGUSTO DE BARROS. Por la Rumania: CORONEL A. GORJEAN, S. DIMITRESCU. Por la Suecia: E. VON KRUSENSTJERNA. Por la Suiza: ED. HÖHN, C. DELESSERT. Por la Turquía: E. PETACCI, A. FAHRI.

1892

Uruguay—Paraguay

Convenio Postal

Celebrado en Montevideo el 14 de Marzo de 1892.

El Director General de Correos de la República Oriental del Uruguay, Don Cipriano Herrera, debidamente autorizado, por una parte, y el Director General de Correos y Telégrafos de la República del Paraguay, Don Angel D. Peña, acreditado ante el Gobierno Oriental en su carácter de Enviado Especial para celebrar convenios referentes al servicio de Correos entre ambas Administraciones, han convenido en efectuar el de Canje de Bultos Postales, sin valor declarado y sin gravamen de reembolso, bajo las bases que se detallan a continuación:

ARTÍCULO I

El servicio de bultos postales se hará entre las dos Repúblicas por intermedio de sus Oficinas Centrales que tienen su asiento, la de la República Oriental del Uruguay en la Ciudad de Montevideo, y la del Paraguay en la Ciudad de la Asunción, a cuyas dos plazas quedará por ahora limitado el servicio.

ARTÍCULO II

Ambas Administraciones se comunicarán recíprocamente:

- 1.° Bajo qué condiciones podrán remitirse mutuamente los bultos postales;
- 2.° El número de manifiestos exigidos por las leyes aduaneras.
- 3.° La lista de los objetos cuya introducción en el país es prohibida por los reglamentos de Aduana.

ARTÍCULO III

Fíjase en tres kilogramos el peso máximo de cada bulto postal, no pudiendo exceder éstos de sesenta centímetros de dimensión ni de veinte decímetros cúbicos de volumen.

ARTÍCULO IV

El porte a pagar por la remisión de cada bulto postal expedido del Uruguay al Paraguay y viceversa será de setenta centésimos de peso moneda metálica de curso legal en la República O. del Uruguay. Este porte no podrá ser gravado con ningún derecho, y, en caso de transitar un bulto por otro país, se deducirá de dicho precio el importe del tránsito que reclame la Administración del país interesado.

ARTÍCULO V

El franqueo de los bultos postales es obligatorio.

ARTÍCULO VI

El derecho fijado por el artículo IV se dividirá por mitad entre ambas Administraciones, salvo el caso previsto en el último párrafo de dicho artículo. Podrá, además, percibirse de los destinatarios, por comisión o por llenar las formalidades de Aduana, un derecho que en ningún caso podrá exceder de cinco centésimos por bulto y que será a beneficio de la Administración que lo perciba.

ARTÍCULO VII

Queda prohibido introducir en los bultos postales, cartas o notas que tengan el carácter de correspondencia, así como también enviar objetos rechazados por las leyes y reglamentos de Aduana. En el primer caso se cobrará el doble del franqueo que corresponda a la carta; y en el segundo caso se devolverán los bultos a su origen, quedando el importe del franqueo, a favor de las Administraciones interesadas. .

ARTÍCULO VIII

Todos los meses ambas Administraciones formularán un estado de las sumas que se adeudan recíprocamente, recapitulando en él las cantidades que se hayan indicado en las hojas de ruta. Este estado servirá de base para la cuenta correspondiente al mismo mes, y estas cuentas se devolverán aceptadas o modificadas, dentro de los primeros quince días siguientes a la fecha de su aceptación.

ARTÍCULO IX

Verificadas y aceptadas las cuentas mensuales, serán éstas resumidas en una cuenta general semestral. El saldo que resulte del balance de las cuentas recíprocas, se pagará a la Administración aceedora, a más tardar dentro del plazo de un mes, contado desde el día de su aceptación.

ARTÍCULO X

Salvo caso de fuerza mayor, cuando un bulto postal haya sido perdido, violado o averiado, el remitente, y en defecto, a pedido de éste, el destinatario, tendrá derecho a una indemnización correspondiente al importe real de la pérdida o de la avería, sin que esta indemnización pueda exceder en ningún caso de la suma de tres pesos por cada bulto. La obligación de pagar esta indemnización incumbe a la Administración remitente, sin perjuicio de su derecho para repetir contra la Administración responsable, es decir, contra la en cuyo territorio o servicio haya tenido lugar la pérdida, violación o avería. La Administración responsable está obligada a reembolsar sin demora a la remitente el importe de la indemnización abonada por ella.

ARTÍCULO XI

Mientras no se pruebe lo contrario, la responsabilidad incumbirá a la Administración que habiendo recibido un bulto sin hacer observación alguna, no pue-

da probar su entrega al destinatario, ni la transmisión regular a la Administración siguiente. Si la pérdida o la avería ha tenido lugar en el curso del transporte entre las Oficinas de Cambio de dos países limítrofes sin que sea posible establecer en cuál de los dos territorios el hecho tuvo lugar, las dos Administraciones abonarán por mitad la indemnización que corresponda.

ARTÍCULO XII

Queda entendido que ninguna reclamación podrá ser admitida sino en el plazo de seis meses, a contar del día del depósito del bulto en el Correo. Pasado ese término cesará toda la responsabilidad por parte de la Administración responsable. La responsabilidad de las Administraciones cesa desde el momento en que los bultos hayan sido entregados a los destinatarios.

ARTÍCULO XIII

Todo bulto que no haya sido reclamado dentro de los tres primeros meses después de su llegada, será considerado como rezagado. El remitente, en tal circunstancia, será consultado sobre la manera como quiere disponer de su envío.

ARTÍCULO XIV

Toda reexpedición de bulto postal que se efectúe a pedido de los interesados, o como rezagado, se considerará como un nuevo envío y dará lugar al pago de nuevo porte por parte del interesado.

ARTÍCULO XV

Será permitido hacer uso en un solo boletín de expedición, del número reglamentario de manifiestos de Aduana que exija cada país para varios bultos hasta el número de tres, siempre que el envío proceda de un mismo remitente y vaya dirigido a una misma persona.

ARTÍCULO XVI

Todo remitente de un bulto postal podrá solicitar siempre que lo desee, un aviso de recepción de su envío, mediante el pago anticipado de cinco centésimos.

ARTÍCULO XVII

Las hojas de ruta, los boletines de expedición y los avisos de recepción, si los hubiere, deberán remitirse, dentro de un sobre rotulado, a la Oficina de Cambio destinataria.

ARTÍCULO XVIII

Las fórmulas empleadas en el servicio internacional, se aplicarán a las disposiciones contenidas en este Convenio.

ARTÍCULO XIX

La legislación interna de cada uno de los países contratantes será aplicable en todo aquello que no esté previsto en las estipulaciones contenidas en este Convenio.

ARTÍCULO XX

En caso de desacuerdo relativo a la interpretación del presente arreglo, el punto que resulte en cuestión, será dirimido por dos árbitros que nombrarán, uno por cada parte, las Administraciones interesadas y los cuales tendrán la facultad de elegir un tercero para el caso de discordia.

ARTÍCULO XXI

Las Administraciones firmantes establecerán de común acuerdo, las medidas reglamentarias de orden y de detalle que crean necesarias para asegurar la ejecución del presente Convenio.

ARTÍCULO XXII

Las Administraciones contratantes se reservan el derecho de suspender el servicio de bultos postales, temporal o definitivamente, sin otra obligación que la de dar aviso por telégrafo, con un mes de anticipación.

Por el simple hecho de suspenderse el servicio de bultos, las Administraciones firmantes no quedan eximidas de las responsabilidades que establece el presente Convenio.

Una vez aprobadas estas bases por los Gobiernos respectivos, las Direcciones Generales de Correos de ambos países fijarán de común acuerdo el día en que haya de entrar en ejecución el servicio de bultos postales.

Montevideo, 14 de Marzo de 1892.

CIPRIANO HERRERA.

ANGEL A. PEÑA.

1892

Uruguay — Argentina

Protocolo relativo a la sede de las respectivas Legaciones

Celebrado en Montevideo el 14 de Mayo de 1892.

*Canjeadas las ratificaciones en Montevideo, el 3 de
Diciembre de 1895.*

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay Sus Excelencias el Señor Doctor Manuel Herrero y Espinosa, Ministro del Ramo, y el Señor Enrique B. Moreno, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, con el objeto de dejar consignado en un Protocolo el acuerdo verbal celebrado en conferencias anteriores respecto de la adquisición en ambas Capitales, por parte de los Gobiernos que representan, de un inmueble para establecer en él las residencias de las correspondientes Legaciones, después de exhibidos los Plenos Poderes de estilo y hallados en buena y debida forma, declaran:

Que el inmueble que adquiriera el Gobierno de la República Oriental del Uruguay en la Ciudad de Bue-

nos Aires y el que actualmente posee el Gobierno de la República Argentina en la Ciudad de Montevideo, con el único y exclusivo objeto de establecer en ellos la residencia de las respectivas Legaciones, quedan exceptuados en uno y otro país del pago de todo impuesto o contribución inmobiliaria, continuando, no obstante, dichos inmuebles sometidos como hasta aquí, al dominio eminente, con las salvedades relativas al principio de la extraterritorialidad.

En fe de lo cual, los Señores Plenipotenciarios hacen extender el presente Protocolo por duplicado y cuyos ejemplares firman y sellan con sus sellos, en Montevideo, a los catorce días del mes de Mayo del año de mil ochocientos noventa y dos.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) ENRIQUE B. MORENO.

1892

Uruguay—Alemania

Tratado de Comercio

*Celebrado en Montevideo el 20 de Junio de 1892.
Canjeadas las ratificaciones en Montevideo el 1.º de
Junio de 1894.*

Denunciado por el Uruguay el 31 de Julio de 1896 ()*

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay y su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio Alemán, deseando mantener y consolidar las relaciones entre los dos países, han resuelto concluir un Tratado para este objeto, nombrando por sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay a Su Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, doctor don Manuel Herrero y Espinosa; y

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, a Su Enviado Extraordinario y Ministro Ple-

(*) Véase el Convenio de 5 de Junio de 1899, por el que se pone en vigor nuevamente este Tratado.

nipotenciario en la República Oriental del Uruguay, Consejero Intimo de Legación, señor doctor don Ricardo Krauel, quienes después de haberse comunicado recíprocamente los respectivos Plenos Poderes que hallaron en buena y debida forma convinieron en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

Los ciudadanos de cada una de las dos Partes Contratantes gozarán en el territorio de la otra Parte, en sus personas, propiedades mobiliarias, inmobiliarias y de otro género, de la protección del Gobierno, y se les concederán los mismos derechos, ventajas y libertades para su comercio, industria y el ejercicio de sus negocios y profesiones que se hayan concedido, o se concedieran en el porvenir, a los nacionales, sujetándose a las leyes y a los reglamentos vigentes.

ARTÍCULO II

Los buques uruguayos y sus cargamentos en los puertos del Imperio Alemán, y los buques alemanes y sus cargamentos en los puertos del Uruguay, deberán ser tratados en todos sus asuntos como buques pertenecientes a la Nación más favorecida.

El cabotaje queda exceptuado de la presente estipulación y sujeto a las leyes respectivas de los dos Estados.

ARTÍCULO III

Todos los objetos de comercio que se importaran en el territorio de una de las Partes Contratantes del

territorio de la otra Parte, serán tratados del mismo modo, y no serán cargados especialmente de impuestos más altos que los objetos de comercio de la Nación más favorecida á este respecto.

El mismo principio será aplicado á la reexportación y al tránsito.

Para la exportación de cualquier objeto de Comercio del Uruguay á Alemania, ó de Alemania al Uruguay, no se cobrarán otros ó más altos derechos, que los que se cobran para la exportación de los mismos efectos, á los ciudadanos de la Nación más favorecida á este respecto.

De igual manera, en todo lo relativo á impuestos locales, corretajes, prescripciones y formalidades aduaneras, muestras ó modelos introducidos por viajeros comerciales, como en todos los demás asuntos comerciales, los ciudadanos de cada una de las dos Partes Contratantes gozarán en el territorio de la otra parte de los mismos derechos que los ciudadanos de cualquiera tercera nación la más favorecida.

ARTÍCULO IV

Las estipulaciones consignadas en el presente Tratado no comprenden los casos en que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay acordase favores especiales, exenciones y privilegios á los ciudadanos ó productos de los Estados Unidos del Brasil, de la República Argentina y del Paraguay en asuntos de comercio. Esos favores no pueden ser reclamados por parte de Alemania con motivo del derecho de la Nación más favorecida, mientras que no sean extendidos

a otros terceros Estados. En este último caso, esas concesiones se harán en igual forma, es decir: gratuitamente, si la concesión fuere gratuita, y si fuere condicional, con una compensación equivalente.

Queda, no obstante, entendido que dichos favores especiales, exenciones y privilegios no podrán aplicarse a los productos que sean similares a los productos alemanes, ni extenderse a la navegación.

ARTÍCULO V

Los agentes Diplomáticos y Consulares de cada una de las dos Partes Contratantes residentes en los dominios de la otra ejercerán todas las funciones y gozarán de todas las inmunidades y prerrogativas que estén concedidas o se concedieren en adelante a los agentes de igual categoría de la Nación más favorecida.

Queda, no obstante, entendido que en materia de sucesiones intestadas, los Agentes Consulares de las Partes Contratantes no tendrán otra intervención que aquella que le sea acordada por las leyes y reglamentos de los respectivos países.

ARTÍCULO VI

El presente Tratado será ratificado y sus ratificaciones serán canjeadas en Montevideo en el término más breve posible.

El presente Tratado entrará en vigencia dos meses después del día del canje de las ratificaciones, y durará por tres años, a contar desde esta última fecha.

En el caso que un año antes de expirar este término ninguna de las Partes Contratantes hubiese anunciado oficialmente a la otra la intención de hacer cesar los efectos del Tratado, éste continuará en vigor por otro año más a contar del día en que habría podido ser denunciado por una de las Partes Contratantes.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado y sellado el presente Tratado en doble original redactado en español y en alemán.

Hecho en Montevideo, a los 20 días del mes de Junio del año 1892.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) R. KRAUEL.

1892

Uruguay—Francia

Convención de Comercio y Navegación

Celebrada en Montevideo el 4 de Julio de 1892.

Canjeadas las ratificaciones en París el 5 de Junio de 1893.

Denunciada por el Uruguay el 1.º de Agosto de 1896 ()*

El Presidente de la República Oriental del Uruguay y el de la República Francesa, igualmente animados del deseo de estrechar los lazos de amistad que unen a los dos Países y de colocar en condiciones recíprocamente satisfactorias las relaciones comerciales y marítimas entre los dos Estados, han resuelto, a ese efecto, firmar una Convención de Comercio y Navegación, y han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

El Presidente de la República Oriental del Uruguay, al señor Doctor Don Manuel Herrero y Espinosa, Su Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores; y

(*) Véase el Protocolo de 24 de Junio de 1898, por el que se pone nuevamente en vigor esta Convención.

El Presidente de la República Francesa al señor Bourcier Saint Chaffray-Alfredo, Gabriel León, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Francesa cerca de la República Oriental del Uruguay, Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor.

Los cuales, habiéndose exhibido sus respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

Las dos Altas Partes Contratantes se garanten recíprocamente el tratamiento de la Nación más favorecida en lo que concierne al establecimiento de los nacionales, tanto en materia de Comercio y de Navegación, como respecto de la importación, exportación, tránsito y, en general, para todo lo que se relacione con los derechos de Aduana y las operaciones comerciales, así como para el ejercicio del comercio o de las industrias, y para el pago de los derechos que le sean relativos.

ARTÍCULO II

Sin embargo, queda reservada a la República Oriental del Uruguay la facultad de conceder ventajas particulares a los dos Estados limítrofes, República Argentina y República de los Estados Unidos del Brasil, así como a la República del Paraguay, en vista de las facultades acordadas o que se acordaren a sus nacionales o a los productos de esos Estados en materia de Comercio. Esas ventajas no podrán ser

reclamadas por la Francia como consecuencia de su derecho, al tratamiento de la Nación más favorecida, estipulado en el artículo precedente, a menos que ellas sean extendidas a un Estado no limítrofe, exceptuando al Paraguay. En este último caso el beneficio sería inmediatamente adquirido por los ciudadanos franceses.

Queda, además, entendido que los favores especiales, exenciones o privilegios así acordados en materia de comercio no podrán referirse a los vinos, tejidos de seda, de lana o de algodón, artículos de pasamanería, azúcares refinados, pieles preparadas, obras de pieles y de cuero, muebles, útiles, máquinas, y, en general todos los productos que sean similares a los productos franceses. Dichos favores, exenciones o privilegios, no se extenderán a la navegación.

ARTÍCULO III

Queda exceptuado de la estipulación del artículo I el cabotaje, cuyo régimen continuará sometido a las leyes respectivas de los dos Países.

ARTÍCULO IV

La presente Convención será ratificada, y las ratificaciones serán canjeadas en París lo más pronto posible. Entrará en vigor quince días después del canje de las ratificaciones y quedará en ejecución hasta el término de un año a contar del día en que una u otra de las Altas Partes Contratantes la hubiera denunciado.

En fe de lo cual los mencionados Plenipotenciarios han firmado y sellado con sus sellos la presente Convención.

Hecho en Montevideo, en doble ejemplar, a los cuatro días del mes de Julio de mil ochocientos noventa y dos.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) A. B. SAINT CHAFFRAY.

1892

Uruguay-Bélgica

Protocolo sobre canje de los boletines del Censo General

Celebrado en Montevideo, el 10 de Julio de 1892
No fué ratificado.

En Montevideo, a los diez días del mes de Julio del año mil ochocientos noventa y dos, reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores Sus Exce-lencias el Señor Doctor Don Manuel Herrero y Espinosa, Ministro del Ramo, y el Señor Don Ernesto Van Bruyssel, Ministro Residente de Bél-gica, con el objeto de dejar consignado en el pre-sente Protocolo la obligación que los Gobiernos que re-presentan contraen de efectuar el canje periódico de los boletines del Censo General referentes a sus res-pectivos nacionales, después de comunicarse sus Ple-nos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, convinieron en lo siguiente:

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el de Su Majestad el Rey de los Belgas, se obligan a enviarse recíprocamente y libre de gastos cada vez que se practique el Censo General de la población de

sus respectivos territorios, las listas o boletines individuales referentes a los ciudadanos del otro Estado comprendidos en dichos Censos, y si fuera posible que contengan los nombres, apellidos, profesión, estado civil, edad, lugar del nacimiento, residencia y nacionalidad declarados por estos últimos.

Dichas listas o boletines individuales serán remitidos oportunamente a los Gobiernos Contratantes por intermedio de las Legaciones o Consulados Generales respectivos.

Queda expresamente entendido que la remesa o la aceptación de los documentos de que se trata, no prejuzgará las cuestiones de identidad o de nacionalidad.

El presente Protocolo se pondrá en vigencia inmediatamente después de aprobado, con sujeción a los preceptos legales de los respectivos Países, y de canjeado como corresponde, y continuará ejecutándose hasta que alguna de las Altas Partes Contratantes lo denuncie caducando en tal caso, un año después del aviso correspondiente.

El canje de las ratificaciones se efectuará en Montevideo, a la brevedad posible.

En fe de lo cual, los Señores Plenipotenciarios hicieron labrar el presente Protocolo por duplicado, cuyos ejemplares firmaron y sellaron con sus sellos en la fecha arriba expresada.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) ERNEST VAN BRUYSEL.

1892

Uruguay—Argentina

Convento Sanitario

*Celebrado en Montevideo el 24 de Septiembre de 1892.
Aprobado por ambos Gobiernos.*

En la ciudad de Montevideo, a los 24 días del mes de septiembre de 1892, hallándose reunidos en el salón de sesiones de la Junta de Sanidad el señor Presidente del Departamento de Higiene Argentino, doctor don José M.^a Ramos Mejía; el señor Vicepresidente de la Junta, doctor don Eustaquio Herrero y Salas, y los Vocales de ella, doctores don Ernesto Fernández Espiro y don Luis D. Brusco, convinieron, de común acuerdo, tomando por base la propuesta formulada por el señor Presidente del Departamento de Higiene Argentino, lo siguiente: 1.^o Que los navíos procedentes de puertos europeos, considerados hasta ahora limpios (para el Departamento, sospechosos), sean sometidos a una observación prudencial, siempre que, durante la travesía, hubiesen tenido defunciones por causa no determinada, o repetidos casos de una enfermedad cualquiera. 2.^o Que para aquellos cuyo es-

tado higiénico sea malo, se proceda a la desinfección de ropas por medio del calor y los distintos compartimientos del buque por los procedimientos usuales. 3.º Que aun cuando se ha convenido en las medidas indicadas, el Departamento Nacional podrá adoptar en el puerto de Buenos Aires y en los navíos que allí arriben, todas aquellas medidas que juzgue aplicables en cada caso particular. 4.º Ambas partes convienen en aceptar estas medidas porque ellas se encuadran en el inciso 4.º del artículo 1.º de la Convención Sanitaria que se refiere a la clasificación de navíos sospechosos.

HERRERO Y SALAS,
J. M. RAMOS MEJÍA.

1893

Uruguay-España

Protocolo relativo a la adhesión de España a los Tratados celebrados en el Congreso de Montevideo

*Celebrado en Montevideo, el 11 de Noviembre de 1893.
No fué ratificado.*

En Montevideo, a los once días del mes de Noviembre del año mil ochocientos noventa y tres, reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Sus Excelencias el Señor Doctor Manuel Herrero y Espinosa, Ministro del Ramo, y el Señor José de la Rica y Calvo, Ministro Residente de España, con el objeto de acordar la adhesión del Gobierno de Su Majestad Católica a los Tratados celebrados por el Congreso Internacional Sud Americano de Montevideo, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos para negociar y firmar *ad referéndum* el Protocolo del caso, el Señor Ministro de España, declaró:

Que el Gobierno de Su Majestad Católica adhiere a los siguientes Convenios celebrados por el referido Congreso, aceptando y obligándose a cumplir leal y fielmente todas y cada una de sus cláusulas. Trata-

dos: sobre Derecho Penal, Civil, Comercial, Procesal, Propiedad Literaria y Artística, Profesiones Liberales, Patentes de Invención, Marcas de Comercio y de Fábrica y Protocolo Adicional.

El Señor Ministro de Relaciones Exteriores manifestó, a su vez, que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay aceptaba en extremo complacido esa adhesión de España como una nueva prueba de sus amistosos sentimientos hacia la República y de su vehemente deseo de estrechar los vínculos que felizmente existen entre ambos países. Agregó: que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.º de la ley aprobatoria de aquellos Tratados fecha tres de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, sometería a la consideración de la Honorable Asamblea General este Protocolo esperando obtener su inmediata sanción.

En fe de lo cual, los referidos Plenipotenciarios hicieron labrar, por duplicado, el presente Protocolo, que firmaron y sellaron con sus sellos en la fecha expresada.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) JOSÉ DE LA RICA Y CALVO.

1894

Uruguay- Brasil

Protocolo sobre sucesos de la frontera

Celebrado en Montevideo el 15 de Febrero de 1894.

En Montevideo, a los quince días del mes de Febrero del año mil ochocientos noventa y cuatro, reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay Sus Excelencias los Señores Oscar Hordeñana, Ministro Interino del Ramo, y Victorino Monteiro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Brasil, con el objeto de dejar consignado en un Protocolo el resultado de sus conferencias anteriores respecto del arreglo definitivo de las reclamaciones entabladas por la Legación Oriental en el Brasil, a nombre de su Gobierno, sobre los crímenes perpetrados por partidas pertenecientes a las fuerzas de Río Grande y violaciones del territorio Oriental; reconocidas la necesidad y alta conveniencia de dar inmediata solución a esos reclamos, de acuerdo con los preceptos de la justicia, de la buena fe y de la moral internacional para que continúen las relaciones entre ambos países en el pie de la mayor

cordialidad, como conviene a sus recíprocos y bien entendidos intereses, y después de haber expresado los Señores Ministros los sentimientos amistosos que animan a ambos Gobiernos y el deseo sincero de allanar toda y cualquier dificultad que pueda por acaso entorpecerlas o alterarlas aún momentáneamente; el Señor Ministro del Brasil declaró: que como complemento de las medidas que él personalmente y en oportunidad había adoptado con relación a los sucesos de la frontera y que conocía este Ministerio de Relaciones Exteriores, y de otras disposiciones dictadas ya en desagravio de esas ofensas y delitos, su Gobierno se comprometía de la manera más formal y solemne:

1.º A activar, en cuanto fuese posible, sin perjudicar los trámites procesales de práctica, la causa instaurada ya a las personas indicadas como autores de los delitos perpetrados en la frontera y a proceder al enjuiciamiento de los demás individuos que apareciesen como autores o cómplices de esos atentados y de los hechos delictuosos anteriormente cometidos y llevados a conocimiento del Gobierno del Brasil por la Legación Oriental en Río de Janeiro.

2.º A tomar todas las medidas posibles para evitar la repetición de actos semejantes, que el Gobierno del Brasil lamenta profundamente y condena de la manera más severa.

3.º A conceder a las familias del teniente Cardoso y del empleado González, víctimas de aquellos crímenes, una indemnización de cien contos de reis al cambio del día en que se efectúe la operación.

El Señor Ministro de Relaciones Exteriores declaró a su vez que aceptaba las bases del Acuerdo que acababa de consignar el Señor Ministro Monteiro en este Protocolo, quedando así terminadas todas las reclamaciones presentadas por el Gobierno Oriental sobre los sucesos ocurridos en la frontera.

En fe de lo cual, los Señores Ministros hicieron labrar el presente Protocolo por duplicado, cuyos ejemplares firmaron y sellaron con sus sellos en la fecha arriba expresada.

(L. S.) OSCAR HORDEÑANA.

(L. S.) VICTORINO RIBEIRO CARNEIRO MONTEIRO.

1894

Uruguay-Argentina

Acuerdo Sanitario

*Celebrado en Buenos Aires el 5 de Julio de 1894.
Aprobado por ambos Gobiernos.*

En Buenos Aires, a cinco días del mes de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro, los que suscriben doctor Luis D. Brusco y doctor Telémaco Susini, Delegados respectivamente de la Junta de Sanidad de la República Oriental del Uruguay y del Departamento Nacional de Higiene Argentino, convienen en las siguientes bases para establecer un acuerdo sanitario entre ambas autoridades.

CAPITULO I

DE LAS INFORMACIONES SANITARIAS

1.^a Las informaciones que comprueben la existencia de una enfermedad pestilencial exótica (fiebre amarilla y cólera asiático), obligan a tomar medidas precaucionales a ambas Corporaciones, cualquiera que sea el Cónsul o Delegado Sanitario que las transmita.

2.^a Se procurará que ambos Cónsules o Delegados se pongan de acuerdo para hacer la información y que ésta sea firmada por ambos.

3.^a Cuando estén en desacuerdo, se les pedirá ratificación, y en caso que continúe la divergencia, con arreglo a lo establecido en la base primera, se tendrá como cierta la que sea afirmativa de la existencia de casos, con el objeto de someter a tratamiento sanitario solamente a los navíos que salgan de los puertos en la fecha en que se afirma la existencia de una enfermedad pestilencial.

Las autoridades sanitarias, mientras tanto, pedirán nuevas informaciones al respecto para proceder a la clasificación de los puertos que sean objeto de estas divergencias.

4.^a En caso de que cualquiera de ambas Corporaciones sanitarias tuviese informaciones dignas de crédito respecto a la existencia de casos de cólera o fiebre amarilla en algún Estado, se tendrá en cuenta con el objeto de pedir datos oficiales.

5.^a Los Delegados sanitarios o Cónsules que aseveren la existencia o no de uno o más casos de enfermedad exótica, especificarán todos los datos que los hayan puesto en estado de afirmar o negar la existencia de la enfermedad, con arreglo a las instrucciones que reciban y que se procurará sean uniformes en ambos países y que comprenderán:

1.º Lugar donde ha ocurrido el caso y donde se encuentra el enfermo.

2.º Fecha de la enfermedad.

3.º Origen de la misma.

4.º Cómo se tuvo conocimiento, si oficial o privadamente.

CAPITULO II

DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE LOS PUERTOS INFECTADOS Y SOSPECHOSOS

6.ª A los efectos de este acuerdo se considerará como infectado por cólera asiático:

- a) Aquel que lo tuviera en estado epidémico.
- b) El en que existan casos aislados y no se adopten medidas profilácticas con el objeto de evitar su propagación.

7.ª Se considerará como sospechoso de cólera asiático:

- a) Aquel que tuviera uno u otro caso de dicha enfermedad, sin llegar a constituir foco aunque se tomen medidas de aislamiento y desinfección.
- b) A todos los de un Estado en que exista uno declarado infectado.
- c) A las naciones limítrofes que teniendo fácil y frecuente comunicación, no tomasen medidas de precaución contra el punto infectado por la vía marítima y terrestre.
- d) Los puertos de las otras naciones situadas sobre el mismo mar u océano, y que no se precaviesen.

- e) Los que no se precaviesen suficientemente de los puertos infectados.

8.^a Se considerará como infectado de fiebre amarilla:

- a) Aquel que la tuviera en estado epidémico.
- b) Aquel en el cual reinando endémicamente, llegaran a producirse casos aislados y repetidos de noviembre a mayo.
- c) Aquel en el cual la enfermedad fuera desconocida y se difundiera por importación, basando en esta circunstancia la existencia de un solo caso.

9.^a Se considerarán puertos sospechosos por fiebre amarilla aquellos que no se precaviesen de los infectados y los que tuviesen comunicaciones fáciles y frecuentes con los mismos.

10.^a Una vez declarado sospechoso o infectado un punto, empezará a contarse la interdicción desde un período anterior de diez días para la fiebre amarilla y de ocho para el cólera, a la fecha en que se comprobó la existencia del cólera o fiebre amarilla, rigiendo para ambos países desde el mismo día.

CAPITULO III

DE LA DECLARACIÓN DE PUERTOS LIMPIOS PARA LOS ANTERIORMENTE INFECTADOS O SOSPECHOSOS

11.^a Para levantar las cuarentenas se pedirá los informes a los Cónsules o Delegados sanitarios en la misma forma que para imponerlas.

12.^a Una vez llegados los informes que constaten la desaparición del cólera, se hará veinte días después, la declaración de limpias para dichas procedencias que han sido declaradas infectadas o sospechosas.

13.^a La declaración de puertos limpios para los que han sido declarados infectados y sospechosos por fiebre amarilla, se hará en la siguiente forma:

- a) Para los primeros *diez días* después de haberse constatado la terminación de la epidemia o de los últimos casos repetidos, de noviembre a mayo.
- b) Para los puertos sospechosos, cinco días después de la desaparición de la epidemia o de los últimos casos ocurridos de noviembre a mayo en el puerto infectado.

CAPITULO IV

DEL TRATAMIENTO SANITARIO

14.^a Ambas Corporaciones reconocen que las medidas profilácticas prescriptas en los respectivos reglamentos son las mismas, con relación a este acuerdo, y para evitar toda duda resuelven especificarlas en este protocolo.

15.^a Los navíos que tengan Inspector Sanitario y todas las instalaciones con arreglo a lo prescripto en los reglamentos de ambos países, serán sometidos al tratamiento siguiente:

- a) Procede de un punto sucio o sospechoso y la duración del viaje ha sido menor que la de la

incubación máxima de la enfermedad—declaraciones satisfactorias del Inspector Sanitario—no ha ocurrido novedad alguna a bordo y todos los papeles en orden, se le someterá a cuarentena complementaria, quedando el Inspector a bordo, para continuar las medidas que son de su obligación y continuar en la observación del buque.

- b) El buque se encuentra en las mismas condiciones que anteriormente y el viaje ha sido mayor que el período de incubación máxima de la enfermedad que se quiere evitar, libre plática, previa visita de Sanidad.

Tanto en este caso como en el anterior y en el siguiente, se supone que el navío no trae objetos sospechosos con que hubiera podido contaminar a los pasajeros y tripulación; pero si no hubieran sido desinfectados o precisasen todavía la desinfección, la libre plática de la embarcación sólo tendrá lugar después de terminada la desinfección de dichos objetos; en caso contrario, navío y personal serán sometidos a cuarentena de rigor.

- c) En un buque en esas condiciones ha ocurrido uno o más casos a bordo. Se aplicarán los mismos principios establecidos en los párrafos anteriores, y siempre: Que el Inspector Sanitario certifique la fecha exacta de la terminación del único caso, la ejecución de todas las medidas de desinfección aconsejadas en las instrucciones de los reglamentos respecti-

vos, y el perfecto estado actual de salud a bordo.

Que la autoridad sanitaria compruebe la veracidad de las informaciones prestadas.

En estos casos, a los efectos de su duración, el viaje comenzará a contarse desde la última desinfección suficiente; después de la terminación del último caso y según el número de días transcurridos, se pondrá en libre plática o se aplicará cuarentena complementaria.

- d) Si el navío en el momento de su llegada tuviese personas atacadas de enfermedad pestilencial, serán sometidas a cuarentena de rigor en los términos que se establecen en los reglamentos sanitarios respectivos.

16.^a Los buques que no tengan Inspector Sanitario y que sean considerados en la categoría de sospechosos o infectados, serán siempre sometidos a cuarentena de rigor.

La duración de la cuarentena de rigor será determinada por el tiempo de la incubación máxima de la enfermedad pestilencial, es decir, *diez días* para la fiebre amarilla y *ocho* para el cólera.

CAPITULO V

DE LOS INSPECTORES SANITARIOS DE NAVÍO

17.^a En caso que la Junta de Sanidad de Montevideo establezca el Cuerpo de Inspectores Sanitarios de Navío, el Departamento de Higiene Argentino los

reconocerá en las mismas condiciones que a los argentinos, así como actualmente lo hace aquélla con los últimos, siendo entendido que dichos Inspectores serán de nacionalidad oriental.

18.^a Ambas Corporaciones estudiarán desde ya un proyecto de Convención y Reglamento Sanitario, teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde que estuvo en vigencia la Convención anterior, para presentarlo al Congreso Sanitario a que ha convocado el Gobierno Oriental al Argentino, Brasileño y Paraguayo.

CAPITULO VI

DE LA DURACIÓN Y CARÁCTER DE ESTE ACUERDO

19.^a Mientras no tenga sanción legislativa este acuerdo revestirá el carácter de provisorio o *modus vivendi* entre las autoridades sanitarias de ambos países; por consiguiente, cualquiera de ellas podrá denunciarlo y cesarán sus efectos inmediatamente después de denunciado.

Luis D. Brusco.

Telémaco Susini.

1896

Uruguay-España

Declaración relativa al Tratado de Extradición de Criminales de 23 de Noviembre de 1885

*Celebrada en Montevideo el 31 de Enero de 1896.
Canjeadas las ratificaciones el 14 de Noviembre de
1898.*

Su Excelencia el Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay Don Juan Idiarte Borda, y Don Alfonso XIII Rey Constitucional de España, y en su nombre Su Majestad la Reina Regente del Reino, Doña María Cristina, deseando evitar toda confusión que dé lugar a divergencias en el cumplimiento del Convenio de Extradición vigente entre ambos Países; y encontrando que la redacción actual del artículo XII del mismo, puede ser diversamente interpretada, han convenido en modificarla, y al efecto han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay al Doctor Jaime Estrázulas, su Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, y

Su Majestad la Reina Regente, en nombre del Rey

de España, a Don Ramiro Gil de Uríbarri, Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay, los cuales, después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han dado una nueva redacción al párrafo final de dicho artículo XII, que decía: "El individuo así capturado será puesto en libertad, si en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de su requisición, no hubieran sido llenadas las formalidades exigidas en el precedente artículo." Y que en adelante dirá: "El individuo así capturado será puesto en libertad si, en el plazo de noventa días, a contar desde el de su detención, no hubieran sido llenadas las formalidades exigidas en el precedente artículo."

Queda, por lo tanto, redactado el precitado artículo XII, en los términos siguientes:

"ARTÍCULO XII

"Será puesto en custodia provisoria en los dos Estados Contratantes, el individuo que se hallase comprometido en alguno de los crímenes enunciados en el artículo II. Esta prisión preventiva será ordenada previa requisición hecha por la vía diplomática o consular.

"El individuo así capturado será puesto en libertad si, en el plazo de noventa días, a contar desde el de su detención, no hubieran sido llenadas las formalidades exigidas en el precedente artículo."

La presente Declaración será ratificada por los Gobiernos de los dos Países, en el plazo más breve posible, y entrará en vigor el mismo día en que se verifique el canje de las ratificaciones, lo que tendrá lugar en la ciudad de Montevideo.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman por duplicado la presente declaración, sellándola con sus sellos, en Montevideo a los treinta y un días del mes de Enero del año mil ochocientos noventa y seis.

(L. S.) JAIME ESTRÁZULAS.

(L. S.) RAMIRO GIL DE URÍBARRI.

1896

Uruguay-Brasil

Convención sobre Deuda y Comercio

*Celebrada en Río de Janeiro el 31 de Octubre de 1896.
No fué ratificada.*

El Presidente de la República Oriental del Uruguay y el Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, habiendo resuelto celebrar una Convención para el arreglo definitivo de la deuda que la primera de aquellas Repúblicas tiene pendiente con la del Brasil, han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay a Su Excelencia el Doctor D. Carlos de Castro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario acreditado cerca del Gobierno Brasileño;

Su Excelencia el Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil a Su Excelencia el General de Brigada Dionisio Evangelista de Castro Cerqueira. Ministro de Estado de Relaciones Exteriores.

Los cuales, después de exhibirse sus Plenos Poderes

res, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

La deuda de la República Oriental del Uruguay para con la de los Estados Unidos del Brasil, queda reducida a la suma de cinco millones de pesos oro, moneda oriental (\$ 5.000,000) equivalentes a libras esterlinas un millón sesenta y tres mil ochocientos veintinueve (£ 1.063,829).

La expresada cantidad vencerá el interés anual de cuatro por ciento, oro, pagadero por semestres vencidos y una amortización anual de cien mil pesos, oro (\$ 100,000), equivalente a libras esterlinas veintún mil doscientos setenta y siete (£ 21,277), acreditada con el importe de los intereses de la deuda, a medida que ésta se vaya extinguiendo, y además con cincuenta mil pesos anuales, oro, tan luego quede extinguida la deuda de la República Oriental con la Francia.

Tanto el interés como la amortización empezarán a correr dos años después del canje de las ratificaciones del presente convenio y tanto uno como la otra se pagarán por semestres vencidos en libras esterlinas a la Legación Brasileña en Montevideo.

§ *Unico.* La República de los Estados Unidos del Brasil obligase sin embargo a recibir por saldo de cuentas con la República Oriental del Uruguay solamente el importe del capital prestado, el que le será pagado en libras esterlinas, descontándose las amortizaciones realizadas de acuerdo con el presente ar-

título, si este pago le fuere hecho en una sola partida dentro de seis años, contados desde el canje de las ratificaciones.

ARTÍCULO II

Para el exacto cumplimiento de lo que queda ajustado, la República Oriental del Uruguay obliga e hipoteca todas sus contribuciones directas e indirectas y especialmente los derechos de Aduana.

ARTÍCULO III

El ganado vacuno que fuera exportado de la República Oriental del Uruguay para el Estado de Río Grande del Sud, sea por la frontera, sea por la vía marítima o fluvial, será libre de todo impuesto de exportación por parte de aquella República. Y para que no pueda haber duda sobre la extensión de esta concesión, se declara que no será el mismo ganado sujeto a derecho alguno por el hecho de salir con aquel destino, del Departamento o distrito en que se halle.

§ *Unico*. No podrá ser sujeta a derecho alguno la introducción de ganado que para ser criado y engordado pase del Estado de Río Grande del Sud a territorio de la República Oriental del Uruguay. Ese ganado, así como el que los Brasileños poseyeran en el territorio de la República, no podrán ser sujetos a ningún otro impuesto, ni a mayores de aquellos que paguen los ciudadanos de la República, de manera que en materia de impuesto sobre ganado en pie, haya entre dichos ciudadanos y Brasileños perfecta igualdad.

ARTÍCULO IV

El tabaco de procedencia Brasileña, sus productos y preparados no quedarán sujetos a mayores derechos de los actualmente establecidos y gozarán de todas las ventajas que fueren y estuvieren concedidas a los de cualquiera otra procedencia.

ARTÍCULO V

La yerba mate de procedencia brasileña gozará de una reducción de veinte por ciento (20 %) sobre los actuales derechos y de las ventajas que fueren y estuvieren concedidas a la de cualquiera otra procedencia.

ARTÍCULO VI

Todo favor especial concedido por la República Oriental del Uruguay a cualquier otro Estado sobre cualquier otro producto, se volverá común al Brasil, y viceversa, todo favor especial que por la República de los Estados Unidos del Brasil fuere concedido a otro Estado sobre cualquier otro producto, se tornará común a la República Oriental del Uruguay, inmediata y gratuitamente, si fuera gratuito, y mediante la misma compensación o una equivalente, si fuera condicional.

ARTÍCULO VII

El Brasil no elevará el impuesto actual de importación al charque oriental, debiendo el ganado desti-

nado a ese producto, ser sometido al mismo examen a que está sujeto todo animal destinado a la exportación, según las ordenanzas en vigor en la República Oriental del Uruguay. Queda entendido que aprovechará a esa República la reducción del impuesto que fuere votado por efecto del alza del cambio.

§ *Unico.* Los certificados serán legalizados por el Agente Consular del Brasil y presentados en la estación fiscal de su destino para ser despachado el charque.

ARTÍCULO VIII

Lo dispuesto en los artículos II, III, IV, V y VI y sus incisos, entrará en vigor treinta días después del canje de las ratificaciones y cesará, pasados quince años, seis meses después de denunciado, o después que el Brasil fuere pagado efectivamente en los términos del inciso único del artículo I.

ARTÍCULO IX

La presente Convención será ratificada y el canje de las ratificaciones se verificará en la ciudad de Río de Janeiro dentro del plazo más breve posible.

En fe de lo cual los expresados Plenipotenciarios firmaron la presente Convención en la ciudad de Río de Janeiro a los treinta y un días del mes de Octubre de mil ochocientos noventa y seis, y le pusieron sus sellos.

(L. S.) CARLOS DE CASTRO.

(L. S.) DIONISIO E. DE CASTRO CERQUEIRA.

1897

Uruguay-Chile

Tratado de Extradición de Criminales

Celebrado en Montevideo el 10 de Mayo de 1897.

*Canjeadas las ratificaciones en Montevideo, el 15 de
Noviembre de 1909.*

Los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República de Chile, animados del propósito de asegurar la acción eficaz de la justicia penal en los pueblos, mediante la represión de los delitos perpetrados en el territorio de cualquiera de ellos por individuos que buscaren refugio en el otro, han resuelto celebrar un tratado que establezca reglas fijas y basadas en principios de reciprocidad, según las cuales haya de procederse por cada una de las partes contratantes a la entrega de los criminales, que por la otra le fueren reclamados, y a este fin, los mismos Gobiernos han nombrados Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, al señor Don Oscar Hordeñana, Ministro interino de Relaciones Exteriores,

Su Excelencia el Presidente de la República de Chi-

le, al señor Don Vicente Santa Cruz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la misma Nación,

Los cuales, después de comunicarse sus respectivos poderes, que encontraron bastantes y en debida forma, han acordado las estipulaciones contenidas en los siguientes artículos:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a entregarse recíprocamente los individuos que, acusados o condenados en uno de los Países como autores o cómplices de algunos de los delitos comprendidos en el artículo siguiente, se hubieren refugiado en el otro.

ARTÍCULO II

Sólo se acordará la extradición cuando se invoque la perpetración de un delito de carácter común que, según las leyes del País requeriente, fuese castigado con una pena superior a la de tres años de presidio.

ARTÍCULO III

La demanda de extradición será presentada por la vía diplomática; a falta de Agentes de esta categoría, la misma demanda podrá promoverse por el Cónsul más caracterizado de la Nación que solicita la extradición, autorizado al efecto.

Acompañarán a la demanda la sentencia condenatoria notificada en forma legal, si el reo reclamado hubiere sido juzgado y condenado, o el mandato de

prisión expedido por la autoridad judicial competente, y con la designación exacta del delito que la motivare y de la fecha de su perpetración si el presunto delincuente estuviese sólo procesado.

Estos documentos se presentarán originales o en copia debidamente autenticada.

Deberá también acompañarse a la demanda todos los datos y antecedentes necesarios para establecer la identidad de la persona cuya entrega se reclamare, como igualmente la copia de las disposiciones legales aplicables al hecho que diese lugar al juicio, según la legislación del país que requiera la extradición.

ARTÍCULO IV

Cada uno de los Gobiernos podrá, no obstante, en casos urgentes y siempre que hubiere auto de prisión o sentencia condenatoria, pedir al otro la aprehensión del prófugo, por la vía telegráfica, con la condición de formalizar la demanda, de acuerdo con las reglas antes establecidas, dentro del término de un mes.

Si efectuada la aprehensión transcurriese el plazo señalado sin que aquella condición fuese cumplida, el detenido será puesto en libertad.

ARTÍCULO V

La demanda de extradición, en cuanto a su tramitación, a la apreciación de su procedencia y a la admisión y calificación de las excepciones con que pudiese ser impugnada por parte del reo o prófugo reclamado, quedará sujeta a la decisión de las autoridades.

des competentes del país de refugio, las cuales arreglarán sus procedimientos a las disposiciones y prácticas legales en el mismo País establecidas.

ARTÍCULO VI

No será procedente la extradición:

1.° Cuando el delito cuya represión determina la demanda tuviese carácter político o fuese conexo con delitos políticos;

2.° Cuando los delitos perseguidos hubiesen sido cometidos en el país de refugio;

3.° Cuando los delitos, aunque cometidos fuera del país de refugio, hubiesen sido perseguidos y juzgados definitivamente en él;

4.° Cuando, según las leyes del país que requiere la extradición, la pena o la acción para perseguir el delito se encontrasen prescritas.

ARTÍCULO VII

Las Partes Contratantes no estarán obligadas a entregarse sus respectivos ciudadanos, naturales o naturalizados, pero en este caso, así como el comprendido en el inciso 2.° del artículo anterior, el Gobierno de quien se hubiese requerido la extradición, deberá proveer al enjuiciamiento del criminal reclamado, al cual le serán aplicadas las leyes penales del país de refugio, como si el hecho perseguido hubiese sido perpetrado en su propio territorio. La sentencia o resolución definitiva que en la causa se pronunciase, de-

berá comunicarse al Gobierno que requirió la extradición.

Incumbirá al país reclamante la producción de la prueba que deba rendirse en el lugar en que se cometió el delito, la cual, previa la certificación acerca de su autenticidad y correcta sustanciación, tendrá el mismo valor que si se hubiese rendido en el lugar del juicio. Con excepción de lo concerniente a esta prueba, el juicio se reglará en todas sus partes por las leyes del país en que se abriese.

Las disposiciones de este artículo no rigen respecto del individuo que hubiese cometido el delito antes de naturalizarse, el cual podrá ser extraído de acuerdo con las cláusulas de este Tratado.

ARTÍCULO VIII

La extradición acordada por uno de los Gobiernos al otro, no autoriza el enjuiciamiento y castigo del individuo extraído por delito distinto del que hubiese servido de fundamento a la demanda respectiva. Para acumular a la causa del mismo individuo, crimen o delito anterior y diferente, que se hallasen comprendidos entre los que dan lugar a extradición, será necesario el consentimiento especial del Gobierno que hizo la entrega del delincuente requerido en la forma establecida en el artículo III.

Las precedentes restricciones quedarán sin efecto siempre que el delincuente entregado no hubiese regresado al país de donde fué extraído dentro de los tres meses siguientes al día en que obtuvo su libertad,

sea que permaneciere en el País que lo reclama o en cualquiera otro.

ARTÍCULO IX

Si el individuo reclamado se encontrase procesado por delito cometido en el País de refugio, su extradición será diferida hasta que termine la causa, y si fuere o estuviere condenado, hasta que cumpla la pena.

No serán obstáculos para la entrega, las obligaciones civiles que el reclamado tenga contraídas en el País de refugio.

ARTÍCULO X

Cuando un mismo individuo fuere reclamado por alguno de los Gobiernos contratantes y por otro u otros, el del país de asilo deberá preferir la solicitud de aquel en cuyo territorio se hubiere cometido el delito mayor, y en caso de igualdad de delitos, al anterior en la presentación de la demanda.

ARTÍCULO XI

Si el individuo reclamado no fuere ciudadano de la Nación que solicita su entrega, y ésta se requiriese igualmente, a causa del mismo delito, por la Nación a que aquél pertenece, el Gobierno a quien se pidiera la extradición, podrá concederla a aquella de las dos que considerase más conveniente, atendidos los antecedentes y circunstancias del caso.

ARTÍCULO XII

Todos los objetos que constituyen el cuerpo del delito o que hayan servido para cometerlo, así como los papeles o cualquiera otra pieza de convicción que se hallaren ocultos o fueren tomados en poder del reclamado o de terceros, serán entregados a la parte reclamante, aun cuando la extradición no pudiese efectuarse por muerte o fuga del individuo.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de terceros sobre los mencionados objetos, que serán devueltos sin gastos después de la terminación del proceso.

ARTÍCULO XIII

Los dos Gobiernos renuncian a la restitución de los gastos que ocasionare la aprehensión, conservación y transporte del acusado, hasta que éste fuese entregado en el país de refugio, a los Agentes del país que lo reclama.

ARTÍCULO XIV

El presente Tratado regirá por el término de diez años, contados desde la fecha del canje de las ratificaciones, y pasado ese término, se entenderá prorrogado hasta que alguna de las Partes Contratantes notifique a la otra su intención de ponerle fin, un año después de hecha la notificación.

El presente Tratado será ratificado y las ratificaciones canjeadas en la ciudad de Montevideo, dentro del más breve término posible.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios del Uruguay y de Chile firman el presente Tratado en doble ejemplar y lo sellan con sus sellos respectivos, en Montevideo, a los diez días del mes de Mayo de mil ochocientos noventa y siete.

(L. S.) OSCAR HORDEÑANA.

(L. S.) VICENTE SANTA CRUZ.

1897

Uruguay-Varios Países

Convención Postal Universal

Celebrada en Wáshington el 15 de Junio de 1897.

Ratificada por el Uruguay el 25 de Noviembre de 1899.

CONVENCION POSTAL UNIVERSAL

CELEBRADA ENTRE

El Uruguay, Alemania y los Protectorados Alemanes, República Mayor de Centro América, Estados Unidos de América, República Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Imperio de la China, República de Colombia, Estado Independiente del Congo, Reino de Corea, República de Costa Rica, Dinamarca y Colonias Danesas, República Dominicana, Egipto, Ecuador, España y Colonias Españolas, Francia, Colonias Francesas, Gran Bretaña y Diversas Colonias Británicas, India Británica, Colonias Británicas de Australia, Canadá, Colonias Británicas del Africa del Sud, Grecia, Guatemala, República de Haití, República de Hawai, Italia, Japón, República de Liberia, Luxemburgo, Méjico, Mon-

tenegro, Noruega, Estado Libre de Orange, Paraguay, Países Bajos, Colonias Holandesas, Perú, Persia, Portugal, Colonias Portuguesas, Rumania, Rusia, Servia, Reino de Siam, República Sudafricana, Suecia, Suiza, Regencia de Túnez, Turquía y Estados Unidos de Venezuela.

Los abajo firmados, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países arriba enumerados, reunidos en Congreso en Wáshington, en virtud del artículo XXV de la Convención Postal Universal celebrada en Viena el 4 de Julio de 1891, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han revisado la mencionada Convención en la forma consignada en las disposiciones siguientes:

ARTÍCULO I

Los países entre los cuales se ha celebrado la presente Convención, así como los que en adelante se adhieran a ella, formarán, bajo la denominación de *Unión Postal Universal*, un sólo territorio postal para el canje recíproco de correspondencias entre sus oficinas de correos.

ARTÍCULO II

Las disposiciones de esta Convención comprenden las cartas, las tarjetas postales sencillas y con respuesta paga, los impresos de toda clase, los papeles de negocio y muestras de mercaderías, originarios de uno de los países de la Unión y con destino a otro de esos países. Se aplican igualmente al canje postal de los objetos arriba enunciados entre los países de la

Unión y los países extraños a ella, siempre que este canje se efectúe, cuando menos, por intermedio de los servicios de dos de las partes contratantes.

ARTÍCULO III

1—Las Administraciones de Correos de los países limítrofes o que estén en aptitud de comunicar directamente entre sí, sin usar de los servicios de una tercera administración, determinarán, de común acuerdo, las condiciones del transporte de sus valijas recíprocas a través de la frontera o de una frontera a otra.

2—Salvo arreglo contrario, se consideran como servicios de tercero los transportes marítimos efectuados directamente entre dos países por medio de paquetes o buques dependientes de uno de ellos; y estos transportes, así como aquellos que se efectúen entre dos oficinas de un mismo país por medio de servicios marítimos o territoriales dependientes de otro, están regidos por las disposiciones del artículo siguiente.

ARTÍCULO IV

1—La libertad de tránsito queda garantida en todo el territorio de la Unión.

2—Por consiguiente, las diversas Administraciones postales de la Unión podrán dirigirse recíprocamente, por intermedio de una o varias de entre ellas, tanto valijas cerradas como correspondencias al descubierto, según las necesidades del tráfico y las conveniencias del servicio postal.

3—Las correspondencias que se canjeen entre dos Administraciones de la Unión, sea al descubierto, sea en valija cerrada, por medio de los servicios de una o varias Administraciones de la Unión, quedarán sujetas, en provecho de cada uno de los países recorridos, o cuyos servicios se hubiesen utilizado para el transporte, a los derechos de tránsito siguientes:

1.º Por los trayectos territoriales, 2 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y 25 céntimos por kilogramo de otros objetos.

2.º Por los trayectos marítimos:

a) A los precios del tránsito territorial si el trayecto no excede de 300 millas marinas. Sin embargo, todo transporte marítimo que no exceda de 300 millas marinas, será gratuito, si la Administración interesada tiene ya derecho, por las valijas o correspondencias transportadas, a la remuneración correspondiente al tránsito territorial;

b) A 5 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y a 50 céntimos por kilogramo de otros objetos, para los canjes efectuados en un trayecto que exceda de 300 millas marinas entre países de Europa, entre Europa y puertos de Asia y Africa, situados sobre el Mar Mediterráneo y el Mar Negro o de uno a otro de esos puertos, y entre Europa y América del Norte. Se aplicarán los mismos pre-

cios a los transportes efectuados en todo el territorio de la Unión entre dos puertos de un mismo Estado, así como entre dos puertos de dos Estados servidos por una misma línea de paquetes, siempre que el trayecto marítimo no exceda de 1,500 millas marinas.

- c) A 15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales y 1 franco por kilogramo de otros objetos por todos los transportes no comprendidos en los incisos a) y b) precedentes. En caso de transporte marítimo efectuado por dos o más Administraciones, los gastos de todo el trayecto no podrán exceder de 15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales, y de 1 franco por kilogramo de otros objetos; estos gastos, en caso ocurrente, serán repartidos entre esas Administraciones a prorrata de las distancias recorridas, sin perjuicio de otro arreglo entre las partes interesadas.

4—Los precios especificados en el presente artículo no son aplicables a los transportes efectuados por medio de servicios dependientes de Administraciones extrañas a la Unión, ni a los transportes efectuados en la Unión por medio de servicios creados o mantenidos especialmente por una Administración en interés o a pedido de una o varias Administraciones. Las condiciones de esta última categoría de transportes serán

arregladas de común acuerdo entre las Administraciones interesadas.

Además, en todas partes donde el tránsito, tanto territorial como marítimo, sea gratuito o esté sometido a condiciones más ventajosas, se mantendrá este régimen.

5—Queda, sin embargo, establecido:

- 1.º Que los gastos de tránsito territorial se reducirán:

En 5 % durante los dos primeros años de aplicación de la presente Convención;

En 10 % durante los dos años subsiguientes;

En 15 % transcurridos cuatro años.

- 2.º Que los países cuyas entradas y salidas en materia de tránsito territorial no superen en conjunto la suma de 5,000 francos y cuyas salidas sean mayores que las entradas a este respecto, están exonerados de todo pago por este concepto.

- 3.º Que el precio de tránsito marítimo de 15 francos por kilogramo de cartas y de tarjetas postales, de que se habla en la letra c) del párrafo 3 precedente, se reducirá:

A 14 francos durante los dos primeros años de aplicación de la presente Convención;

A 12 francos durante los dos años subsiguientes;

A 10 francos transcurridos cuatro años.

6—Los gastos de tránsito estarán a cargo de la Administración del país de origen.

7—La cuenta general de estos gastos se hará en las condiciones a determinarse por el Reglamento de Ejecución previsto por el artículo 20 siguiente.

8—Quedan exentos de todo derecho de tránsito territorial o marítimo: la correspondencia oficial mencionada en el parágrafo 2 del artículo XI siguiente, las tarjetas postales con respuesta devueltas al país de origen, los objetos reexpedidos o mal dirigidos, los rezagos, los avisos de recepción, los giros postales y todos los demás documentos relativos al servicio postal.

ARTÍCULO V

1—Las tasas por el transporte de los envíos postales en todo el territorio de la Unión, comprendiendo su envío al domicilio de los destinatarios en los países de la Unión, donde el servicio de distribución esté o sea organizado, quedan fijadas como sigue:

- 1.° Para las cartas, 25 céntimos en caso de franqueo y el doble en caso contrario, por cada carta y por cada peso de 15 gramos o fracción de 15 gramos;
- 2.° Para las tarjetas postales, en caso de franqueo, 10 céntimos por tarjetas sencillas o por cada una de las dos partes de la tarjeta con respuesta paga, y el doble en caso contrario;
- 3.° Para los impresos de toda naturaleza, los papeles de negocio y las muestras de mercade-

rías, 5 céntimos por cada objeto o paquete que lleve una dirección particular y por cada peso de 50 gramos o fracción de 50 gramos, siempre que este objeto o paquete no contenga ninguna carta o nota manuscrita que tenga el carácter de correspondencia actual y personal, y esté acondicionado de manera que se pueda verificar con facilidad su contenido.

La tasa de los papeles de negocio no puede ser inferior a 25 céntimos por envío, y la de las muestras a 10 céntimos por envío.

2—Se podrá percibir, además de las tasas fijadas por el párrafo precedente:

- 1.º Por todo envío sujeto a gastos de tránsito marítimo de 15 francos por kilogramo de cartas o tarjetas postales, y de un franco por kilogramo de otros objetos, y en todas las relaciones a que estos gastos de tránsito son aplicables, una sobretasa uniforme que no podrá exceder de 25 céntimos por porte sencillo para las cartas, 5 céntimos por tarjeta postal y 5 céntimos por cada 50 gramos o fracción de 50 gramos para los otros objetos;
- 2.º Por todo objeto transportado por medio de servicios dependientes de Administraciones extrañas a la Unión, o por medio de servicios extraordinarios en la Unión, que den lugar a gastos especiales, una sobretasa en relación con dichos gastos.

Cuando la tarifa de franqueo de la tarjeta postal sencilla comprenda una u otra de las sobretasas autorizadas por los incisos precedentes, esta misma tarifa será aplicable a cada una de las partes de la tarjeta con respuesta paga.

3—En caso de insuficiencia de franqueo, los objetos de correspondencia de toda especie estarán sujetos, a cargo de los destinatarios, a una tasa doble del monto de la insuficiencia, sin que esta tasa pueda exceder de la que se percibe en el país de destino por las correspondencias no franqueadas de la misma especie, peso y origen.

4—Los demás objetos que no sean cartas o tarjetas postales deberán franquearse siquiera en parte.

5—Los paquetes de muestras de mercaderías no podrán contener ningún objeto que tenga un valor comercial; no deberán exceder del peso de 350 gramos, ni presentar dimensiones superiores a 30 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de espesor, o, si tienen la forma de rollo, de 30 centímetros de largo y 15 centímetros de diámetro.

6—Los paquetes de papeles de negocio y de impresos no podrán sobrepasar el peso de dos kilogramos, ni presentar en ninguno de sus lados una dimensión superior a 45 centímetros. Se puede, sin embargo, admitir al transporte por correo los paquetes en forma de rollo cuyo diámetro no exceda de 10 centímetros y cuyo largo no exceda de 75 centímetros.

ARTÍCULO VI

1—Los objetos designados en el artículo V pueden ser expedidos bajo recomendación.

2—Todo envío recomendado está sujeto a cargo del remitente:

- 1.º Al porte de franqueo ordinario del envío, según su naturaleza;
- 2.º A un derecho fijo de recomendación de 25 céntimos como máximo, comprendiendo en él la entrega de un certificado de depósito al expedidor.

3—El remitente de todo objeto recomendado podrá tener un aviso de recepción de dicho objeto pagando de antemano un derecho fijo de 25 céntimos como máximo. Se percibirá el mismo derecho por las reclamaciones que se produzcan posteriormente al depósito, si el expedidor no hubiera pagado ya la tasa para obtener un aviso de recibo.

ARTÍCULO VII

1—Las correspondencias recomendadas podrán expedirse gravadas de reembolso en las relaciones entre los países cuyas Administraciones estén de acuerdo para introducir ese servicio. Estos objetos estarán sometidos a las formalidades y a las tasas de los envíos recomendados.

El máximo del reembolso queda fijado en 1,000 francos por envío, o en el equivalente de esta suma en moneda del país de destino. Sin embargo, toda Administración tiene la facultad de reducir este máximo a 500 francos por envío o al equivalente de esta suma, según su sistema monetario.

2—Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, el monto cobrado al destinatario deberá ser transmitido al remitente por medio de un giro postal, después de deducir la tasa de los giros ordinarios y un derecho de encaje de diez céntimos.

3—La pérdida de una correspondencia recomendada gravada de reembolso, compromete la responsabilidad del servicio postal en las condiciones determinadas por el artículo VIII siguiente, referentes a los envíos recomendados no gravados de reembolso. Después de la entrega del objeto, la Administración del país de destino es responsable del monto del reembolso, y debe, en caso de reclamación, justificar el envío al remitente de la suma percibida, con excepción de las tasas y derechos previstos por el parágrafo 2.

ARTÍCULO VIII

1—En caso de pérdida de un objeto recomendado y salvo el caso de fuerza mayor, el remitente, o a pedido de éste, el destinatario, tendrá derecho a una indemnización de 50 francos.

2—Los países que estén dispuestos a correr con los riesgos de fuerza mayor, quedarán autorizados para percibir del remitente una sobretasa de 25 céntimos como máximo por cada envío recomendado.

3—La obligación de pagar la indemnización incumbirá a la Administración de que depende la oficina remitente. A esta Administración le estará reservado el recurso contra la Administración responsable, es decir, contra la Administración en cuyo territorio o en cuyo servicio haya tenido lugar la pérdida.

En caso de pérdida, por fuerza mayor, de un objeto recomendado originario de otro país, en el territorio o en el servicio de una Administración que se encargue de correr con los riesgos mencionados en el párrafo precedente, el país en donde la pérdida ha tenido lugar, será responsable ante la oficina remitente, si esta última se encarga también, por su parte, de correr con los riesgos de fuerza mayor.

4—Hasta prueba de lo contrario, la responsabilidad incumbe a la Administración que, habiendo recibido el objeto sin hacer observación alguna, no puede probar ni la entrega al destinatario, ni, llegado el caso, la transmisión regular a la Administración inmediata. En los envíos dirigidos a la “poste restante”, la responsabilidad cesa por la entrega a una persona que haya justificado, según las disposiciones vigentes en el país de destino, que su nombre y calidad están conformes con las indicaciones contenidas en la dirección del envío.

5—El pago de la indemnización por la Administración remitente, deberá efectuarse a la brevedad posible y a más tardar en el plazo de un año, a contar del día de la reclamación. La Administración responsable está obligada a reembolsar sin retardo, a la Administración remitente, el monto de la indemnización pagada por ésta.

La Administración de origen queda autorizada para indemnizar al remitente, por cuenta de la Administración intermediaria o destinataria que, notificada oficialmente, hubiera dejado transcurrir el plazo de un año sin dar curso al expediente. Además, cuando

una Administración, cuya responsabilidad ha sido debidamente constatada, hubiera declinado desde luego el pago de la indemnización, deberá también tomar a su cargo, además de la indemnización, los gastos accesorios resultantes del atraso no justificado del pago.

6—Queda entendido que la reclamación no se admitirá sino en el plazo de un año a contar desde la fecha de depósito del envío recomendado en el Correo; pasado este término el reclamante no tendrá derecho a indemnización alguna.

7—Si la pérdida ha tenido lugar en curso de transporte, sin que sea posible establecer en qué territorio o en el servicio de qué país el hecho tuvo lugar, las Administraciones en causa pagarán la indemnización por partes iguales.

8—Las Administraciones cesan de ser responsables de los envíos recomendados cuyos destinatarios hayan otorgado recibo y tomado posesión de ellos.

ARTÍCULO IX

1—El remitente de un objeto de correspondencia puede hacerlo retirar del servicio o hacer modificar su dirección, siempre que este objeto no haya sido entregado a su destinatario.

2—El pedido que se formule con tal objeto se transcribirá por vía postal o telegráfica por cuenta del remitente, quien debe pagar lo siguiente:

- 1.º Para todo pedido por vía postal, la tasa correspondiente a una carta sencilla recomendada.

2.º Para todo pedido por vía telegráfica, la tasa del telegrama según tarifa ordinaria.

3—Las disposiciones del presente artículo no son obligatorias para los países cuya legislación no permite al remitente disponer de un envío en curso de transporte.

ARTÍCULO X

Los países de la Unión que no tienen el franco por unidad monetaria, fijarán en sus monedas respectivas los equivalentes de las tasas determinadas por los varios artículos de la presente Convención. Estos países tienen la facultad de redondear las fracciones con arreglo al cuadro inserto en el Reglamento de Ejecución mencionado en el artículo XX de la presente Convención.

ARTÍCULO XI

1—El franqueo de todo envío no puede efectuarse sino por medio de timbres postales, válidos en el país de origen para la correspondencia de los particulares. Sin embargo, no es permitido hacer uso, en el servicio internacional, de timbres creados con un objeto especial y particular al país de emisión, tales como los timbres llamados conmemorativos, de validez transitoria.

Se consideran como debidamente franqueadas, las tarjetas-contestación que lleven timbres postales del país de emisión de esas tarjetas, y los diarios o pa-

quetes de diarios que no estén munidos de timbres postales, pero cuyo sobrescrito lleve la mención *abonnement-poste*, y que sean expedidos en virtud del Arreglo Particular sobre Suscripciones a Periódicos, previsto por el artículo 19 de la presente Convención.

2—Las correspondencias oficiales relativas al servicio de correos, y canjeadas entre las Administraciones postales, entre esas Administraciones y la Oficina Internacional, y entre las oficinas de correos de los países de la Unión, están exentas de franqueo por medio de timbres postales ordinarios y son las únicas que gozan del libre porte.

3—Las correspondencias depositadas en alta mar en el buzón de un paquete o en manos de los comandantes de buques, pueden ser franqueadas con timbres postales del país a que pertenece o de que depende dicho paquete y según la tarifa vigente en el mismo. Si el depósito a bordo tiene lugar durante la estadía en los dos puntos extremos del trayecto o en una de sus escalas intermedias, el franqueo no es válido si no se efectúa con timbres postales del país en cuyas aguas se encuentra el paquete y según la tarifa que en dicho país rija.

ARTÍCULO XII

1—Cada Administración guardará íntegras para sí las sumas que haya percibido en virtud de los artículos V, VI, VII, X y XI, precedentes, con excepción de lo que corresponde abonar por los giros previstos en el parágrafo 2 del artículo VII.

2—En consecuencia, no ha lugar por tal concepto a cuenta alguna entre las diversas Administraciones de la Unión, bajo reserva de abonar lo previsto por el parágrafo 1 del presente artículo.

3—Las cartas y demás envíos postales no podrán ser gravados en el país de origen ni en el de destino, de tasa o derecho postal alguno a cargo del remitente o del destinatario, fuera de los previstos por los artículos arriba citados.

ARTÍCULO XIII

1—Los objetos de correspondencia de toda naturaleza serán, a pedido del remitente, reexpedidos a domicilio por un mandadero especial, inmediatamente después de la llegada, en los países de la Unión que consientan en establecer ese servicio en sus relaciones recíprocas.

2—Estos envíos, calificados “expresos”, están sometidos a una tasa especial de entrega a domicilio fijada en 30 céntimos, que deberá ser abonada íntegra y adelantada por el remitente, además del porte ordinario, quedando a beneficio de la Administración del país de origen.

3—Cuando el objeto esté destinado a una localidad en donde no exista Oficina de Correos, la Administración de Correos destinataria podrá percibir una tasa complementaria, cuyo máximo no excederá del precio fijado para el envío expreso en su servicio interno, deduciendo la tasa fija abonada por el remitente, o su equivalente en la moneda del país que perciba ese complemento.

4—Los objetos expresos insuficientemente franqueados en cuanto al monto total de las tasas pagaderas adelantadas, serán distribuídos por los medios ordinarios.

ARTÍCULO XIV

1—No podrá percibirse ningún suplemento de tasa por la reexpedición de envíos postales en el interior de la Unión.

2—Las correspondencias caídas en rezago no darán lugar a la restitución de los derechos de tránsito correspondientes a las Administraciones intermedias por el transporte anterior de dichas correspondencias.

3—Las cartas y tarjetas postales sin franqueo y las correspondencias de toda naturaleza insuficientemente franqueadas, que vuelvan al país de origen a causa de reexpedición o de rezago, estarán sujetas, a cargo de los destinatarios o de los remitentes, a las mismas tasas que los objetos similares directamente dirigidos del país de primer destino al país de origen.

ARTÍCULO XV

1—Podrán canjearse valijas cerradas entre las oficinas de correos de uno de los países contratantes y los comandantes de divisiones navales o buques de guerra de ese mismo país que estén de estación en el extranjero, por medio de los servicios territoriales o marítimos dependientes de otros países.

2—Las correspondencias de toda naturaleza conte-

nidas en esas valijas, deberán ser dirigidas exclusivamente a los Estados Mayores y a las dotaciones de los buques destinatarios o expedidores de las valijas o procedentes de ellos; las tarifas y condiciones de envío que les sean aplicables serán determinadas según sus reglamentos internos, por la Administración de Correos del país a que pertenecen los buques.

3—Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, la Administración postal remitente o destinataria de las valijas de que se trata, es deudora para con las Administraciones intermediarias, de los gastos de tránsito, calculados de acuerdo con las disposiciones del artículo IV.

ARTÍCULO XVI

1—No se dará curso a los papeles de negocio, muestras o impresos que no llenen las condiciones requeridas para esta categoría de envíos, por el artículo V de la presente Convención y por el Reglamento de Ejecución previsto por el artículo XX.

2—Llegado el caso, estos objetos deberán ser devueltos al punto de origen y entregados, si es posible, al remitente.

3—Queda prohibido:

1.º Expedir por Correo:

- a) Muestras y otros objetos que por su naturaleza puedan ofrecer peligro para los empleados postales, ensuciar o deteriorar las correspondencias;

- b) Materias explosivas, inflamables o peligrosas, animales e insectos vivos o muertos, salvo las excepciones previstas por el Reglamento de Detalle.

2.º Incluir en las correspondencias ordinarias o recomendadas depositadas en el Correo:

- a) Piezas de moneda que tengan curso legal;
- b) Objetos sujetos a derechos de aduana;
- c) Materias de oro o de plata, pedrerías, alhajas y otros objetos preciosos, pero solamente en el caso en que su inserción e expedición fuera prohibida por las legislaciones de los países interesados.

4—Los envíos comprendidos en las prohibiciones del parágrafo 3 que precede, que hubieran sido indebidamente admitidos a la expedición, deberán ser devueltos al punto de origen, salvo el caso en que la Administración del país de destino estuviera autorizada por sus leyes y reglamentos internos para disponer de ellos de otra manera.

Sin embargo, las materias explosivas, inflamables o peligrosas no serán devueltas a su origen y serán destruidas en seguida por la Administración que constata su presencia.

5—Por lo demás, queda reservado al Gobierno de cada país de la Unión el derecho de no efectuar dentro de su territorio el transporte o la distribución, tanto de los objetos que disfrutaban de la reducción de tasa y respecto de los cuales no se hubiese cumplido

con las leyes, ordenanzas o decretos que regulen las condiciones de su publicación o de su circulación en ese país, como de las correspondencias de toda especie que lleven de una manera ostensible inscripciones, dibujos, etc., prohibidos por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en ese mismo país.

ARTÍCULO XVII

1—Las Administraciones de la Unión que estén en relación con países situados fuera de ella, deberán prestar su concurso a las demás oficinas de la Unión para la transmisión al descubierto por su intermedio de correspondencias destinadas o procedentes de dichos países.

2—Respecto de los gastos de tránsito de envíos de toda naturaleza y de la responsabilidad relativa a los objetos recomendados, las correspondencias de que se trata quedarán sometidas:

Para el transporte en el territorio de la Unión, a las estipulaciones de la presente Convención;
Para el transporte fuera de los límites de la Unión, a las condiciones notificadas por la Administración de la Unión que sirva de intermediaria.

Sin embargo, los gastos de tránsito marítimo total en la Unión y fuera de ella, no podrán exceder de 20 francos por kilogramo de cartas y tarjetas postales, y de un franco por kilogramo de otros objetos; dado el caso, estos gastos serán repartidos a prorrata de

las distancias recorridas, entre las Administraciones que intervengan en el transporte marítimo.

Los gastos de tránsito territorial o marítimo de las correspondencias de que trata el presente artículo, ya sea fuera de los límites de la Unión como en el territorio de la misma, serán constatados de la misma manera que los gastos de tránsito relativos a las correspondencias canjeadas entre países de la Unión.

3—Los gastos de tránsito de las correspondencias con destino a los países fuera de la Unión Postal serán de cargo de la Administración del país de origen que fijará las tasas de franqueo en su servicio para dichas correspondencias, no pudiendo estas tasas ser inferiores a la tarifa normal de la Unión.

4—Los gastos de tránsito de las correspondencias originarias de los países fuera de la Unión, no estarán a cargo de la Administración del país de destino. Esta Administración distribuirá sin tasas las correspondencias que se le entreguen como debidamente franqueadas y multará las correspondencias sin franqueo con el doble de la tarifa que rija en su propio servicio para los envíos semejantes destinados al país de donde provienen dichas correspondencias; y las correspondencias insuficientemente franqueadas, con el doble de la insuficiencia de franqueo, sin que esta tasa pueda exceder a la que se percibe por las correspondencias no franqueadas de la misma naturaleza, peso y origen.

5—Las correspondencias remitidas de un país de la Unión a otro que esté fuera de ella y viceversa, por intermedio de una Administración de la Unión, po-

drán ser transmitidas por ambas partes en valijas cerradas, si este modo de transmisión fuera admitido de común acuerdo por la Administración de origen y la de destino, con anuencia de la Administración intermediaria.

ARTÍCULO XVIII

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar, o a proponer a sus legislaturas respectivas, las medidas necesarias para castigar el empleo fraudulento de timbres postales falsificados o que hayan sido ya usados en el franqueo de correspondencias. Se comprometen igualmente a tomar o a proponer a sus legislaturas respectivas las medidas necesarias para prohibir y reprimir las operaciones fraudulentas de fabricación, venta o distribución de estampillas en uso en el servicio de correos, falsificados o imitados de tal modo que puedan confundirse con los diseños y estampillas emitidos por la Administración de uno de los países adheridos a la Convención.

ARTÍCULO XIX

Los servicios de cartas y cajas con valores declarados, de giros postales, de bultos postales, de valores a cobrar, de libretas de identidad, de suscripción a periódicos, etc., serán objeto de arreglos particulares entre los diversos países o agrupaciones de países de la Unión.

ARTÍCULO XX

1—Las Administraciones postales de los diferentes países que componen la Unión, tienen facultad para establecer, de común acuerdo en un Reglamento de Ejecución, todas las medidas de orden y detalles que juzguen necesarias.

2—Las distintas Administraciones pueden, además, estipular entre sí los arreglos necesarios respecto de los asuntos que no conciernen a la Unión en conjunto, siempre que esos arreglos no deroguen la presente Convención.

3—Las Administraciones interesadas pueden, sin embargo, ponerse de acuerdo para la adopción de tasas reducidas en un radio de 30 kilómetros.

ARTÍCULO XXI

1—La presente Convención no altera la legislación de cada país en todo lo que no esté previsto por las estipulaciones que contiene la presente Convención.

2—No restringe el derecho de las Partes Contratantes para mantener y celebrar tratados, así como para sostener y establecer uniones más estrechas, con el fin de reducir las tasas o de mejorar de cualquier otra manera las relaciones postales.

ARTÍCULO XXII

1—Queda subsistente la institución de una oficina central bajo el nombre de Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, que funcionará bajo la alta

vigilancia de la Administración de Correos de Suiza y cuyos gastos serán sufragados por todas las administraciones de la Unión.

2—Esa oficina queda encargada de reunir, coordinar, publicar y distribuir los datos de toda especie que interesen al servicio internacional de correos; de emitir a pedido de las partes interesadas su opinión sobre las cuestiones litigiosas; de tramitar los pedidos de modificación de las actas del Congreso; de notificar los cambios adoptados, y, en general, de proceder a los estudios y trabajos que considere útiles para la Unión Postal.

ARTÍCULO XXIII

1—En caso de desacuerdo entre dos o más miembros de la Unión, relativamente a la interpretación de la presente Convención o a la responsabilidad de una Administración por la pérdida de un envío recomendado, la cuestión en litigio será resuelta por juicio arbitral. Para tal efecto cada una de las Administraciones interesadas designará a otro miembro de la Unión que no esté directamente interesado en el asunto.

2—La decisión de los árbitros se tomará por mayoría absoluta de votos.

3—En caso de empate, los árbitros designarán, para transar la cuestión, otra Administración igualmente desinteresada en el litigio.

4—Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a todos los convenios celebrados en virtud del artículo XIX que antecede.

ARTÍCULO XXIV

1—Los países que no hayan tomado parte en la presente Convención, serán admitidos como adherentes a ella siempre que lo soliciten.

2—Esta adhesión se notificará por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación Suiza y por este Gobierno a todos los países de la Unión.

3—Trac consigo virtualmente la aquiescencia a todas las cláusulas y la admisión a todas las ventajas que se estipulan en la presente Convención.

4—Corresponde al Gobierno de la Confederación Suiza determinar, de común acuerdo con el Gobierno del país interesado, la parte con que la administración de este último país ha de contribuir a los gastos de la Oficina Internacional, y si ha lugar a ello, las tasas que pueda percibir esta Administración, de conformidad con el artículo X que precede.

ARTÍCULO XXV

1 — Se convocarán, según la importancia de las cuestiones a resolver, congresos de plenipotenciarios de los Países Contratantes o simples conferencias administrativas, cuando la propuesta de reunión haya sido hecha o aprobada, cuando menos, por las dos terceras partes de los Gobiernos o Administraciones.

2—Deberá, sin embargo, celebrarse un Congreso, por lo menos cada cinco años.

3—Cada país puede hacerse representar por uno o más delegados, o bien por la delegación de otro país;

pero queda entendido que el delegado o delegados de un país no pueden ser encargados sino de la representación de dos, comprendiendo en ellos el que representar.

4—En las deliberaciones cada país dispone de un solo voto.

5—Cada Congreso fijará el punto de reunión del Congreso subsiguiente.

6—Para las conferencias las Administraciones fijarán el punto de reunión a propuesta de la Oficina Internacional.

ARTÍCULO XXVI

1—En el lapso de tiempo que transcurre entre las reuniones, cada Administración de Correos de la Unión tiene derecho de dirigir a las otras Administraciones coparticipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al régimen de la Unión.

Para ser sometida a deliberación, cada proposición deberá ser apoyada por dos Administraciones a lo menos, sin contar aquella de la cual emana la proposición. Si la Oficina Internacional no recibe contemporáneamente con la proposición el número necesario de apoyados no se dará trámite ninguno a esa proposición.

2—Toda proposición será sometida al siguiente procedimiento:

Las Administraciones de la Unión, dispondrán de un plazo de seis meses para examinarla y comunicar a la Oficina Internacional, llegado el caso, sus obser-

vaciones. Las enmiendas no son admitidas. Las contestaciones serán recopiladas por la Oficina Internacional y comunicadas a las Administraciones, invitándolas a pronunciarse en pro o en contra. Aquellas que no hubieran remitido su voto en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la segunda circular de la Oficina Internacional, notificando las observaciones recibidas, serán consideradas como abstenidas.

3 — Para que puedan tener fuerza ejecutiva esas proposiciones deberán obtener:

- 1.º Unanimidad de votos, si se trata de añadir nuevas disposiciones o de modificar disposiciones del presente artículo o de los artículos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XXVII, XXVIII y XXIX;
- 2.º Dos terceras partes de los votos si se trata de las modificaciones de la Convención, que no sean las contenidas en los artículos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVIII, XXVII, XXVIII y XXIX;
- 3.º Simple mayoría absoluta si se trata de interpretación de las disposiciones de la Convención, excepto el caso de litigio previsto por el artículo XXIII que precede;

4—Las resoluciones válidas serán consagradas en los dos primeros casos por una declaración diplomática que el Gobierno de la Confederación Suiza queda encargado de formular y transmitir a los Gobiernos de los Países Contratantes, y en el tercer caso por

una mera notificación de la Oficina Internacional a todas las Administraciones de la Unión.

5 — Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá fuerza ejecutiva antes de tres meses después de su notificación.

ARTÍCULO XXVII

Para la aplicación de los artículos XXII, XXV y XXVI que preceden, se consideran como un solo país o una sola Administración, según el caso.

1. El conjunto de las Colonias Alemanas;
2. El Imperio de la India Británica;
3. El Dominio del Canadá;
4. El conjunto de las Colonias Británicas de Australia;
5. El conjunto de todas las demás Colonias Británicas;
6. El conjunto de las Colonias Danesas;
7. El conjunto de las Colonias Españolas;
8. Las Colonias y Protectorados Franceses de Indochina;
9. El conjunto de las demás Colonias Francesas;
10. El conjunto de las Colonias Holandesas;
11. El conjunto de las Colonias Portuguesas.

ARTÍCULO XXVIII

La presente Convención será puesta en vigencia el 1.º de Enero de 1899 y regirá por tiempo indeterminado; pero cada Parte Contratante tiene el derecho de retirarse de la Unión, mediante aviso dado por su

Gobierno al de la Confederación Suiza con un año de anticipación.

ARTÍCULO XXIX

1—Quedan derogadas, desde el día en que se ponga en vigencia la presente Convención, todas las disposiciones de los tratados, convenciones, arreglos u otros actos celebrados anteriormente entre los diferentes países o Administraciones en cuanto no sean conciliables esas disposiciones con los términos de la presente Convención, y sin perjuicio de los derechos reservados por el artículo XXI que antecede.

2 — La presente Convención será ratificada tan pronto como se pueda. Las actas de ratificación serán canjeadas en Wáshington.

3—En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los países arriba enumerados, han firmado la presente Convención en Wáshington, el quince de Junio de mil ochocientos noventa y siete.

Por el Uruguay: PRUDENCIO DE MURGUIONDO. Por Alemania y los Protectorados Alemanes: FRITSCH, NEUMANN. Por la República Mayor de Centro América: N. BOLET PERAZA. Por los Estados Unidos de América: GEORGE S. BATCHELLER, EDWARD ROSEWATER, JAS. N. TYNER, N. M. BROOKS, A. D. HAZEN. Por la República Argentina: M. GARCÍA MÉROU. Por el Austria: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIERAL. Por la Bélgica: LICHTERVELDE,

STERPLIN, A. LAMBIN. Por Bolivia: T. AL-
JANDRO SANTOS. Por la Bosnia-Herzogo-
vina: DR. KAMLER. Por el Brasil: A. FON-
TOURA XAVIER. Por la Bulgaria: IV. STO-
YANOVICH. Por Chile: R. L. IRARRAZAVAL.
Por el Imperio de la China: Por
la República de Colombia: CLÍMACO CAL-
DERÓN. Por el Estado independiente del
Congo: LICHTERVELDE, STERPLIN, A. LAM-
BIN. Por el Reino de Corea: CHIN POM
YE. Por el Coronel Ho Sang Min, JOHN
W. HOYT, JOHN W. HOYT. Por la Repú-
blica de Costa Rica: J. B. CALVO. Por
Dinamarca y las Colonias Danesas: C.
SVENDSEN. Por la República Dominicana:
..... Por el Egipto: Y. SABA. Por el
Ecuador: L. F. CARBO. Por la España y
las Colonias Españolas: ADOLFO ROZABAL,
CARLOS FLOREZ. Por la Francia: ANSAULT.
Por las Colonias Francesas: ED. DALMÁS.
Por la Gran Bretaña y diversas Colonias
Británicas: S. WALPOLE, H. BUXTON FOR-
MAN, C. A. KING. Por la India Británi-
ca: H. M. KISCH. Por las Colonias Bri-
tánicas de Australia: JOHN GAVAN DUFFY.
Por el Canadá: WM. WHITE. Por las Co-
lonias Británicas del Africa del Sud: S.
R. FRENCH, SPENCER TODD. Por la Grecia:
ED. HÖHN. Por Guatemala: J. NOVELLA.
Por la República de Haití: J. N. LEGER.
Por la República de Hawai: Por la

Hungría: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY. Por la Italia: E. CHIARADIA, G. C. VINCI, E. DELMATI. Por el Japón: KENJIRO KOMATSU, KWANKICHI YUKAWA. Por la República de Liberia: CHAS. HALL ADAMS. Por el Luxemburgo: por M. Havelaar, VAN DER VEEN. Por Méjico: A. M. CHAVEZ, I. GARFIAS, M. ZAPATA-VERA. Por el Montenegro: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIBRAL. Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por el Estado libre de Orange: Por el Paraguay: JOHN STEWART. Por los Países Bajos: por M. Havelaar, VAN DER VEEN, VAN DER VEEN. Por las Colonias Holandesas: JOHS J. PEROK. Por el Perú: ALBERTO FALCÓN. Por la Persia: MIRZA ALINAGHI KHAN, MUSTECHARUL-VEZAREH. Por el Portugal y las Colonias Portuguesas: SANTO-THYRSO. Por la Rumania: C. CHIRU, R. PREDA. Por la Rusia: SÉVASTIANOF. Por la Serbia: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY. Por el Reino de Siam: ISAAC TOWNSEND SMITH. Por la República Sud Africana: ISAAC VAN ALPHEN. Por la Suecia: F. H. SCHYLYTERN. Por la Suiza: J. B. PIDDA, A. STÄGER, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: THIÉBAUT. Por la Turquía: MOUSTAPHA, A. FAHRI. Por los Estados Unidos de Venezuela: JOSÉ ANDRADE, ALEJANDRO YBARRA.

1897

Uruguay-Varios Países

UNION POSTAL UNIVERSAL

Protocolo final

Celebrado en Wáshington el 15 de Junio de 1897.

Al proceder a firmar las Convenciones celebradas por el Congreso Postal de Wáshington, los Plenipotenciarios suscritos han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

Se ha levantado acta de la declaración hecha por la Delegación Británica en nombre de su Gobierno, por la cual cede a las Colonias y Protectorados Británicos del Africa del Sud el voto que el artículo XXVII, V de la Convención atribuye “al conjunto de las demás colonias británicas”.

ARTÍCULO II

Alterando la disposición del artículo VI de la Convención, que fija el máximum del derecho de recomendación en 25 céntimos, se ha convenido que los Esta-

dos fuera de Europa están autorizados para mantener el máximo de 50 céntimos, comprendiendo en él la entrega al remitente de un comprobante de depósito.

ARTÍCULO III

Alterando las disposiciones del artículo VIII de la Convención se ha convenido, como medida de transición, que las Administraciones de los países fuera de Europa, cuya legislación sea actualmente contraria al principio de responsabilidad, conserven la facultad de aplazar la aplicación de este principio, hasta el día que obtengan del Poder Legislativo la autorización para introducirlo. Hasta entonces, las otras administraciones de la Unión no están obligadas a pagar indemnización por pérdida en sus respectivos servicios, de envíos recomendados con destino a dichos países o procedentes de ellos.

ARTÍCULO IV

No habiéndose hecho representar en el Congreso la República Dominicana, que forma parte de la Unión Postal, queda abierto el protocolo para que pueda adherirse a las Convenciones que han sido celebradas, o a una u otra de entre ellas.

El Protocolo queda igualmente abierto para el Imperio de la China, cuyos delegados en el Congreso han declarado que ese país tiene la intención de entrar en la Unión Postal Universal, a contar desde una fecha a fijarse ulteriormente.

Queda también abierto para el Estado Libre de

Orange, cuyo representante ha manifestado el propósito que tiene ese país de adherirse a la Unión Postal Universal.

ARTÍCULO V

El Protocolo permanece asimismo abierto para los países cuyos representantes no han firmado hoy más que la Convención Principal, o solamente cierto número de convenciones celebradas por el Congreso, a fin de que puedan adherirse si lo desean a las otras convenciones firmadas en este día o a una u otra de entre ellas.

ARTÍCULO VI

Las adhesiones previstas por el artículo IV que precede, deberán ser notificadas al Gobierno de los Estados Unidos de América por los gobiernos respectivos y por vía diplomática. El plazo que se les acuerda para esta notificación expirará el 1.º de Octubre de 1898

ARTÍCULO VII

En el caso en que una o varias de las Partes Contratantes de las convenciones postales firmadas hoy en Wáshington, no ratificasen una u otra de esas convenciones, esta Convención no será por eso menos válida para los Estados que la hubiesen ratificado.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que firman han labrado el presente Protocolo final, que tendrá la misma fuerza y el mismo valor que si sus disposicio-

nies estuvieran insertas en el texto mismo de las convenciones a que se refiere, y lo han firmado en un ejemplar que quedará depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, y cuya copia será remitida a cada una de las Partes.

Hecho en Wáshington el quince de Junio de mil ochocientos noventa y siete.

Por el Uruguay: PRUDENCIO DE MURGUIONDO. Por Alemania y los Protectorados Alemanes: FRITSCH, NEUMANN. Por la República Mayor de Centro América: N. BOILET PERAZA. Por los Estados Unidos de América: GEORGE S. BATCHELLER, EDWARD ROSEWATER, JAS. N. TYNER, N. M. BROOKS, A. D. HAZEN. Por la República Argentina: M. GARCÍA MÉROU. Por el Austria: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIBRAL. Por la Bélgica: LICHTERVELDE, STERPLIN, A. LAMBIN. Por Bolivia: T. ALEJANDRO SANTOS. Por la Bosnia-Herzegovina: DR. KAMLER. Por el Brasil: A. FONTOURA XAVIER. Por la Bulgaria: IV. STOYANOVICH. Por Chile: R. L. IRARRAZAVAL. Por el Imperio de la China: Por la República de Colombia: CLÍMACO CALDERÓN. Por el Estado independiente del Congo: LICHTERVELDE, STERPLIN, A. LAMBIN. Por el Reino de Corea: CHIN POM YE. Por el Coronel Ho Sang Min, JOHN W. HOYT, JOHN W. HOYT. Por la Repú-

blica de Costa Rica: J. B. CALVO. Por Dinamarca y las Colonias Danesas: C. SVENDSEN. Por la República Dominicana: Por el Egipto: Y. SABA. Por el Ecuador: L. F. CARBO. Por la España y las Colonias Españolas: ADOLFO ROZABAL, CARLOS FLOREZ. Por la Francia: ANSAULT. Por las Colonias Francesas: ED DALMÁS. Por la Gran Bretaña y diversas Colonias Británicas: S. WALPOLE, H. BUXTON FORMAN, C. A. KING. Por la India Británica: H. M. KISCH. Por las Colonias Británicas de Australia: JOHN GAVAN DUFFY. Por el Canadá: WM. WHITE. Por las Colonias Británicas del Africa del Sud: S. R. FRENCH, SPENCER TODD. Por la Grecia: ED. HÖHN. Por Guatemala: J. NOVELLA. Por la República de Haití: J. N. LEGER. Por la República de Hawai: Por la Hungría: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY. Por la Italia: E. CHIARADIA, G. C. VINCI, E. DELMATI. Por el Japón: KENJIRO KOMATSU, KWANKICHI YUKAWA. Por la República de Liberia: CHAS. HALL ADAMS. Por el Luxemburgo: por M. Havelaar, VAN DER VEEN. Por Méjico: A. M. CHAVEZ, I. GARFIAS, M. ZAPATA-VERA. Por el Montenegro: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIBRAL. Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por el Estado libre de Orange: Por el Paraguay: JOHN STEWART.

Por los Países Bajos: por M. Have-
laar, VAN DER VEEN, VAN DER VEEN.
Por las Colonias Holandesas: JOHS J.
PEROK. Por el Perú: ALBERTO FALCÓN.
Por la Persia: MIRZA ALINAGHI KHAN,
MUSTECHARUL-VEZAREH. Por el Portugal
y las Colonias Portuguesas: SANTO-THYR-
so. Por la Rumania: C. CHIRU, R. PREDA.
Por la Rusia: SÉVASTIANOF. Por la Ser-
via: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY.
Por el Reino de Siam: ISAAC TOWNSEND
SMITH. Por la República Sud Africana:
ISAAC VAN ALPHEN. Por la Suecia: F. H.
SCHYLYTERN. Por la Suiza: J. B. PLODA,
A. STÄGER, C. DELESSERT. Por la Regen-
cia de Túnez: THIÉBAUT. Por la Turquía:
MOUSTAPHA, A. FAHRI. Por los Estados
Unidos de Venezuela: JOSÉ ANDRADE, ALE-
JANDRO YBARRA.

1897

Uruguay-Varios Países

Arreglo referente al Servicio de Giros Postales

Celebrada en Wáshington el 15 de Junio de 1897.

Ratificado por el Uruguay, el 25 de Noviembre de 1899

El Uruguay, Alemania y los Protectorados Alemanes, República Mayor de Centro América, República Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Dinamarca y Colonias Danesas, República Dominicana, Egipto, Francia, Grecia, Guatemala, Italia, Japón, República de Liberia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Colonias Holandesas, Portugal y Colonias Portuguesas, Rumania, Servia, Reino de Siam, Suecia, Suiza, Regencia de Túnez y Turquía.

Los abajo firmados, Plenipotenciarios de los países arriba mencionados,

Atento lo dispuesto por el artículo XIX de la Convención Principal, han convenido en celebrar de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, el siguiente Arreglo:

ARTÍCULO I

El canje de fondos por la vía postal y por medio de giros entre los países contratantes cuyas Administraciones convengan en establecer ese servicio, será regido por las disposiciones del presente Arreglo.

ARTÍCULO II

1. En principio el monto de los giros debe ser verificado por los depositantes y pagado a los beneficiados en efectivo; pero cada Administración tiene la facultad de recibir y de emplear a este efecto todo papel moneda que tenga curso legal en su país, bajo reserva de tomar en cuenta en cada caso, las diferencias de cotización.

2. Ningún giro puede exceder de la suma de 1,000 francos efectivos, o de una suma aproximativa en la moneda respectiva de cada país. Sin embargo, las Administraciones que no pueden admitir actualmente 1,000 francos como máximo, tienen la facultad de fijar éste en 500 francos o en una suma aproximada en la moneda de cada país.

3. Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, el monto de cada giro será expresado en la moneda metálica del país en que debe tener lugar el pago, a cuyo efecto la Administración del país de origen determinará la tasa de conversión de su moneda en moneda metálica del país de destino.

La Administración del país de origen determinará igualmente las diferencias de cambio a pagar por el expedidor cuando ese país y el de destino posean el mismo sistema monetario.

4. Queda reservado a cada uno de los países contratantes el derecho de declarar transmisible por vía de endoso en su territorio la propiedad de los giros postales provenientes de otros países.

ARTÍCULO III

1. La tasa general a pagar por el expedidor por cada envío de fondos, efectuado en virtud del artículo precedente, queda fijada en valor metálico para los primeros 100 francos en 25 céntimos por cada 25 francos o fracción de 25 francos, y por las sumas que excedan de los 100 primeros francos en 25 céntimos por cada 50 francos o fracción de 50 francos, o su equivalente en la moneda respectiva de los países contratantes, con la facultad de redondear las fracciones, si las hubiere.

Quedan exentos de toda tasa los giros de oficio relativos al servicio de Correos y canjeados entre Administraciones postales o entre oficinas dependientes de esas Administraciones.

2. La Administración que ha librado los giros abonará a la Administración que los haya pagado un derecho de $1\frac{1}{2}$ % sobre los primeros 100 francos y de $1\frac{1}{4}$ % sobre las sumas que exceden de esa cantidad, excepción hecha de los giros oficiales.

3. Los giros canjeados por uno de los países contratantes y otro no contratante, por intermedio de otro adherido a este Convenio, pueden ser sometidos, en provecho de la oficina intermediaria, a un derecho suplementario que se deducirá del monto del título, y

que deberá representar la parte proporcional del país no contratante.

4. Los giros postales y los recibos extendidos en esos giros, así como los certificados de depósito entregados a los remitentes, no podrán ser sometidos a ningún otro derecho o tasa que no sean las preceptuadas por el parágrafo 1 del presente artículo, salvo, sin embargo, el porte correspondiente por los pagos a domicilio, y, cuando proceda, el derecho suplementario previsto por el parágrafo 3 precedente.

5. El remitente de un giro podrá obtener aviso del pago de ese giro, pagando anticipadamente y en provecho exclusivo de la Administración del país de origen, un derecho fijo igual al que se percibe en ese país por los avisos de recibo de la correspondencia recomendada.

6. El remitente de un giro postal podrá hacerlo retirar del servicio o hacer modificar su dirección, bajo las condiciones y reservas determinadas para la correspondencia ordinaria por el artículo IX de la Convención Principal, y siempre que el beneficiario no se haya recibido del título ni de su importe.

7. Podrá igualmente el expedidor pedir la remisión de los fondos a domicilio por expreso tan pronto como llegue el giro, bajo las condiciones fijadas por el artículo XIII de dicha Convención.

8. Queda, sin embargo, reservada a la oficina del país de destino, la facultad de hacer remitir por expreso en lugar de los fondos, un aviso de llegada del giro o el título mismo, cuando sus reglamentos internos así lo exijan.

ARTÍCULO IV

1. Los giros postales podrán ser transmitidos por telégrafo en las relaciones entre las Administraciones cuyos países estén ligados por telégrafos del Estado, o que consientan en emplear a ese efecto los telégrafos particulares; en este caso los giros serán calificados de telegráficos.

2. Los giros telegráficos como los telegramas ordinarios y en las mismas condiciones que estos últimos podrán ser sometidos a las formalidades de la urgencia, de la contestación paga, del colacionamiento y recomendación, así como a las formalidades de la transmisión por correo o de la entrega por expreso, si están destinados a una localidad no servida por telégrafos internacionales. Podrán, además, dar lugar a pedidos de avisos de pago a entregar y a expedir por correo.

Los remitentes de giros telegráficos, podrán agregar a la fórmula reglamentaria del giro comunicaciones para el destinatario, siempre que paguen su importe según tarifa.

3. El expedidor de un giro telegráfico deberá pagar:

- a) La tasa ordinaria de los giros postales, y en caso que se hubiera perdido un aviso de pago, el derecho fijo de ese aviso;
- b) La tasa del telegrama.

4. Los giros telegráficos no serán gravados con otros gastos que los previstos en el presente artículo o aque-

llos que puedan ser percibidos de conformidad con los reglamentos telegráficos internacionales.

ARTÍCULO V

1. Podrán ser reexpedidos entre los países signatarios de este Arreglo los giros cuyos destinatarios hubieren cambiado de residencia. Cuando el país de nuevo destino tuviera otro sistema monetario que el del primer destino, la conversión del importe del giro en moneda del primero de esos países será efectuada por la oficina reexpedidora según la tasa convenida para los giros con destino a ese país y procedentes del país del primer destino. No se percibirá ningún suplemento de tasa por la reexpedición, pero el país del nuevo destino cobrará en provecho suyo en todos los casos la cuota de tasa que le correspondería, si el giro le hubiese sido primitivamente dirigido, aun en el caso de que, a consecuencia de un arreglo especial, celebrado entre el país de origen y el del primer destino, la tasa percibida en efectivo fuera inferior a la prevista por el artículo III del presente Arreglo.

2. Los giros telegráficos podrán ser reexpedidos a una nueva dirección en las mismas condiciones que los giros ordinarios. Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, la reexpedición de los giros telegráficos se efectuará siempre por la vía postal.

ARTÍCULO VI

1. Las Administraciones de Correos de los países contratantes procederán en las épocas fijadas por el

Reglamento anexo, a la formación de las cuentas, en las que se recapitularán todas las sumas pagadas por sus oficinas respectivas, y estas cuentas, después de discutidas y aprobadas, serán saldadas, salvo arreglo contrario, en moneda de oro del país acreedor, por la Administración que haya resultado deudora y dentro del plazo fijado por el mismo Reglamento.

2. A este efecto y salvo arreglo contrario, cuando los giros hayan sido pagados en monedas diferentes, el crédito menor será convertido en la misma moneda que el crédito mayor, al cambio par de la moneda de oro de ambos países.

3. En caso de que no se pague el saldo de una cuenta en los plazos fijados, ese saldo devengará intereses, a contar desde el día del vencimiento de dichos plazos hasta el en que tuviera lugar el pago. Estos intereses se calcularán a razón del 5 % anual y serán llevados al débito de la Administración retardataria en su próxima cuenta.

ARTÍCULO VII

1. Se garantizará a los depositantes las sumas que conviertan en giros postales, hasta el momento en que sean regularmente pagadas a los destinatarios o sus mandatarios.

2. Las sumas recibidas por cada Administración en cambio de giros postales cuyo importe no haya sido reclamado por los interesados en los plazos fijados por las leyes o reglamentos del país de origen, quedarán definitivamente a favor de la Administración que libre los giros.

3. Queda entendido, sin embargo, que la reclamación referente al pago de un giro a una persona no autorizada, no será admitida sino en el término de un año, a contar desde el día de la expiración de la validez normal del giro; transcurrido ese término, las Administraciones cesan de ser responsables de los pagos equivocados.

ARTÍCULO VIII

Las estipulaciones del presente Arreglo no restringen el derecho de las partes contratantes para mantener y celebrar arreglos especiales, así como para mantener y establecer uniones más estrechas con el fin de mejorar el servicio de giros postales internacionales.

ARTÍCULO IX

Cada Administración en circunstancias extraordinarias que justifiquen la medida, podrá suspender temporalmente el servicio de giros internacionales, de una manera general o parcial, a condición de dar inmediato aviso por telégrafo si fuese menester, a la Administración o Administraciones interesadas.

ARTÍCULO X

Los países de la Unión que no hayan tomado parte en el presente Arreglo serán admitidos a adherirse a él, siempre que lo soliciten en la forma prescrita por el artículo XXIV de la Convención Principal en la parte referente a las adhesiones a la Unión Postal Universal.

ARTÍCULO XI

Las Administraciones de Correos de los países contratantes designarán cada una por su parte las oficinas que deban expedir y pagar los giros que se emitan en virtud de los artículos precedentes; reglamentarán la forma de transmisión de los giros, las de las cuentas designadas en el artículo VI y toda otra medida de detalle o de orden necesaria para asegurar la ejecución del presente Arreglo.

ARTÍCULO XII

1. En el intervalo que transcurra entre las reuniones previstas por el artículo XXV de la Convención Principal, toda Administración de Correos de uno de los países contratantes tiene el derecho de dirigir a las demás Administraciones copartícipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al servicio de giros postales. Para ser sometida a deliberación, cada proposición deberá ser apoyada por dos Administraciones a lo menos, sin contar aquella de la cual emana la proposición. Cuando la Oficina Internacional no reciba al mismo tiempo que la proposición, el número necesario de apoyados, no dará trámite a esa proposición.

2. Toda proposición se someterá al procedimiento prescripto por el párrafo 2 del artículo XXVI de la Convención Principal.

3. Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones deberán reunir:

1. Unanimidad de votos si se trata de agregar nuevos artículos o de modificar las disposiciones de éste y las de los artículos I, II, III, IV, VI y XIII;
2. Dos terceras partes de votos si se trata de modificar otras disposiciones que las de los artículos precitados;
3. Simple mayoría absoluta si se trata de interpretar disposiciones del presente Arreglo, excepto el caso de litigio a que se refiere el artículo XXIII de la Convención Principal.
4. Las resoluciones válidas serán consagradas en los dos primeros casos, por una declaración diplomática, y en el tercero por una notificación administrativa, en la forma indicada por el artículo XXVI de la Convención Principal.
5. Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá fuerza ejecutiva hasta los tres meses cuando menos, después de su notificación.

ARTÍCULO XIII

1. El presente Arreglo entrará en vigor el 1.º de enero de 1899.
2. Tendrá la misma duración que la Convención Principal, sin perjuicio del derecho que tiene cada país para retirarse de él mediante aviso dado por su Gobierno al de la Confederación Suiza mediante un año de anticipación.
3. Quedan derogadas a contar desde el día en que se ponga en ejecución el presente Arreglo, todas las

disposiciones convenidas anteriormente entre los Gobiernos o Administraciones de las Partes Contratantes, en cuanto no sean conciliables con los términos del citado Arreglo y sin perjuicio de los derechos reservados por el artículo VIII.

4. El presente Arreglo será ratificado tan pronto como sea posible. Las actas de ratificación serán canjeadas en Wáshington.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios de los países arriba enumerados han firmado el presente arreglo en Wáshington, el quince de Junio de mil ochocientos noventa y siete.

Por el Uruguay: PRUDENCIO DE MURGUIONDO. Por Alemania y los Protectorados Alemanes: FRITSCH, NEUMANN. Por la República Mayor de Centro América: N. BOLET PERAZA. Por la República Argentina: M. GARCÍA MÉROU. Por el Austria: DR. NEUBAUER, HARBERGER, STIBIAL. Por la Bélgica: LICHTERVELDE, STERPLIN, A. LAMBIN. Por la Bosnia-Herzegovina: DR. KAMLER. Por el Brasil: A. FONTOURA XAVIER. Por la Bulgaria: IV. STOYANOVITCH. Por Chile: R. L. IRARRAZAVAL. Por Dinamarca y las Colonias Danesas: C. SVENDSEN. Por la República Dominicana: Por el Egipto: Y. SABA. Por la Francia: ANSAULT. Por la Grecia: ED. HÖHN. Por Guatemala: J. NOVELLA. Por la Hungría:

PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY. Por la Italia: E. CHIARADIA, G. C. VINCI, E. DELMATI. Por el Japón: KENJIRO KOMAT-SU, KWANKICHI YUKAWA. Por la República de Liberia: CHAS. HALL ADAMS. Por el Luxemburgo: por M. Havelaar, VAN DER VEEN. Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por los Países Bajos: por M. Havelaar, VAN DER VEEN, VAN DER VEEN. Por las Colonias Holandesas: JHOS J. PERK. Por el Portugal y las Colonias Portuguesas: SANTO-THYRSO. Por la Rumania: C. CHIRU, R. PREDA. Por la Servia: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY. Por el Reino de Siam: ISAAC TOWNSEND SMITH. Por la Suecia: F. H. SCHLYTERN. Por la Suiza: J. B. PIODA, A. STAGER, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: THIÉBAUT. Por la Turquía: MOUSTAPHA, A. FAHRI.

1897

Uruguay - Varios Países

Convención referente al Canje de Encomiendas Postales

Celebrada en Wáshington el 15 de Junio de 1897

Ratificada por el Uruguay el 25 de Noviembre de 1899.

El Uruguay, Alemania y los Protectorados Alemanes, República Mayor de Centro América, República Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, República de Colombia, Dinamarca y Colonias Danesas, República Dominicana, Egipto, España, Francia, Colonias Francesas, Grecia, Guatemala, India Británica, Italia, República de Liberia, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Colonias Holandesas, Portugal y Colonias Portuguesas, Rumania, Rusia, Servia, Reino de Siam, Suecia, Suiza, Regencia de Túnez, Turquía y Estados Unidos de Venezuela.

Los abajo firmados, Plenipotenciarios de los países arriba mencionados, en virtud de lo establecido por el artículo XIX de la Convención Principal, han celebrado la Convención siguiente, bajo reserva de ratificación:

ARTÍCULO I

1. Podrá expedirse bajo la denominación de encomiendas postales, de uno de los países arriba mencionados a otro de esos países, encomiendas con o sin valor declarado hasta el peso de 5 kilogramos. Esas encomiendas pueden ser gravadas de reembolso en las relaciones entre los países cuyas Administraciones convengan en introducir este servicio.

Excepcionalmente queda permitido a cada país no encargarse de encomiendas con declaración de valor ni de bultos embarazosos.

Cada país fijará en la parte que le concierne, el límite máximo de la declaración del valor y del reembolso, el que no podrá en ningún caso bajar de 500 francos.

En las relaciones entre dos o más países que hayan adoptado máximums diferentes, el límite más bajo es el que deberá observarse recíprocamente. Sin embargo, en lo tocante a reembolsos, esta obligación queda limitada a los países de salida y de llegada.

2. Las Administraciones de Correos de los países correspondientes, podrán convenir la admisión de encomiendas de un peso superior a 5 kilogramos, basándose en las disposiciones de la Convención, salvo aumento de tasa y de la responsabilidad en caso de pérdida, expoliación o avería.

3. El Reglamento de Ejecución determinará las demás condiciones de admisión de las encomiendas al transporte.

ARTÍCULO II

1. Queda garantida la libertad de tránsito en el territorio de cada uno de los países adherentes a esta

Convención, y la responsabilidad de las Administraciones que tomen parte en el transporte queda comprometida en los límites determinados por el artículo XIII siguiente.

2. Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, la transmisión de encomiendas postales entre países no limítrofes, se efectuará al descubierto.

ARTÍCULO III

1. La Administración del país de origen será deudora de cada una de las Administraciones copartícipes del tránsito territorial de un derecho de 50 céntimos por encomienda.

2. Además, si hay uno o varios transportes marítimos, la Administración del país de origen abonará a cada una de las Administraciones cuyos servicios tomen parte en el transporte marítimo, un derecho cuya tasa por encomienda es el siguiente:

25 céntimos por todo trayecto que no exceda de 500 millas marinas;

50 céntimos por todo trayecto superior a 500 millas marinas, pero que no exceda de 1,000;

1 franco por todo trayecto superior a 1,000 millas marinas y que no exceda de 3,000;

2 francos por todo trayecto superior a 3,000 millas marinas y que no exceda de 6,000;

3 francos por todo trayecto superior a 6,000 millas marinas.

Estos trayectos se calcularán, llegado el caso, según la distancia media entre los puertos respectivos de los dos países corresponsales.

3. Para las encomiendas embarazosas, los derechos a cobrar fijados por los incisos 1 y 2 que preceden, se aumentarán en un 50 %.

4. Independientemente de estos gastos de tránsito, la Administración del país de origen abonará a cada Administración que tome parte en el transporte con responsabilidad, a título de prima de seguro por las encomiendas con valor declarado, una parte proporcional de seguro, fijada por 300 francos o fracción de 300 francos en 5 céntimos por tránsito territorial y en 10 céntimos por tránsito marítimo.

ARTÍCULO IV

Es obligatorio el franqueo de las encomiendas postales.

ARTÍCULO V

1. La tasa de las encomiendas postales se compone de un derecho que comprende, para cada encomienda, tantas veces 50 céntimos o su equivalente en la moneda de cada país, como Administraciones haya que tomen parte en el transporte territorial, agregando, si hubiere lugar a ello, el derecho marítimo previsto por el parágrafo 2 del artículo III que precede y las tasas y derechos mencionados en los parágrafos siguientes. Los equivalentes serán fijados por el Reglamento de Ejecución.

2. Las encomiendas embarazosas serán sometidas a una tasa adicional de 50 %, que se redondeará, llegado el caso, con 5 céntimos.

3. Para las encomiendas con valor declarado, se agregará un derecho de seguro igual al que se percibe por las cartas con valor declarado.

4. El remitente de una encomienda gravada de reembolso, pagará un derecho especial que no podrá exceder de 20 céntimos por cada fracción indivisible de 20 francos del monto del reembolso.

Esta tasa se repartirá entre la Administración del país de origen y la del país de destino. Para este efecto, la Administración de este último país se acreditará en la cuenta recapitulativa mensual un $1\frac{1}{2}$ % del monto total de los reembolsos.

Sin embargo, dos Administraciones pueden de común acuerdo aplicar en sus relaciones recíprocas otra forma de percepción y de repartición de las tasas especiales de reembolso.

5. Como medida de transición, cada uno de los países contratantes tiene la facultad de aplicar a las encomiendas postales procedentes de sus oficinas o con destino a ellas una sobretasa de 25 céntimos por encomienda.

Excepcionalmente esa sobretasa puede ser elevada a 75 céntimos como máximo para la República Mayor de Centro América, República Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Colonias Holandesas, Rusia, Siam, Suecia, Turquía Asiática, Uruguay y Venezuela.

6. El transporte entre la Francia continental por una parte y Argel y la Córcega por otra, dará igual

mente lugar a una sobretasa de 25 céntimos por encomienda.

Queda facultada la Administración Española para percibir una sobretasa de 25 céntimos por el transporte entre la España continental y las Islas Baleares, y de 50 céntimos por el transporte entre la España continental y las Islas Canarias.

7. El remitente de una encomienda postal podrá obtener un aviso de recepción, pagando adelantado un derecho fijo de 25 céntimos como máximo. El mismo derecho puede ser aplicado a los pedidos de datos sobre el destino de las encomiendas, que se soliciten posteriormente al depósito, si el remitente no hubiera abonado ya la tasa especial para obtener el aviso de recepción. Ese derecho quedará por entero a favor de la Administración del país de origen.

ARTÍCULO VI

La oficina remitente abonará por cada encomienda:

- a) A la Administración destinataria 50 céntimos, agregando, si hubiere lugar a ello, las sobretasas previstas en los párrafos 2, 5 y 6 del artículo V que precede, de un derecho de 5 céntimos por cada suma de 300 francos o fracción de 300 francos de valor declarado y del derecho de entrega a domicilio por expreso, previsto por el artículo VIII.
- b) Eventualmente, a cada Administración intermediaria, los derechos fijados por el artículo III.

ARTÍCULO VII

El país de destino podrá percibir por entrega a domicilio y formalidades de aduana, una tasa cuyo importe total no podrá exceder de 25 céntimos por encomienda. Salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, esta tasa se percibirá del destinatario en el momento de entregarle la encomienda.

ARTÍCULO VIII

1. A pedido de los remitentes las encomiendas serán llevadas a domicilio por un mandatario especial inmediatamente después de su llegada en los países de la Unión cuyas Administraciones convengan en hacerse cargo de ese servicio en sus relaciones recíprocas.

Esos envíos llamados *expresos*, quedan sometidos a una tasa especial, fijada en 50 céntimos, que debe ser abonada por entero y de antemano por el remitente a más del porte ordinario, aunque la encomienda sea o no remitida al destinatario o designada únicamente como expreso en el país de destino. Dicha tasa formará parte de los abonos correspondientes a ese país.

2. Cuando la encomienda sea destinada a un paraje que carezca de oficina de correos, la Administración destinataria podrá percibir por la entrega de la encomienda o por el aviso llamando al destinatario a retirarlo, una tasa suplementaria que puede elevarse hasta el importe del precio fijado para la entrega por

expreso en su servicio interno, deducción hecha del porte fijo pagado por el remitente o su equivalente en la moneda del país que perciba esta tasa suplementaria.

3. La entrega o el envío de un aviso llamando al destinatario no se efectuará sino una sola vez. Si esta gestión no diera resultado, la encomienda dejará de ser considerada como expreso y su entrega se efectuará en las condiciones establecidas para las encomiendas ordinarias.

4. Si una encomienda de esta especie fuera reexpedida a otro país, a consecuencia de cambio de domicilio del destinatario, sin que la entrega por expreso haya sido tentada, la tasa fija pagada por el remitente se abonará al nuevo país de destino, si éste ha consentido en encargarse de la entrega por expreso; en caso contrario esa tasa quedará a favor de la Administración del país de primer destino de la misma manera que la de las encomiendas caídas en rezago.

ARTÍCULO IX

1. Las encomiendas a que se refiere la presente Convención no podrán ser gravadas con ningún otro derecho postal fuera de los previstos por los diferentes artículos de dicha Convención.

2. Los derechos de aduana u otros que no sean postales deberán pagarse por los destinatarios de las encomiendas. Sin embargo, en las relaciones entre Administraciones que se hayan puesto de acuerdo a este respecto, los remitentes podrán tomar a su cargo los derechos de que se trata, mediante previa declaración en la oficina de salida. En este caso deberán pagar

cuando lo solicite la oficina de destino, las sumas que ésta indique.

ARTÍCULO X

1. El remitente de una encomienda postal podrá retirarla del servicio o hacer modificar su dirección en las condiciones establecidas para las correspondencias por el artículo IX de la Convención Principal; además, si el remitente pide la reexpedición o devolución de una encomienda, estará obligado a garantizar de antemano el pago del porte debido por la nueva transmisión.

2. Toda Administración está autorizada para restringir el derecho de modificación de dirección en las encomiendas cuya declaración de valor no pase de 500 francos.

ARTÍCULO XI

1. La reexpedición de encomiendas postales de un país a otro, a consecuencia de cambio de residencia de los destinatarios, así como la devolución de encomiendas postales caídas en rezago, o rechazadas por la aduana, dará lugar a la percepción suplementaria de las tasas fijadas por los párrafos 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo V, a cargo de los destinatarios, o en el caso ocurrente de los remitentes, sin perjuicio del reembolso de los derechos de aduana u otros gastos especiales (almacenaje, formalidades de aduana, etc.).

2. En caso de reexpedición de una encomienda gravada de reembolso, la oficina de destino última se

acreditará la cuota del derecho de reembolso conforme al parágrafo 4 del artículo V.

ARTÍCULO XII

1. Queda prohibido expedir por el Correo encomiendas que contengan cartas o notas con carácter de correspondencia u otros objetos cuya emisión no esté autorizada por las leyes y reglamentos de aduana u otros. Queda igualmente prohibido expedir monedas, materias de oro, plata y otros objetos preciosos en las encomiendas sin valor declarado con destino a países que admitan la declaración de valor. Sin embargo, se podrá incluir en el envío la factura abierta reducida a sus indicaciones más elementales, lo mismo que una simple copia de la dirección de la encomienda con mención de la del remitente.

2. En el caso de que una encomienda que contravenga una de esas disposiciones fuese entregada por una de las Administraciones de la Unión a otra Administración, ésta procederá en la forma prevista por su legislación y por sus reglamentos internos.

ARTÍCULO XIII

1. Salvo caso de fuerza mayor, cuando una encomienda postal haya sido perdida, violada o averiada, el remitente y en defecto o a pedido de éste, el destinatario, tiene derecho a una indemnización correspondiente al monto real de la pérdida, violación o avería, a menos que el perjuicio haya sido causado por falta o negligencia del remitente, o sea provenien-

te de la naturaleza del objeto, sin que esta indemnización pueda exceder para las encomiendas ordinarias de 25 francos, y para las con valor declarado el importe de ese valor.

Las disposiciones del inciso precedente se aplicarán a las encomiendas gravadas de reembolso mientras no hayan sido entregadas a los destinatarios; pero después de su entrega las Administraciones se responsabilizarán únicamente por el monto íntegro de las sumas debidas al remitente.

Sin embargo, el derecho de seguro queda adquirido por las Administraciones.

2. Los países que estén dispuestos a responsabilizarse por los riesgos que pudieran provenir en caso de fuerza mayor, quedan autorizados a cobrar por tal concepto, sobre las encomiendas con valor declarado, una sobretasa en las condiciones determinadas por el artículo XII, parágrafo 2 del Arreglo concerniente al canje de cartas y cajas con valor declarado.

3. La obligación de pagar la indemnización incumbe a la Administración de que depende la oficina remitente. Queda reservado a esta Administración el recurso contra la Administración responsable, es decir, contra la Administración en cuyo territorio o servicio ha tenido lugar la pérdida, violación o avería.

En caso de pérdida, violación o avería, en circunstancias de fuerza mayor en el territorio o en el servicio de un país que se encargue de los riesgos mencionados en el parágrafo 2 arriba mencionado, de una encomienda con valor declarado, el país en que la pérdida, violación o avería haya tenido lugar, será res-

ponsable ante la oficina remitente, si esta última es la encargada de los riesgos en caso de fuerza mayor respecto de sus remitentes, en lo que se refiere a envíos con valor declarado.

4. Mientras no se pruebe lo contrario, la responsabilidad incumbirá a la Administración que, habiendo recibido la encomienda sin hacer observaciones, no pueda probar la entrega al destinatario, ni la transmisión regular a la Administración siguiente.

5. El pago de la indemnización por la oficina remitente deberá tener lugar lo más pronto posible y a más tardar en el plazo de un año a contar desde el día del reclamo. La oficina responsable estará obligada a reembolsar sin demora a la remitente el importe de la reclamación pagada por ella.

Queda autorizada la Administración de origen para indemnizar a la remitente por cuenta de la Administración intermediaria a quien se haya hecho el reclamo, y que haya dejado transcurrir un año sin darle curso. Además, en el caso en que una Administración, cuya responsabilidad se encuentre comprobada debidamente, haya aceptado el pago de la indemnización, debe tomar a su cargo a más de la indemnización los gastos accesorios que resulten de la demora no justificada en el pago.

6. Queda entendido que la reclamación no será admitida sino en el plazo de un año a contar del día de depósito de la encomienda en el correo; pasado ese plazo, el reclamante no tendrá derecho a ninguna indemnización.

7. Si la pérdida o avería tuviese lugar durante el

transporte entre las oficinas del canje de dos países limítrofes, sin que sea posible establecer en cuál de los dos territorios el hecho tuvo lugar, las dos Administraciones en cuestión satisfarán la indemnización por mitad.

8. La responsabilidad de las Administraciones cesa desde el momento en que las encomiendas hayan sido entregadas a sus destinatarios.

ARTÍCULO XIV

Es prohibida toda declaración fraudulenta de valores superior al valor real del contenido de una encomienda. En caso de que se haga, el remitente perderá todo derecho a indemnización, sin perjuicio de las gestiones judiciales que sean compatibles con la legislación del país de origen.

ARTÍCULO XV

Cada Administración, en circunstancias extraordinarias que justifiquen la medida, podrá suspender temporalmente el servicio de las encomiendas postales de una manera general o parcial, a condición de dar inmediato aviso, por telégrafo en caso necesario, a la Administración o Administraciones interesadas.

ARTÍCULO XVI

La legislación interna de cada uno de los países contratantes será aplicable en todo aquello que no esté previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convención.

ARTÍCULO XVII

1. Las estipulaciones de la presente Convención no restringen el derecho de las Partes Contratantes para mantener y celebrar convenciones especiales así como para mantener y establecer uniones más estrechas con el fin de mejorar el servicio de encomiendas postales.

2. Sin embargo, las Administraciones de los países que suscriben la presente Convención y que mantengan un canje de encomiendas postales con países no contratantes, permitirán que las demás Administraciones de la Unión aprovechen esas relaciones para el mismo canje con esos países.

ARTÍCULO XVIII

1. Los países de la Unión Postal Universal que no hayan tomado parte en la presente Convención serán admitidos a adherirse a ella siempre que lo soliciten en la forma prescripta por el artículo XXIV de la Convención Principal en la parte referente a las adhesiones a la Unión Postal Universal.

2. No obstante, si el país que desea adherirse a la presente Convención reclama la facultad de percibir una tasa superior a 25 céntimos por encomienda, el Gobierno de la Confederación Suiza someterá el pedido de adhesión a todos los países contratantes. Este pedido será considerado como admitido si en un plazo de seis meses no se ha presentado objeción alguna.

ARTÍCULO XIX

Las Administraciones de Correos de los países contratantes designarán las oficinas o localidades encar-

gadas del canje internacional de las encomiendas postales, reglamentarán la forma de transmisión de esas encomiendas y fijarán todas las demás medidas de detalle y de orden necesarias para asegurar la ejecución de la presente Convención.

ARTÍCULO XX

La presente Convención será sometida a las condiciones de revisión determinadas por el artículo XXV de la Convención Principal.

ARTÍCULO XXI

1. En el intervalo que transcurra entre las reuniones previstas por el artículo XXV de la Convención Principal, toda Administración de Correos de uno de los países contratantes tiene el derecho de dirigir a las demás Administraciones copartícipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al servicio de encomiendas postales.

Para ser tomada en consideración cada proposición deberá ser apoyada por lo menos por dos Administraciones, sin contar aquella de quien emana la proposición. Cuando la Oficina Internacional no reciba conjuntamente con la proposición, el número necesario de declaraciones de apoyo, no se le dará curso.

2. Toda proposición se someterá al procedimiento prescrito por el párrafo 2 del artículo XXVI de la Convención Principal.

3. Para que tengan fuerza ejecutiva estas proposiciones deberán reunir.

- a) Unanimidad de votos si se trata de agregar nuevas disposiciones o de la modificación de las disposiciones del presente artículo y de los artículos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII,, XIV, XV, XX, y XXII de la presente Convención.
- b) Dos terceras partes de votos si se trata de interpretar disposiciones de la presente Convención que no sean las de los artículos precitados.
- c) Simple mayoría absoluta, si se trata de interpretar disposiciones de la presente Convención, excepto el caso de litigio a que se refiere el artículo XXIII de la Convención Principal.

4. Las resoluciones válidas serán consagradas en los dos primeros casos por una declaración diplomática y en el tercero por una notificación administrativa en la forma indicada por el artículo XXVI de la Convención Principal.

5. Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá carácter ejecutivo hasta tres meses cuando menos después de su notificación.

ARTÍCULO XXII

1. La presente Convención entrará a regir el 1.º de enero de 1899.

2. Tendrá la misma duración que la Convención Postal, sin perjuicio del derecho que tiene cada una de las partes contratantes para retirarse de ella, mediante aviso dado con un año de anticipación por su Gobierno al de la Confederación Suiza.

3. Quedan derogadas a contar del día en que la presente Convención entre en vigor, todas las disposiciones convenidas anteriormente entre los diversos países contratantes o sus Administraciones, siempre que no sean conciliables con las cláusulas de la presente Convención y sin perjuicio de los derechos reservados por los artículos XVI y XVII precedentes.

4. Esta Convención será ratificada tan pronto como sea posible. Las actas de ratificación serán canjeadas en Wáshington.

En fe de lo cual los plenipotenciarios de los países arriba mencionados han firmado la presente Convención en Wáshington, el quince de Junio de mil ochocientos noventa y siete.

Por el Uruguay: PRUDENCIO DE MURGUIONDO. Por Alemania y los Protectorados Alemanes: FRITSCH, NEUMANN. Por la República Mayor de Centro América: N. BOLET PERAZA. Por la República Argentina: M. GARCÍA MÉROU. Por el Austria: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIBRAL. Por la Bélgica: LICHTERVELDE, STERPLIN, A. LAMBIN. Por la Bosnia-Herzegovina: DR. KAMLER. Por el Brasil: Por la Bulgaria: IV. STOYANOVITCH. Por Chile: R. L. IRARRAZAVAL. Por la República de Colombia: Por Dinamarca y las Colonias Danesas: C. SVENDSEN. Por la República Dominicana. Por el Egip-

to: Y. SABA. Por la España: ADOLFO ROZABAL, CARLOS FLOREZ. Por la Francia: ANSAULT. Por las Colonias Francesas: ED. DALMÁS. Por la Grecia: ED. HÖHN. Por Guatemala: J. NOVELLA. Por la Hngría: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNEY. Por la India Británica: H. M. KISCH. Por la Italia: E. CHIARADIA, G. C. VINCI, E. DELMATI. Por la República de Liberia: CHAS. HALL ADAMS. Por el Luxemburgo: por M. Havelaar, VAN DER VEEN. Por el Montenegro: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIBRAL. Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por los Países Bajos: por M. Havelaar, VAN DER VEEN, VAN DER VEEN. Por las Colonias Holandesas: JHOS 'J. PERK. Por el Portugal y las Colonias Portuguesas: SANTHO-THYRSO. Por la Rumania: C. CHIRU, R. PREDA. Por la Rusia: SÉVASTIANOF. Por la Servia: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNEY. Por el Reino de Siam: ISAAO TOWNSEND SMITH. Por la Suecia: F. H. SCHLYTERN. Por la Suiza: J. B. PIODA, A. STÄGER, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: THIÉBAUT. Por la Turquía: MOUSTAPHA, A. FAHRI. Por los Estados Unidos de Venezuela: JOSÉ ANDRADE, ALEJANDRO YBARRA.

1897

Uruguay - Varios Países

UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

Protocolo final

Celebrado en Wáshington el 15 de Junio de 1897.

En el momento de proceder a firmar la Convención celebrada con fecha de hoy, relativa al canje de encomiendas postales, los Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:

I

Todo país donde el Correo no se encargue actualmente del transporte de encomiendas postales y que se adhiera a la presente Convención, tendrá la facultad de hacer ejecutar sus cláusulas por las empresas de ferrocarriles y de navegación. Podrá al mismo tiempo limitar ese servicio a las encomiendas procedentes de o con destino a localidades servidas por esas empresas.

La Administración postal de ese país deberá entenderse con las empresas de ferrocarriles y de navega-

ción para asegurar la completa ejecución por parte de estas últimas de todas las cláusulas de esta Convención y especialmente para organizar el servicio de canje en sus fronteras.

Además les servirá de intermediaria para todas sus relaciones con las Administraciones postales de los demás países contratantes y con la Oficina Internacional.

II

Como excepción a las disposiciones del párrafo 1 del artículo I, y respectivamente del párrafo 1 del artículo XIII de la Convención, Bulgaria, España, Grecia, Turquía y los Estados Unidos de Venezuela tienen la facultad de limitar provisoriamente a 3 kilogramos el peso de las encomiendas que admiten en su servicio y a 15 francos el máximo de la indemnización a pagar en caso de pérdida, violación o avería de una encomienda postal sin valor declarado y que no exceda de este peso.

III

Como excepción a las disposiciones del párrafo 1 del artículo III, y respectivamente de los párrafos 1 y 5 del artículo V de la Convención, la India Británica tiene la facultad:

- a) De elevar a 1 franco el derecho del tránsito territorial;
- b) De aplicar a las encomiendas postales procedentes de o con destino a sus oficinas una so-

bretasa que no exceda de 1 franco 25 céntimos por encomienda;

- c) De aplicar a las encomiendas postales originarias de la India Británica con destino a otros países corresponsales, una tarifa gradual correspondiente a diferentes categorías de peso, con la condición de que el término medio de las tasas correspondientes a la India Británica no exceda de la tasa normal de 1 franco 75 céntimos.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios abajo firmados han labrado el presente Protocolo Final, que tendrá la misma fuerza y valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en la Convención y lo han firmado en un solo ejemplar que quedará depositado en los Archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América y del que se remitirá una copia a cada una de las Partes.

Wáshington, el quince de Junio de mil ochocientos noventa y siete.

Por el Uruguay: PRUDENCIO DE MURGUIONDO. Por Alemania y los Protectorados Alemanes: FRITSCH, NEUMANN. Por la República Mayor de Centro América: N. BOLET PERAZA. Por la República Argentina: M. GARCÍA MÉROU. Por el Austria: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIBRAL. Por la Bélgica: LICHTERVELDE, STERPLIN, A. LAMBIN. Por la Bosnia-Herzegovina: DR.

KAMLER. Por el Brasil: Por la Bulgaria: IV. STOYANOVITCH. Por Chile: R. L. IRARRAZABAL. Por la República de Colombia: Por Dinamarca y las Colonias Danesas: C. SVENDSEN. Por el Egipto: Y. SABA. Por la España: ADOLFO ROZABAL, CARLOS FLOREZ. Por la Francia: ANSAULT. Por las Colonias Francesas: ED. DALMÁS. Por la Grecia: ED. HÖHN. Por Guatemala: J. NOVELLA. Por la Hungría: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY. Por la India Británica: H. M. KISCH. Por la Italia: E. CHIARADIA, G. C. VINCI, E. DELMATI. Por la República de Liberia: CHAS. HALL ADAMS. Por el Luxemburgo: por M. Havelaar, VAN DER VEEN. Por el Montenegro: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIBRAL. Por la Noruega: THB. HEYERDAHL. Por los Países Bajos: por M. Havelaar, VAN DER VEEN, VAN DER VEEN. Por las Colonias Holandesas: JHOS J. PERK. Por el Portugal y las Colonias Portuguesas: SANTO-THYRSO. Por la Rumania: SÉVASTIANOF. Por la Servia: PIERRE DE SZALAY, G. DE HENNYEY. Por el Reino de Siam: ISAAC TOWNSEND SMITH. Por la Suecia: F. H. SCHLYTERN. Por la Suiza: J. B. PIODA, A. STÄGER, C. DELESSERT. Por la Regencia de Túnez: THIÉBAUT. Por la Turquía: MOUSTAPHA, A. FAHRI. Por los Estados Unidos de Venezuela: JOSÉ ANDRADE, ALEJANDRO IBARRA.

1897

Uruguay-Varios Países

Arreglo sobre suscripciones a publicaciones

Celebrado en Wáshington el 15 de Junio de 1897

Ratificado por el Uruguay el 25 de Noviembre de 1899.

El Uruguay, Alemania y los Protectorados Alemanes, República Mayor de Centro América, República Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, República de Colombia, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Colonias Portuguesas, Rumania, Servia, Suecia, Suiza y Turquía.

Los abajo firmados, Plenipotenciarios de los países arriba enumerados, en cumplimiento del artículo XIX de la Convención Principal, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han celebrado el Arreglo siguiente:

ARTÍCULO I

El servicio postal de suscripciones a diarios y publicaciones periódicas entre los países contratantes cuyas Administraciones postales han acordado estable

cer recíprocamente ese servicio, será regido por las disposiciones del presente Arreglo.

ARTÍCULO II

Las oficinas de correos de cada país recibirán las suscripciones del público a los diarios y obras periódicas publicadas en los diversos países contratantes.

Este servicio se extenderá igualmente a las publicaciones de los demás países que algunas Administraciones estuvieran en condiciones de suministrar, siempre que se ajuste a las disposiciones del artículo XVI de la Convención Principal.

ARTÍCULO III

1. El precio de la suscripción deberá exigirse adelantado en el momento en que se solicite y por todo el período que comprenda.

Las modificaciones de precio no se aplicarán sino a las nuevas suscripciones y no tendrán efecto retroactivo.

2. No podrán solicitarse suscripciones sino por los periódicos fijados en las listas oficiales.

ARTÍCULO IV

Las Administraciones de Correos que se encarguen de suscripciones a título de intermediarias no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a las cargas y obligaciones que incumban a los editores.

No estarán tampoco obligadas a ningún reembolso

en caso de cese o interrupción de una publicación durante el curso de la suscripción.

ARTÍCULO V

El servicio internacional de suscripciones se efectuará por intermedio de las oficinas de canje que designe respectivamente cada Administración.

ARTÍCULO VI

1. Cada Administración fijará los precios que cobrará a las demás Administraciones por sus publicaciones nacionales, y si hubiere lugar a ello, por las de cualquier otro origen.

No obstante, esos precios no podrán ser en ningún caso superiores a los que se cobren a los suscriptores en el interior, excepto la edición de los derechos de tránsito correspondientes a las Administraciones intermediarias, en lo que concierne a las relaciones entre países no limítrofes (artículo IV de la Convención Principal).

2. Los derechos de tránsito se establecerán de antemano a prorrata, tomando por base el grado de periodicidad combinado con el peso medio de los periódicos.

ARTÍCULO VII

1. La Administración de Correos del país destinatario fijará el precio que haya de pagar el suscriptor, agregando al precio de costo establecido en virtud del artículo VI que precede, la tasa, derecho de comisión o entrega que juzgue conveniente adoptar; pero sin

que estos derechos puedan exceder de los que perciba por suscripciones para el interior. Agregaré también, si lo requiere el caso, el derecho de timbre fijado por la legislación de su país.

2. Cuando dos países que estén en relación no tengan el mismo sistema monetario, la Administración del país de destino cobrará el precio de costo en moneda de ese país. Si las Administraciones se hubiesen adherido al Arreglo concerniente a los giros, el equivalente de la moneda se fijará según el tipo que se aplique a los giros postales, a menos que conviniesen en otro tipo medio de conversión.

ARTÍCULO VIII

Las tasas o derechos establecidos en virtud de los artículos VI y VII que preceden, no darán lugar a ninguna cuenta entre las Administraciones correspondientes.

ARTÍCULO IX

Las Administraciones postales estarán obligadas a dar curso, sin gasto alguno para los suscriptores, a toda reclamación fundada concerniente a retardos o irregularidades.

ARTÍCULO X

1. Las cuentas de las suscripciones servidas y pedidas se formularán trimestralmente y se saldarán en moneda metálica del país acreedor, después de ser discutidas y aprobadas por las Administraciones interesadas.

2. Para este efecto, y salvo arreglo contrario entre las Administraciones interesadas, la diferencia se liquidará lo más pronto posible por medio de un giro postal.

Cuando dos países en relación no tengan el mismo sistema monetario, el crédito menor será convertido, salvo otro arreglo, en la moneda del país del crédito mayor, conforme al artículo VI del Arreglo concerniente a los giros.

3. Los giros postales emitidos con este fin estarán exentos de todo derecho y podrán sobrepasar el máximo establecido por este Arreglo.

4. Los saldos atrasados devengarán interés a razón de 5 % al año en provecho de la Administración acreedora.

ARTÍCULO XI

Las disposiciones del presente Arreglo no restringen el derecho de las Partes Contratantes para mantener y celebrar arreglos especiales con el fin de mejorar, facilitar o simplificar el servicio de suscripciones internacionales.

ARTÍCULO XII

Los países de la Unión que no hayan tomado participación en el presente Arreglo, podrán adherirse a él, siempre que así lo pidan y observando lo prescripto por el artículo XXIV de la Convención Principal.

ARTÍCULO XIII

Las Administraciones de los países contratantes decidirá la forma de las cuentas designadas por el artículo X precedente, fijarán las épocas en que han de ser formuladas y reglamentarán las demás medidas de orden y detalle necesarias para asegurar la ejecución del presente Arreglo.

ARTÍCULO XIV

Queda entendido que a falta de disposición expresa de este Arreglo, cada Administración queda facultada para aplicar las disposiciones que rijan la materia en su servicio interno.

ARTÍCULO XV

1. En el intervalo que transcurra entre las reuniones previstas por la Convención Principal, toda Administración de Correos de cada uno de los países contratantes tiene el derecho de dirigir a las demás Administraciones copartícipes, por intermedio de la Oficina Internacional, proposiciones concernientes al servicio de suscripción a periódicos.

Para ser tomada en consideración, cada proposición debe ser apoyada por dos Administraciones por lo menos, sin contar aquella de quien emane la proposición. Cuando la Oficina Internacional no reciba, conjuntamente con la proposición, el número necesario de declaraciones de apoyo, no se le dará curso.

2. Toda proposición será sometida al procedimien-

to determinado por el parágrafo 2 del artículo XXVI de la Convención Principal.

3. Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones, deberán reunir:

1. Unanimidad de votos, si se trata de agregar nuevas disposiciones o de modificar las disposiciones de éste y las de los artículos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI y XVII del presente Arreglo;
2. Dos terceras partes de votos si se trata de modificar el artículo XIII;
3. Simple mayoría absoluta si se trata de interpretar disposiciones del presente Arreglo, salvo el caso de litigio a que se refiere el artículo XXIII de la Convención Principal.

4. Las resoluciones válidas serán consagradas en los dos primeros casos por una declaración diplomática, y en el tercero por una notificación administrativa, en la forma indicada por el artículo XXVI de la Convención Principal.

5. Ninguna modificación o resolución adoptada tendrá fuerza ejecutiva hasta dos meses, cuando menos, después de su notificación.

ARTÍCULO XVI

1. El presente Arreglo entrará en vigor el 1.º de Enero de 1899.

2. Tendrá la misma duración que la Convención Principal, sin perjuicio del derecho que tiene cada país

para retirarse de él, mediante aviso dado por su Gobierno al de la Confederación Suiza con un año de anticipación.

3. Dado el caso, las suscripciones corrientes deberán servirse en las condiciones establecidas por este Arreglo, hasta que termine el plazo para el que han sido pedidas.

ARTÍCULO XVII

1. Quedan derogadas a contar desde el día en que el presente Arreglo se ponga en ejecución, todas las disposiciones sobre la materia convenidas anteriormente entre los Gobiernos o Administraciones de las Partes Contratantes, en cuanto no sean conciliables con las cláusulas del citado Arreglo, sin perjuicio de los derechos reservados por el artículo XI.

2. Este Arreglo se ratificará tan pronto como sea posible. Las actas de ratificación se canjearán en WASHINGTON.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los países arriba enumerados han firmado el presente Arreglo en WASHINGTON, el quince de Junio de mil ochocientos noventa y siete.

Por el Uruguay: PRUDENCIO DE MURGUIONDO. Por Alemania y los Protectorados Alemanes: FRITSCH, NEUMANN. Por la República Mayor de Centro América: N. BOLET PERAZA. Por el Austria: DR. NEUBAUER, HABBERGER, STIERAL. Por la Bélgi-

ca: LICHTERVELDE, STERPLIN, A. LAMBIN.
 Por el Brasil: Por la Bulgaria: IV.
 STOYANOVITCH. Por Chile: R. L. IRARRA-
 ZABAL. Por la República de Colombia:
 Por Dinamarca y las Colonias Da-
 nesas: C. SVENDSEN. Por la República
 Dominicana: Por el Egipto: Y.
 SABA. Por la Grecia: ED. HÖHN. Por la
 Hungría: PIERRE DE SZALAY, G. DE HEN-
 NYEY. Por la Italia: E. CHIARADIA, G. C.
 VINCI, E. DELMATI. Por el Luxemburgo:
 por Mr. Havelaar, VAN DER VEEN. Por la
 Noruega: THE. HEYERDAHL. Por los Paí-
 ses Bajos: por Mr. Havelaar, VAN DER
 VEEN, VAN DER VEEN. Por la Persia:
 Por el Portugal y las Colonias Portugue-
 sas: SANTO-THYRSO. Por la Rumania: C.
 CHIRU, R. PREDA. Por la Servia: PIERRE
 DE SZALAY, G. DE HENNEYEY. Por la Sue-
 cia: F. H. SCHLYTERN. Por la Suiza: J.
 B. PIODA, A. STÄGER, C. DELESSERT. Por
 la Turquía: MOUSTAPHA, A. FAHRI.

1897

Uruguay-Suiza

Protocolo relativo al incidente “Nin-Frey”

Celebrado en Montevideo, el 22 de Octubre de 1897

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay SS. EE. los Señores Doctor Mariano Ferreira, Ministro del Ramo, y Emilio Rodé, Ministro Residente de Suiza, con el objeto de arribar a una solución amigable en el incidente sobrevenido en el curso de las maniobras de Otoño del Ejército Suizo en las cercanías de Zurich en Septiembre de 1896, entre el Señor Doctor Alberto Nin, Ministro del Uruguay cerca de la Confederación Suiza y el Señor Consejero Federal Coronel Frey, Jefe del Departamento Militar Suizo;

Después de haber leído la correspondencia que ha mediado acerca de ese incidente y discutido todas las cuestiones surgidas de él, ambos Ministros, debidamente autorizados para ello, por sus respectivos Gobiernos, se han expresado como sigue:

El Señor Ministro de Suiza expuso: que no tenía inconveniente en declarar que habiendo sido autorizado el Señor Doctor Nin para seguir las maniobras

como Coronel uruguayo en traje particular, el Señor Consejero Federal Frey, sólo tuvo en cuenta en el momento en que se produjo el incidente, su carácter militar y su calidad de Oficial extranjero. Que había estado lejos de su ánimo la idea de desconocer los privilegios e inmunidades del Ministro Oriental, cuyo carácter diplomático no creyó ver comprometido en ese incidente, pues de haberse apercibido de ello, tal hecho no se habría producido seguramente.

Y que menos aún había tenido la intención de inferir en manera alguna, ofensa personal al Señor Doctor Nin, pues su objeto fué simplemente hacerle notar que debían guardársele las atenciones a que tenía derecho como representante del Consejo Federal Suizo y a las cuales consideraba que no podía renunciar.

El Señor Ministro de Relaciones Exteriores expresó, a su vez, que aceptaba complacido esa declaración franca y amistosa, agregando que si el Señor Doctor Nin no había accedido a la invitación del Señor Frey de que fuese a saludarlo, fué porque consideraba que esa invitación en sí misma, atentaba a su carácter y a sus inmunidades diplomáticas, de las que, aun cuando hubiese querido, no podía precindir. Que su actitud fué determinada por esa sola consideración y sin que tuviese en manera alguna, la idea de ofender al Señor Coronel Frey, con el cual había mantenido siempre las mejores relaciones. Que el Señor Ministro Nin en ninguna ocasión había olvidado las reglas de cortesía internacional durante su permanencia en Suiza. Que en fin, la reclamación del Señor Doctor Nin al Consejo Federal, reclamación que el Gobierno Uruguayo había

aprobado, tenía por único objeto dejar a salvo sus derechos y sus inmunidades diplomáticas, que juzgó habían sido desconocidos, así como se consideró ofendido en su dignidad personal.

Habiendo manifestado el Señor Doctor Nin desde largo tiempo, el deseo de que se pusiese término a su misión diplomática en Europa, el Gobierno había deferido a ese pedido, — con el objeto de utilizar sus servicios en otra parte, — mucho antes del incidente de 16 de Septiembre, — el Señor Ministro de Suiza reconoce que su pedido sobre el retiro de aquel diplomático no tiene razón de sér.

Dadas las explicaciones y aclaraciones que preceden y considerando que el incidente de Zurich sólo ha sido la consecuencia de una mala inteligencia, de una divergencia de apreciación del carácter respectivo de las personas interesadas, sin que hubiese habido por una ni otra parte en las notas cambiadas o en otras manifestaciones hechas, la menor intención ofensiva; los infrascritos Ministros, competentemente autorizados, declaran que el incidente queda de esta manera terminado y que las relaciones entre los dos países continuarán como hasta aquí, en el mismo pie de cordialidad.

En fe de lo cual, los Señores Ministros firman y sellan el presente protocolo por duplicado en Montevideo, a los veintidós días del mes de Octubre de mil ochocientos noventa y siete.

(L. S.) MARIANO FERREIRA.

(L. S.) E. RODÉ.

1898

Uruguay-Francia

Protocolo relativo al Tratado de Comercio y Navegación de 4 de Julio de 1892

Celebrado en Montevideo el 24 de Junio de 1898.

Canjeadas las ratificaciones en Montevideo el 12 de Julio de 1899.

Denunciado por el Uruguay el 18 de Diciembre de 1914.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Sus Excelencias el señor doctor don Joaquín de Salterain, Ministro del Ramo, y el señor Arturo Ponsignon, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Francesa, Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor, etc.

Reconociendo que no ha sido posible hasta ahora, por razones ajenas a la voluntad de ambos Gobiernos, celebrar un nuevo Convenio de Comercio y Navegación en sustitución del que ha caducado, y convencidos de la necesidad de que los intereses comerciales de las dos naciones continúen regidos por un pacto internacional que les asegure el tratamiento y

las ventajas de la más favorecida, mientras negociaciones ulteriores conduzcan a la celebración de un convenio sobre bases que mejor consulten las recíprocas conveniencias de ambos países.

Han declarado, debidamente autorizados al efecto, así como aparece de la exhibición de sus respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, que el Convenio de Comercio y de Navegación celebrado en Montevideo el 4 de Julio de 1892 entre ambos países, quedaba nuevamente en vigencia a contar del canje de las ratificaciones del presente Protocolo.

En fe de lo cual los mencionados Plenipotenciarios han firmado y sellado con sus sellos el presente Protocolo.

Hecho en Montevideo en doble ejemplar, a los veinticuatro día del mes de Junio del año mil ochocientos noventa y ocho.

(L. S.) JOAQUÍN DE SALTERAIN.

(L. S.) A. PONSIGNON.

1898

Uruguay-Italia

Protocolo relativo al Tratado de Comercio y Navegación de 19 de Septiembre de 1885

*Celebrado en Montevideo el 2 de Diciembre de 1898
No fué ratificado.*

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay SS. EE. el señor Jacobo A. Varela, Ministro de Fomento e interino de Relaciones Exteriores, y el señor Marqués Obizzo Malaspina di Carbonara, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Reino de Italia, manifestaron: que no habiendo sido posible hasta ahora, por razones ajenas a la voluntad de ambos Gobiernos, celebrar el Tratado de Comercio y Navegación entre los respectivos Países, en sustitución del que ha caducado, y reconociendo la necesidad de que los intereses comerciales de las dos naciones continúen regidos por un pacto intrnacional que les asegure el tratamiento y las ventajas de la más favorecida, venían en declarar, después de exhibidos los Plenos Poderes correspondientes que hallaron en buena y debida forma, que quedaba en vigencia por el término de tres

años a contar del canje de las ratificaciones del presente Protocolo, el Tratado de Comercio y Navegación entre ambos Países, negociado y firmado en 19 de Septiembre de 1885 y canjeado en 16 de Julio de 1886, esperando que durante ese plazo puedan realizarse las negociaciones necesarias para la celebración de un nuevo Convenio sobre bases que mejor consulten las recíprocas conveniencias de ambos Estados.

Declaran también que si este Protocolo no fuese denunciado un año antes de expirar su término, continuará en vigencia por un año más del plazo estipulado y así sucesivamente hasta que alguno de los dos Gobiernos haga la denuncia, siempre con doce meses de anticipación.

En fe de lo cual, los mencionados Plenipotenciarios han firmado y sellado con sus sellos el presente Protocolo.

Hecho en Montevideo en doble ejemplar, a los dos días del mes de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho.

(L. S.) JACOBO A. VARELA.

(L. S.) MALASPINA.

1898

Uruguay-Argentina

Protocolo relativo a la reclamación por el apresamiento de los vapores argentinos “Doli”, “Fram” y “Venus”.

Celebrado en Montevideo, el 23 de Diciembre de 1898

Reunidos en el despacho de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay SS. EE. el señor doctor Gonzalo Ramírez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República en la Argentina, autorizado debidamente para este acto, según la Plenipotencia que exhibe, y el señor Alejandro Paz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, con el objeto de tomar en consideración la reclamación del Gobierno Argentino respecto del apresamiento de los vapores “Doli”, “Fram” y “Venus”, y animados del deseo de arreglar el incidente ocurrido, en términos cordiales y amistosos, como conviene a las buenas relaciones que cultivan ambos Gobiernos, después de cambiar ideas sobre la mejor forma de solucionarlo, apartando toda causa de desinteligencia entre ellos, el señor Ministro doctor Ramírez manifestó que no habiendo jus-

tificado el comandante de la "Flores", la corrección de su proceder, razón por la cual ha sido ya castigado como corresponde, el Gobierno de la República Oriental lamenta y condena el incidente y declara que no pudo ser jamás su mente ofender la dignidad de la República Argentina, ni menoscabar sus derechos, ni invadir el límite de la jurisdicción que corresponde a su Gobierno en las aguas del Río de la Plata.

S. E. el Señor Ministro Argentino manifestó, a su vez, que aceptaba y agradecía esa franca y espontánea declaración del Gobierno Oriental, con lo cual quedó definitivamente arreglado el incidente.

En fe de lo cual firman y sellan el presente por duplicado, en Montevideo, a los veintitrés días del mes de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho.

GONZALO RAMÍREZ.

ALEJANDRO PAZ.

1899

Uruguay—Argentina

Convento telegráfico

Celebrado en Buenos Aires el 25 de Enero de 1899.

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de Enero de mil ochocientos noventa y nueve, el Señor Director General de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay Doctor Saturnino A. Camp, por una parte, y el Director General de Correos y Telégrafos de la República Argentina Doctor Miguel García Fernández, por la otra, con el propósito de establecer el servicio telegráfico de combinación entre las Repúblicas Argentina y Oriental, por intermedio de las líneas de los Telégrafos “de la Nación Argentina” y “Nacional Uruguayo”, convienen en la celebración del siguiente contrato *ad referéndum*:

ARTÍCULO I

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay instalará una ofi-

cina telegráfica en Martín Chico, destinada a empalmar exclusivamente con las líneas del Telégrafo de la Nación Argentina, las del Telégrafo Nacional Uruguayo.

ARTÍCULO II

Las Partes Contratantes podrán, de común acuerdo, unir telegráficamente también por otros puntos de la costa del Río Uruguay las líneas de sus respectivos países, pero no podrán, en ningún caso, empalmarse con ninguna otra establecida o a establecerse en los territorios de las dos Repúblicas.

ARTÍCULO III

La Administración Argentina tendrá la facultad de aplicar a los telegramas dirigidos a las oficinas del Telégrafo Nacional Uruguayo la tarifa que más convenga a sus intereses; y la Administración Uruguaya, a su vez, gozará también de la misma facultad para proceder de igual modo con los despachos destinados a las oficinas telegráficas de la República Argentina.

ARTÍCULO IV

Para los telegramas ordinarios redactados en español o en cualquiera de los idiomas admitidos en la transmisión por la Convención Telegráfica de San Petersburgo, Reglamento de Budapest, computándose la dirección, el texto y la firma, las Administraciones que se convienen abonarán:

El Telégrafo de la Nación Argentina al Telégrafo Nacional Uruguayo:

a) Diez centésimos (0.10) oro por las primeras diez palabras y cinco milésimos (0.005) de la misma moneda por cada palabra subsiguiente, de los despachos dirigidos a las oficinas del Telégrafo Nacional Uruguayo desde las oficinas del Telégrafo de la Nación Argentina.

b) Ocho centésimos (0.08) oro por las primeras diez palabras y cinco milésimos (0.005) de la misma moneda por cada palabra subsiguiente, de los despachos dirigidos a las oficinas del Telégrafo Nacional Uruguayo desde las oficinas de los Telégrafos adheridos a la Convención Telegráfica Argentina.

c) Diez centésimos (0.10) oro por las primeras diez palabras y cinco milésimos (0.005) de la misma moneda por cada palabra subsiguiente, además de las tarifas que correspondan a otras líneas, por los telegramas dirigidos a las oficinas telegráficas de la República Oriental que no pertenecen al Telégrafo Nacional Uruguayo, desde las oficinas del Telégrafo de la Nación Argentina.

d) Ocho centésimos (0.08) oro por las primeras diez palabras y cinco milésimos (0.005) de la misma moneda por cada palabra subsiguiente, además de las tarifas que correspondan a otras líneas, por los telegramas dirigidos a las oficinas telegráficas de la República Oriental que no pertenecen al Telégrafo Nacional Uruguayo, desde las oficinas de los telégrafos adheridos a la Convención Telegráfica Argentina.

El Telégrafo Nacional Uruguayo al de la Nación Argentina:

e) Diez centésimos (0.10) oro por las primeras diez palabras y cinco milésimos (0.005) de la misma moneda por cada palabra subsiguiente, de los despachos dirigidos a las oficinas del Telégrafo de la Nación Argentina desde la República Oriental del Uruguay.

f) Diez centésimos (0.10) oro por las primeras diez palabras y cinco milésimos (0.005) de la misma moneda por cada palabra subsiguiente, además de las tarifas que correspondan a otras líneas, de los despachos dirigidos desde la República Oriental a localidades de la República Argentina no servidas por las líneas del Telégrafo de la Nación, ni por ninguna de las adheridas a la Convención Telegráfica Argentina.

g) Quince centésimos (0.15) oro por las primeras diez palabras y un centésimo (0.01) de la misma moneda por cada palabra subsiguiente, de los despachos dirigidos desde la República Oriental a las oficinas de la República Argentina que, no perteneciendo al Telégrafo de la Nación, forman parte de la Convención Telegráfica Argentina, y los destinados a las oficinas de los telégrafos nacionales de Bolivia y Paraguay, comprendiendo esta tarifa la parte que el Telégrafo de la Nación Argentina abonará a las líneas que intervengan en la transmisión de esos telegramas.

ARTÍCULO V

Por los telegramas internacionales dirigidos al exterior, el Telégrafo de la Nación Argentina al Nacional Uruguayo abonará:

a) Cuatro centésimos (0.04) oro por palabra, ade-

más de las tarifas correspondientes a otras líneas, por los telegramas procedentes del Telégrafo de la Nación Argentina.

b) Dos centésimos (0.02) oro por palabra, además de las tarifas correspondientes a otras líneas, por los telegramas de otras procedencias que las establecidas en el inciso precedente.

Y el Telégrafo Nacional Uruguayo al de la Nación Argentina:

c) Cuatro centésimos (0.04) oro por palabra, por los despachos procedentes del exterior dirigidos a las oficinas del Telégrafo de la Nación Argentina.

d) Seis centésimos (0.06) oro por palabra por los despachos procedentes del exterior dirigidos a otras oficinas de la República Argentina y a las del Paraguay y Bolivia.

e) La tarifa que se aplica a las procedencias del Telégrafo de la Nación Argentina por las empresas respectivas para los telegramas dirigidos al exterior (a excepción de Bolivia y Paraguay) sin otro cargo.

ARTÍCULO VI

Fíjanse en oro argentino las tarifas a que se refieren los artículos IV y V, estableciéndose este padrón monetario por ser el reconocido en las equivalencias que indica el Reglamento de Budapest de la Convención Telegráfica Internacional.

ARTÍCULO VII

La tasa correspondiente a otras líneas a que se refieren los incisos b) y d) del artículo IV, y a) y b) del

artículo V será establecida para el público por la empresa que dé curso al telegrama o la que se haya convenido con cualquiera de ambas Administraciones.

ARTÍCULO VIII

La tarifa para los telegramas especiales, como ser: urgentes, clave, prensa, etc., se establecerá de común acuerdo entre ambas Administraciones y proporcionalmente a la fijada en el artículo IV.

ARTÍCULO IX

A los efectos de la aplicación de la tarifa establecida en el artículo IV, fijase en diez palabras el mínimo de la extensión de un despacho y en cien el máximo.

ARTÍCULO X

Los despachos oficiales de ambos Gobiernos se transmitirán exentos de pago y con preferencia a todos los demás.

A los efectos de este artículo se considerarán oficiales los despachos de SS. EE. los Señores Presidentes de ambas Repúblicas y sus Ministros, los de los Representantes Diplomáticos de ambos países, las contestaciones a éstos y los que por asuntos relacionados con su cometido expidan las dos Direcciones Generales de Correos y Telégrafos y los Señores Jefes Políticos y de Policía de Montevideo, Buenos Aires y del litoral de ambos países.

ARTÍCULO XI

Las cuentas se establecerán con arreglo a las transmisiones que realmente se hubieran efectuado y se formularán del siguiente modo:

a) Cada uno de los países, la República Argentina o la Oriental, confeccionará planillas mensuales con arreglo a modelos convenidos de telegramas transmitidos y recibidos, estableciendo el precio que corresponda a cada Administración por su intervención en los telegramas y por el pago que hubiera efectuado a otras líneas, y las remitirá al otro para su aprobación, acompañándolas de la cuenta respectiva, dentro de los primeros ocho días siguientes al último del mes a que correspondan.

b) Si las cuentas no fueran observadas a la expiración del mes siguiente al que corresponden, se considerarán como aprobadas y aceptado como exacto el saldo que resulte a favor de la Administración acreedora.

ARTÍCULO XII

El pago de las cantidades que respectivamente se adeuden ambas Administraciones se hará en la forma siguiente:

a) Después de aprobadas las cuentas a que se refiere el artículo XI, o de haber expirado el plazo que se establece, la Administración acreedora girará a ocho días vista contra la deudora por el importe que haya arrojado el saldo de su cuenta.

b) La operación a que hace referencia el inciso precedente, se realizará por intermedio de cualquiera de los bancos establecidos en el país de la Administración giradora, y los gastos que se ocasionen serán de su exclusivo cargo.

ARTÍCULO XIII

El orden de transmisión y demás relaciones con el servicio de ambos Telégrafos, no previstos en este Convenio o establecidos de común acuerdo, se regirán por la Convención Internacional de San Petersburgo, Reglamento de Budapest.

ARTÍCULO XIV

El Telégrafo de la Nación Argentina se compromete a transmitir por intermedio del Telégrafo Nacional Uruguay todos los telegramas que se le presenten en sus oficinas dirigidos a la República del Uruguay que no tengan indicación de vía puesta por los remitentes de los respectivos telegramas, y viceversa, la República Oriental del Uruguay contrae el mismo compromiso para con la República Argentina, salvo en los casos de interrupción, en que se utilizarán las vías más convenientes.

ARTÍCULO XV

Ni la República Argentina ni la Oriental del Uruguay podrán aplicar tarifa inferior a la establecida en este Convenio a los telegramas de las empresas te-

legráficas particulares de ambos países dirigidos a las oficinas de los Telégrafos de su respectiva propiedad.

ARTÍCULO XVI

Las dudas que pudieran suscitarse respecto a la aplicación de este Convenio en las relaciones telegráficas que se establecen serán aclaradas de común acuerdo entre ambas Administraciones.

ARTÍCULO XVII

El horario que regirá en las oficinas de ambos países para los telegramas que dan mérito a este Convenio, será el siguiente: de 7 a. m. a 10 p. m. para las oficinas de Buenos Aires y Montevideo, y el que en sus respectivos reglamentos se fije, para las demás. De común acuerdo entre ambas Administraciones podrán cambiarse las horas que se indican.

ARTÍCULO XVIII

Los gastos de conservación y reparación de la línea en el territorio oriental serán de cuenta exclusiva de la Administración Uruguaya, y los del cable desde Martín Chico serán costeados por la Administración Argentina.

ARTÍCULO XIX

La República Oriental del Uruguay iniciará las gestiones necesarias para la celebración de un convenio entre las empresas telegráficas establecidas en el

territorio oriental y procurará conseguir para el Telégrafo de la Nación Argentina las mismas ventajas que obtenga para el Telégrafo Nacional Uruguayo.

ARTÍCULO XX

El presente Convenio, una vez aprobado por los respectivos Gobiernos, durará tres años, contados desde el día en que se efectúe el empalme a que se refiere el artículo I.

En fe de lo cual, los mencionados Directores Generales de Correos y Telégrafos firman el presente, en dos ejemplares de un mismo tenor, a efecto de elevarlos a la consideración de sus respectivos Gobiernos.

SATURNINO A. CAMP.

MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ.

1899

Uruguay—Brasil

Convento telegráfico

*Celebrado en Montevideo el 8 de Abril de 1899.
Ratificado.*

En la ciudad de Montevideo, a los ocho días del mes de Abril de mil ochocientos noventa y nueve, reunidos el Señor Director General Interino de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay Don Eduardo V. Fernández, por una parte, y por otra parte el Señor Jefe de la Sección técnica de los Telégrafos del Brasil Ingeniero Don Leopoldo Ignacio Weis, debidamente autorizado para este fin por nota de la Dirección General de Telégrafos de los Estados Unidos del Brasil, de fecha 5 de Diciembre de 1898, inspirados en el propósito de establecer un convenio de tráfico telegráfico por medio de sus respectivas líneas, acordaron que sobre las siguientes bases podía realizarse un convenio entre las dos Administraciones, una vez aprobadas por la Administración Brasileña, para ser extendido el competente contrato *ad referendum* de los respectivos Gobiernos.

ARTÍCULO I

Las Administraciones telegráficas Uruguay y Brasileña ligarán sus líneas fronterizas a fin de establecer un servicio de tráfico mutuo entre los dos países.

ARTÍCULO II

El empalme a que se refiere el artículo precedente, será hecho entre los conductores que terminan en las estaciones de Livramento y Quarahy de un lado y entre los que terminan en Rivera y San Eugenio del otro lado, encargándose la Administración Uruguaya de la respectiva unión de los extremos Livramento-Rivera y Quarahy-San Eugenio, por medio de un conductor de hilo de hierro galvanizado de cinco milímetros, debiendo contribuir cada Administración con un 50 % (cincuenta por ciento) de los gastos a hacerse con ese servicio.

ARTÍCULO III

Mientras subsista el compromiso que la Administración Brasileña tiene con la línea de tráfico mutuo que empalma en Yaguarón, será la línea Livramento-Rivera, vía de elección para el cambio de telegramas que trajeran la indicación de esta vía, sirviendo la vía Quarahy-San Eugenio como vía auxiliar en casos de defecto e interrupción de la vía preferida y también para cuando, debido a la posición de las oficinas de origen y destino, hubiera conveniencia en utilizarla para la rápida transmisión de los telegramas.

ARTÍCULO IV

Si por cualquier motivo cesara el compromiso a que se refiere el artículo III, será la vía Livramento-Rivera la normal, tanto para el cambio del servicio continental en tránsito, en las líneas terrestres brasileñas y uruguayas y en las líneas en tráfico mutuo con una u otra de esas líneas.

ARTÍCULO V

Verificándose la hipótesis del artículo IV, cada Administración designará un hilo especial de resistencia eléctrica media, no excedente de 7.5 ohms. por kilómetro, que se destinará exclusivamente al canje rápido del tráfico continental y de tránsito, utilizándose en estado normal de funcionamiento del conductor, una sola traslación que será instalada en Livramento.

Unico. En el tráfico de la línea internacional, serán adoptados, por ambas Administraciones, receptores uniformes que hayan dado buenas pruebas de funcionamiento en líneas largas.

ARTÍCULO VI

Cuando de la experiencia después de un año de funcionamiento de la línea internacional vía Porto Alegre-Livramento-Montevideo, resultara morosidad en el tráfico, debido a las condiciones del trazado, a consecuencia de su larga extensión, comparada con la directa vía Yaguarón, la Administración Uruguaya providenciará para que Montevideo sea ligado a Ar-

tigas y Yaguarón, por una línea de dos conductores de las condiciones eléctricas del artículo V.

ARTÍCULO VII

Verificándose la hipótesis de los artículos IV y V conjuntamente con la del artículo VI, la Administración Brasileña se compromete a no ligar sus líneas con ninguna otra establecida o a establecerse en la República Oriental, de modo que todo el servicio de las líneas terrestres brasileñas destinado a la República Oriental del Uruguay o en tránsito por ella, y viceversa, sea hecho obligatoriamente por las líneas uruguayas, vía Yaguarón-Artigas o vía Livramento-Rivera, respetándose, no obstante, las indicaciones de las vías cuando sean hechas por el remitente, Uruguayana Paso de los Libres-Western y Gálveston, actualmente existentes.

ARTÍCULO VIII

Ambas Administraciones se comprometen a destinar, además, un conductor para el servicio internacional, siempre que el tráfico de un hilo excediese a 3.000 (tres mil) palabras diarias de servicio.

ARTÍCULO IX

La tasa por palabra de un despacho particular a cobrar por cuenta del Telégrafo Nacional Uruguayo,

mientras la vía Livramento-Rivera sea vía de elección, será:

- a) Cuarenta centésimos de franco oro, por palabra, a los telegramas dirigidos a sus oficinas.
- b) La misma tasa y además la que corresponde a compañías particulares, cuando el telegrama sea dirigido a destinos del Interior, no servidos por las líneas nacionales uruguayas.
- c) Ochenta centésimos de franco oro, por palabra para los telegramas dirigidos a la República Argentina, Paraguay y Bolivia.
- d) Cuarenta centésimos de franco oro, por palabra, y además la tarifa perteneciente a otras líneas, desde Montevideo, por los telegramas dirigidos a Chile, Perú y demás países sud-americanos, y otros.

ARTÍCULO X

En el caso de verificarse la hipótesis prevista en el artículo IV, la tarifa quedará modificada en la siguiente forma:

- a) Veinticinco centésimos de franco oro, por palabra a los telegramas dirigidos a sus oficinas.
- b) La misma tasa y además la que corresponda a compañías particulares cuando el telegrama sea dirigido a destinos del interior, no servidos por las líneas nacionales uruguayas.
- c) Cuarenta centésimos de franco oro, por pala-

bra, para los telegramas dirigidos a la República Argentina, Paraguay y Bolivia.

- d) Veinticinco centésimos de franco oro, por palabra y además la tarifa perteneciente a otras líneas, desde Montevideo, por los telegramas dirigidos a Chile, Perú y demás países sudamericanos y otros.

ARTÍCULO XI

La Administración Brasileña, a su vez, percibirá las tasas terminales y de tránsito que constan en el cuadro B) inserto en el Reglamento Internacional, revisión de Budapest, a saber:

- a) Cincuenta centésimos de franco oro por palabra, para los telegramas dirigidos a la Zona Sur.
- b) Un franco y cincuenta centésimos de franco oro por palabra, para los telegramas dirigidos a la Zona Norte.
- c) Un franco y cincuenta centésimos de franco oro por palabra, para los telegramas dirigidos a la Zona Norte.
- d) Un franco y cincuenta centésimos oro por palabra, además de la tasa perteneciente a "The Amazonas Telegraph Company", para los telegramas dirigidos a estaciones de esta Compañía.
- e) Para los telegramas vías cables transatlánticos que aterran en Recife y para la vía Pinheiro, para América Central y del Norte, se

cobrarán las tasas en francos oro, que constan en los cuadros publicados en el “Boletín Telegráfico de la Administración Brasileña”, N.º 21, del 15 de Noviembre de 1898, deduciéndose de las mismas, la tasa perteneciente a la Administración Uruguaya, acreditándose la diferencia a aquella Administración.

ARTÍCULO XII

La tasa por palabra para los telegramas con indicaciones especiales y eventuales, será fijada de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Internacional (revisión de Budapest o revisión que siguiera a ésta), tomándose por base las tasas establecidas en los artículos IX, X y XI.

ARTÍCULO XIII

Los despachos oficiales de ambos Gobiernos, serán exentos de pago de la tasa y preferirán en su transmisión a los derechos ordinarios.

Unico. — Considéranse oficiales los despachos de SS. EE. los Presidentes de ambas Repúblicas y sus Ministros; los de los Representantes Diplomáticos y Consulares de ambos países; los que por asunto de servicio mutuo se dirijan los Directores de Correos y Telégrafos de ambos países, o los Jefes de Sección debidamente autorizados; los de los Jefes de Policía de Montevideo y Río de Janeiro, y los de los Consejos de Higiene de los dos países.

ARTÍCULO XIV

Los despachos de prensa gozarán de 50 % (cincuenta por ciento), de rebaja sobre la tasa uruguaya que estuviera en vigencia. Para los mismos despachos, cobrará la Administración Brasileña, la tasa de veinticinco centésimos de franco oro por palabra, para cualquier punto del Brasil servido por líneas terrestres o en tránsito por las mismas.

- 1.° Para que sea aplicada esta tarifa reducida, los despachos deberán ser dirigidos a un periódico por el respectivo corresponsal, en lenguaje claro, en español, portugués o francés, y contener solamente informaciones destinadas a la publicidad, con exclusión de cotizaciones de mercado o de Bolsa.
- 2.° La tasa de los telegramas de prensa, podrá ser pagada en destino si el destinatario así lo requiriese, acreditando en este caso la Administración de destino, la tasa perteneciente a otras Administraciones a aquélla con la cual tuviese cuenta corriente.

ARTÍCULO XV

El arreglo de cuentas entre ambas Administraciones, será hecho trimestralmente, presentando la Administración acreedora a la deudora, sus cuentas. En esas cuentas constará el resumen del movimiento habido y el saldo a su favor, el cual será pagado en el trimestre de la presentación.

Unico.—Mientras la vía Livramento-Rivera sea vía de elección, corresponde el registro de los despachos cambiados a la Oficina de Livramento, la cual diariamente hará confrontación del mismo con la estación de Montevideo, no solamente respecto al número de despachos cambiados, sino también al número de palabras y a las cantidades a acreditar o debitar a cada Administración; en el caso que la vía Livramento fuera declarada internacional normal, será hecho el registro de los telegramas con Porto Alegre, del mismo modo como se establece en Livramento.

ARTÍCULO XVI

Para el cómputo de palabras, para los signos alfabéticos e indicaciones de servicio, modo de proceder, así como para todas las relaciones de servicio, no expresamente previstas en el presente Convenio, ambas Administraciones adoptan las reglas y prácticas prescriptas por la Convención Internacional de San Petersburgo y por el Reglamento revisado en Budapest.

ARTÍCULO XVII

Para el servicio telegráfico a las estaciones limítrofes de una Administración, la de destino cobrará un franco por telegrama, sea cual fuere el número de palabras del mismo.

En caso de interrupción de las líneas entre Livramento y Quarahy y entre Rivera y San Eugenio, podrá el telegrama interior de una Administración, transitar por las líneas de la otra, hasta la estación

fronteriza desde la cual, la estación de destino sea accesible, pagándose a la Administración cuyas líneas fueran utilizadas en la transmisión, un franco oro por telegrama, cualquiera que sea el número de palabras que contenga.

ARTÍCULO XVIII

Las dudas que pudieran suscitarse respecto a la aplicación de este Convenio, serán resueltas de común acuerdo entre ambas Administraciones, y, en caso de disidencia, serán sometidas al arbitraje de una tercera Administración o al *Bureau* Internacional de Berna.

ARTÍCULO XIX

Ambas Administraciones se obligan a tener abiertas sus estaciones que participaren en la transmisión del tráfico internacional:

De 8 a. m. a 9 p. m. (hora de Montevideo) o 8 y 52 a. m. a 9 y 52 p. m. (hora de Río de Janeiro), desde el 1.º de Abril a 30 de Septiembre.

De 7 a. m. a 10 p. m. (hora de Montevideo), o 7 y 52 a. m. a 10 y 52 p. m. (hora de Río de Janeiro), desde el 1.º de Octubre al 31 de Marzo, pudiendo este horario sufrir modificaciones si así conviniera al servicio, mediante previo acuerdo.

ARTÍCULO XX

El presente Convenio, una vez aprobado por los respectivos Gobiernos, durará tres años, contados

desde el día en que se inaugure el tráfico mutuo entre Livramento y Rivera, asistiendo a cada Administración el derecho de proponer las modificaciones que juzgue necesario sean adoptadas, dentro de los tres meses que anteceden al plazo arriba estipulado.

En el caso que de ninguna Administración parta la propuesta de modificación o anulación del presente Convenio dentro del plazo preindicado, queda entendido que seguirá rigiendo por un nuevo período de tres años.

En fe de lo cual los mencionados representantes firman las anteriores bases proyectadas, en cuatro ejemplares del mismo tenor, dos escritos en idioma español y dos en portugués, a fin de elevarlos a la consideración de quienes corresponda.

E. V. FERNÁNDEZ.

LEOPOLDO J. WEIS.

1899

Uruguay—Alemania

Convento de Comercio

Celebrado en Berlín el 5 de Junio de 1899.

Canjeadas las ratificaciones en Berlín el 23 de Enero de 1900.

Denunciado por el Uruguay, el 17 de Diciembre de 1914.

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay por una parte, y Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio Alemán por la otra, igualmente animados del deseo de establecer las relaciones convencionales de Comercio y Navegación entre los dos países, han resuelto concluir un Convenio para este objeto, nombrando por sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, al Ministro Residente del Uruguay en Alemania, doctor don Luis Garabelli; y

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, a su Secretario del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministro de Estado, Bernhard von Bülow;

Quienes, después de haberse comunicado recíprocamente los respectivos plenos poderes en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

El Tratado de Comercio y Navegación celebrado el 20 de Junio de 1892 entre la República Oriental del Uruguay y el Imperio Alemán, que caducó el 31 de Julio de 1897, entra nuevamente en vigencia, excepto las disposiciones del artículo VI (sexto).

ARTÍCULO II

El presente Convenio será ratificado en el término más breve posible y las ratificaciones serán canjeadas en Berlín.

El presente Convenio entrará en vigencia al trigésimo día del canje de las ratificaciones y quedará vigente hasta transcurrido un año después del día en que una de las Partes Contratantes habrá notificado a la otra oficialmente su intención de hacer cesar los efectos de este Convenio.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado y sellado el presente Convenio en doble original, redactado en español y alemán.

Hecho en Berlín, a los cinco días del mes de Junio del año mil ochocientos noventa y nueve.

(L. S.) LUIS GARABELLI.

(L. S.) B. VON BÜLOW.

1899

Uruguay - Argentina

Tratado de Arbitraje General

Celebrado en Buenos Aires el 8 de Junio de 1899.

*Canjeadas las ratificaciones en Buenos Aires el 18 de
Enero de 1902.*

Los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, animados del común deseo de solucionar por medios amistosos cualquier cuestión que pudiera suscitarse entre ambos países, han resuelto celebrar un Tratado General de Arbitraje, a cuyo efecto nombran como sus Plenipotenciarios, a saber:

El Excelentísimo Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay a su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Argentina Doctor Don Gonzalo Ramírez; y

El Excelentísimo Señor Presidente de la República Argentina, a su Ministro Secretario en el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, Doctor Don Almancio Alcorta;

Quienes, una vez comunicados sus Plenos Poderes

que fueron hallados en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieren entre ellas, en cuanto no afecten a los preceptos de la Constitución de uno u otro país, y siempre que no puedan ser solucionadas mediante negociaciones directas.

ARTÍCULO II

No pueden renovarse, en virtud de este Tratado, las cuestiones que hayan sido objeto de arreglos definitivos entre las partes. En tales casos el arbitraje se limitará exclusivamente a las cuestiones que se susciten sobre validez, interpretación y cumplimiento de dichos arreglos.

ARTÍCULO III

En cada caso ocurrente se constituirá el Tribunal Arbitral que deba resolver la controversia suscitada.

Si no hubiera conformidad en la constitución del Tribunal, éste se compondrá de tres jueces. Cada Estado nombrará un árbitro y estos designarán el tercero. Si no pudiesen ponerse de acuerdo sobre esa designación, la hará el Jefe de un tercer Estado que

indicarán los árbitros nombrados por las partes. No poniéndose de acuerdo para este último nombramiento, se solicitará su designación del Presidente de la República Francesa. El árbitro así elegido será de derecho Presidente del Tribunal.

No podrá nombrarse árbitro tercero a la persona que en ese carácter haya sentenciado ya en un juicio arbitral, con arreglo a este Tratado.

ARTÍCULO IV

Ninguno de los árbitros podrá ser ciudadano de los Estados Contratantes ni domiciliado en su territorio. Tampoco podrá tener interés en las cuestiones que sean objeto del arbitraje.

ARTÍCULO V

En caso de no aceptación, renuncia o impedimento sobreviniente de uno o más de los árbitros, se proveerá a su sustitución por el mismo procedimiento adoptado para su nombramiento.

ARTÍCULO VI

Los puntos comprometidos se fijarán por los Estados Contratantes que podrán también determinar la amplitud de los poderes de los árbitros, y cualquier otra circunstancia relativa al procedimiento.

ARTÍCULO VII

En defecto de estipulaciones especiales entre las partes, corresponde al Tribunal designar la época y

el lugar de sus sesiones fuera del territorio de los Estados Contratantes, elegir el idioma que deberá emplearse, determinar los métodos de sustanciación, las formalidades y términos que se prescribirán a las partes, los procedimientos a seguirse y en general tomar todas las medidas que sean necesarias para su propio funcionamiento y resolver todas las dificultades procesales que pudiesen surgir en el curso del debate.

Los componentes se obligan a poner a disposición de los árbitros todos los medios de información que de ellos dependa.

ARTÍCULO VIII

Cada una de las partes podrá constituir uno o más mandatarios que la representen ante el Tribunal Arbitral.

ARTÍCULO IX

El Tribunal es competente para decidir sobre la regularidad de su propia constitución, validez del compromiso y su interpretación.

Lo es igualmente para resolver las controversias que surjan entre los comprometidos sobre si determinadas cuestiones han sido o no puntos sometidos a la jurisdicción arbitral, en la escritura de compromiso.

ARTÍCULO X

El Tribunal deberá decidir de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, a menos que el com-

premio imponga la aplicación de reglas especiales o autorice a los árbitros a decidir como amigables componedores.

ARTÍCULO XI

No podrá formarse Tribunal sin la concurrencia de los tres árbitros. En el caso que la minoría debidamente citada no quisiese asistir a las deliberaciones o a otros actos del proceso, se formará Tribunal con solo la mayoría de los árbitros haciéndose constar la inasistencia voluntaria e injustificada de la minoría.

Se tendrá como sentencia lo que resuelva la mayoría de los árbitros, pero si el árbitro tercero no aceptase el parecer de ninguno de los árbitros nombrados por las partes, su dictamen será cosa juzgada.

ARTÍCULO XII

La sentencia deberá decidir definitivamente cada punto en litigio y con expresión de sus fundamentos.

Será redactada en doble original y firmada por todos los árbitros. Si alguno de ellos se negase a suscribirla, los otros deberán hacer mención en acta especial de esta circunstancia y la sentencia producirá efecto siempre que esté firmada por la mayoría de los árbitros. El árbitro en disidencia se limitará a hacer constar su discordia en el acto de firmar la sentencia y sin expresión de sus fundamentos.

ARTÍCULO XIII

La sentencia deberá ser notificada a cada una de las partes por medio de su representante ante el Tribunal.

ARTÍCULO XIV

La sentencia legalmente pronunciada decide dentro de los límites de su alcance, la contienda entre las partes.

ARTÍCULO XV

El Tribunal establecerá en la sentencia el plazo dentro del cual debe ser ejecutada, siendo competente para decidir las cuestiones que pueden surgir con motivo de la ejecución de la misma.

ARTÍCULO XVI

La sentencia es inapelable y su cumplimiento está confiado al honor de las naciones signatarias de este pacto.

Sin embargo, se admitirá el recurso de revisión ante el mismo Tribunal que la pronunció, siempre que se deduzca antes de vencido el plazo señalado para su ejecución en los siguientes casos:

Primero: Si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso o adulterado.

Segundo: Si la sentencia ha sido en todo o en parte la consecuencia de un error de hecho que resulte de las actuaciones o documentos de la causa.

ARTÍCULO XVII

Cada una de las partes pagará los gastos propios y la mitad de los gastos generales del Tribunal Arbitral.

ARTÍCULO XVIII

El presente Tratado estará en vigor durante diez años a contar desde el canje de las ratificaciones. Si no fuese denunciado seis meses antes de su vencimiento, se tendrá por renovado por otro período de diez años y así sucesivamente.

El presente Tratado será ratificado y canjeadas sus ratificaciones en Buenos Aires dentro de seis meses de su fecha.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina firmaron y sellaron con sus respectivos sellos y por duplicado el presente Tratado en la Ciudad de Buenos Aires a los ocho días del mes de Junio del año de mil ochocientos noventa y nueve.

(L. S.) GONZALO RAMÍREZ.

(L. S.) AMANCIO ALCORTA.

1899

Uruguay—Gran Bretaña

Convenio de Comercio y Navegación

Celebrado en Montevideo el 15 de Julio de 1899.

Cánjeadas las ratificaciones en Montevideo el 9 de Junio de 1900.

Denunciado por el Uruguay el 17 de Setiembre de 1914.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay SS. EE. el señor doctor Manuel Herrero y Espinosa, Ministro del ramo y el señor Walter Baring, Ministro Residente de Su Majestad Británica, manifestaron: que no habiendo sido posible hasta ahora, por razones ajenas a la voluntad de ambos Gobiernos, celebrar el Tratado de Comercio y Navegación entre los respectivos países, en sustitución del que ha caducado, y reconociendo la necesidad de que los intereses comerciales de las dos naciones continúen regidos por un pacto internacional que les asegure el tratamiento y las ventajas de la más favorecida, venían en declarar, debidamente autorizados al efecto, que quedaba nuevamente en vigencia el Tratado de Amistad, Comercio

y Navegación celebrado en 13 de Noviembre de 1885 y canjeadas sus ratificaciones en 22 de Mayo de 1886.

Manifestaron, igualmente, que las colonias y posesiones británicas podrían adherir a este Convenio dentro del plazo de seis meses, a contar del canje de las ratificaciones, y retirarse en cualquier momento, dando aviso también con seis meses de anticipación.

En ambos casos el aviso será dado por el Representante diplomático de Su Majestad Británica en Montevideo al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay.

Quedó igualmente convenido que las estipulaciones consignadas en el tratado que va a ponerse nuevamente en vigencia, no comprenden los casos en que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay acordase favores especiales, exenciones y privilegios a los ciudadanos o productos de los Estados Unidos del Brasil, de la República Argentina y del Paraguay en asuntos de Comercio.

Esos favores no pueden ser reclamados por parte de la Gran Bretaña con motivo del derecho de la nación más favorecida, mientras no sean extendidos a otros terceros Estados.

Queda, no obstante, entendido que dichos favores especiales, exenciones y privilegios no podrán aplicarse a los productos que sean similares a los productos ingleses, ni extenderse a la navegación.

El presente Convenio será ratificado, y las ratificaciones se canjearán en Montevideo tan pronto como fuere posible.

Entrará en vigor desde el día del canje de las rati-

ficaciones y quedará en ejecución hasta el término de un año a contar del día en que una de las Altas Partes Contratantes dé aviso a la otra de su intención de ponerle término.

Los Plenipotenciarios que suscriben esperan que durante el plazo que se estipula en este Convenio, podrán realizarse las negociaciones para la celebración de un nuevo Tratado sobre bases que mejor consulten las recíprocas conveniencias de ambos Estados.

En fe de lo cual, firman y sellan el presente por duplicado, en Montevideo, a los quince días del mes de Julio de mil ochocientos noventa y nueve.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) WALTER BARING.

Alemania—Austria-Hungría—Bélgica—Bulgaria—
China—Dinamarca—España—Estados Unidos
de América—Francia—Gran Bretaña—Grecia—
Italia—Japón—Luxemburgo—México—Monte-
negro—Noruega—Países Bajos—Persia—Por-
tugal—Rumania—Rusia—Servia—Siam—Sue-
cia—Suiza y Turquía.

**Convención para el arreglo pacífico de los con-
flictos internacionales**

Celebrada en La Haya el 29 de Julio de 1899.

El Uruguay adhiere con fecha 17 de Junio de 1907 ()*

S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia;
S. M. el Emperador de Austria, Rey de Bohemia y
Rey Apostólico de Hungría; S. M. el Rey de los Bel-

(*) Adhesiones y ratificaciones:

Uruguay: 17 de Junio de 1907.

Alemania: 4 de Setiembre de 1900.

Argentina: 15 de Junio de 1907.

Austria-Hungría: 4 de Setiembre de 1900.

Bélgica: 4 de Setiembre de 1900.

Bolivia: 15 de Junio de 1907.

Brasil: 15 de Junio de 1907.

Bulgaria: 4 de Setiembre de 1900.

Chile: 15 de Junio de 1907.

China: 21 de Noviembre de 1904.

Colombia: 15 de Junio de 1907.

gas; S. M. el Emperador de la China; S. M. el Rey de Dinamarca; S. M. el Rey de España y, en su nombre, la Regente del Reino; el Presidente de los Estados Unidos de América; el Presidente de los Estados Unidos de México; el Presidente de la República

Cuba: 15 de Junio de 1907.
Dinamarca: 4 de Setiembre de 1900.
República Dominicana: 15 de Junio de 1907.
Ecuador: 3 de Julio de 1907.
España: 4 de Setiembre de 1900.
Estados Unidos de América: 4 de Setiembre de 1900.
Francia: 4 de Setiembre de 1900.
Gran Bretaña: 4 de Setiembre de 1900.
Grecia: 4 de Abril de 1901.
Guatemala: 15 de Junio de 1907.
Haití: 15 de Junio de 1907.
Italia: 4 de Setiembre de 1900.
Japón: 6 de Octubre de 1900.
Luxemburgo: 12 de Julio de 1901.
México: 17 de Abril de 1901.
Montenegro: 16 de Octubre de 1900.
Nicaragua: 15 de Junio de 1907.
Noruega: 4 de Setiembre de 1900.
Panamá: 15 de Junio de 1907.
Paraguay: 15 de Junio de 1907.
Países Bajos: 4 de Setiembre de 1900.
Perú: 15 de Junio de 1907.
Persia: 4 de Setiembre de 1900.
Portugal: 4 de Setiembre de 1900.
Rumania: 4 de Setiembre de 1900.
Rusia: 4 de Setiembre de 1900.
El Salvador: 20 de Junio de 1907.
Servia: 11 de Mayo de 1901.
Siam: 4 de Setiembre de 1900.
Suecia: 4 de Setiembre de 1900.
Suiza: 20 de Diciembre de 1900.
Turquía: 12 de Junio de 1907.
Venezuela: 15 de Junio de 1907.

Francesa; S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Emperatriz de las Indias; S. M. el Rey de los Helenos; S. M. el Rey de Italia; S. M. el Emperador del Japón; S. A. R. el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; S. A. el Príncipe de Montenegro; S. M. la Reina de los Países Bajos; S. M. I. el Shah de Persia; S. M. el Rey de Rumania; S. M. el Emperador de todas las Rusias; S. M. el Rey de Servia; S. M. el Rey de Siam; S. M. el Rey de Suecia y Noruega; el Consejo Federal Suizo; S. M. el Emperador de los Otomanos y S. A. R. el Príncipe de Bulgaria;

Animados de la firme voluntad de contribuir al mantenimiento de la paz general;

Resueltos a favorecer, mediante el empleo de todos sus esfuerzos, el arreglo amigable de las desavenencias internacionales;

Reconocida la solidaridad que une a los miembros de la sociedad de las naciones civilizadas;

Queriendo extender el imperio del derecho, y fortificar el sentimiento de la justicia internacional;

Convencidos de que la institución permanente de una jurisdicción arbitral accesible a todos, en el seno de las potencias independientes, puede contribuir eficazmente al logro de tal resultado;

Considerando las ventajas de una organización general y regular de los procedimientos arbitrales;

Estando de acuerdo con el augusto iniciador de la Conferencia Internacional de la Paz, en que es necesario establecer, en un acuerdo internacional, los principios de equidad y de derecho en los cuales están basados

la seguridad de los Estados y el bienestar de los pueblos,—

Por tanto, deseando celebrar una Convención con tal objeto, han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, a Su Excelencia el Conde de Münster, Príncipe de Derneburg, Su Embajador en París;

Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apostólico de Hungría, a Su Excelencia el Conde R. Welsersheimb, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; Señor Alejandro Okolicsányi d'Okolicsna, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;

Su Majestad el Rey de los Belgas, a Su Excelencia el señor Augusto Beernaert, Su Ministro de Estado, Presidente de la Cámara de Representantes; Señor Conde de Grelle Roggier, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; Señor Descamps, Senador;

Su Majestad el Emperador de la China, al Señor Yang Yü, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en San Petersburgo;

Su Majestad el Rey de Dinamarca, a Su Chambe-lan Fr. E. de Bille, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres;

Su Majestad el Rey de España y, en su nombre, la Reina Regente del Reino, a Su Excelencia el Duque de Tetuán, ex Ministro de Negocios Extranjeros; Señor W. Ramírez de Villa Urrutia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas; Señor Arthur de Baguer, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;

El Presidente de los Estados Unidos de América, a Su Excelencia el señor Andrew D. White, Embajador de los Estados Unidos en Berlín; Honorable Seth Low, Presidente de la Universidad Columbia en Nueva York; Señor Stanford Newel, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; Señor Alfred T. Mahan, Capitán de Navío; Señor William Crozier, Capitán de Artillería;

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Señor de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en París; Señor Zenil, Ministro Residente en Bruselas;

El Presidente de la República Francesa, al Señor Leon Bourgeois, ex Presidente del Consejo, ex Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Cámara de Diputados; Señor Georges Blhourd, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; Señor Barón D'Estournelles de Constant, Ministro Plenipotenciario, Miembro de la Cámara de Diputados.

Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Emperatriz de las Indias, a Su Excelencia el muy Honorable Barón Pauncefoot de Preston, Miembro del Consejo Privado de Su Majestad, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Washington; Sir Henry Howard, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;

Su Majestad el Rey de los Helenos, al Señor N. Delyanni, ex Presidente del Consejo, ex Ministro de Negocios Extranjeros, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en París;

Su Majestad el Rey de Italia, a Su Excelencia el Conde Nigra, Su Embajador en Viena, Senador del Reino; Señor Conde A. Zannini, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya; Señor Comm. Guido Pompilj, Diputado del Parlamento Italiano;

Su Majestad el Emperador del Japón, al Señor I. Motono, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Bruselas.

Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau, a Su Excelencia el Señor Eyschen, Su Ministro de Estado, Presidente del Gobierno Gran Ducal;

Su Alteza el Príncipe de Montenegro, a Su Excelencia el Señor Consejero privado actual de Staal, Embajador de Rusia en Londres;

Su Majestad la Reina de los Países Bajos, al Señor Jonkheer A. P. C. Van Karnebeek, ex Ministro de Negocios Extranjeros, Miembro de la Segunda Cámara de los Estados generales; Señor General J. C. C. Den Beer Poortugael, ex Ministro de la Guerra, Miembro del Consejo de Estado; Señor T. M. C. Asser, Miembro del Consejo de Estado; Señor E. N. Rahusen, Miembro de la Primera Cámara de los Estados generales;

Su Majestad Imperial el Shah de Persia, a Su Edecán General Mirza Riza Khan, arfaud-dovleh, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en San Petersburgo y en Estocolmo.

Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc., al señor Conde de Macedo, Par del Reino, ex

Ministro de la Marina y las Colonias, y Ministro Plenipotenciario en Madrid; Señor D'Ornelles y Vasconcellos, Par del Reino, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en San Petersburgo; Señor Conde de Selir, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;

Su Majestad el Rey de Rumania, al Señor Alexandre Beldiman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlín; Señor Jean N. Papiuiu, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya;

Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, a Su Excelencia el Señor Consejero privado actual De Staal, Su Embajador en Londres; Señor De Martens, Miembro permanente del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros, Su Consejero privado; Su Consejero de Estado actual De Basily, Chambellan, Director del primer departamento del Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros;

Su Majestad el Rey de Servia, al Señor Miyatovitch, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Londres y La Haya;

Su Majestad el Rey de Siam, al Señor Phya Suriya Nuvat, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en San Petersburgo y en París; Señor Phya Visuddha Suriya Sakdi, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya y en Londres;

Su Majestad el Rey de Suecia y de Noruega, al Señor Barón de Bildt, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Roma;

El Consejo Federal Suizo, al Señor Doctor Arnold Roth, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berlín;

Su Majestad el Emperador de los Otomanos, a Su Excelencia Turkhan Pachá, ex Ministro de Negocios Extranjeros, miembro de Su Consejo de Estado; Noury Bey, Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros;

Su Alteza Real el Príncipe de Bulgaria, al Señor Doctor Dimitri Stancioff, Agente Diplomático en San Petersburgo; Señor Mayor Christo Hessaptchieff, Agregado Militar en Belgrado;

Quienes, después de comunicarse sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes:

TÍTULO I

Del mantenimiento de la paz general

ARTÍCULO I

Con el fin de impedir, hasta donde sea posible, que los Estados recurran a la fuerza en los casos de desacuerdo entre sí, las potencias signatarias convienen en emplear todos sus esfuerzos para conseguir el arreglo pacífico de los desacuerdos internacionales.

TÍTULO II

De los buenos oficios y de la mediación

ARTÍCULO II

En caso de desacuerdo grave o de conflicto, antes de apelar a las armas, las potencias signatarias con-

vienen en recurrir, hasta donde las circunstancias lo permitan, a los buenos oficios o a la mediación de una o de varias potencias amigas.

ARTÍCULO III

Independientemente de esos recursos, las potencias signatarias juzgan útil que una o varias potencias extrañas al conflicto ofrezcan, por propia iniciativa, hasta donde las circunstancias lo permitan, sus buenos oficios o su mediación a los Estados en conflicto.

El derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediación pertenece a las potencias extrañas al conflicto, aun durante el curso de las hostilidades.

El ejercicio de este derecho no podrá jamás ser considerado por una u otra de las partes en litigio, como un acto poco amistoso.

ARTÍCULO IV

El papel de mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas, y apaciguar los resentimientos que se hubieren producido entre los Estados en conflicto.

ARTÍCULO V

Las funciones del mediador cesarán desde el momento en que se probare, bien sea por una de las partes en litigio, o bien por el mismo mediador, que los medios de conciliación propuestos no son aceptados.

ARTÍCULO VI

Los buenos oficios y la mediación, ya sea que hayan sido solicitados por las partes en litigio, o por iniciativa de potencias extrañas al conflicto, tendrán únicamente el carácter de consejo, y jamás el de fuerza obligatoria.

ARTÍCULO VII

La aceptación de la mediación, salvo convenio en contrario, no tendrá por objeto interrumpir, retardar o estorbar la movilización y demás medidas preparatorias de la guerra.

Si tal aceptación tuviere lugar después de comenzadas las hostilidades, no interrumpirá, salvo convenio en contrario, las operaciones militares ya principiadas.

ARTÍCULO VIII

Las potencias signatarias están de acuerdo para recomendar la aplicación, en las circunstancias que lo permitan, de una mediación especial bajo la forma siguiente:

En los casos en que diferencias graves comprometan la paz, los Estados en conflicto elegirán respectivamente una potencia a la cual confiarán la misión de entrar en comunicación directa con la potencia elegida por la parte contraria, con el fin de impedir la ruptura de las relaciones pacíficas.

Durante el período de aquel cometido, cuya exten-

sión, salvo acuerdo en contrario, no será mayor de treinta días, los Estados en litigio cesarán toda comunicación directa entre sí con respecto al conflicto surgido, el cual será considerado como del dominio exclusivo de las potencias mediadoras. Estas emplearán todos sus esfuerzos para arreglar la diferencia.

Llegado el caso de la ruptura efectiva de las relaciones pacíficas, las potencias se encargarán, en común, de la misión de aprovechar toda ocasión para restablecer la paz.

TÍTULO III

De las Comisiones Internacionales de Información

ARTÍCULO IX

En los litigios de orden internacional que no comprometan ni el honor ni los intereses esenciales, que provengan de una divergencia de apreciación en cuestiones de hecho, las potencias signatarias dispondrán que las partes que no hayan podido avenirse por la vía diplomática instituyan, hasta donde las circunstancias lo permitan, una Comisión Internacional de Información, encargada de facilitar la solución de estos litigios, esclareciendo por medio de un examen imparcial y concienzudo las cuestiones de hecho.

ARTÍCULO X

Las Comisiones Internacionales de Información serán constituidas por convenio especial entre las partes en litigio.

En el convenio para la información se precisarán los hechos que deben ser examinados y la extensión de los poderes de los comisionados.

El convenio aludido regulará los procedimientos.

La información se efectuará en debate.

La forma y las moratorias que deban observarse, mientras no se fijen en el convenio de información, serán determinadas por la misma Comisión.

ARTÍCULO XI

La Comisión Internacional de Información será formada, salvo estipulación en contrario, de la manera determinada en el artículo XXXII de la presente Convención.

ARTÍCULO XII

Las potencias en litigio se comprometen a suministrarle a la Comisión Internacional de Información, de la manera más amplia posible, todos los medios y facilidades necesarios para que se penetren y aprecien perfectamente los hechos en cuestión.

ARTÍCULO XIII

La Comisión Internacional de Información presentará a las potencias en litigio su informe firmado por todos los miembros de ella.

ARTÍCULO XIV

Dicho informe, que se limitará a la comprobación de los hechos, no tendrá en manera alguna el carácter

de sentencia arbitral, sino que dejará a las potencias en litigio entera libertad para apreciar aquella comprobación de la manera que juzguen conveniente.

TÍTULO IV

Del arbitraje internacional

CAPÍTULO I

De la Justicia Arbitral

ARTÍCULO XV

El arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo de los litigios entre los Estados, por Jueces de su elección, basado en el respeto al derecho.

ARTÍCULO XVI

En las cuestiones de orden jurídico, y, en primer lugar, en las de interpretación o aplicación de las convenciones internacionales, el arbitraje será reconocido por las potencias signatarias como el medio más eficaz y, a la vez, el más equitativo para arreglar los litigios que no hayan sido resueltos por la vía diplomática.

ARTÍCULO XVII

Celébrase la Convención de Arbitraje para los acuerdos ya existentes o para los eventuales. Asimismo, puede ser aplicable a todo litigio, o solamente a los de una categoría determinada.

ARTÍCULO XVIII

La Convención de Arbitraje implica la obligación de someterse de buena fe a la sentencia arbitral.

ARTÍCULO XIX

Independientemente de los tratados generales o particulares que estipulan, en la actualidad, la obligación de las potencias signatarias de recurrir al arbitraje, éstas se reservan el derecho de celebrar, bien sea antes de la ratificación del presente acto, o bien posteriormente, nuevos acuerdos generales o particulares, con la mira de que el arbitraje sea extensivo a todos los casos que juzguen conveniente someter a su fallo.

CAPÍTULO II

Del Tribunal Permanente de Arbitraje

ARTÍCULO XX

Con el fin de facilitar el sometimiento inmediato a arbitraje, de los desacuerdos internacionales que no han podido ser solucionados por la vía diplomática, se comprometen las potencias signatarias a organizar un Tribunal Permanente de Arbitraje accesible en todo tiempo y que funcionará, salvo estipulación en contrario, conforme a las reglas de procedimiento insertas en el presente convenio.

ARTÍCULO XXI

El Tribunal permanente será competente para todos los casos de arbitraje, salvo que las partes convengan en establecer una jurisdicción especial.

ARTÍCULO XXII

Una oficina internacional que se establecerá en La Haya, servirá de archivo al Tribunal.

Dicha oficina será la intermediaria para las comunicaciones relativas a las reuniones del Tribunal; tendrá los archivos a su cargo, y la gerencia de todos los asuntos administrativos.

Las potencias signatarias se comprometen a transcribirle a la Oficina Internacional de La Haya la copia certificada de toda estipulación de arbitraje que medie entre ellas, así como de toda sentencia arbitral que les concierna, expedida por jurisdicciones especiales.

Comprométense, además, a comunicarle a dicha oficina las leyes, reglamentos y documentos que comprueben eventualmente la ejecución de las sentencias pronunciadas por el Tribunal.

ARTÍCULO XXIII

Cada potencia designará, dentro de los tres meses después de la ratificación del presunto acto, cuatro personas a lo más, de una competencia reconocida en las cuestiones de derecho internacional, que gocen de la más alta consideración moral, y que estén dispuestas a aceptar las funciones de árbitro.

Las personas así designadas serán inscriptas como miembros del Tribunal en una lista que será comunicada por el archivo a todas las potencias signatarias.

Toda modificación que sufra aquella lista de árbi-

tros será igualmente puesta en conocimiento de las potencias por el Archivo.

Dos o más potencias podrán entenderse en común sobre la designación de uno o de varios miembros.

La misma persona podrá ser designada por varias potencias.

Los miembros del Tribunal funcionarán durante un período de 10 años; su cometido podrá ser renovado.

En caso de fallecer o retirarse uno de los miembros del Tribunal, se procederá a su reemplazo de la manera indicada.

ARTÍCULO XXIV

Cuando las potencias signatarias quieran dirigirse al Tribunal permanente para el arreglo de un desacuerdo surgido entre ellas, la elección de los árbitros llamados a formar el Tribunal permanente para resolver dicho desacuerdo, se verificará de entre los miembros que forman la lista general del Tribunal.

Al no constituirse el Tribunal arbitral por el acuerdo inmediato de las partes, se procederá de la manera siguiente:

Cada parte nombrará dos árbitros, y éstos designarán, de común acuerdo, un árbitro dirimente.

En caso de empate, la elección del árbitro dirimente se encomendará a una tercera potencia, designada de común acuerdo por las partes.

Si no hubiere acuerdo en cuanto a esto, cada parte designará una potencia diferente, y la elección del ár-

bitro dirimente se hará de concierto por las potencias así designadas.

Formado el Tribunal de esta manera, las partes participarán al Archivo su resolución de dirigirse a la Corte, y los nombres de los árbitros.

El Tribunal Arbitral se reunirá en la fecha que fijen las partes.

Los miembros de la Corte que ejerzan sus funciones fuera de su país gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticas.

ARTÍCULO XXV

El Tribunal tendrá su asiento ordinario en La Haya.

Salvo el caso de fuerza mayor, el Tribunal no podrá cambiar su asiento sin el consentimiento de las partes.

ARTÍCULO XXVI

La Oficina Internacional de La Haya deberá poner sus locales y su organización a la disposición de las potencias signatarias para que, cualquiera jurisdicción de arbitraje, ejerza allí sus funciones.

La jurisdicción del Tribunal permanente podrá hacerse extensiva, bajo las condiciones prescritas por los reglamentos, a los litigios existentes entre potencias no signatarias, si las partes han convenido recurrir a esa jurisdicción.

ARTÍCULO XXVII

Será un deber de las potencias signatarias, en los casos en que un conflicto grave amenace estallar en-

tre dos o más de ellas, hacer presente a las tales, que el Tribunal Permanente está abierto para recurrir a él.

En consecuencia, declaran que el hecho de hacer presente a las partes en conflicto, las disposiciones de la presente Convención y el consejo dado de que se dirijan al Tribunal Permanente, con el supremo objeto de mantener la paz, no podrán ser considerados sino como actos de buenos oficios.

ARTÍCULO XXVIII

Un Consejo Administrativo permanente, compuesto de los representantes diplomáticos de las potencias signatarias acreditadas en La Haya, y del Ministro de Negocios Extranjeros de los Países Bajos, que hará las veces de Presidente, será constituido en dicha ciudad, a la brevedad posible, después de efectuada la ratificación de la presente Convención por nueve potencias, a lo menos.

El Consejo establecerá y organizará la Oficina Internacional, la que estará bajo su dirección y control.

Participará a las potencias la constitución del Tribunal, y proveerá a la instalación de éste.

Formulará un reglamento interno, así como los demás reglamentos necesarios.

Decidirá todas las cuestiones administrativas que puedan surgir con respecto al funcionamiento del Tribunal.

Tendrá amplios poderes para nombrar, suspender o revocar funcionarios y empleados de la oficina. Fi-

jará los haberes y contraloreará los gastos en general.

Bastará la presencia de cinco miembros en las reuniones, debidamente convocadas, para que las deliberaciones del Consejo sean válidas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.

El Consejo comunicará, sin pérdida de tiempo, a las potencias signatarias, los arreglos adoptados por él. Cada año les presentará un informe sobre los trabajos del Tribunal, sobre el servicio administrativo y los gastos.

ARTÍCULO XXIX

Los gastos de la oficina serán a cargo de las potencias signatarias, en la proporción establecida por la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal.

CAPÍTULO III

Del Procedimiento Arbitral

ARTÍCULO XXX

Con la mira de favorecer el desarrollo del arbitraje, las potencias signatarias han formulado las reglas siguientes, que serán aplicables al procedimiento arbitral, mientras que las partes no hayan adoptado otras reglas.

ARTÍCULO XXXI

Las potencias que recurran al arbitraje firmarán un acta especial (compromiso) en el que se determi-

ne claramente la causa del litigio, así como la extensión de los poderes de los árbitros. Este acto implicará el compromiso de las partes a someterse de buena fe a la sentencia arbitral.

ARTÍCULO XXXII

Las funciones arbitrales podrán ser conferidas a un solo árbitro o a varios designados por las partes, a su voluntad, o elegidos por ellas, de entre los miembros del Tribunal Permanente de Arbitraje establecido por el presente acto.

Al no hallarse constituido el Tribunal, por acuerdo inmediato de las partes se procederá de la manera siguiente:

Cada parte nombrará dos árbitros, los que elegirán el dirimente.

En caso de empate, la elección de éste se encargará a una tercera potencia designada de común acuerdo por las partes.

Si no hubiese acuerdo a este respecto, cada parte designará una potencia diferente, y la elección del dirimente se hará de común acuerdo por las potencias designadas.

ARTÍCULO XXXIII

Cuando un Soberano o Jefe de Estado sea elegido, el procedimiento arbitral lo determinará él.

ARTÍCULO XXXIV

El dirimente es de derecho el Presidente del Tribunal.

Cuando el Tribunal no comprenda dirimente nombrará él mismo su Presidente.

ARTÍCULO XXXV

En caso de fallecimiento, renuncia e impedimento de cualquiera de los árbitros, se procederá a su reemplazo de la manera fijada para su nombramiento.

ARTÍCULO XXXVI

El asiento del Tribunal será designado por las partes. A falta de designación, su asiento será en La Haya.

Una vez fijado su asiento, salvo el caso de fuerza mayor, no podrá ser cambiado por el Tribunal sino con el asentimiento de las partes.

ARTÍCULO XXXVII

Las partes tendrán el derecho de nombrar delegados o agentes especiales ante el Tribunal, con la misión de servir de intermediarios entre ellas y el Tribunal.

Podrán, además, encargar de la defensa de sus derechos e intereses, ante el Tribunal, a juriconsultos y abogados nombrados por ella con tal fin.

ARTÍCULO XXXVIII

El Tribunal decidirá de las lenguas que deban emplearse ante él.

ARTÍCULO XXXIX

El procedimiento arbitral comprenderá, por regla general, dos fases distintas: las instrucciones y los alegatos.

La instrucción consiste en la comunicación hecha por los agentes respectivos a los miembros del Tribunal, y a la parte contraria, de todos los actos impresos o manuscritos, y documentos que contengan las pruebas aducidas en la causa. Esta comunicación se hará en la forma y dentro de los plazos determinados por el Tribunal, en virtud del artículo XLIX.

Los alegatos consisten en el desenvolvimiento oral de las pruebas de las partes ante el Tribunal.

ARTÍCULO XL

Todo documento presentado por una de las partes deberá ser comunicado a la otra.

ARTÍCULO XLI

Los alegatos serán dirigidos por el Presidente.

No se harán públicos sino por resolución del Tribunal, previo consentimiento de las partes.

Serán insertos en actas redactadas por Secretarios nombrados por el Presidente. Estas actas tendrán, por sí, carácter auténtico.

ARTÍCULO XLII

Una vez terminada la instrucción, el Tribunal tendrá el derecho de excluir del alegato todo acto o do-

cumento nuevo que una de las partes quiera presentarle sin el consentimiento de la otra.

ARTÍCULO XLIII

El Tribunal será libre para tomar en consideración los actos o documentos nuevos a los cuales los agentes o jurisconsultos de las partes llamen su atención.

En tales casos, el Tribunal tendrá el derecho de pedir la exhibición de aquellos actos o documentos, pero con obligación del interesado de poner en conocimiento de ello a la parte contraria.

ARTÍCULO XLIV

El Tribunal podrá, además, exigir a las partes la presentación de todo acto, y pedir toda clase de explicación necesaria. En caso de negarse a acceder a esto, el Tribunal tomará nota del hecho.

ARTÍCULO XLV

Los agentes y jurisconsultos de las partes estarán autorizados a presentar oralmente al Tribunal todas las pruebas que juzguen útiles a la defensa de su causa.

ARTÍCULO XLVI

Tendrán el derecho de promover excepciones e incidentes. Las decisiones del Tribunal sobre estos puntos serán definitivas, y no darán lugar a ninguna discusión ulterior.

ARTÍCULO XLVII

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a hacer interrogaciones a los agentes y jurisconsultos de las partes, y pedirles explicaciones de los puntos dudosos.

Ni los interrogatorios, ni las observaciones hechas por los miembros del Tribunal, durante los alegatos, podrán ser considerados como la expresión de la opinión del Tribunal en general, o de sus miembros en particular.

ARTÍCULO XLVIII

El Tribunal tendrá la facultad de determinar su competencia, y en tal virtud interpretará el compromiso y los demás tratados que puedan alegarse en la materia, y aplicará los principios del Derecho Internacional.

ARTÍCULO XLIX

El Tribunal tendrá el derecho de dictar el orden de los procedimientos para la ventilación del proceso, determinar las formas y las moratorias, en las cuales cada parte deberá presentar sus alegatos y proceder a todas las formalidades que exige la presentación de pruebas.

ARTÍCULO L

Habiendo los agentes y jurisconsultos de las partes presentado sus alegatos y pruebas en apoyo de su

causa, el Presidente declarará terminados los alegatos.

ARTÍCULO LI

Las deliberaciones del Tribunal se efectuarán en sesión secreta.

Toda decisión se adoptará por mayoría de votos.

El hecho de negarse un miembro a tomar parte en la votación, constará en el acta.

ARTÍCULO LII

La sentencia arbitral dada por mayoría de votos atendidos los Considerandos, será puesta por escrito y firmada por todos los miembros del Tribunal. Aquellos de los miembros que pertenezcan a la minoría pueden hacerlo constar, firmando su disenso.

ARTÍCULO LIII

La sentencia arbitral será leída en sesión pública del Tribunal, ante los agentes y jurisconsultos de las partes, presentes o debidamente llamados para el acto.

ARTÍCULO LIV

La sentencia arbitral, debidamente pronunciada y notificada a los agentes de las partes en litigio, decidirá definitivamente y sin apelación la contienda.

ARTÍCULO LV

Las partes podrán hacer la reserva, en el compromiso, de pedir la reconsideración de la sentencia arbitral.

En tal caso, salvo convenio en contrario, la petición deberá ser dirigida al Tribunal que pronunció la sentencia.

Dicha petición no podrá ser motivada sino por el descubrimiento de un hecho nuevo que habría ejercido una influencia decisiva sobre la sentencia, y que, cuando se clausuraron los alegatos, era desconocido del Tribunal y de la parte que pide la reconsideración.

El procedimiento para reconsideración no podrá ser abierto sino por decisión del Tribunal, en la que hará constar la existencia del hecho nuevo, reconociéndole las condiciones expuestas en el párrafo precedente, y declarando, por lo tanto, aceptable la petición.

El compromiso determinará el plazo dentro del cual la petición de reconsideración deberá estar solucionada.

ARTÍCULO LVI

La sentencia arbitral sólo será obligatoria para las partes que han celebrado el compromiso.

Siempre que se trate de la interpretación de una Convención en la cual han tenido parte otras potencias además de las partes en litigio, éstas participarán a las primeras el compromiso que han celebrado.

Cada potencia tiene el derecho de intervenir en el proceso. Si una o varias de ellas han aprovechado de esta facultad, la interpretación contenida en la sentencia será igualmente obligatoria para ellas.

ARTÍCULO LVII

Cada parte hará sus propios gastos y satisfará una parte igual de los del Tribunal.

Disposiciones generales

ARTÍCULO LVIII

La presente Convención será ratificada dentro del más corto plazo posible.

Las ratificaciones serán depositadas en La Haya.

De cada depósito de éstos se extenderá un acta, de la cual se enviará copia certificada, por la vía diplomática, a todas las potencias que han sido representadas en la Conferencia Internacional de la Paz de La Haya.

ARTÍCULO LIX

Las potencias no signatarias que hayan sido representadas en la Conferencia Internacional de la Paz, podrán adherir a la presente Convención.

Al resolverse a hacerlo, participarán sus deseos de adhesión a las Potencias Contratantes, por medio de un aviso por escrito, que dirigirán al Gobierno de los Países Bajos, el que lo comunicará a su vez a las demás Potencias Contratantes.

ARTÍCULO LX

Las condiciones bajo las cuales las potencias que no han sido representadas en la Conferencia Internacional de la Paz podrán adherir a la presente Con-

vención, serán materia de un acuerdo posterior entre las Potencias Contratantes.

ARTÍCULO LXI

Si sucediese que una de las Altas Partes Contratantes desahuciase la presente Convención, el desahucio no tendrá efecto sino un año después de hecha la notificación, por escrito, al Gobierno de los Países Bajos, quien la comunicará inmediatamente a las demás Potencias Contratantes.

El desahucio no surtirá sus efectos sino con respecto a la potencia que lo hubiere notificado.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado la presente Convención, refrendándola con sus sellos.

Hecho en La Haya, a veintidós de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, en un solo ejemplar, que quedará archivado en los Archivos del Gobierno de los Países Bajos, copias certificadas del cual serán remitidas por la vía diplomática a las Potencias Contratantes.

Por Alemania: MÜNSTER. Por Austria-Hungría: WELSERSHEIME, OROLICSANYI. Por Bélgica: A. BEERNARET, CTE. DE GRELLEROCER, CBR. DESCAMPS. Por la China: YANG YÜ. Por Dinamarca: F. BILLE. Por España: EL DUQUE DE TETUÁN, W. R. DE VILLA URRUTIA,

ARTURO DE BAGUER. Por los Estados Unidos de América: ANDREW L. WHITE, SETH LOW, STANFORD NEWEL, A. T. MAHAN, WILLIAM CROZIER. Por los Estados Unidos Mexicanos: A. DE MIER, J. ZENIL. Por Francia: LEÓN BOURGEOIS, G. BIHOURD, D'ESTOURNELLES DE CONSTANT. Por Gran Bretaña e Irlanda: PAUNCEFOTE, HENRY HOWARD. Por Grecia: N. DELYANNI. Por Italia: NIGRA, A. ZANNINI, G. POMPILJ. Por el Japón: I. MOTONO. Por Luxemburgo: EYSCHEN. Por Montenegro: STAAL. Por los Países Bajos: V. KARNEBEEK, DEN BEER POORTUGAEL. T. M. C. ASSER, E. N. RAHUSEN. Por Persia: MIRZA REZA KHAN, ARFAUD-DQVLEH. Por Portugal: CONDE DE MACEDO, AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, CONDE DE SELIR. Por Rumania: A. BELDIMAN, J. N. PAPINIU. Por Rusia: STAAL, MARTENS, A. BASILY. Por Servia: CHEDO MIYATOVITCH. Por Siam: PHYA SURIYA, VISSUDDHA. Por Suecia y Noruega: BILDT. Por Suiza: ROTH. Por Turquía: TURKHAN, MEHEMED, NOURY. Por Bulgaria: D. STANCIOFF, MAYOR HESSAPTCHIEFF.

1899

Alemania—Austria-Hungría—Bélgica—Bulgaria—
China—Dinamarca—España—Estados Unidos de
América—Francia—Gran Bretaña—Grecia—Ita-
lia—Japón—Luxemburgo—México—Montenegro
—Noruega—Países Bajos—Persia—Portugal—
Rumania—Rusia—Servia—Siam—Suecia—Suiza
y Turquía.

**Convención relativa a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre**

Celebrada en La Haya el 29 de Julio de 1899.

El Uruguay adhiere con fecha 21 de Junio de 1906 ()*

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de
Prusia; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey
de Bohemia, etc. y Rey Apostólico de Hungría; Su

(*) Adhesiones y ratificaciones:

Uruguay: 21 de Junio de 1906.

Alemania: 4 de Setiembre de 1900.

Argentina: 17 de Junio de 1907.

Austria-Hungría: 4 de Setiembre de 1900.

Bélgica: 4 de Setiembre de 1900.

Bolivia: 7 de Febrero de 1907.

Brasil: 25 de Febrero de 1907.

Bulgaria: 4 de Setiembre de 1900.

Chile: 19 de Junio de 1907.

China: 12 de Junio de 1907.

Colombia: 30 de Enero de 1907.

Majestad el Rey de los Belgas; Su Majestad el Rey de Dinamarca; Su Majestad el Rey de España, y en su nombre, Su Majestad la Reina Regente del Reino; el Presidente de los Estados Unidos de América; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el Pre-

-
- Corea: 17 de Marzo de 1903.
Cuba: 17 de Abril de 1907.
Dinamarca: 4 de Setiembre de 1900.
República Dominicana: 13 de Abril de 1907.
Ecuador: 31 de Julio de 1907.
España: 4 de Setiembre de 1900.
Estados Unidos de América: 9 de Abril de 1902.
Francia: 4 de Setiembre de 1900.
Gran Bretaña: 4 de Setiembre de 1900.
Grecia: 4 de Abril de 1901.
Guatemala: 2 de Mayo de 1906.
Haití: 24 de Mayo de 1907.
Honduras: 21 de Agosto de 1906.
Italia: 4 de Setiembre de 1900.
Japón: 6 de Octubre de 1900.
Luxemburgo: 12 de Julio de 1901.
México: 17 de Abril de 1901.
Montenegro: 16 de Octubre de 1900.
Nicaragua: 17 de Mayo de 1907.
Noruega: 5 de Julio de 1907.
Panamá: 20 de Julio de 1907.
Paraguay: 12 de Abril de 1907.
Países Bajos: 4 de Setiembre de 1900.
Perú: 24 de Noviembre de 1903.
Persia: 4 de Setiembre de 1900.
Portugal: 4 de Setiembre de 1900.
Rumania: 4 de Setiembre de 1900.
Rusia: 4 de Setiembre de 1900.
El Salvador: 20 de Junio de 1902.
Servia: 11 de Mayo de 1901.
Siam: 4 de Setiembre de 1900.
Suecia: 5 de Julio de 1907.
Suiza: 20 de Junio de 1907.
Turquía: 12 de Junio de 1907.
Venezuela: 1.º de Marzo de 1907.

sidente de la República Francesa; Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Emperatriz de las Indias; Su Majestad el Rey de los Helenos; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Japón; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nasau; Su Alteza el Príncipe de Montenegro; Su Majestad la Reina de los Países Bajos; Su Majestad Imperial el Shah de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia y de Noruega; Su Majestad el Emperador de los Otomanos y Su Alteza Real el Príncipe de Bulgaria;

Considerando: Que, al investigar los medios de guardar la paz e impedir los conflictos formados entre las naciones, importa preocuparse también del caso en que la apelación a las armas sea consecuencia de acontecimientos que la solicitud de los referidos Soberanos no hubiera podido evitar; animados del deseo de atender, aun en esta hipótesis extrema, a los intereses de la humanidad y a las exigencias siempre crecientes de la civilización;

Considerando: Que importa a este fin revisar las leyes y prácticas generales de la guerra, ya con el objeto de definir las con más precisión, ya a fin de ponerles ciertos límites encaminados a restringir en lo posible sus rigores; inspirándose en estos propósitos recomendados hoy, como veinticinco años ha, cuando la Conferencia de Bruselas, en 1874, por una sabia y

generosa previsión, han adoptado, impulsados por estos móviles, un gran número de disposiciones que tienen por objeto definir y reglamentar las prácticas de la guerra terrestre. Según las miras de las Altas Partes Contratantes, estas disposiciones, cuya redacción ha sido inspirada por el deseo de suavizar los males de la guerra en cuanto lo permitan las necesidades militares, están destinadas a servir de regla general de conducta a los beligerantes en sus relaciones entre sí y con las poblaciones. No ha podido entrar en la intención de las Altas Partes Contratantes el que los casos no previstos quedasen, por falta de estipulación escrita, a la arbitraria apreciación de los que dirigen los ejércitos. Mientras no pueda darse a luz un código más completo de las leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno hacer constar que, en los casos no previstos, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo el amparo y dominio del Derecho de Gentes, tal como resulta de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Ellas declaran que es en este sentido como deben entenderse especialmente los artículos I y II del Reglamento adoptado;

Las Altas Partes Contratantes, deseando celebrar una Convención con tal objeto, han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

(Siguen las designaciones de los mismos Plenipotenciarios mencionados en la "Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales" (v. pág. 274), excepto los de Suiza y de la China. Por los

Estados Unidos de América figura solamente el Plenipotenciario señor Stanford Newel).

Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes darán a sus fuerzas armadas de tierra instrucciones que se hallen de acuerdo con el Reglamento sobre las leyes y prácticas de la guerra terrestre, anexo a la presente Convención.

ARTÍCULO II

Las disposiciones contenidas en el Reglamento, en el artículo 1.º, no son obligatorias sino para las potencias contratantes, en caso de guerra entre dos o varias de ellas. Aquellas disposiciones cesarán de ser obligatorias desde el momento en que, en una guerra entre potencias contratantes, una potencia no contratante se una a uno de los beligerantes.

ARTÍCULO III

La presente Convención será ratificada en el más breve término posible. Las ratificaciones se depositarán en La Haya. Del depósito de cada ratificación se extenderá un acta, copia autenticada de la cual se remitirá por la vía diplomática a todas las potencias contratantes.

ARTÍCULO IV

Las potencias no contratantes serán admitidas a adherir a la presente Convención. Al efecto, tendrán que dar a conocer su adhesión a las potencias contratantes por medio de una notificación escrita dirigida al Gobierno de los Países Bajos y comunicada por éste a todas las otras potencias contratantes.

ARTÍCULO V

Si una de las Altas Partes Contratantes denuncia la presente Convención, esta denuncia no surtirá efecto sino un año después de hecha la notificación por escrito al Gobierno de los Países Bajos y comunicada inmediatamente por éste a todas las otras potencias contratantes. Tal denuncia no producirá sus efectos sino en cuanto a la potencia que la hubiere notificado.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado la presente Convención y han puesto en ella sus sellos.

Hecho en La Haya, el veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, en un solo ejemplar, que quedará depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos, copias certificadas del cual serán enviadas por la vía diplomática a las potencias contratantes.

Por Alemania: MÜNSTER. Por Austria-Hungría: WELSERSCHELMB,

OKOLICSANYI. Por Bélgica: A. BEER-
 NAERT, CTE. DE GRELLÉ ROGIER, CH.
 DESCAMPS. Por Dinamarca: F. BIL-
 LE. Por España: EL DUQUE DE
 TETUÁN, W. R. DE VILLA URRUTIA,
 ARTURO DE BAGUER. Por los Esta-
 dos Unidos de América: STANFORD
 NEWEL. Por los Estados Unidos
 Mexicanos: A. DE MIER, J. ZENIL.
 Por Francia: LÉON BOURGEOIS,
 D'ESTOURNELLES DE CONSTANT. Por
 Gran Bretaña e Irlanda: PAUNCE-
 FOTE, HENRY HOWARD. Por Grecia:
 N. DELYANNI. Por Italia: NIGRA, A.
 ZANNINI, G. POMPILJ. Por el Japón:
 I. MOTONO. Por Luxemburgo: EYS-
 CHEN. Por Montenegro: STAAL.
 Por los Países Bajos: V. KARNE-
 BEEK, DEN BEER POORTUGAEL, T. M.
 C. ASSER, E. N. RAHUSEN. Por Per-
 sia: MIRZA RIZA KHAN, ARFA-UD-
 DOVLEH. Por Portugal: CONDE DE
 MACEDO, AGOSTINHO D'ORNELLAS DE
 VASCONCELLOS, CONDE DE SELIR.
 Por Rumania: A. BELDIMAN, J. N.
 PAPINIU. Por Rusia: STAAL, MAR-
 TENS, A. BASILY. Por Servia: CHE-
 DO MIYATOVITCH. Por Siam: PHYA
 SURIYA NUVATR, VISUDDHA. Por
 Suecia y Noruega: BILDT. Por Tur-
 quía: TURKHAN, NOURY. Por Bul-

garia: D. STANCIOFF, MAYOR HES-
SAPHCHIEFF.

ANEXO A LA CONVENCIÓN

Reglamento relativo a las Leyes y Prácticas de la Guerra Terrestre

SECCION I

De los beligerantes

CAPÍTULO I

De la calidad de beligerante

Artículo 1.º Las leyes, derechos y deberes de la guerra no se aplican solamente al ejército, sino también a las milicias y a los cuerpos de voluntarios que reúnan las siguientes condiciones: 1.ª tener a su cabeza una persona responsable respecto de sus subordinados; 2.ª tener una señal distintiva, fija y reconocible a distancia; 3.ª llevar las armas francamente; 4.ª ajustarse en sus operaciones a las leyes y prácticas de la guerra. En los países en que las milicias o los cuerpos de voluntarios constituyan el ejército o hagan parte de él, ellos quedan comprendidos bajo la denominación de ejército.

Art. 2.º La población de un territorio no ocupado que, a la aproximación del enemigo, toma espontáneamente las armas para combatir las tropas de invasión sin tener tiempo de organizarse conforme al artículo 1.º, se considerará como beligerante si respeta las leyes y prácticas de la guerra.

Art. 3.º Las fuerzas armadas de las partes beligerantes pueden componerse de combatientes y de no combatientes. En caso de captura por el enemigo, ambos tienen derecho de que se les trate como a prisioneros de guerra.

CAPÍTULO II

De los prisioneros de guerra

Art. 4.º Los prisioneros de guerra están en poder del Gobierno enemigo, pero no de los individuos o de los cuerpos que los hayan capturado. Debe tratárseles con humanidad. Todo cuanto les pertenezca personalmente, excepto las armas, los caballos y los papeles militares, queda de su propiedad.

Art. 5.º A los prisioneros de guerra puede sujetárseles a la internación en una ciudad, fortaleza, campo o localidad cualquiera, con la obligación de no alejarse de allí fuera de ciertos límites determinados; pero no puede encerrárseles sino por medida de seguridad indispensable.

Art. 6.º El Estado puede emplear, como trabajadores, a los prisioneros de guerra, según su grado y sus aptitudes. Los trabajos que se les impongan no serán excesivos ni tendrán relación alguna con las operaciones de la guerra. Puede autorizarse a los prisioneros a trabajar por cuenta de administraciones públicas o de particulares, o por su propia cuenta. Los trabajos acometidos por el Estado se pagarán según las tarifas en vigor para los militares del ejército nacional que ejecuten los mismos trabajos. Cuando los trabajos se ejecuten por cuenta de otras administraciones

públicas o de particulares, las condiciones de ellos se arreglarán de acuerdo con la autoridad militar. El salario de los prisioneros contribuirá a suavizar su posición, y el excedente les será entregado al momento de ponérseles en libertad, salvo el descuento de los gastos de manutención.

Art. 7.º El Gobierno en cuyo poder se encuentren los prisioneros de guerra tendrá a su cargo la manutención de ellos. A falta de convenio especial entre los beligerantes, los prisioneros de guerra serán tratados, en cuanto a la alimentación, alojamiento y vestido, del propio modo que las tropas del Gobierno que los hubiere capturado.

Art. 8.º Los prisioneros de guerra quedarán sometidos a las leyes, reglamentos y órdenes vigentes en el ejército del Estado en cuyo poder se encuentren. Todo acto de insubordinación autoriza a emplear para con ellos las medidas de rigor necesarias. A los prisioneros prófugos a quienes se volviere a aprehender antes de haberse vuelto a reunir con su ejército o antes de haber salido del territorio ocupado por el ejército que los hubiere capturado, podrán aplicárseles penas disciplinarias. Los prisioneros que después de haber logrado evadirse vuelvan a caer prisioneros, no sufrirán ninguna pena por su fuga anterior.

Art. 9.º Todo prisionero de guerra estará en la obligación de declarar, en caso de interrogársele sobre el particular, su nombre y grado verdaderos, y, en caso de infringir esta regla, se expondrá a una restricción de las ventajas concedidas a los prisioneros de guerra de su categoría.

Art. 10. Puede ponerse en libertad a los prisioneros de guerra bajo su palabra de honor, si las leyes de su país los autorizan a ello, y en tal caso estarán obligados, bajo la garantía de su honor personal, a cumplir escrupulosamente, tanto para con su propio Gobierno como respecto del Gobierno que los hubiere hecho prisioneros, los compromisos que hayan contraído. En el mismo caso, su propio Gobierno estará en el deber de no exigir ni aceptar de ellos ningún servicio contrario a la palabra empeñada.

Art. 11 No podrá constreñirse a un prisionero de guerra a aceptar su libertad bajo su palabra de honor; ni tampoco estará obligado el Gobierno enemigo a acceder a la petición de un prisionero que reclama se le ponga en libertad bajo su palabra.

Art. 12. Todo prisionero de guerra puesto en libertad bajo su palabra, y vuelto a aprehender en armas contra el Gobierno para con el cual había empeñado su palabra o contra los aliados de éste, perderá el derecho de ser tratado como prisionero de guerra y podrá ser llevado a juicio ante los Tribunales.

Art. 13. Los individuos que vayan tras un ejército sin formar parte de él directamente, tales como los corresponsales y los repórteres de periódicos, vivanderos y proveedores, que caigan en poder del enemigo y a quienes él crea conveniente detener, tendrán derecho al tratamiento de los prisioneros de guerra, con tal que exhiban una certificación expedida por la autoridad militar del ejército que acompañaban, en que conste que tenían aquel carácter.

Art. 14. Se constituirá, desde el principio de las

hostilidades, en cada uno de los Estados beligerantes y, llegado el caso, en cada uno de los países neutrales que hubieren recibido beligerantes en su territorio, una Oficina de Informaciones sobre los prisioneros de guerra. Esta oficina, encargada de responder a todas las preguntas referentes a ellos, recibirá de los diversos empleados competentes todas las indicaciones que requiera para establecer una ficha individual de cada prisionero de guerra. Deberá ella estar al corriente de las internaciones y mutaciones, así como de las entradas en los hospitales y de las defunciones. La Oficina de Informaciones estará también encargada de recoger y centralizar todos los objetos de uso personal, valores, cartas, etc., hallados en los campos de batalla o dejados por los prisioneros muertos en los hospitales y ambulancias, y de remitirlos a los interesados.

Art. 15. Las sociedades de socorros para los prisioneros de guerra, regularmente constituídas según las leyes de su país, y cuyo objeto sea servir de intermediarias en el ejercicio de la caridad, recibirán, de parte de los beligerantes, para sí y para sus agentes debidamente acreditados, todas las facilidades, dentro de los límites trazados por las necesidades militares y las prácticas administrativas, para cumplir eficazmente su misión humanitaria. Podrá permitirse a los delegados de aquellas sociedades que distribuyan socorros en los depósitos de internados, así como en los lugares por donde pasen los prisioneros en vía para su patria, mediante un permiso personal expedido por la autoridad militar, y comprometiéndose por es-

crito a someterse a todas las medidas de orden y de policía prescritas por ella.

Art. 16. Las Oficinas de Información gozan de franquicia postal. Las cartas, libranzas y dinero, así como los paquetes postales destinados a los prisioneros de guerra o expedidos por ellas, estarán exentos de todo impuesto postal, tanto en los países de origen y de destino como en los países intermediarios. Los regalos y socorros destinados a los prisioneros de guerra serán admitidos libres de derechos de importación y demás, así como de los gastos de transporte en los ferrocarriles explotados por el Estado.

Art. 17. Los oficiales prisioneros podrán recibir el completo del sueldo que en esta situación les fijen los reglamentos de su patria, debiendo ser reembolsados por su Gobierno.

Art. 18. Se dejará toda libertad a los prisioneros de guerra para el ejercicio de su religión, inclusive la asistencia a los oficios de su culto, con la condición de conformarse con las medidas de orden y de policía prescritas por la autoridad militar.

Art. 19. Los testamentos de los prisioneros de guerra se recibirán o extenderán en las mismas condiciones que los de los militares del ejército nacional. Se seguirán igualmente las mismas reglas en lo concerniente a los escritos sobre averiguación de las defunciones ocurridas, así como respecto de la inhumación de prisioneros de guerra, teniendo en cuenta su grado y categoría.

Art. 20. Hecha la paz, la vuelta a su patria de los prisioneros de guerra se efectuará lo más pronto posible.

CAPÍTULO III

De los enfermos y heridos

Art. 21. Las obligaciones de los beligerantes para con los enfermos y heridos se hallan expuestas en la Convención de Ginebra de 22 de Agosto de 1864, salvo las modificaciones de que ella pueda ser objeto.

SECCION II

De las hostilidades

CAPÍTULO I

De los medios de dañar al enemigo. De los sitios y bombardeos

Artículo 22. Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de los medios de dañar al enemigo.

Art. 23. Aparte de las prohibiciones establecidas por convenciones especiales, está prohibido especialmente: *a)* emplear veneno o armas envenenadas; *b)* matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; *c)* matar o herir a un enemigo que, habiendo depuesto las armas o no teniendo ya medios de defenderse, se hubiere rendido a discreción; *d)* declarar que no se dará cuartel; *e)* emplear armas, proyectiles o materias a propósito para causar males superfluos; *f)* hacer uso indebido de la bandera parlamentaria, del pabellón nacional o de las insignias militares y del uniforme del enemigo, así como de las señales distintivas de la Convención de Ginebra; *g)* destruir o tomar propiedades

enemigas, salvo el caso de requerirlo así las imperiosas necesidades de la guerra.

Art. 24. Las astucias de la guerra y el empleo de los medios necesarios para procurarse informes acerca del enemigo y del campo de batalla se consideran lícitos.

Art. 25. Está prohibido atacar o bombardear ciudades, aldeas, habitaciones o edificios no defendidos.

Art. 26. El comandante de las tropas asaltantes, antes de emprender el bombardeo, y salvo el caso de ataque a viva fuerza, deberá hacer cuanto de sí dependa al efecto de advertir a las autoridades.

Art. 27. En los sitios y bombardeos deben tomarse todas las medidas necesarias para dejar a salvo, en cuanto sea posible, los edificios consagrados a los cultos, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los hospitales y lugares donde se haya reunido a los enfermos y heridos, con tal que al propio tiempo no se les emplee en objetos militares. Es deber de los sitiados designar estos edificios con señales visibles especiales que se notificarán de antemano al sitiador.

Art. 28. Está prohibido entregar al saqueo aun las poblaciones tomadas por asalto.

CAPÍTULO III

De los espías

Artículo 29. No puede considerarse como espía sino al individuo que procediendo clandestinamente o bajo falsos pretextos, recoge o trata de recoger informes en la zona de operaciones de un beligerante, con la intención de comunicarlas a la parte adversa.

Por consiguiente, los militares no disfrazados que hayan penetrado en el campo de operaciones del ejército enemigo, para el efecto de recoger informes, no son considerados como espías. Tampoco son considerados como espías los militares y los que no sean militares que cumplan francamente su cometido, a quienes se haya conferido el encargo de transmitir despachos destinados, ora a su propio ejército, ora al ejército enemigo. A esta categoría pertenecen igualmente los individuos enviados en globo a entregar despachos y, en general, a mantener la comunicación entre las diversas partes de un ejército o de un territorio.

Art. 30. No podrá castigarse, sin juicio previo, al espía cogido in fraganti.

Art. 31. El espía que habiéndose reunido al ejército a que pertenece, fuere capturado más tarde por el enemigo, será tratado como prisionero de guerra y no incurrirá en ninguna responsabilidad por sus anteriores actos de espionaje.

CAPÍTULO IV

De los parlamentarios

Artículo 32. Considérase parlamentario al individuo autorizado por uno de los beligerantes para conferenciar con el otro y para presentarse con bandera blanca. El tiene derecho de inviolabilidad, como también el corneta o tambor, el abanderado y el intérprete que lo acompañen.

Art. 33. El Jefe a quien es enviado un parlamentario no está obligado a recibirlo en todas circunstancias. El puede tomar todas las medidas necesarias a

fin de impedir que el parlamentario no aproveche de su misión para adquirir informes. Tiene derecho, en caso de abuso, de retener temporalmente al parlamentario.

Art. 34. El parlamentario pierde sus derechos de inviolabilidad en caso de comprobarse de un manera positiva e irrecusable, que se ha aprovechado de su posición privilegiada para provocar o cometer un acto de traición.

CAPÍTULO V

De las capitulaciones

Artículo 35. Las capitulaciones ajustadas entre las Partes Contratantes deben tener en cuenta las reglas del honor militar. Una vez fijadas, deben observarse escrupulosamente por las dos partes.

CAPÍTULO VI

Del armisticio

Artículo 36. El armisticio suspende las operaciones de la guerra por acuerdo mutuo de las partes beligerantes. Si su duración no se hubiere determinado, las partes beligerantes pueden volver a emprender en cualquier momento las operaciones, con tal que se prevenga al enemigo oportunamente, de acuerdo con las condiciones del armisticio.

Art. 37. El armisticio puede ser general o local. El primero suspende en todas partes las operaciones de la guerra; el segundo solamente entre ciertas fracciones de los ejércitos beligerantes y en radio determinado.

Art. 38. Debe notificarse el armisticio oficialmente y en tiempo útil a las autoridades competentes y a las tropas. Las hostilidades se suspenden inmediatamente después de la notificación o en el plazo fijado.

Art. 39. Depende de las Partes Contratantes el fijar, en las cláusulas del armisticio, las relaciones que pudieran efectuarse en el teatro de la guerra con las poblaciones y entre sí.

Art. 40. Toda violación grave del armisticio, por una de las partes, da a la otra derecho de denunciarlo, y aún, en caso urgente, de comenzar inmediatamente las hostilidades.

Art. 41. La violación de las cláusulas del armisticio por particulares que obren por su propia iniciativa, da derecho solamente a reclamar el castigo de los culpables y, si hubiere lugar a ello, a una indemnización por las pérdidas sufridas.

SECCIÓN III

De la autoridad militar sobre el territorio del Estado enemigo

Artículo 42. Considérase como ocupado un territorio cuando se halla efectivamente bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende sino a los territorios donde aquella autoridad se halla establecida y en capacidad de ejercerse.

Art. 43. Habiendo pasado efectivamente la autoridad del poder legal a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas que de él dependan con el objeto

de restablecer y asegurar, en lo posible, la vida y el orden público, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país.

Art. 44. Está prohibido compeler a la población de un territorio ocupado a tomar parte en las operaciones militares contra su patria,

Art. 45. Está prohibido constreñir a la población de un territorio ocupado a prestar juramento a la potencia enemiga.

Art. 46. El honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y la propiedad privada, lo mismo que las convicciones religiosas y el ejercicio de los cultos, deben respetarse. La propiedad privada no es confiscable.

Art. 47. El saqueo está formalmente vedado.

Art. 48. Si el ocupante colecta en el territorio ocupado los impuestos, derechos y peajes establecidos en provecho del Estado, lo hará, en lo posible, ajustándose a las disposiciones legales vigentes sobre repartición de aquéllos, de donde resultará para él la obligación de proveer a los gastos de administración del territorio ocupado en la medida en que tenía que hacerlo el Gobierno legítimo.

Art. 49. Si, aparte de los impuestos de que trata el artículo precedente, el ocupante impusiere otras contribuciones en dinero en el territorio ocupado, ello no podrá ser sino para las necesidades del ejército o de la administración de este territorio.

Art. 50. No podrá decretarse ninguna pena colectiva, pecuniaria ni otra alguna contra las poblaciones por motivos de hechos individuales de que no puedan considerarse solidariamente responsables.

Art. 51. No se percibirá ninguna contribución sino en virtud de orden escrita y bajo la responsabilidad de un General en Jefe. No se procederá a la recaudación, en cuanto ello sea posible, sino de conformidad con las disposiciones vigentes sobre repartición de los impuestos. Al cobrarse una contribución se expedirá un recibo a favor del contribuyente.

Art. 52. No podrán exigirse servicios ni suministros en especie a los Municipios ni a los habitantes sino para las necesidades del ejército ocupante, y deberán estar en relación con los recursos del país y ser de tal naturaleza que no impliquen para las poblaciones la obligación de tomar parte en las operaciones de la guerra contra su patria. No se reclamarán tales suministros y servicios sino con autorización del Comandante en la localidad ocupada. En cuanto sea posible, se pagarán al contado los suministros en especie; en caso de no verificarse así, se expedirán los recibos correspondientes.

Art. 53. El ejército que ocupe un territorio no podrá apoderarse sino del numerario, de los fondos y valores exigibles pertenecientes en propiedad al Estado, de los depósitos de armas, medios de transporte, almacenes de provisiones y, en general, de toda propiedad mueble del Estado utilizable en las operaciones de la guerra. El material de los ferrocarriles, los telégrafos, los teléfonos, los buques de vapor y demás naves, así como los depósitos de armas y, en general, toda especie de municiones de guerra, aunque pertenezcan a sociedades o a personas privadas, son también medios que pueden servir

para las operaciones de la guerra, pero deberán restituirse, y las indemnizaciones se arreglarán en tiempo de paz.

Art. 54. El material de ferrocarriles procedente de Estados neutrales, bien pertenezca a estos Estados o a particulares, les será devuelto a la mayor brevedad posible.

Art. 55. El Estado ocupante no se considerará sino como administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explotaciones agrícolas pertenecientes al Estado enemigo y que se encuentren en país ocupado. El deberá amparar los fondos de estas propiedades y administrarlos según las reglas del usufructo.

Art. 56. Los bienes de los Municipios, los de los establecimientos consagrados a los cultos, a la caridad y a la instrucción, a las artes y a las ciencias, por más que pertenezcan al Estado, se tratarán como de propiedad privada. Todo embargo, destrucción o deterioro intencional de semejantes establecimientos, de los monumentos históricos, de las obras de arte y de ciencia, están vedados y deben perseguirse.

SECCIÓN IV

De los beligerantes internados y de los heridos cuidados en países neutrales

Artículo 57. El Estado neutral que reciba en su territorio tropas pertenecientes a los ejércitos beligerantes, las internará, en cuanto sea posible, lejos del teatro de la guerra. Podrá guardarlas en los cam-

pos y aun encerrarlas en fortalezas o en lugares apropiados al efecto. Decidirá si puede dejarse libres a los oficiales, comprometiéndose bajo su palabra a no salir del territorio neutral sin autorización.

Art. 58. A la falta de convenio especial, el Estado neutral suministrará a los internados los víveres, vestidos y socorros que la humanidad exige. En la paz se abonarán los gastos ocasionados por la internación.

Art. 59. El Estado neutral podrá autorizar el paso por su territorio de los heridos o enfermos pertenecientes a los ejércitos beligerantes, con la condición de que los trenes que los conduzcan no trasportarán personal ni material de guerra. En tal caso, el Estado neutral tomará las medidas de seguridad y de inspección necesarias al efecto. Los heridos y enfermos conducidos en semejantes condiciones en territorio neutral por uno de los beligerantes, y que pertenezcan a la parte adversa, deberán ser guardados por el Estado neutral, de tal suerte que no puedan volver a tomar parte en las operaciones de la guerra. Los mismos deberes tendrán respecto de los heridos o enfermos del otro ejército que le fueren confiados.

Art. 60. La Convención de Ginebra se aplica a los enfermos y heridos internados en territorios neutrales.

Alemania — Austria-Hungría — Bélgica — Bulgaria —
China — Dinamarca — España — Estados Unidos
de América — Francia — Gran Bretaña — Grecia —
Italia — Japón — Luxemburgo — México — Montene-
gro — Noruega — Países Bajos — Persia — Portugal
— Rumania — Rusia — Servia — Siam — Suecia — Sui-
za y Turquía.

**Convención para la adaptación a la guerra marí-
tima de los principios de la Convención de Gi-
nebra de 22 de Agosto de 1864.**

Celebrada en La Haya el 29 de Julio de 1899.

El Uruguay adhiere con fecha 21 de Junio de 1906 ()*

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de
Prusia; Su Majestad el Emperador de Austria, Rey
de Bohemia, etc. y Rey Apostólico de Hungría; Su

(*) Adhesiones y ratificaciones:

Uruguay: 21 de Junio de 1906.

Alemania: 4 de Setiembre de 1900.

Argentina: 17 de Junio de 1907.

Austria-Hungría: 4 de Setiembre de 1900.

Bélgica: 4 de Setiembre de 1900.

Bolivia: 7 de Febrero de 1907.

Brasil: 25 de Febrero de 1907.

Bulgaria: 4 de Setiembre de 1900.

Chile: 19 de Junio de 1907.

Majestad el Rey de los Belgas; Su Majestad el Emperador de la China; Su Majestad el Rey de Dinamarca; Su Majestad el Rey de España, y en su nombre Su Majestad la Reina Regente del Reino; el Pre-

China: 21 de Noviembre de 1904.
Colombia: 30 de Enero de 1907.
Corea: 7 de Febrero de 1903.
Cuba: 29 de Junio de 1907.
Dinamarca: 4 de Setiembre de 1900.
República Dominicana: 29 de Junio de 1907.
Ecuador: 5 de Agosto de 1907.
España: 4 de Setiembre de 1900.
Estados Unidos de América: 4 de Setiembre de 1900.
Francia: 4 de Setiembre de 1900.
Gran Bretaña: 4 de Setiembre de 1900.
Grecia: 4 de Abril de 1901.
Guatemala: 6 de Abril de 1903.
Haití: 29 de Junio de 1907.
Honduras: 21 de Agosto de 1906.
Italia: 4 de Setiembre de 1900.
Japón: 6 de Octubre de 1900.
Luxemburgo: 12 de Julio de 1901.
México: 17 de Abril de 1901.
Montenegro: 16 de Octubre de 1900.
Nicaragua: 17 de Mayo de 1907.
Noruega: 4 de Setiembre de 1900.
Panamá: 22 de Julio de 1907.
Paraguay: 29 de Junio de 1907.
Países Bajos: 4 de Setiembre de 1900.
Perú: 24 de Noviembre de 1903.
Persia: 4 de Setiembre de 1900.
Portugal: 4 de Setiembre de 1900.
Rumania: 4 de Setiembre de 1900.
Rusia: 4 de Setiembre de 1900.
El Salvador: 20 de Junio de 1902.
Servia: 11 de Mayo de 1901.
Siam: 4 de Setiembre de 1900.
Suecia: 4 de Setiembre de 1900.
Suiza: 29 de Diciembre de 1900.
Turquía: 12 de Junio de 1907.
Venezuela: 1.º de Marzo de 1907.

sidente de los Estados Unidos de América; el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; el Presidente de la República Francesa; Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Emperatriz de las Indias; Su Majestad el Rey de los Helenos; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Japón; Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; Su Alteza el Príncipe de Montenegro; Su Majestad la Reina de los Países Bajos; Su Majestad Imperial el Shah de Persia; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, etc.; Su Majestad el Rey de Rumania; Su Majestad el Emperador de todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Servia; Su Majestad el Rey de Siam; Su Majestad el Rey de Suecia y de Noruega; el Consejo Federal Suizo; Su Majestad el Emperador de los Otomanos y Su Alteza Real el Príncipe de Bulgaria;

Igualmente animados del deseo de disminuir, en lo que dependa de ellos, los males inseparables de la guerra, y queriendo con ese objeto adaptar a la guerra marítima los principios de la Convención de Ginebra del 22 de Agosto de 1864, han resuelto celebrar una Convención a ese efecto;

En consecuencia, han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

(Sigue la designación de los mismos Plenipotenciarios indicados en la "Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales" (ver pág. 298). Por los Estados Unidos de América, figura solamente el Plenipotenciario señor Stanford Newel).

Los cuales, después de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes:

ARTÍCULO I

Los buques-hospitales militares, es decir, los buques construídos o aparejados por los Estados, especial y únicamente con el fin de socorrer a los heridos, enfermos y náufragos, y cuyos nombres se hayan comunicado, al romperse las hostilidades o en el curso de ellas, en todo caso antes de ponerlos en servicio, a las potencias beligerantes, son respetados y no pueden ser capturados mientras duren las hostilidades. Tampoco se asimilan estos buques a los navíos de guerra por lo que hace a su permanencia en un puerto neutral.

ARTÍCULO II

Los buques de ambulancia equipados en totalidad o en parte a expensas de particulares o de sociedades de socorro oficialmente reconocidas, son también respetados y quedan exentos de captura, si la Potencia beligerante de que dependen les ha dado una patente oficial y ha notificado los nombres de ellos a la Potencia adversa al romperse las hostilidades o en el curso de ellas, en todo caso antes de ponerlos en servicio. Tales navíos deben estar provistos de un documento expedido por la autoridad competente en que se declare que estuvieron sometidos a la inspección de ella mientras se aparejaron y al tiempo de su partida.

ARTÍCULO III

Los buques de ambulancia, equipados total o parcialmente a expensas de particulares o de sociedades oficialmente reconocidas de países neutrales, son respetados y quedan exentos de captura, si la Potencia neutral de que dependen les ha dado una patente oficial y ha notificado los nombres de ellos a las Potencias beligerantes al romperse las hostilidades o en el curso de las mismas, en todo caso antes de ponerlos en servicio.

ARTÍCULO IV

Los buques mencionados en los artículos precedentes prestarán socorro y auxilio a los heridos, enfermos y náufragos de los beligerantes, sin distinción de nacionalidad. Los Gobiernos se comprometen a no utilizar aquellos buques para ningún fin militar. Los buques de que se trata no deberán embarazar en manera alguna los movimientos de los combatientes. Durante el combate y después de él, correrán las contingencias y peligros consiguientes. Los beligerantes tendrán sobre ellos el derecho de inspección y de visita, podrán rehusar su concurso, intimarles que se alejen, imponerles una dirección determinada y poner a bordo un comisario, aun detenerlos, en caso de requerirlo así la gravedad de las circunstancias. En cuanto sea posible, los beligerantes asentarán en el diario de los buques de ambulancia las órdenes que les den.

ARTÍCULO V

Los buques-hospitales militares se distinguirán por una pintura exterior blanca, con una faja horizontal verde, de metro y medio de anchura más o menos. Los buques mencionados en los artículos II y III, se distinguirán por una pintura exterior blanca, con una faja horizontal roja, de metro y medio de latitud, aproximadamente. Las embarcaciones de los buques que acaban de mencionarse, así como los pequeños buques destinados al servicio de ambulancia, se distinguirán por una pintura análoga. Todos los buques de ambulancia se harán reconocer izando, con su pabellón nacional, el pabellón blanco con cruz roja que la Convención de Ginebra dispone.

ARTÍCULO VI

Los buques mercantes, yates o embarcaciones neutrales que lleven o recojan heridos, enfermos o naufragos de los beligerantes, no pueden ser capturados por este hecho, pero quedan expuestos a la captura por las violaciones de neutralidad que hubieren cometido.

ARTÍCULO VII

El personal de la ambulancia de todo buque capturado es inviolable y no puede ser hecho prisionero de guerra. Lleva consigo, al salir del buque, los objetos e instrumentos de cirugía de su propiedad particular. Este personal continuará desempeñando sus

funciones mientras sea necesario y podrá retirarse en seguida cuando el Comandante en Jefe lo juzgue posible. Los beligerantes deben asegurar a este personal caído en su poder el goce íntegro de su sueldo.

ARTÍCULO VIII

Los marinos y los militares embarcados, heridos o enfermos, sea cual fuere la nación a que pertenezcan, serán protegidos y cuidados por sus capturadores.

ARTÍCULO IX

Son prisioneros de guerra los náufragos, heridos o enfermos de un beligerante que caigan en poder del otro. Corresponde a éste decidir, según las circunstancias, si conviene retenerlos, dirigirlos a un puerto de su nación, a un puerto neutral o a un puerto del adversario. En este último caso, los prisioneros así devueltos a su país no podrán servir mientras dure la guerra.

ARTÍCULO X

Los náufragos, heridos o enfermos desembarcados en un puerto neutral, con el consentimiento de la autoridad local, a menos que se haya pactado lo contrario entre el Estado neutral y los Estados beligerantes, deberán ser retenidos por el Estado neutral, de suerte que no puedan volver a tomar parte en las operaciones de la guerra. Los gastos del hospital y de entierro serán de cargo del Estado a que los náufragos, heridos o enfermos pertenezcan.

ARTÍCULO XI

Las reglas contenidas en los artículos precedentes no son obligatorias sino para las Potencias Contratantes, en caso de guerra entre dos o varias de ellas. Dichas reglas cesarán de ser obligatorias desde el momento en que, en una guerra entre Potencias Contratantes, una Potencia no contratante se una a uno de los beligerantes.

ARTÍCULO XII

La presente Convención será ratificada en el más breve término posible. Las ratificaciones se depositarán en La Haya. Del depósito de cada ratificación se extenderá un acta, copia autenticada de la cual se remitirá por la vía diplomática a todas las Potencias Contratantes.

ARTÍCULO XIII

Las Potencias no signatarias que hubieren aceptado la Convención de Ginebra, de 22 de Agosto de 1864, serán admitidas a adherir a la presente Convención. Al efecto, tendrán que dar a conocer su adhesión a las Potencias Contratantes, por medio de una notificación escrita dirigida al Gobierno de los Países Bajos y comunicada a todas las Potencias Contratantes.

ARTÍCULO XIV

En caso de que una de las Altas Partes Contratantes denunciare la presente Convención, tal denuncia-

ción no producirá sus efectos sino un año después de hecha la notificación por escrito al Gobierno de los Países Bajos y comunicada inmediatamente por éste a todas las otras Potencias Contratantes. Esta denuncia no producirá sus efectos sino en cuanto a la Potencia que la hubiere notificado.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convención y han puesto en ella sus sellos.

Hecho en La Haya, el veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, en un solo ejemplar, que quedará depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos, copia certificada del cual será enviada por la vía diplomática a las Potencias Contratantes.

Por Alemania: MÜNSTER. Por Austria-Hungría: WELSERSHEIMB, OKOLICSNANYI. Por Bélgica: A. BEERNAERT, CTE. DE GRELLE ROGIER, CH. DESCAMS. Por China: YAN-YÜ. Por Dinamarca: F. BILLE. Por España: EL DUQUE DE TETUÁN, W. R. DE VILLA URRUTIA, ARTURO DE BAGUER. Por los Estados Unidos de América: STANFORD NEWEL. Por los Estados Unidos Mexicanos: A. DE MIER, J. ZENIL. Por Francia: LEÓN BOURGEOIS, G. BIHOUD, D'ESTOURNELLES DE CONSTANT. Por

la Gran Bretaña e Irlanda: HENRY HOWARD. Por Grecia: N. DELYANNI. Por Italia: NIGRA, A. ZANNINI, G. POMPILJ. Por el Japón: I. MOTONO. Por Luxemburgo: EYSCHEN. Por Montenegro: STAAL. Por los Países Bajos: V. KARNEBEEK, DEN BEER POORTUGAEL, T. M. C. ASSER. E. N. RAHUSEN. Por Persia: MIRZA RIZA KHAN, ARFA-UD-VOVLEH. Por Portugal: CONDE DE MACEDO, AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS, CONDE DE SELIR. Por Rumania: A. BELDIMAN J. N. PAPINIU. Por Rusia: STAAL, MARTENS, A. BASILY. Por Servia: CHEDO MIYATOVITCH. Por Siam: PHYA SURUYA NUVATR, VISUDDHA. Por Suecia y Noruega: BILDT. Por Suiza: ROTH. Por Turquía: TURKHAN, M. NOURY. Por Bulgaria: D. STANCIOFF, MAYOR HESSAPTCHIEFF.

1899

Uruguay-Argentina

Acuerdo Sanitario

Celebrado en Agosto de 1899.

El Consejo Nacional de Higiene Uruguayo, representado por su delegado el doctor E. Fernández Espiro, y el Departamento Nacional de Higiene Argentino, deseando uniformar las medidas preventivas que han de adoptarse en los puertos argentinos y uruguayos, para evitar la importación de la peste bubónica que existe en Oporto, acuerdan las siguientes bases:

1.º Declarar infectado el puerto de Oporto y sospechosos todos los demás puertos de Portugal, incluso los de las Islas de Madera y de las Azores, como también los de los países que no se precavan suficientemente.

2.º Los buques procedentes de dichos puertos, que conduzcan Inspector Sanitario, y cuyo estado sea indemne, serán desinfectados y puestos en libre plática. Los pasajeros desembarcarán en los respectivos lazaretos, en los que serán detenidos el tiempo necesario para la desinfección de sus equipajes.

3.° Los buques procedentes de puertos sospechosos, sin Inspector Sanitario, y en estado indemne, serán sometidos a una observación sanitaria de cinco días.

Los que lleguen en las mismas condiciones, de puertos infectados, tendrán diez días de observación. En ambos casos se harán las desinfecciones consiguientes.

4.° Los buques que hayan tenido uno o más casos sospechosos de peste bubónica, antes de los quince días de su llegada al puerto, serán sometidos a diez días de observación.

5.° Los buques que hayan tenido uno o más casos sospechosos comprobados dentro de los quince días anteriores a su llegada al puerto, serán sometidos a quince días de observación. En este caso, como en los anteriores, la observación para los pasajeros se comenzará a contar una vez terminada la desinfección de sus equipajes.

6.° Las cargas serán clasificadas según su procedencia y sometidas a desinfección las que salgan de puertos sospechosos o infectados; las demás serán admitidas en libre plática.

7.° La correspondencia de puertos infectados será sometida a desinfección y la de los puertos sospechosos será desembarcada sin ese requisito.

8.° El Consejo Nacional de Higiene comunicará telegráficamente al Departamento Nacional de Higiene Argentino el resultado de la visita de inspección médica que se practique en el Lazareto de la Isla de Flores a los buques que arriben de puertos sospechosos o infectados de peste bubónica.

9.° Los Inspectores Sanitarios argentinos harán a

las autoridades uruguayas iguales declaraciones que a las autoridades argentinas.

10. Ningún buque será rechazado de los puertos uruguayos o argentinos.

11. En caso de que a bordo de algún buque se desarrolle epidémicamente la peste bubónica, ambas corporaciones resolverán de común acuerdo el tratamiento sanitario que corresponda.

12. Estas bases podrán ser modificadas por acuerdo de ambas corporaciones, según la marcha de la epidemia que las ha ocasionado.

13. Las medidas indicadas se aplicarán desde la promulgación de las ordenanzas que dictarán conjuntamente las dos corporaciones.

14. Estas bases, una vez aceptadas por las dos corporaciones, serán sometidas a la aprobación de los respectivos Gobiernos.

ERNESTO FERNÁNDEZ ESPIRO.

JOSÉ PENNA.

Ezequiel Castilla,

Secretario.



1899

Uruguay-Brasil

Protocolo relativo al Convenio de Extradición de Criminales de 25 de Noviembre de 1878

Celebrado en Montevideo el 6 de Setiembre de 1899.

En Montevideo, a los seis días del mes de Setiembre del año mil ochocientos noventa y nueve, reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores Sus Excelencias el Señor Doctor Manuel Herrero y Espinosa, Ministro del Ramo, y el Señor Doctor Alberto Fialho, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Brasil, con el objeto de establecer la ampliación del término fijado en el parágrafo 10 del Acuerdo de 14 de Mayo de 1883, referente a la detención preventiva de las personas perseguidas por alguno de los delitos especificados en el Convenio de Extradición de Criminales de 25 de Noviembre de 1878 vigente entre ambos Países, después de canjeados sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, convinieron en hacer la siguiente declaración que se considerará parte integrante del referido Pacto internacional:

“Siendo notoriamente insuficiente el término de treinta días que establece el parágrafo 10 del Acuerdo

de 14 de Mayo de 1883 para la detención preventiva de las personas perseguidas por alguno de los crímenes o delitos especificados en el Convenio de Extradición de Criminales de 25 de Noviembre de 1878, vigente entre esta República y la del Brasil, ambos Gobiernos convienen en que dicho plazo quede desde luego fijado en sesenta días."

En fe de lo cual, los Señores Plenipotenciarios hicieron labrar el presente Protocolo por duplicado, cuyos ejemplares firmaron y sellaron con sus sellos en la fecha arriba expresada.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) ALBERTO FIALHO.

1899

Uruguay—Argentina

Convenio sobre importación y exportación de ganado

*Celebrado en Buenos Aires el 26 de Octubre de 1899.
No fué ratificado.*

Reunidos en el Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, S. E. el Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay Doctor Gonzalo Ramírez y S. E. el Señor Ministro del ramo Doctor Amancio Alcorta, debidamente autorizados al efecto, han convenido lo siguiente para establecer la mejor forma de importación y exportación de ganado entre ambos países:

ARTÍCULO I

Declárase puertos habilitados en la República Argentina para la importación de toda especie de ganado procedente de la República Oriental del Uruguay, los de Buenos Aires, La Plata, el Rosario, Campana, Concepción del Uruguay, Concordia, Monte Caseros y Gualedguaychú; y en la República Oriental del Uruguay para la entrada del ganado procedente de la

República Argentina, los puertos de Montevideo, la Colonia, Mercedes, Santa Rosa, Salto, Fray Bentos, Paysandú y Maldonado.

ARTÍCULO II

El Gobierno del país de destino podrá exigir en todos los casos la previa inspección veterinaria del ganado, a fin de comprobar su buen estado de salud.

Al efectuarse dicha inspección, los dueños o conductores de los animales no podrán oponerse a que se someta a éstos a las inoculaciones que decidan practicar los veterinarios, como medio de determinar el diagnóstico.

ARTÍCULO III

Los introductores de animales en pie que no sean destinados a invernada, saladero o a ser faenados para la exportación, están obligados a presentar al arribo de cada expedición un certificado expedido por la autoridad competente del país de procedencia, en el que se haga constar que los animales han sido sometidos en el punto de embarque, a una inspección veterinaria para comprobar su buena salud, y que no existe ni ha existido, desde hace un mes, ninguna enfermedad de naturaleza contagiosa en los rodeos y rebaños de la región de procedencia.

Dicho certificado deberá estar legalizado por las autoridades consulares del país de destino en el de procedencia, con declaración de haberse practicado las diligencias en la forma que se deja expresada.

Deberán, además, exhibir una planilla que especifique el número, la especie y la raza de los animales embarcados, así como la dirección del propietario y el punto de destino.

ARTÍCULO IV

Queda prohibida la introducción al territorio de ambos países, por cualquier punto de sus fronteras, de animales atacados de enfermedades contagiosas o sospechosos de estarlo, así como la de sus productos o despojos y de cualquier objeto que haya estado en contacto con animales enfermos o sospechosos o con otros objetos, capaces de transmitir una enfermedad contagiosa.

Los animales que se presenten a la importación en tales condiciones, así como las embarcaciones en que hayan sido conducidos, serán sometidos en cada país a las medidas que sus respectivos reglamentos adopten como más eficaces para preservar del contagio a los ganados.

ARTÍCULO V

Los animales afectados por enfermedad contagiosa, que procedan de ultramar y sean rechazados en la República Argentina, no serán admitidos en la República Oriental del Uruguay, y viceversa, los que sean rechazados en ésta, lo serán igualmente en la República Argentina.

Esos animales serán señalados por la autoridad que los rechace con una *R*, tatuada en la oreja iz-

quiera, comunicándolo inmediatamente a los Cónsules o Agentes Consulares respectivos, con remisión de todos los datos que ayuden a comprobar la identidad de los animales rechazados para el caso en que se intente introducirlos en el otro país.

ARTÍCULO VI

Son considerados como sospechosos los animales que hayan estado en contacto con otros atacados de enfermedades contagiosas o expuestos a su contagio.

ARTÍCULO VII

El presente Convenio estará en vigencia hasta seis meses después de haber sido denunciado por una de las Altas Partes Contratantes, a menos que la denuncia sea motivada por existir en el otro país el muermo, la peste bovina, la fiebre aftosa o la pleuro-neumonía contagiosa, en cuyo caso sus efectos cesarán inmediatamente.

Firmado y sellado por duplicado en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.

(L. S.) GONZALO RAMÍREZ.

(L. S.) AMANCIO ALCORTA.

1899

Argentina-Brasil

Convenio Sanitario

*Celebrado en Buenos Aires el 26 de Octubre de 1899.
El Uruguay adhiere con reservas, el 10 de Noviembre
de 1899. (*)*

ARTÍCULO I

Desde el quince de noviembre de cada año, hasta el quince de Mayo, los buques que traigan pasajeros de

(*)

ACTA

El Consejo Nacional de Higiene en sesión de la fecha, resolvió adherir al Convenio celebrado entre el Departamento Nacional de Higiene Argentino y la Directoría de Salud Pública del Brasil con las reservas siguientes:

1.º No considerar forzosa la aplicación del Convenio, sino cuando el estado sanitario del Brasil lo autorice; ni considerarlo prohibitivo de la aplicación de medidas fuera de ese período, cuando el caso lo requiera.

2.º Aceptar la parte referente a la desinfección de la carga sospechosa a que se refiere el artículo 7.º, toda vez que en la reglamentación se establezca la clasificación: "objetos de uso personal o doméstico que se transporten como carga".

3.º Aceptar también los períodos de seis y ocho días fijados para

primera clase, procedentes de Río de Janeiro o Santos, o que hubiesen hecho escalas en ellos, no podrán recibir allí pasajeros de tercera clase.

ARTÍCULO II

Los buques destinados al transporte de pasajeros de tercera clase, no podrán recibirlos a bordo sin la constancia autorizada de que no se hallan infectados de fiebre amarilla, ni se sospeche que puedan tenerla en incubación, y de que sus ropas y demás efectos han sido lavados y desinfectados.

ARTÍCULO III

Para los pasajeros de primera clase se exigirá un certificado o constancia de hallarse libres de molestias de fácil confusión con la fiebre amarilla y de que las ropas de uso han sido desinfectadas. Pueden dar este certificado el médico asistente de las familias o

la observación de pasajeros de primera y tercera clase respectivamente, siempre que se determine que los pasajeros de primera quedarán sujetos a una vigilancia sanitaria de dos días, como complemento para los ocho días.

4.º Que la observación de pasajeros y la desinfección de equipajes destinados a Montevideo, se haga en la Isla de Flores.

Oficiese al Departamento de Higiene Argentino y, siendo aceptada la adhesión, comuníquese al Gobierno para su aprobación.

Montevideo, 10 de noviembre de 1889.

Joaquín Canabal,
Presidente.

Gabriel Honoré,
Secretario.

pasajeros que se embarquen, o los médicos de que se hablará más adelante.

ARTÍCULO IV

Se exigirá de las empresas de navegación, que no dejen comunicar con tierra a los pasajeros, marineros o tripulantes que hayan de continuar viaje, imponiéndoles, en caso que sea necesario su desembarco, los certificados de salud y desinfección.

ARTÍCULO V

Durante los meses citados, un médico argentino o un Guarda Sanitario idóneo, que pueda desempeñar el papel de Oficial de Sanidad, viajará en cada vapor que traiga pasajeros.

La remuneración de este Inspector quedará a cargo de las empresas, las que, para abonarlo, se entenderán con el Departamento de Higiene Argentino.

ARTÍCULO VI

En los puertos de Río o Santos, habrá una Comisión compuesta de un médico argentino y uno brasileño, para la inspección de los pasajeros destinados a los puertos argentinos. Esa Comisión expedirá, sin cargo para los pasajeros, los certificados del caso y visará los expedidos por los médicos particulares.

ARTÍCULO VII

Bajo estas condiciones, los buques que llegaran sin haber tenido novedad, serán puestos en libre plática,

previa desinfección de equipajes y carga sospechosa, en el mismo buque para los pasajeros de primera y con tal que hubiesen mediado seis días a lo menos, entre la hora de salida del puerto brasileño y el momento de darle libre entrada.

Los buques con pasajeros de tercera, quedarán sujetos a una desinfección de pasajeros, carga sospechosa y equipajes en el Lazareto argentino, y no podrán ser puestos en libre plática sino después de ocho días de haber salido de puerto brasileño.

ARTÍCULO VIII

Queda para la debida oportunidad la reglamentación de las presentes estipulaciones.

Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de Octubre del año mil ochocientos noventa y nueve.

EDUARDO WILDE.

M. E. GONÇALVES PEREYRA.

I. S. Allende,
Secretario.

1899

Uruguay-Argentina

Acuerdo Sanitario

Celebrado en Montevideo el 15 de Noviembre de 1899.

En Montevideo, a quince de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, reunido el Consejo Nacional de Higiene, con asistencia del señor Presidente del Departamento de Higiene Argentino, doctor don Eduardo Wilde, con el objeto de conocer las bases de un Convenio Sanitario de carácter general, para precaver a ambos países del Río de la Plata de la peste bubónica, en sustitución del celebrado en Buenos Aires, con fecha veinticinco de Agosto último, entre el Delegado doctor E. Fernández Espiro y el Departamento, que reviste un carácter local, el señor doctor Wilde dijo que denunciaba este acuerdo y proponía la aceptación del sustitutivo aprobado por la Corporación que preside. Convenida la denuncia por ambas partes, se entró a la discusión, quedando sancionado el Convenio en la siguiente forma:

El Consejo Nacional de Higiene y el Departamento de Higiene Argentino, representado por su Presiden-

te el doctor Eduardo Wilde, convienen en lo siguiente:

1.º Las procedencias de los puertos contaminados de peste bubónica serán sometidas a una observación de diez días, a contar desde la desinfección que se verificará en los puertos habilitados para ese servicio.

Las procedencias de puertos sospechosos serán sometidas a cinco días de observación, previa desinfección, la que podrá verificarse en el mismo buque.

2.º Los buques que hayan tenido enfermos durante la travesía o los tengan a su llegada, quedan sujetos a rigurosa desinfección y a una observación de quince días, después de terminada aquélla.

3.º Queda prohibida la entrada de los artículos siguientes: cueros frescos, restos frescos de animales, lana, cerda, plumas, efectos de uso personal o doméstico, trapos en cualquier acondicionamiento y tejidos usados, siempre que no sea practicable su desinfección.

Aceptado el presente Convenio, para constancia se firman dos de un mismo tenor por los Presidentes de ambas corporaciones y el Secretario del Consejo Nacional de Higiene.

JOAQUÍN CANABAL.
EDUARDO WILDE.

Gabriel Honoré,
Secretario.

1899

Uruguay—Argentina

Protocolo relativo al Tratado General de Arbitraje de 8 de Junio de 1899

Celebrado en Buenos Aires el 6 de Diciembre de 1899.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Su Excelencia el Señor Doctor Gonzalo Ramírez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, y Su Excelencia el Señor Ministro del ramo Doctor Amancio Alcorta, convinieron en ampliar a doce meses el plazo fijado en el artículo XVIII para el canje de las ratificaciones del Tratado General de Arbitraje firmado entre los infrascriptos el ocho de Junio del presente año.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, debidamente autorizados, firman y sellan con sus respectivos sellos y por duplicado el presente Protocolo Adicional en la ciudad de Buenos Aires a los seis días del mes de Diciembre del año mil ochocientos noventa y nueve.

(L. S.) GONZALO RAMÍREZ.

(L. S.) AMANCIO ALCORTA.

1900

Uruguay—Argentina

Protocolo relativo al Tratado General de Arbitraje de 8 de Junio de 1899

Celebrado en Buenos Aires el 5 de Junio de 1900.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, S. E. el Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, doctor Gonzalo Ramírez, y S. E. el Señor Ministro del ramo, doctor Amancio Alcorta, convinieron en ampliar a seis meses más el plazo prorrogado por el Protocolo de 6 de Diciembre de 1899, a que se refiere el artículo 18 del Tratado General de Arbitraje, firmado en esta Capital, entre los infrascriptos, el 8 de Junio del mismo año, para el canje de sus ratificaciones.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, debidamente autorizados, firman y sellan, por duplicado, el presente Protocolo Adicional, en la ciudad de Buenos Aires a los cinco días del mes de Junio del año de mil novecientos.

(L. S.) GONZALO RAMÍREZ.

(L. S.) AMANCIO ALCORTA.

1900

Uruguay—Argentina

Convenio Telegráfico

Celebrado en Buenos Aires el 28 de Julio de 1900.

En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días de Julio de mil novecientos, reunidos en la Dirección General de Correos y Telégrafos el Señor Don Juan Rampson, Jefe de la Oficina Central del Telégrafo Nacional Uruguayo, debidamente autorizado por la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay, a la cual representa en este acto, y el señor Director General de Correos y Telégrafos de la República Argentina Señor Don Miguel García Fernández, con asistencia del Inspector General de Telégrafos Don Pedro López, a objeto de establecer la forma en que se hará el servicio de intercambio telegráfico por la línea de Concepción del Uruguay a Paysandú, una vez aprobado por los respectivos Gobiernos los arreglos celebrados *ad referendum* con el Señor Alberto Santa María, en fecha 27 del corriente, así como por las líneas a establecerse de Concordia al Salto, de Monte Caseros a Santa Rosa, de San Eugenio a Quarahy y de Rivera a

Santa Ana de Livramento, acuerdan lo siguiente, que deberá someterse a consideración de la Dirección de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay:

I

Para el intercambio de telegramas entre las dos Repúblicas se utilizarán indistintamente todas las líneas que unan las oficinas dependientes de las dos Direcciones Generales, distribuyéndose el servicio de una manera equitativa.

II

El servicio de transmisión y recepción se hará directamente desde y hasta Buenos Aires, siempre que el estado de las líneas lo permita.

III

El contralor de las comunicaciones en territorio Argentino se hará en las oficinas de: Buenos Aires, C. del Uruguay, Concordia y Monte Caseros. Cada una de estas oficinas contraloreará el servicio cruzado por vía que arranque de ella y que no deba cursar ninguna de las otras tres para llegar a destino: Buenos Aires el de Martín Chico, Concepción del Uruguay el de Paysandú, Concordia el del Salto y Monte Caseros el de Santa Rosa.

IV

Para el servicio con el Brasil y Europa, convenido por cada una de las Direcciones Generales de Correos

y Telégrafos de las dos Repúblicas con la Dirección General de Telégrafos Brasileña, se hará el préstamo de vías de una Administración a otra, a fin de que pueda efectuarse el intercambio directo, mediante las tasas reducidas que se establecerán oportunamente.

V

La conservación de las líneas aéreas, así como su reparación, estarán a cargo de la Dirección General en cuya jurisdicción se hallen implantadas. El cable de Concepción del Uruguay a Paysandú, así como los que en lo sucesivo se lancen en el Río Uruguay para este servicio, serán conservados y reparados por cualquiera de las dos Administraciones.

En fe de lo cual y para constancia, se labra la presente acta, que es firmada en dos ejemplares del mismo tenor.

JUAN RAMPÓN.

MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ.

1900

Uruguay—Argentina

Convento Telegráfico

Celebrado en Buenos Aires el 30 de Julio de 1900.

Entre el Señor Director General de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay Doctor Honoré Roustan, y el Director General de Correos y Telégrafos de la República Argentina Don Miguel García Fernández, con el propósito de convenir las condiciones en que se harán el préstamo de líneas de una a otra Administración y el servicio telefónico, se acuerdan las siguientes bases de un Convenio *ad referendum*:

I

Una vez ligadas las líneas del Telégrafo Nacional Uruguayo con las de la Dirección General de Telégrafos del Brasil por Rivera-Livramento, o San Eugenio-Quarahy, en los casos de interrupción de la vía Paso de los Libres-Uruguayana, o de la línea del Telégrafo Nacional Uruguayo vías Rivera-Livramento o San Eugenio-Quarahy, la Administración Argentina podrá dar

curso por éstas y la Uruguaya por aquélla, a su servicio de y para el Brasil, en las siguientes condiciones:

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina abonará a la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay:

a) Dos centésimos de peso oro (0.02) por palabra, de cada uno de los despachos simples destinados al Brasil, más lo que corresponda a la línea brasileña, según la zona de destino.

b) Un centésimo de peso oro (0.01) por palabra de los despachos noticiosos para diarios del Brasil, más lo que corresponda a la línea brasileña.

c) Dos centésimos de peso oro (0.02) por palabra, más lo que corresponde a otras líneas, de acuerdo con los convenios firmados por el Brasil, de los telegramas para puntos no mencionados en los incisos precedentes.

d) Dos centésimos de peso oro (0.02) por palabra, en los despachos del Brasil para cualquier oficina del Telégrafo Nacional Uruguayo, más lo que corresponda a otras líneas, cuando sean dirigidos a las demás oficinas de la República Oriental del Uruguay.

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay abonará a la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina:

e) Dos centésimos de peso oro (0.02) por palabra en los despachos simples procedentes del Brasil y destinados a cualquier oficina del Telégrafo de la Nación Argentina.

f) Seis centésimos de peso oro (0.06) por palabra en los despachos simples procedentes del Brasil y destinados a cualquiera de las oficinas de la República, o de la Convención Argentina.

g) El cincuenta por ciento (50 %) de las tasas fijadas en los incisos e) y f) de este artículo, cuando los telegramas sean noticiosos para diarios y procedentes del Brasil.

h) Dos centésimos de peso oro (0.02) por palabra, más de lo que corresponda a otras líneas, en los telegramas para los países no mencionados en los incisos precedentes.

i) Dos centésimos de peso oro (0.02) por palabra, más lo que corresponda a la línea brasileña, en los despachos procedentes de la República Oriental del Uruguay y destinados al Brasil.

II

El servicio de préstamo de vía a que se refiere el artículo anterior no podrá hacerse por más de diez días consecutivos — contados desde la fecha en que se produzca la interrupción de las líneas que lo motiven — sobre la base de las tarifas reducidas que se fijan. Pasado este plazo, la Administración que efectuó el préstamo de vía, percibirá de la otra, las tarifas fijadas para el servicio internacional en el Convenio de fecha 25 de Enero de 1899, más lo que el Brasil le cobre por los despachos procedentes de su país.

III

Cuando por interrupción de la red interna de cualquiera de los dos países haya necesidad de utilizar

las líneas de la Administración vecina para hacer llegar los despachos a su destino, por ejemplo: de Montevideo a Martín Chico, Buenos Aires, Concepción del Uruguay y Paysandú; de Uruguay a Paysandú, Martín Chico, Montevideo y Buenos Aires, etc., se hará el servicio de préstamo de vía mediante la tasa uniforme, para todos los casos, de: cinco centésimos de peso oro (0.05) por las diez primeras palabras, computándose dirección y firma, y veinticinco diez milésimos de igual moneda (0.0025) por cada palabra subsiguiente en los despachos simples.

Para que los despachos mencionados no entorpezcan el arreglo de cuentas, deberán ser transmitidos con la indicación: *Por préstamo de vía*, puesta en Observaciones; y sólo serán contraloreados en las oficinas de ambas Administraciones que les den la primera salida o entrada a la línea vecina, por ejemplo: el despacho de Montevideo para Paysandú se contraloreará en Montevideo y Buenos Aires; el del Uruguay para Buenos Aires, en Uruguay y Paysandú.

IV

Cuando el estado de las líneas y del servicio telegráfico lo permitan, podrán celebrarse conferencias telefónicas entre las oficinas de ambos países, ligadas directamente, que en oportunidad se determinarán:

a) Obtenida la conformidad de las dos oficinas entre las cuales ha de celebrarse la conferencia, el interesado deberá citar a su corresponsal por medio de un telegrama tasado.

b) Ninguna conferencia podrá durar más de trein-

ta minutos (30'); y será facultativo de las oficinas interrumpirlas después de diez minutos (10') si así conviniere al servicio.

c) Las conferencias se abonarán por las personas, y en las oficinas que las soliciten.

d) Fijase en veinticinco centésimos de peso oro (0.25) la tarifa de las conferencias telefónicas que un país pagará al otro por cada cinco minutos (5') o fracción.

V

Los telegramas que se crucen entre las dos Direcciones Generales de Correos y Telégrafos conteniendo noticias de interés público para ser transcriptos en las pizarras de las oficinas y de las Bolsas de Comercio, como ser: salidas de vapores, movimiento comercial, estado del tiempo y de los ríos, nombramientos de funcionarios, etc., serán considerados de servicio y trasmitidos gratuitamente.

VI

Los servicios determinados en los artículos I y II se efectuarán directamente siempre que sea posible el préstamo de vía por parte de una Administración hacia la otra.

En fe de lo cual y para constancia, se firma la presente en dos ejemplares de un mismo tenor, por el Señor Director General de Correos y Telégrafos de la República Argentina, en Buenos Aires, a treinta

días del mes de Julio de mil novecientos, y por el Señor Director General de Correos y Telégrafos de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, a los catorce días del mes de Agosto del mismo año.

HONORÉ ROUSTAN.

MIGUEL GARCÍA FERNÁNDEZ.

1900

Uruguay - Argentina

Acuerdo Sanitario

Celebrado en Buenos Aires el 19 de Septiembre de 1900.

En Buenos Aires, a diez y nueve de septiembre de mil novecientos, reunidos el señor Presidente del Consejo Nacional de Higiene de la República Oriental del Uruguay doctor E. Fernández Espiro y el señor Presidente del Departamento Nacional de Higiene de la República Argentina doctor Carlos S. Malbrán, con el propósito de hacer más eficaces las garantías que ofrece el tratamiento sanitario, acordando a la navegación y al comercio en general todas aquellas facilidades compatibles con ellas, han convenido las siguientes bases para el tratamiento que ha de aplicarse a los buques procedentes de puertos infectados o sospechosos de peste bubónica:

1.° Solicitar de los respectivos Gobiernos la derogación de las disposiciones vigentes, de acuerdo con el Convenio de fecha 15 de Noviembre de 1899.

2.° La observación sanitaria empezará a contarse desde la salida del puerto infectado o sospechoso de peste, siempre que los buques conduzcan Inspector Sanitario, y éste haya practicado la inspección médi-

ca de los pasajeros y tripulantes y la desinfección de todos los equipajes que se embarquen, operaciones que se repetirán conjuntamente con la desinfección del buque en el puerto de llegada. Dicha observación será de cinco y de cuatro días respectivamente, para los buques que procedan de puertos infectados o sospechosos.

3.° Los buques que no conduzcan Inspector serán sometidos a la observación de cinco a cuatro días, según su procedencia, a contar de la inspección médica y desinfección que se practique a su llegada.

4.° Los buques infectados por haber tenido o tener enfermos entre los pasajeros y tripulantes, o epizootias en las ratas a bordo, sufrirán diez días de observación, contados después de la desinfección que se practique a su llegada.

5.° Serán sometidos a la desinfección los equipajes de pasajeros y tripulantes, las encomiendas postales, todo objeto de uso personal o doméstico y los trapos en cualquier acondicionamiento.

6.° No serán admitidos artículos u objetos pertenecientes al equipaje de los pasajeros, que a juicio de las autoridades sean considerados como capaces de transmitir el germen y no sean susceptibles de desinfección.

7.° La correspondencia y las cargas serán admitidas sin restricción alguna.

8.° Cuando llegue al puerto un buque, aun con la declaración de no haber tenido novedad en el viaje, pero que, por circunstancias especiales, haya lugar a considerarlo sospechoso, será sometido al tratamien-

to sanitario que acuerdan ambas corporaciones, como consecuencia de la investigación practicada en cada caso.

9.º Las disposiciones de este Acuerdo podrán ser modificadas siempre que se alterara sustancialmente el estado sanitario de los países a cuyas procedencias deben ser aplicadas.

10. Las medidas indicadas se aplicarán desde la promulgación de las ordenanzas que dictarán las dos corporaciones.

11. Estas bases serán sometidas a la aprobación de los respectivos Gobiernos.

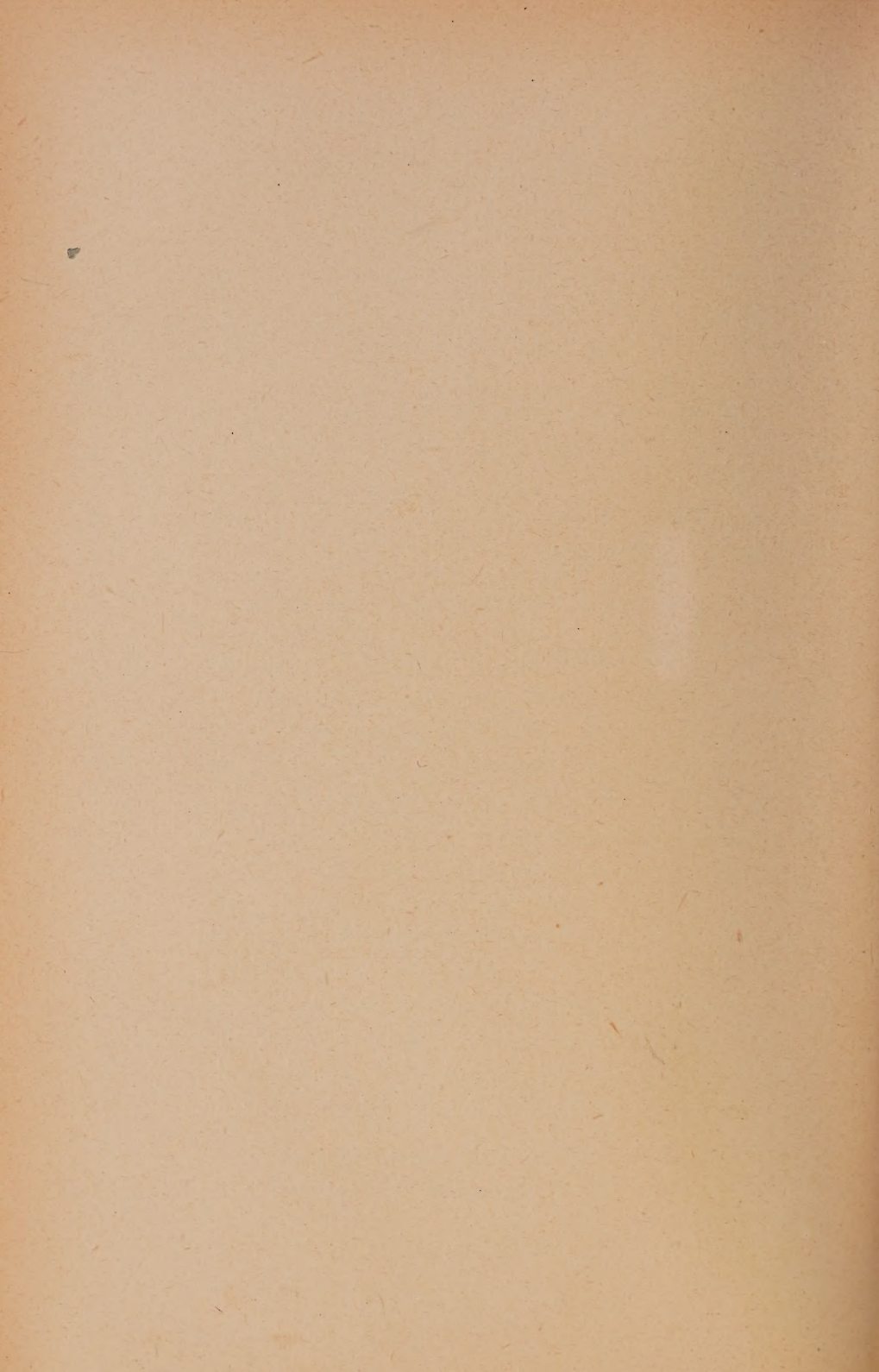
ARTÍCULO ADICIONAL

Las autoridades sanitarias uruguayas y argentinas, en caso de la aparición de una enfermedad exótica—peste, cólera o fiebre amarilla—en cualquiera de los dos países, practicarán la desinfección, en los puertos infectados o sospechosos, de los buques destinados al país indemne, así como la de los equipajes de sus pasajeros y tripulantes.

Esta operación, contraloreada por delegados sanitarios del país que se precave, constituirá la base del tratamiento sanitario que éste aplique, sin perjuicio de las medidas complementarias de observación que se estipulen para cada una de dichas enfermedades, debiendo ser llevadas a la práctica, en caso de peste, las disposiciones pertinentes del precedente Acuerdo.

E. FERNÁNDEZ ESPIRO.
CARLOS S. MALBRÁN.

Ezequiel Castilla,
Secretario.



1901

Uruguay—Portugal

Declaración relativa al Tratado de Extradición de Criminales de 27 de Setiembre de 1878

Celebrada en Montevideo el 23 de Enero de 1901.

No fué ratificada.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones de la República Oriental del Uruguay, S. E. el Señor Doctor Manuel Herrero y Espinosa, Ministro del Ramo, y S. S. el Señor Constancio Roque da Costa, Encargado de Negocios de Su Majestad Fidelísima, hicieron la siguiente declaración:

Reconociendo los Gobiernos que respectivamente representan, la necesidad de modificar el inciso 1.º del artículo XVIII del Tratado de Extradición de Criminales vigente entre los dos Países, por el cual se establece que la prisión preventiva sólo procede en el caso de tratarse de los nacionales del Estado reclamante, ambos Plenipotenciarios, debidamente autorizados al efecto, han convenido en que dicho inciso sea sustituido por el siguiente:

“Queda entendido que la prisión preventiva será concedida, cualquiera que sea la nacionalidad del re-

fugiado, con la promesa de presentar la parte reclamante los documentos indicados en el artículo V.”

La presente declaración tendrá la misma duración del Tratado de Extradición celebrado en 27 de Septiembre de 1878 y canjeadas sus ratificaciones en 13 de Agosto de 1883.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman y sellan el presente Protocolo en dos ejemplares, en Montevideo, a los veintitrés días del mes de Enero del año mil novecientos uno.

(L. S.) MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

(L. S.) CONSTANCIO ROQUE DA COSTA.

1901

Uruguay-Paraguay

Convenio Sanitario

Celebrado en Montevideo el 5 de Marzo de 1901.

En Montevideo, a cinco de Marzo de mil novecientos uno, reunidos el Presidente del Consejo Nacional de Higiene de la República Oriental del Uruguay y el Presidente del Consejo Nacional de Higiene de la República del Paraguay, el primero expuso que, a nombre de la Corporación que preside, acepta la forma de adhesión al Convenio argentino-uruguayo, hecho por la República del Paraguay con la Argentina, y acepta también las cláusulas ampliatorias, acordadas por convenio de las autoridades sanitarias paraguayas y argentinas, con fecha 27 de Febrero de 1901, dejando, no obstante, constancia de que esas cláusulas no significan la derogación de ninguna de las medidas consignadas en el Acuerdo Sanitario argentino-uruguayo de 19 de Septiembre de 1900.

El señor Presidente del Consejo Nacional de Higiene del Paraguay manifestó que aceptaba la aclaración anterior, por cuanto entendía que las cláusulas propuestas no alteraban en nada el Convenio sanitario, a que su país se había adherido antes, sino que era un complemento del mismo.

En virtud de las manifestaciones precedentes, se

acordó consignar en la presenta acta las bases del acuerdo, que son como sigue:

1.º Desinfección e inspección médica de los pasajeros, desinfección de los buques en el puerto infectado o sospechoso antes de la partida y bajo el contralor de un representante de la Sanidad del país que se precave, y término de la observación sanitaria para puertos sucios y sospechosos.

2.º Como medida de previsión, estas disposiciones podrán ser eventualmente llevadas a la práctica cuando las reparticiones consideren justificada la sospecha de la existencia de la peste, aun antes de que tenga lugar su confirmación. Este hecho no implicará la declaración oficial de la existencia de la peste, que quedará subordinada al resultado ulterior de la investigación científica correspondiente.

3.º Subordinar las medidas restrictivas impuestas a las comunicaciones fluviales de ambos países, a la eficacia de la defensa instituída en la localidad invadida.

4.º Tomar en consideración, en dichas medidas, las circunstancias que materialmente pueden concurrir a atenuar la posibilidad del contagio, como la distancia y dificultades de comunicación que separen los puertos infectados de los no infectados.

5.º Y para constancia se firman dos actas del mismo tenor.

FACUNDO D. INSEFRÁN.

E. FERNÁNDEZ ESPIRO.

Antonio Harán,
Secretario.

1901

Uruguay-España

Notas relativas a la supresión de legalizaciones en las comisiones rogatorias

*Datadas en Montevideo el 13 de Abril, 3 y 6 de Mayo
de 1901.*

Sancionadas por ley de 10 de Julio de 1901.

Legación de España en Montevideo.

Montevideo, 13 de Abril de 1901.

Señor Ministro:

En vista de las dificultades y retrasos que origina a la pronta administración de justicia, así como de los perjuicios que suele irrogar a los interesados el requisito de la legalización exigida en las comisiones rogatorias, y teniendo en cuenta que todas las naciones europeas han suprimido dicho trámite en los documentos que cursados por la vía diplomática no permiten dudar de su autenticidad, el Gobierno de Su Majestad la Reina Regente de España, penetrado de las indudables ventajas que en todos sentidos habría de reportar a ambos Gobiernos el prescindir desde luego de la expresada legalización, me ha ordenado

solicitar del de esta República el asentimiento necesario para cursar sin legalización, todas las comisiones rogatorias que, tanto en materia civil como en criminal, pasen de Gobierno a Gobierno por conducto de sus respectivos Agentes Diplomáticos o Consulares, acreditados en ambos países. Por tanto, y en cumplimiento de las órdenes recibidas, dado lo provechoso de la medida que se propone por la debida reciprocidad, me cabe la honra de preguntar a V. E. si el Gobierno de la República Oriental del Uruguay acepta la modificación expresada y se halla dispuesto, como el de Su Majestad, a ponerla inmediatamente en práctica.

Con este motivo, aprovecho gustoso la oportunidad para reiterar a V. E. el testimonio de mi más distinguida consideración.

FELIPE GARCÍA ONTIVEROS Y SERRANO.

A S. E. el Doctor Don Manuel Herrero y Espinosa,
Ministro de Relaciones Exteriores, etc.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Montevideo, 3 de Mayo de 1901.

Señor Ministro:

S. E. el Señor Presidente de la República, a quien he dado conocimiento de la nota de V. E., fecha 19 de Abril ppdo., proponiendo a nombre de su Gobierno la supresión de la legalización consular en los exhortos

o comisiones rogatorias que las autoridades competentes de ambos países se dirijan en materia civil y criminal por conducto de los Agentes Diplomáticos o Consulares respectivos, me ha autorizado para manifestar a V. E. que acepta la proposición contenida en su nota, por considerarla muy conveniente a la pronta administración de justicia, y tendiente a facilitar la tramitación de exhortos sin retardos y gastos inútiles, desde que la autenticidad de dichos documentos está demostrada en el hecho de ser presentados por vía diplomática o consular.

En consecuencia de lo expuesto, y tratándose de un compromiso internacional, el P. E., en cumplimiento de las prescripciones constitucionales, elevará estas notas reversales a la aprobación de la Honorable Asamblea General, debiendo prevenir a V. E. que lo en ellas pactado, sólo tendrá ejecución después de la sanción legislativa.

Tan pronto como V. E. me manifieste su conformidad, se dirigirá al Cuerpo Legislativo el Mensaje correspondiente.

Entretanto, me es grato renovar a V. E. las seguridades de mi alta consideración.

MANUEL HERRERO Y ESPINOSA.

Al Señor Ministro de España.

Legación de España en Montevideo.

Montevideo, 6 de Mayo de 1901.

Señor Ministro:

He tenido la honra de recibir su atenta nota fecha 3 del corriente, en la que me participa que S. E. el Señor Presidente de la República ha tenido a bien aceptar la proposición que en nombre de Su Majestad he formulado en mi nota de 19 de Abril próximo pasado, para suprimir desde luego la legalización en las comisiones rogatorias que, tanto en materia civil como en criminal, pasen de Gobierno a Gobierno por conducto de sus respectivos Agentes Diplomáticos o Consulares. Añade V. E. que el Señor Presidente, en cumplimiento de preceptos constitucionales, entiende que este compromiso internacional no puede entrar en vigor hasta tanto la Honorable Asamblea General de la República le otorgue su alta aprobación, a cuyo fin me hace saber V. E. que tan pronto como le notifique mi conformidad se dirigirá al Cuerpo Legislativo el Mensaje correspondiente. En su consecuencia, manteniendo el criterio que verbalmente he tenido la honra de exponer a V. E. sobre el procedimiento para llegar al acuerdo propuesto, ruego a V. E. tenga a bien solicitar de S. E. el Señor Presidente de la República la venia necesaria para dirigir al Cuerpo Legislativo el Mensaje correspondiente, rogando a V. E., por mi parte, que interponga su valioso influjo a fin de que se llegue lo antes posible al acuerdo propuesto y deseado por el Gobierno Español y que tan conveniente es para la mejor y más rápida administración de justicia en nuestros respectivos países.

Con este motivo me complazco en reiterar a V. E. el testimonio de mi más distinguida consideración.

FEEIPE GARCÍA ONTIVEROS Y SERRANO.

A S. E. el Doctor Don Manuel Herrero y Espinosa,
Ministro de Relaciones Exteriores.

1901

Uruguay — Italia

Convenio Postal

Celebrado en Roma el 14 de Mayo de 1901.

Canjeadas las ratificaciones en Roma, el 25 de Julio de 1902.

Con el fin de resolver amigablemente las dificultades surgidas por la interpretación de algunas disposiciones de la Convención principal de la Unión Universal de los Correos, respecto a la liquidación de los derechos de tránsito de las correspondencias cambiadas entre el Uruguay e Italia y establecer normas que eviten en lo futuro nuevas contestaciones, — entre el Gobierno del Uruguay, representado por S. E. el Señor Daniel Muñoz, Ministro de la República del Uruguay cerca de S. M. el Rey de Italia, y el Gobierno Italiano, representado por S. E. el Honorable Julio Prinetti, Ministro de Negocios Extranjeros de S. M. el Rey de Italia, valiéndose de la facultad concedida por el artículo XXI de la Convención principal de la Unión Postal Universal estipulada en Wáshington el quince

de Junio de mil ochocientos noventa y siete, se ha firmado el presente Convenio:—

ARTÍCULO I

El Departamento de Correos de Italia renuncia a percibir de la Dirección General de Correos y Telégrafos del Uruguay, derechos de tránsito marítimos por las valijas y correspondencias sueltas expedidas del Uruguay y por vapores italianos, desde el año 1887 hasta la expiración del presente Convenio.

ARTÍCULO II

El Departamento de Correos de Italia renuncia igualmente a todo derecho de tránsito territorial sobre las valijas y correspondencias sueltas procedentes del Uruguay y encaminadas a su destino por intermedio del Correo italiano, desde el año 1887 hasta la expiración del presente Convenio, quedando reconocidos los derechos percibidos por la Administración italiana para el transporte de dicha correspondencia a través de otros territorios extranjeros.

ARTÍCULO III

La Dirección General de Correos y Telégrafos del Uruguay, renuncia por su parte, por el mismo período consignado en las bases anteriores, a percibir del Departamento de Correos de Italia, derechos de tránsito territorial, tanto terrestre como fluvial, por las valijas y correspondencias sueltas procedentes de Italia y dirigidas a la República Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile y demás países para los cuales el Correo uruguayo pueda servir de intermedio.

ARTÍCULO IV

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay se compromete a mantener a los vapores italianos mientras esté en vigencia este Convenio, las ventajas y privilegios de paquetes de que gozan actualmente, a condición de que estén dotados de médicos y elementos permanentes de desinfección todos aquellos vapores que conduzcan sesenta o más personas entre pasajeros y tripulantes. Igualmente se compromete el Gobierno del Uruguay a conceder a los vapores italianos todas las ulteriores y más amplias facilidades que fuesen acordadas a los vapores transatlánticos extranjeros durante el período por el cual quede en vigor el presente Convenio.

ARTÍCULO V

El presente Convenio surtirá todos sus efectos desde la fecha del canje de las ratificaciones correspondientes y regirá por tiempo indeterminado; pero cada una de ellas podrá renunciarlo mediante aviso dado a la otra parte con un año de anticipación.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convención y han aplicado sus sellos respectivos.

Hecho en Roma en doble original, en texto italiano y español, el catorce de Mayo del año mil novecientos uno.

(L. S.) DANIEL MUÑOZ.

(L. S.) GIULIO PRINETTI.

1901

Uruguay- Gran Bretaña

C onvenio Postal

*Celebrado en Montevideo el 1.º de Julio de 1901 y en
Londres el 14 de Mayo del mismo año.*

El Departamento de Correos de la Gran Bretaña e Irlanda y la Administración de Correos del Uruguay, convienen en efectuar un canje regular de encomiendas entre el Reino Unido y el Uruguay, basado en la Convención de Encomiendas Postales de Wáshington del 15 de Junio de 1897. Las disposiciones que siguen regirán, no solamente para las encomiendas canjeadas directamente entre el Reino Unido y el Uruguay, sino también para las que se envíen de tránsito, de uno de ambos países por intermedio del otro.

I

1. Las encomiendas expedidas del Reino Unido al Uruguay no excederán del peso de once libras inglesas, y las expedidas del Uruguay al Reino Unido, de 5 kilogramos.

II

1. -Ambas Administraciones garantizan el derecho de tránsito por sus territorios, de las encomiendas de, o para cualquier país con el cual tengan canje de encomiendas y comprometen su responsabilidad a este efecto dentro de los límites determinados por el artículo X, siguiente.

2. No habiendo arreglo en contrario entre las Administraciones corresponsales, el transporte de encomiendas así canjeadas entre países no limítrofes, se efectuará a descubierto.

III

El franqueo de las encomiendas será obligatorio, excepto en el caso de reexpedición.

IV

1. Por cada encomienda enviada del Reino Unido al Uruguay, y viceversa, el Correo de origen abonará al de destino, por su servicio territorial, la suma de 1 franco 25 céntimos. A esta suma se agregarán 2 francos más cuando la Administración de destino provea también el servicio marítimo.

2. El monto del franqueo a pagarse por las encomiendas canjeadas entre el Uruguay y el Reino Unido, será fijado en cada caso por la Administración de origen, de acuerdo con sus propios reglamentos.

V

En el caso de encomiendas originarias de, o remitidas por uno de los dos países contratantes, por intermedio del otro país, el Correo del país intermedio será acreditado por el otro país con las sumas que le correspondan, se acuerdo con los cuadros que se canjearán mutuamente.

VI

El Correo del país de destino puede percibir de los destinatarios, por la entrega de las encomiendas y por llenar las formalidades de Aduana, un impuesto que no exceda de 25 céntimos por encomienda.

VII

Las encomiendas a que se refiere el presente Convenio no podrán ser gravadas con otros derechos que los contemplados por los diferentes artículos de este Convenio.

VIII

Por la reexpedición de encomiendas de un país a otro, así como por la devolución de encomiendas no entregadas, se percibirá de los destinatarios, o de los remitentes, según el caso, un porte suplementario basado de acuerdo con las tasas fijadas por el artículo IV.

IX

1. Es prohibido enviar por correo:

- a) Encomiendas que contengan cartas o notas con carácter de carta, animales vivos, con excepción de las abejas en cajas a propósito, o artículos cuya admisión no esté autorizada por las leyes de Aduana u otras de cada país. Una encomienda puede, sin embargo, contener un sobre abierto en su forma más sencilla.
- b) Encomiendas que contengan sustancias explosivas o inflamables, y, en general, sustancias cuya conducción sea peligrosa.

2. Si una encomienda que contraviene a alguna de estas prohibiciones llegase a ser entregada por una Administración a la otra, ésta procederá en el modo y forma prescriptos por sus leyes o reglamentos internos.

3. Ambas Administraciones se comunicarán una lista de los objetos prohibidos, sin asumir, empero, responsabilidad alguna con respecto a la Policía, a la Aduana, o a los remitentes de encomiendas.

X

1. En todo caso de pérdida, sustracción o avería, excepto en los de fuerza mayor, el remitente, y en su defecto y a su pedido, el destinatario, tendrá derecho a una indemnización equivalente al importe real de la pérdida, sustracción o avería, a menos que el daño

haya sido causado por negligencia del remitente o proceda de la naturaleza misma de la cosa y siempre que la indemnización no exceda de 25 francos. El remitente de una encomienda perdida, cuyo contenido haya sido completamente destruido en el Correo, tendrá también derecho a la devolución del franqueo.

2. La obligación de pagar la indemnización incumbe a la Administración de que depende la Oficina remitente. Queda reservado a esta Administración el recurso contra la Administración responsable, es decir, contra la Administración en cuyo territorio haya tenido lugar la pérdida, violación o avería.

3. Mientras no se pruebe lo contrario, la responsabilidad incumbirá a la Administración que, habiendo recibido la encomienda sin hacer observación, no pueda probar la entrega al destinatario, ni, si hubiese lugar a ello, la transmisión regular a la Administración siguiente.

4. El pago de la indemnización al remitente o al destinatario se hará a la brevedad posible y, a más tardar, en el plazo de un año a contar del día de la reclamación. La Administración responsable estará obligada a reembolsar sin demora a la Administración remitente, el importe de la indemnización abonada por ella.

5. Queda entendido que la reclamación no será admitida sino en el plazo de un año a contar del día del depósito de la encomienda en el correo; pasado ese término, el reclamante no tendrá derecho a ninguna indemnización.

6. Si la pérdida, sustracción o avería ocurriera en

curso de transporte entre las Oficinas de canje de ambos países, y no fuese posible constatar el territorio o el servicio en que tuvo lugar la pérdida, sustracción o avería, cada Administración pagará la mitad de la indemnización.

7. La responsabilidad de las Administraciones cesa con la entrega de las encomiendas a sus dueños.

XI

El costo de los receptáculos en que se canjeen valijas de encomiendas entre ambos países, será prorrateado por igual entre ambas Administraciones.

XII

1. La legislación interna del Reino Unido y la del Uruguay será aplicable en todo aquello que no esté previsto por las estipulaciones contenidas en el presente Convenio.

2. Las Administraciones se comunicarán de tiempo en tiempo las disposiciones de sus leyes o reglamentos aplicables al transporte de encomiendas por Correo.

XIII

Ambas Administraciones indicarán las Oficinas o localidades que admiten el canje internacional de encomiendas, regularán el modo de transmisión de éstas y fijarán todas las medidas de orden y detalle necesarias para asegurar la ejecución del presente Convenio.

XIV

Este Convenio subrogará el Convenio fechado el 22 de Enero y el 23 de Febrero de 1891. Entrará en vigencia el 1.º de Enero de 1901 y caducará mediante aviso pasado con un año de anticipación.

Hecho en duplicado en Montevideo, el primero de Julio de mil novecientos uno y en Londres el catorce de Mayo de mil novecientos uno.

FRANCISCO GARCÍA Y SANTOS.
LONDONDERRY.

1901

Uruguay—Argentina

Protocolo relativo al Tratado General de Arbitraje

Celebrado en Buenos Aires el 8 de Junio de 1901.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, S. E. el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay Doctor Gonzalo Ramírez y S. E. el Ministro del ramo, Doctor Amancio Alcorta, convinieron en ampliar a doce meses más el plazo prorrogado por el Protocolo de 5 de Junio de 1900, a que se refiere el artículo XVIII del Tratado General de Arbitraje, firmado en esta Capital, entre los infrascriptos, el 8 de Junio del año 1899, para el canje de sus ratificaciones.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, debidamente autorizados, firman y sellan, por duplicado, el presente Protocolo Adicional, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de Junio de mil novecientos uno.

(L. S.) GONZALO RAMÍREZ.

(L. S.) AMANCIO ALCORTA.

1901

Uruguay—Argentina

Artículos adicionales al Convenio sobre importación y exportación de ganado

*Celebrados en Buenos Aires el 25 de Septiembre de
1901.*

No fueron ratificados.

Reunidos en el Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina S. E. el Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay doctor Gonzalo Ramírez y S. E. el Señor Ministro del Ramo Doctor Amancio Alcorta, debidamente autorizados al efecto, han acordado en los siguientes artículos adicionales al Convenio sobre importación y exportación de ganado entre ambos Países firmado en Buenos Aires el veintiséis de octubre de mil ochocientos noventa y nueve:

ARTÍCULO I

Es entendido que la enunciación que en el Convenio se hace de determinados puertos, no obsta al derecho que cada Estado tiene y podrá ejercer según le con-

venga de habilitar otros puertos de su territorio para el mismo tráfico a que el Convenio se refiere.

ARTÍCULO II

En los casos de muermo, peste bovina, fiebre aftosa o pleuroneumonía contagiosa, la denuncia del Convenio podrá ser suplida por temperamentos que se acuerden con la otra parte contratante, siempre que a juicio del Poder Ejecutivo salvaguarden los intereses de la higiene y de la ganadería nacional.

ARTÍCULO III

Queda entendido que las cuarentenas e inoculaciones mencionadas en el artículo II del citado Convenio serán impuestas en el caso en que el ganado importado no sea acompañado de los certificados prescritos por el artículo III.

Firmado y sellado por duplicado en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de Septiembre del año mil novecientos uno.

(L. S.) GONZALO RAMÍREZ.

(L. S.) AMANCIO ALCORTA.

1901

Uruguay—Argentina

Protocolo adicional al Tratado de Arbitraje General de 8 de Junio de 1899

Celebrado en Buenos Aires el 21 de Diciembre de 1901.

Canjeadas las ratificaciones en Buenos Aires el 18 de Enero de 1902.

Reunidos en el Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina SS. EE. el Señor doctor Gonzalo Ramírez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay y el Señor doctor Amancio Alcorta, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, conformes en el propósito de modificar el Tratado General de Arbitraje celebrado entre ambos Gobiernos en 8 de Junio de 1899, en la parte que trata de la formación del Tribunal Arbitral y con el objeto de asegurar su constitución sin los inconvenientes propios de un Tribunal permanente, han convenido en lo siguiente:

El artículo 3.º del Tratado referido queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO III

“ En cada caso ocurrente se constituirá el Tribunal Arbitral que deba resolver la controversia suscitada. Si no hubiera conformidad en la constitución del Tribunal, éste se compondrá de tres Jueces.”

“ Cada Estado nombrará un Arbitro y éstos designarán el tercero.”

“ Si no pudiesen ponerse de acuerdo sobre esta designación, la hará el Jefe de un tercer Estado que indicarán los Arbitros nombrados por las partes. No poniéndose de acuerdo para este último nombramiento, cada parte designará una Potencia diferente y la elección del tercer Arbitro será hecha por las dos Potencias así designadas.”

“ El Arbitro así elegido será de derecho Presidente del Tribunal. No podrá nombrarse Arbitro tercero a la persona que en ese carácter haya sentenciado ya en un juicio arbitral con arreglo a este Tratado.”

El presente protocolo será ratificado y canjeado simultáneamente con el Tratado de Arbitraje del que formará parte integrante.

En fe de lo cual lo firman en dos ejemplares en la ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de Diciembre de mil novecientos uno.

(L. S.) GONZALO RAMÍREZ.

(L. S.) AMANCIO ALCORRÍA.

1902

Uruguay—Estados Unidos de América—Argentina—Bolivia—Colombia—Costa Rica—República Dominicana—El Salvador—Guatemala—Haití—Honduras—México—Nicaragua—Paraguay—Perú—Venezuela.

**Protocolo sobre adhesión a las Convenciones
de La Haya de 1899**

Considerando: Que los Delegados a la Conferencia Internacional de las Repúblicas americanas creen que la opinión pública en las naciones que aquí representan aumenta de una manera constante, en el sentido de favorecer vivamente la aplicación más amplia de los principios de Arbitramento: que las Repúblicas americanas dirigidas por los mismos principios y responsabilidades del gobierno democrático y ligadas por crecientes intereses mutuos, pueden por sí mismas conservar la paz del Continente, y que la paz estable entre ellas será el propulsor más eficaz de su desarrollo nacional, así como del bienestar y grandeza comercial de sus pueblos.

En consecuencia, convienen en el siguiente

PROYECTO

ARTÍCULO I

Las Repúblicas americanas representadas en la Conferencia Internacional de México, no signatarias de las tres Convenciones firmadas en La Haya el 29 de Julio de 1899, reconocen los principios consignados en ellas, como parte del Derecho Público Internacional Americano.

ARTÍCULO II

La adhesión respecto de las Convenciones que tienen el carácter de abiertas, una vez ratificadas por los Gobiernos respectivos, será comunicada por éstos y por la vía diplomática al de los Países Bajos para sus efectos.

ARTÍCULO III

Siendo de notoria conveniencia general que las diferencias cuya solución se convenga someter á arbitraje, se confieran a la jurisdicción de un Tribunal de tan alta importancia como lo es la Corte de Arbitramento de La Haya, así como también que las Naciones americanas no signatarias de la Convención que creó esa benéfica institución, puedan ocurrir a ella en uso de un derecho reconocido y aceptado, y tomando, además, en consideración el ofrecimiento de los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos de México, la Conferencia confiere a

dichos Gobiernos el encargo de negociar con las demás Potencias signatarias de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, la adhesión de las Naciones americanas no signatarias de la misma Convención que así lo solicitaren.

Por la Delegación del Uruguay: JUAN CUESTAS. Por la Delegación de Guatemala: ANTONIO LAZO ARRIAGA, FRANCISCO ORLA. Delegados de México: G. RAIGOSA, E. PARDO (JR.), JOAQUÍN D. CASASÚS, ALFREDO CHAVERO, JOSÉ LÓPEZ-PORTELLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, FRANCISCO L. DE LA BARRA, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por la Delegación Argentina: ANTONIO BERMEO, LORENZO ANADÓN. Por la Delegación del Perú: ISAAC ALZAMORA, MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE. El Delegado de Venezuela firma *ad referendum*; y además, advierte que no quedan comprendidas en este Tratado, por lo que a su país se refiere, las cuestiones de navegación ni las que con ellas se relacionan. Por la Delegación de Venezuela: M. M. GALAVÍS. J. B. CALVO, Delegado de Costa Rica. Delegado de Haití: J. N. LÉGER. Delega-

dos de la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL, QUINTÍN GUTIÉRREZ. CECILIO BÁEZ, Delegado del Paraguay. FERNANDO E. GUACHALLA, Delegado de Bolivia. BALTASAR ESTUPINIÁN, Delegado de El Salvador. RAFAEL REYES, Delegado de Colombia. Por la Delegación de Honduras y como Delegado de Nicaragua: F. DÁVILA, WILLIAM I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER, VOLNEY W. FOSTER. Delegados de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO IV

Para que se pueda llegar del modo más satisfactorio y rápido a la aplicación más amplia y menos restringida de los principios de justo arbitramento, y con el fin de que se pueda conocer con toda exactitud la forma más adelantada y mutuamente ventajosa en la cual dicho principio pueda ser expresado en una Convención que habrá de firmarse entre las Repúblicas americanas, se suplica respetuosamente al Presidente de México, se sirva hacer constar, por una cuidadosa investigación, los propósitos de los distintos Gobiernos representados en esta Conferencia, respecto de la forma más adelantada por medio de la cual pudiera concertarse una Convención general de arbitramento, capaz de reunir el voto aprobatorio y

la ratificación final de las Naciones representadas en la Conferencia, y que al terminar dicha investigación prepare un proyecto para dicha Convención general que llene las aspiraciones de todas las Repúblicas, y que, si es posible, forme protocolos parciales, a fin de poner en práctica dicho proyecto, o bien, si esto no fuere practicable, presente a la próxima Conferencia esa correspondencia con el informe respectivo.

México, Enero quince de mil novecientos dos.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Delegación de Guatemala: ANTONIO LAZO ARRIAGA, FRANCISCO ORLA. Delegados de México: G. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, E. PARDO (JR.), PABLO MACEDO, ALFREDO CHAVERO, F. L. DE LA BARRA, MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. J. N. LÉGER, Delegado de Haití. Delegación del Perú: ISAAC ALZAMORA, MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE. Delegación de los Estados Unidos de América: WILLIAM I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER, VOLNEY W. FOSTER. Delegación Argentina: A. BERMEJO, LORENZO ANADÓN, J. B. CALVO, Delegado de Costa Rica. Por la Delegación de Honduras y como Dele-

gado de Nicaragua: F. DÁVILA. CECILIO BÁEZ, Delegado del Paraguay. FERNANDO E. GUACHALLA, Delegado de Bolivia: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL, QUINTÍN GUTIÉRREZ, Delegados de la República Dominicana, RAFAEL REYES, Delegado de Colombia. Delegación de El Salvador: F. A. REYES, BALTASAR ESTUPINIÁN.

1902

Uruguay — Argentina — Bolivia — Colombia — Costa Rica — Chile — República Dominicana — Ecuador — El Salvador — Estados Unidos de América — Guatemala — Haití — Honduras — México — Nicaragua — Paraguay y Perú.

**Convención para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas**

Celebrada en México el 27 de Enero de 1902.

No fué ratificada.

Sus Excelencias el Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los intere-

ses de la América, a los siguientes Señores Delegados:

Por el Uruguay, Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina, Excmo. Señor Doctor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia, Excmo. Señor Doctor Don Fernando E. Guachalla.

Por Colombia, Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica, Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile, Excmo. Señor Don Alberto Bles Gana, Excmo. Señor Doctor Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana, Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador, Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Doctor Don Baltasar Estupinián.

Por los Estados Unidos de América, Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barrett.

Por Guatemala, Excmo. Señor Doctor Don Antonio Lazo Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití, Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras, Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México, Excmo. Señor Licenciado Don Jenaro Raigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo (jr.), Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado Don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua, Excmo. Señor Don Luis F. Corea, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay, Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú, Excmo. Señor Doctor Don Isaac Almazora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Doctor Don Manuel Alvarez Calderón;

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran *ad referendum*, han convenido en celebrar una Convención para la protección de las obras literarias y artísticas, en los términos siguientes:

ARTÍCULO I

Los Estados signatarios se constituyen en Unión para reconocer y proteger los derechos de propiedad literaria y artística, de conformidad con las estipulaciones de la presente Convención.

ARTÍCULO II

En la expresión “obras literarias y artísticas” se comprenden los libros, escritos, folletos de todas clases, cualquiera que sea la materia de que traten y cualquiera que sea el número de sus páginas; las obras dramáticas o dramático-musicales; las coreografías, las composiciones musicales, con o sin palabras; los dibujos, las pinturas, las esculturas, los grabados; las obras fotográficas, las esferas astronómicas o geográficas; los planos, croquis o trabajos plásticos relativos a geografía o geología, a topografía o arquitectura, o a cualquiera ciencia; y, en fin, queda comprendida toda producción del dominio literario y artístico que pueda publicarse, por cualquier medio de impresión o reproducción.

ARTÍCULO III

El derecho de propiedad de una obra literaria o artística comprende, para su autor o causahabientes, la facultad exclusiva de disponer de ella, de publicarla, de enajenarla, de traducirla, o de autorizar su traducción, y de reproducirla en cualquiera forma, ya total, ya parcialmente.

Los autores pertenecientes a uno de los países signatarios o sus causahabientes, gozan en los otros países signatarios, y por el tiempo determinado en el artículo V, del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras.

ARTÍCULO IV

Para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad de una obra, es condición indispensable que el autor o sus causahabientes, o su representante legítimo, dirijan al departamento oficial que cada Gobierno firmante designe, una solicitud pidiendo el reconocimiento de aquel derecho, acompañada de dos ejemplares de su obra, que quedarán en el departamento referido.

Si el autor o sus causahabientes desearan que el derecho de propiedad les sea reconocido en otro de los países signatarios, acompañarán, además, a su solicitud, tantos ejemplares de su obra, cuantos sean los países que designen.

El mencionado departamento oficial distribuirá entre dichos países los ejemplares referidos, acompañados de una copia del certificado, a efecto de que sea en aquéllos reconocido el derecho de propiedad del autor.

Las omisiones en que el departamento pudiera incurrir a este respecto, no darán derecho al autor o sus causahabientes para entablar reclamaciones contra el Estado.

ARTÍCULO V

Los autores que pertenezcan a uno de los países signatarios, o sus causahabientes, gozarán en los otros países los derechos que las leyes respectivas acuerden actualmente o acordaren en lo sucesivo a los nacionales, sin que el goce de esos derechos pueda exceder del término de protección acordado en el país de origen.

Para las obras compuestas de varios volúmenes que no se publiquen juntamente, del mismo modo que para los boletines o entregas de sociedades literarias o científicas, o de particulares, el plazo de propiedad comenzará a contarse, respecto de cada volumen, boletín o entrega, desde la respectiva fecha de su publicación.

ARTÍCULO VI

Se considerará como país de origen de una obra, el de su primera publicación, o si ésta ha tenido lugar simultáneamente en varios de los países signatarios, aquel cuya legislación fije el término de protección más corto.

ARTÍCULO VII

Las traducciones lícitas son protegidas como las obras originales. Los traductores de obras acerca de las cuales no exista o se hubiere extinguido el derecho de propiedad garantizado, podrán obtener respecto de sus traducciones, los derechos de propiedad decla-

rados en el artículo III; mas no podrán impedir la publicación de otras traducciones de la misma obra.

ARTÍCULO VIII

Los artículos de periódicos podrán reproducirse, salvos los plazos que designen las leyes locales, citándose la publicación de donde se tomen, y expresándose el nombre del autor, si apareciere en ella.

ARTÍCULO IX

El derecho de propiedad se reconocerá, salvo prueba en contrario, a favor de las personas cuyos nombres o pseudónimos reconocidos estén indicados en la obra literaria o artística, o en la solicitud a que se refiere el artículo IV de esta Convención.

ARTÍCULO X

Pueden publicarse en la prensa periódica, sin necesidad de autorización alguna, los discursos pronunciados o leídos en asambleas deliberantes, ante los Tribunales de justicia o en las reuniones públicas.

ARTÍCULO XI

La reproducción de fragmentos de obras literarias o artísticas en publicaciones destinadas a la enseñanza o para crestomatías, no confiere ningún derecho de propiedad y puede, por consiguiente, ser hecha libremente en todos los países signatarios.

ARTÍCULO XII

Se considerarán reproducciones ilícitas las apropiaciones indirectas no autorizadas de una obra literaria o artística y que no presenten el carácter de obra original.

Será también considerada ilícita la reproducción, en cualquier forma, de una obra íntegra o de la mayor parte de ella, acompañada de notas o comentarios, a pretexto de crítica literaria, de ampliación o complemento de la obra original.

ARTÍCULO XIII

Toda obra falsificada podrá ser secuestrada en los países signatarios en que la obra tenga derecho a la protección legal, sin perjuicio de originar las indemnizaciones o las penas en que incurran los falsificadores, según las leyes del país en que el fraude se haya cometido.

ARTÍCULO XIV

Cada uno de los Gobiernos de los países signatarios conservará la libertad de permitir, vigilar o prohibir la circulación, representación y exposición de cualquiera obra o producción, respecto de las cuales tuviere que ejercer ese derecho la autoridad competente.

ARTÍCULO XV

La presente Convención comenzará a regir, entre los Estados signatarios que la ratifiquen, tres meses

después de que comuniquen su ratificación al Gobierno Mexicano, y permanecerá en vigor entre todos ellos, hasta un año después de la fecha en que se denuncie por alguno. Esta denuncia será dirigida al Gobierno Mexicano, y no tendrá efecto sino respecto del país que la haya hecho.

ARTÍCULO XVI

Los Gobiernos de los Estados signatarios declararán, al aprobar la presente Convención, si aceptan la adhesión de las naciones que no han tenido representación en la Segunda Conferencia Internacional Americana.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman la presente Convención, y ponen en ella el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la Ciudad de México, el día veintisiete de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares, en castellano, inglés y francés respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por
la República Argentina: ANTONIO
BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por
Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA.

Por Colombia: RAFAEL REYES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQU. WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALTASAR ESTUPINIÁN. Por los Estados Unidos de América: W. I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER, VOLNEY W. FOSTER. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Haití: J. N. LÉGER. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: G. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.), JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, ALFREDO CHAVERO, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicaragua: F. DÁVILA. Por Paraguay: CECILIO BÁEZ. Por Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE.

1902

Uruguay — Argentina — Bolivia — Colombia — Costa Rica — Chile — República Dominicana — Ecuador — El Salvador — Estados Unidos de América — Guatemala — Haití — Honduras — México — Nicaragua — Paraguay — Perú.

Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales

Celebrada en México el 27 de Enero de 1902.

No fué ratificada.

Sus Excelencias el Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los intere-

ses de la América, a los siguientes Señores Delegados:

Por el Uruguay, Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina, Excmo. Señor Doctor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia, Excmo. Señor Doctor Don Fernando E. Guachalla.

Por Colombia, Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica, Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile, Excmo. Señor Don Alberto Blest Gana, Excmo. Señor Don Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana, Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador, Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Don Baltasar Estupinán.

Por los Estados Unidos de América, Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barret.

Por Guatemala, Excmo. Señor Don Antonio Lazo

Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití, Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras, Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México, Excmo. Señor Licenciado Don Jenaro Raigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo, (jr.), Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua, Excmo. Señor Don Luis F. Correa, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay, Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú, Excmo. Señor Doctor Don Isaac Almazora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Doctor Don Manuel Alvarez Calderón;

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran *ad referendum*, han convenido en celebrar una Convención sobre canje de publicaciones oficiales, científicas, literarias e industriales, en los siguientes términos:

ARTÍCULO I

Los Gobiernos signatarios se comprometen a enviarse recíprocamente cinco ejemplares de cada una de las siguientes publicaciones oficiales:

I. Los documentos parlamentarios, administrativos y de estadística que salgan a luz en cada uno de los países contratantes.

II. Las obras de toda especie, publicadas o subvencionadas por los respectivos Gobiernos signatarios.

III. Los mapas geográficos generales o particulares, los planos topográficos y otras obras de este género.

ARTÍCULO II

La obligación estipulada en el artículo anterior existirá aun cuando las obras referidas fueran impresas fuera del territorio del país cuyo Gobierno les concediera subvención o auxilio.

ARTÍCULO III

Cada uno de los Gobiernos firmantes hará formar una colección, tan completa como fuere posible, de los libros ya publicados oficialmente en su respectivo territorio, especialmente los relativos a su historia, estadística y geografía, y la remitirá a los demás al hacer la primera remesa.

ARTÍCULO IV

A medida que cada uno de los Gobiernos que firman esta Convención reciba las publicaciones que le fue-

ren remitidas por los demás, hará aparecer oportunamente en el respectivo “Diario Oficial”, una lista de ellas, a fin de que el público pueda concurrir a consultarlas en la Oficina o Biblioteca en que sean puestas a su disposición, designando al mismo tiempo el lugar y la imprenta de donde cada obra procede, para que llegue a conocimiento de los que deseen adquirirlas.

ARTÍCULO V

En cuanto lo permitan las estipulaciones de la Unión Postal Universal, los Gobiernos contratantes declararán libres de porte la correspondencia oficial y las publicaciones de canje entre los países respectivos, de conformidad con los acuerdos particulares que entre ellos se celebren al efecto.

ARTÍCULO VI

Cada país contratante remitirá las publicaciones a que se refiere esta Convención a la Legación o Consulado que tenga acreditado ante el Gobierno de los otros, a fin de que lleguen por ese órgano a poder del Departamento, Oficina o Biblioteca que cada Gobierno designe para recibirlas. A falta de agentes indirectos, la remisión se hará de Gobierno a Gobierno.

ARTÍCULO VII

Para la vigencia de esta Convención, no es indispensable que su ratificación sea efectuada simultánea-

mente por las Naciones signatarias. La que la apruebe lo comunicará, ya sea por la vía diplomática o directamente, a las demás, y este procedimiento hará las veces de canje.

ARTÍCULO VIII

A contar del día en que se efectúe la ratificación en la forma indicada en el artículo anterior, esta Convención quedará vigente por tiempo indefinido, y la Nación que desee denunciarla, deberá avisar su determinación a las demás, y sólo quedará obligada un año después de haber dado dicho aviso.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios y Delegados firman el presente Tratado y ponen en él el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de México, el día veintisiete de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares escritos en castellano, inglés y francés respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por la República Argentina: ANTONIO BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA. Por Colombia: RAFAEL RE-

YES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQU. WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALTASAR ESTUPINIÁN. Por los Estados Unidos de América: W. I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER, VOLNEY W. FOSTER. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Haití: J. N. LÉGER. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: G. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.), JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, ALFREDO CHAVERO, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicaragua: F. DÁVILA. Por Paraguay: CECILIA BÁEZ. Por Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE.

1902

Uruguay—Argentina—Bolivia—Colombia—Ecuador—Paraguay—Perú

**Convención para la reunión de un Congreso
Geográfico en Río de Janeiro**

Celebrada en México el 27 de Enero de 1902.

No fué ratificada.

Considerando: Que, de acuerdo con la Exposición de Motivos anexa y la Memoria de exploraciones presentada a la Conferencia Internacional Americana por el Señor General Don Rafael Reyes, resulta practicable el pensamiento de comunicar entre sí las tres grandes hoyas hidrográficas de la América del Sud estableciendo la navegación desde el Orinoco hasta el Plata por el interior del Continente;

Que la incomunicación actual mantiene substraído en su gran parte, a la industria y al comercio del mundo, un territorio inmenso y dotado de inagotables riquezas naturales;

Que entre los problemas estudiados por la Conferencia Internacional reunida en México, el de la comunicación interior en Sud América ofrece la mayor trascendencia para la civilización;

Que a fin de preparar la ejecución de dicho pensamiento, conviene que las Naciones del Orinoco, del Amazonas y del Plata, y las de sus afluentes respectivos, se reúnan en asamblea para estudiar la mejor forma de llevar a término el propósito;

Que no encontrándose ya representadas en esta Conferencia las Repúblicas del Brasil y Venezuela, a cuyos dominios pertenecen las salidas del Amazonas y del Orinoco, es necesario arbitrar la forma en que debe ser requerido su concurso,—

Las Naciones signatarias han convenido lo siguiente:

1.º La celebración de una Conferencia Geográfica fluvial de los países ribereños, que se reunirá en la ciudad de Río de Janeiro dentro del término de un año.

2.º El Excelentísimo Gobierno de la República Argentina queda encargado de gestionar del Excelentísimo Gobierno de los Estados Unidos del Brasil la adhesión y el asentimiento necesarios para la reunión de dicha Conferencia.

3.º Se solicita de ambos Gobiernos que gestionen las demás adhesiones de los países ribereños y hagan la convocatoria respectiva.

4.º La Conferencia mencionada funcionará con arreglo al siguiente programa, en cuanto no sea modificado por acuerdo de los Gobiernos Brasileño, Argentino y Venezolano:

a) Organizar Comisiones geográficas de exploración.

b) Formular reglamentos para las diversas Comisiones.

c) Establecer los presupuestos de gastos que demanden los trabajos.

d) Fijar las cuotas proporcionales que correspondan a cada uno de los Gobiernos interesados.

e) Organizar una Oficina Internacional destinada a concentrar los datos de las exploraciones y presentar a los Gobiernos un proyecto general sobre comunicación de las hoyas hidrográficas.

f) Estudiar todos los asuntos conexos con el propósito anterior, que se refieren a la más rápida ejecución de la obra y a las medidas que los Gobiernos interesados deben acordar particularmente o en común, para promover el bienestar de esas regiones.

México, Enero veintisiete de mil novecientos dos.

JUAN CUESTAS, Delegado del Uruguay. LORENZO ANADÓN, Delegado de la República Argentina. FERNANDO E. GUACHALLA, Delegado de Bolivia. Por el Paraguay: CECILIO BÁEZ. Por el Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN. Por Colombia: el Delegado RAFAEL REYES. Por el Ecuador: L. F. CARBO. El Secretario: V. M. Maurtua.

1902

Uruguay — Argentina — Bolivia — Colombia — Costa Rica — Chile — República Dominicana — Ecuador — El Salvador — Guatemala — Haití — Honduras — México — Nicaragua — Paraguay — Perú.

Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Marcas de Comercio y de Fábrica.

Celebrado en México el 27 de Enero de 1902.

No fué ratificado.

SS. EE. el Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los in-

tereses de la América, a los siguientes señores Delegados:

Por el Uruguay: Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina: Excmo. Señor Doctor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia: Excmo. Señor Doctor Don Fernando Guachalla.

Por Colombia: Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica: Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile: Excmo. Señor Don Alberto Blest Gana, Excmo. Señor Don Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana: Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador: Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador: Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Don Baltasar Estupinián.

Por los Estados Unidos de América: Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barret.

Por Guatemala: Excmo. Señor Don Antonio Lazo Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití: Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras: Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México: Excmo. Señor Licenciado Don Jenaro Raigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo, (jr.), Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado Don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua: Excmo. Señor Don Luis F. Corea, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay: Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú: Excmo. Señor Doctor Don Isaac Alzamora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Don Manuel Alvarez Calderón;

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran *ad referendum*, han convenido en celebrar un Tratado sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica, en los términos siguientes:

ARTÍCULO I

Los ciudadanos de cada uno de los Estados signatarios gozarán en los otros de las mismas ventajas acordadas a los nacionales, en cuanto a las marcas de comercio o de fábrica, a los modelos y dibujos industriales y a las patentes de invención.

En consecuencia, tendrán derecho a igual protección y a idénticos recursos contra el ataque a sus derechos.

ARTÍCULO II

Son asimilados a los nacionales para los efectos de este Tratado, los extranjeros domiciliados en alguno de los países signatarios, o que tengan en él un establecimiento industrial o comercial.

ARTÍCULO III

Las patentes de invención, las de dibujos o modelos industriales y las marcas de comercio o de fábrica, otorgadas en el país de origen, podrán ser importadas a los demás Estados signatarios, mediante el depósito y publicación que exijan las leyes de éstos, y serán protegidas en igual forma que las otorgadas en el mismo Estado. Esta disposición no obsta a la obligación que establezcan las leyes nacionales, de fabricar en el país los objetos que sean materia de privilegio.

ARTÍCULO IV

Los Agentes Consulares de la Nación a que pertenezcan o donde se hallen establecidos los propietarios de patentes, dibujos, modelos o marcas, serán considerados como representantes legítimos de dichos propietarios para cumplir las formalidades y condiciones exigidas con el objeto de dar curso a la solicitud y obtener el registro de las referidas patentes, dibujos, modelos o marcas, en el país donde se intente hacerlos valer.

ARTÍCULO V

Se considera país de origen aquel en que el concesionario tiene su principal establecimiento o su domicilio.

Si no lo tuviere en ninguno de los Estados contratantes, se reputará país de origen el Estado signatario de la nacionalidad del propietario.

ARTÍCULO VI

Para conservar el derecho de prioridad de las patentes de invención, modelos, dibujos o marcas importados, se concede el plazo de un año respecto de las primeras y de seis meses en cuanto a los demás, contados desde el otorgamiento de las patentes hasta la presentación de la solicitud ante la autoridad respectiva del Estado en el cual se intente importar el título.

ARTÍCULO VII

Las cuestiones que se susciten sobre la prioridad de la invención y sobre la adopción de una marca, se resolverán teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de las patentes o marcas respectivas, en los países en que se otorgaron.

ARTÍCULO VIII

Se considera invención: un nuevo modo de fabricar productos industriales; un nuevo aparato mecánico o manual, que sirva para fabricar dichos productos; el descubrimiento de un nuevo producto industrial, y la aplicación de medios perfeccionados, con el objeto de conseguir resultados superiores a los ya conocidos.

Los dibujos y modelos de fábrica se encuentran sujetos a las reglas de las invenciones o descubrimientos, en lo que no sea especial a estos últimos.

Se reputa marca de comercio o de fábrica, el signo, emblema o nombre externo que el comerciante adopta y aplica a sus mercaderías y productos para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantes que negocian en artículos de la misma especie.

ARTÍCULO IX

No podrán obtener patente de invención:

I. Las invenciones y descubrimientos que hubieren tenido publicidad en algún Estado signatario, o no, de este Tratado.

II. Los que fueren contrarios a la moral y a las leyes del país en donde las patentes hayan de expedirse o reconocerse.

ARTÍCULO X

Tampoco se podrán obtener o reconocer marcas de comercio o de fábrica que se encuentren en el caso del párrafo segundo del artículo precedente.

ARTÍCULO XI

La propiedad de la patente de invención o de la marca fabril o comercial, comprende la facultad de disponer de la invención o de usar de la marca y el derecho de transferirlas a otros.

ARTÍCULO XII

El número de años del privilegio será el que fijen las leyes del país en que se pretenda hacerlo efectivo. Ese plazo podrá ser limitado al señalado por las leyes del Estado en que primitivamente se acordó la patente, si fuere menor.

ARTÍCULO XIII

Las responsabilidades civiles y criminales en que incurran los que dañen los derechos del inventor, se perseguirán y penarán con arreglo a las leyes del país en que se haya ocasionado el perjuicio.

También las falsificaciones, adulteraciones o uso indebido de las marcas de comercio o de fábrica, se

perseguirán con sujeción a las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa la infracción.

ARTÍCULO XIV

La declaratoria de nulidad de una patente o concesión de marca hecha en el país de origen, será comunicada en forma auténtica a los demás países signatarios, para que administrativamente se resuelva, ya sobre la solicitud de reconocimiento que se pretenda de la patente o marca obtenida en el extranjero, ya sobre el efecto que tal declaratoria deba producir respecto de la patente o marca antes importada a dichos países.

ARTÍCULO XV

Los Tratados sobre patentes de invención y marcas de comercio o de fábrica, otorgados anteriormente entre los países signatarios del presente, quedarán substituídos por éste, desde que quede perfeccionado, en cuanto a las relaciones entre dichos países signatarios.

ARTÍCULO XVI

Harán veces de canje del presente Tratado las comunicaciones que dirijan los Gobiernos que lo ratifiquen al de México, para que éste lo haga saber a los demás Estados contratantes. El mismo Gobierno de México les comunicará también la ratificación, si la otorgase.

ARTÍCULO XVII

Hecho el canje por dos o más Estados en la forma del artículo anterior, este Tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

ARTÍCULO XVIII

La Nación signataria que creyere conveniente desligarse del Tratado, hará saber el desahucio en la forma indicada en el artículo XVI; y un año después de recibida la comunicación respectiva, cesará la vigencia del Tratado respecto a la Nación que lo hubiere denunciado.

ARTÍCULO XIX

En la forma prevenida por el artículo XVI podrán adherir al Tratado las Naciones de América que originariamente no lo subscriban.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman el presente Tratado y ponen en él el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de México, el día veintisiete de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares, escritos en castellano, inglés y francés respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por la República Argentina: ANTONIO BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA. Por Colombia: RAFAEL REYES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQU. WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALTAZAR ESTUPINIÁN. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Haití: J. N. LÉGER. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: J. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.), JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, ALFREDO CHAVERO, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicaragua: F. DÁVILA. Por Paraguay: CECILIO BÁEZ. Por Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE.

1902

Uruguay—Argentina—Bolivia—Colombia—Costa Rica—Chile—República Dominicana—Ecuador—El Salvador—Estados Unidos de América—Guatemala—Haití—Honduras—México—Nicaragua—Paraguay—Perú.

Convención para la formación de los Códigos de Derecho Internacional Público y Privado de América.

Celebrada en México el 27 de Enero de 1902.

No fué ratificada.

Sus Excelencias el Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los in-

tereses de la América, a los siguientes señores Delegados:

Por el Uruguay: Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina: Excmo. Señor Doctor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia: Excmo. Señor Doctor Don Fernando E. Guachalla.

Por Colombia: Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica: Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile: Excmo. Señor Don Alberto Blest Gana, Excmo. Señor Don Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana: Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador: Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador: Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Don Baltasar Estupinián.

Por los Estados Unidos de América: Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barret.

Por Guatemala: Excmo. Señor Doctor Don Antonio Lazo Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití: Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras: Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México: Excmo. Señor Licenciado Don Jenaro Raigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo, (jr.), Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado Don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua: Excmo. Señor Don Luis F. Corea, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay: Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú: Excmo. Señor Doctor Don Isaac Alzamora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Don Manuel Alvarez Calderón;

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran *ad referendum*, han convenido en celebrar una Convención para la formación de los Códigos de Derecho Internacional Público y Privado de América, en los siguientes términos:

ARTÍCULO I

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y los Ministros de las Repúblicas signatarias, acreditados en Wáshington, nombrarán una Comisión de cinco jurisconsultos de América y dos europeos de reconocida reputación, que se encargarán de organizar, en el intervalo de la actual a la futura Conferencia, y a la mayor brevedad posible, un Código de Derecho Internacional Público y otro de Derecho Internacional Privado, que regirán las relaciones entre las Naciones de América.

ARTÍCULO II

Redactados dichos Códigos, la Comisión los hará imprimir, y los someterá a la consideración de los Gobiernos de las Naciones americanas, para que propongan las observaciones que juzguen convenientes.

ARTÍCULO III

Coordinadas sistemáticamente esas observaciones y revisados los Códigos, conforme a ellas, por la Comisión que los haya redactado, esos Códigos serán nuevamente sometidos a los Gobiernos de las Repúblicas de América, para que los adopten los Estados que así lo tengan a bien, ya sea en la próxima Conferencia Internacional Americana, o ya por medio de Tratados celebrados directamente.

ARTÍCULO IV

La Comisión encargada de la redacción de los Códigos funcionará en la Capital europea o americana que designe el Cuerpo Diplomático autorizado para nombrarla, conforme al artículo I.

Los gastos que ocasione esta Convención, serán cubiertos por los Gobiernos signatarios, en la forma y proporción acordadas para la actual Oficina Internacional de las Repúblicas americanas.

ARTÍCULO V

Los Gobiernos que tengan a bien ratificar la presente Convención, lo comunicarán al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, antes de un año contado desde la clausura de esta Conferencia.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman la presente Convención y ponen en ella el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de México, el día veintisiete de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares escritos en castellano, inglés y francés respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por la República Argentina: ANTONIO BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA. Por Colombia: RAFAEL REYES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQUIN WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALTASAR ESTUPIÑÁN. Por los Estados Unidos de América: W. I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER, VOLNEY W. FOSTER. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Haití: J. N. LÉGER. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: J. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.), JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, ALFREDO CHAVERO, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicaragua: F. DÁVILA. Por Paraguay: CECILIO BÁEZ. Por Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE.

1902

Uruguay—Argentina—Bolivia—Colombia—Costa Rica—Chile—República Dominicana—Ecuador—El Salvador—Estados Unidos de América—Guatemala—Haití—Honduras—México—Nicaragua—Paraguay—Perú.

**Tratado de Extradición de Criminales y Protección
contra el Anarquismo**

Celebrado en México el 28 de Enero de 1902.

No fué ratificado.

Sus Excelencias el Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los intere-

ses de la América, a los siguientes Señores Delegados:

Por el Uruguay: Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina: Excmo. Señor Doctor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Doctor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia: Excmo. Señor Doctor Don Fernando E. Guachalla.

Por Colombia: Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica: Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile: Excmo. Señor Don Alberto Blest Gana, Excmo. Señor Don Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana: Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador: Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador: Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Don Baltasar Estupinián.

Por los Estados Unidos de América: Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barret.

Por Guatemala: Excmo. Señor Doctor Don Antonio Lazo Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití: Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras: Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México: Excmo. Señor Licenciado Don Jenaro Raigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo, (jr.), Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado Don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua: Excmo. Señor Don Luis F. Corea, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay: Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú: Excmo. Señor Doctor Don Isaac Alzamora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Don Manuel Alvarez Calderón;

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran *ad referendum*, han convenido en celebrar un Tratado para la extradición de criminales y para la protección contra el anarquismo, en los siguientes términos:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes convienen en entregarse recíprocamente a las personas acusadas o sentenciadas por autoridad competente, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

I. Que el Estado requeriente tenga jurisdicción para encausar al delincuente que motive la demanda de extradición.

II. Que se invoque la perpetración de un crimen o delito del orden común, que las leyes de los Estados requeriente y requerido castiguen con una pena no menor de dos años de prisión.

III. Si, con motivo del régimen federal de alguna o algunas de las Altas Partes Contratantes, no fuere posible determinar la pena correspondiente al delito por el cual se pide la extradición, se tendrá entonces por base para la demanda, la siguiente lista de delitos:

1. Homicidio, incluso los delitos conocidos con los nombres de parricidio, asesinato, envenenamiento e infanticidio.

2. Estupro y violación.

3. Bigamia.

4. Incendio.

5. Crímenes o delitos cometidos en el mar, a saber:

a) Piratería, según se conoce y define comúnmente en Derecho Internacional.

b) Destrucción o pérdida de un buque, causadas intencionalmente, o conspiración y tentativa

para conseguir dicha destrucción o pérdida, cuando hubieren sido cometidas por alguna persona o personas a bordo de dicho buque en alta mar.

- c) Motín o conspiración por dos o más individuos de la tripulación, o por otras personas a bordo de un buque en alta mar, con el propósito de rebelarse contra la autoridad del Capitán o Comandante de dicho buque, o con el de apoderarse por fraude o violencia de dicho barco.

6. Allanamiento de morada por el cual se entenderá el acto de asaltar la casa de otro y de entrar en ella durante la noche, con el fin de cometer un delito.

7. El acto de forzar la entrada a las Oficinas públicas, Bancos, Casas de Banca, Cajas de Ahorro, Compañías de Depósito o de Seguros, con el fin de cometer en ellas un robo, así como los robos que resulten de ese acto.

8. Robo con violencia, entendiéndose por tal, la sustracción por la fuerza de bienes o dinero ajenos, o ejerciendo violencia o intimidación.

9. Falsificación o expendio, o circulación de documentos falsificados.

10. Falsificación o alteración de los actos oficiales del Gobierno o de la autoridad pública, incluso los Tribunales o el empleo o uso fraudulento de algunos de los mismos actos.

11. Falsificación de moneda, sea en metálico o en papel, de títulos o cupones de deuda pública, u otros

títulos de crédito público de billetes de Banco, de sellos, timbres, cuños y marcas de la Nación o de la Administración pública, y el expendio, circulación o uso fraudulento de alguno de los objetos antes mencionados.

12. Importación de instrumentos para falsificar moneda, o billetes de Banco, o papel moneda.

13. Peculado o malversación de fondos públicos, cometidos dentro de la jurisdicción de cualquiera de las Partes Contratantes, por empleados o depositarios públicos.

14. Abuso de confianza cometido con fondos de un Banco de Depósito o de una Caja de Ahorros, o de una Compañía de Depósito organizados conforme a las leyes.

15. Abuso de confianza por una persona o personas a sueldo o salario, en perjuicio de aquel que las tiene a su servicio, cuando el delito está sujeto a una pena conforme a las leyes del lugar donde fué cometido.

16. Plagio de menores o adultos, entendiéndose por tal el hecho de apoderarse de una persona o personas, o detenerlas para exigir dinero por su rescate o para cualquiera otro fin ilegal.

17. Mutilación o inutilización de cualquier miembro principal del cuerpo, y cualquiera otra mutilación intencional que acuse incapacidad para trabajar o la muerte.

18. Destrucción, maliciosa o ilegal, o la tentativa de destrucción de ferrocarriles, trenes, puentes, vehículos, buques u otros medios de comunicación, o de edificios públicos o privados, cuando el acto cometido ponga en peligro la vida humana.

19. Obtener, por medio de amenazas de hacer daño, o de maquinaciones o artificios, dinero, valores u otros bienes muebles, o la compra de los mismos a sabiendas de cómo se han obtenido, cuando estos delitos estén penados con prisión u otro castigo corporal por las leyes de ambos países.

20. Hurto o robo sin violencia, entendiéndose por tal el apoderamiento de efectos, bienes muebles, caballos, ganado vacuno o de otra clase, o de dinero, por valor, al menos, de veinticinco pesos, o recibir a sabiendas propiedades substraídas de ese valor.

21. El conato de alguno de los delitos antes enumerados, cuando esté penado con prisión u otra pena corporal por las leyes de ambas Partes Contratantes.

IV. Que el Estado requeriente presente documentos que, según sus leyes, autoricen la prisión preventiva y el enjuiciamiento del reo.

V. Que el delito o la pena no estén prescriptos, según las leyes de ambos países.

VI. Que el reo, si ha sido sentenciado, no haya cumplido su condena.

ARTÍCULO II

No podrá concederse la extradición por delitos políticos o por hechos que les sean conexos. No serán reputados delitos políticos los actos que estén calificados de anarquismo por la legislación del país requeriente y por la del requerido.

ARTÍCULO III

En ningún caso la nacionalidad de la persona acusada podrá impedir su entrega en las condiciones estipuladas por el presente Tratado; pero ningún Gobierno estará obligado a conceder la extradición de sus propios ciudadanos, sino que podrá entregarlos cuando a su juicio sea conveniente hacerlo.

ARTÍCULO IV

Si la persona cuya extradición se solicita se encuentra sujeta a un procedimiento penal, o está detenida por haber delinquido en el país donde se ha refugiado, deberá diferirse su entrega hasta la conclusión del proceso, o hasta que haya cumplido su condena.

No serán un obstáculo para la entrega, las obligaciones civiles que el acusado tenga contraídas en el país de refugio.

ARTÍCULO V

La extradición acordada no autoriza el enjuiciamiento y castigo del individuo entregado, por delito distinto del que hubiese servido de fundamento a la demanda respectiva, a no ser que tenga conexión con el que la motivó y se funde en las mismas pruebas de la demanda.

Esta estipulación no se aplica a los crímenes o delitos cometidos con posterioridad a la extradición.

ARTÍCULO VI

Si otro u otros Estados, en virtud de estipulaciones de Tratados, solicitan la entrega de un mismo individuo por motivo de diferentes delitos, se atenderá, en primer lugar, al pedido de aquel en cuyo territorio, a juicio del Estado requerido, se haya cometido la infracción más grave. Si los delitos fueran estimados de la misma gravedad, se dará preferencia al Estado que tenga prioridad en el pedido de extradición; y si todos los pedidos tuvieren la misma fecha, el país requerido determinará el orden de la entrega.

ARTÍCULO VII

Las demandas de extradición serán presentadas por medio de los Agentes Diplomáticos o Consulares respectivos; y a falta de éstos, directamente de Gobierno a Gobierno; e irán acompañadas de los siguientes documentos:

I. Respecto de los presuntos delincuentes: copia legalizada de la ley penal aplicable a la infracción que motivare la demanda, y del auto de prisión y demás documentos a que se refiere la fracción IV del artículo I.

II. Respecto de los sentenciados: copia legalizada de la sentencia condenatoria ejecutoriada.

Deberá también acompañarse a la demanda todos los datos y antecedentes necesarios para establecer la identidad de la persona cuya extradición se reclama.

ARTÍCULO VIII

En caso de urgencia, se podrá conceder la detención provisional del individuo reclamado, en virtud de petición telegráfica del Gobierno requeriente al Ministerio de Relaciones Exteriores, o a la autoridad competente del requerido, en la cual se prometa el envío de los documentos indicados en el artículo anterior; pero el detenido será puesto en libertad, si éstos no fueren presentados dentro del término que fije la nación requerida, no excediendo de tres meses, contados desde la fecha del arresto.

ARTÍCULO IX

La demanda de extradición, en cuanto a sus trámites, a la apreciación de la legitimidad de su procedencia y a la admisión y calificación de las excepciones con que pudiese ser impugnada por parte del reo o prófugo reclamado, quedará sujeta, en lo que no se oponga a lo prescrito en este Tratado, a la decisión de las autoridades competentes del país de refugio, las cuales arreglarán sus procedimientos a las disposiciones y prácticas legales establecidas para el caso en el mismo país. Queda garantizado al reo prófugo el derecho de usar el recurso de *hábeas corpus*, o amparo de sus garantías individuales.

ARTÍCULO X

Todos los objetos que se encontraren en poder del acusado, si los hubiere obtenido por medio de la per-

petración del hecho de que se le acusa, o pudieren servir de prueba del delito por el cual se pide su extradición, serán secuestrados y entregados con su persona. Sin embargo, quedarán a salvo los derechos de terceros sobre las cosas secuestradas, si no estuviesen implicadas en la acusación.

ARTÍCULO XI

El tránsito por el territorio de uno de los Estados Contratantes, de algún individuo entregado por tercera Potencia a otro Estado y que no pertenezca al país de tránsito, será concedido mediante la simple presentación, en original o en copia legalizada, de la resolución en que se haya concedido la extradición por el Gobierno del país de refugio.

ARTÍCULO XII

Todos los gastos ocasionados con la extradición de un prófugo serán a cargo del Estado requeriente, exceptuándose las compensaciones de los funcionarios públicos que reciban sueldos fijos.

ARTÍCULO XIII

La extradición de todo individuo culpable de actos de anarquismo puede pedirse siempre que la legislación de los Estados requeriente y requerido, haya establecido la pena para dichos actos. En este caso, la extradición se concederá aun cuando el delito im-

puñado al reclamado tuviere una pena menor de dos años de prisión.

ARTÍCULO XIV

Los Gobiernos contratantes convienen en sujetar a arbitraje las controversias que puedan suscitarse acerca de la interpretación o ejecución de este Tratado, cuando se hayan agotado los medios de arreglo directo.

Cada Parte Contratante nombrará un Arbitro, y los dos Arbitros designarán un tercero para el caso de discordia. La Comisión de Arbitros determinará el procedimiento arbitral en cada caso.

ARTÍCULO XV

El presente Tratado permanecerá en vigor durante cinco años, contados desde el día en que se haga el último canje de ratificaciones, y seguirá en vigor por otros cinco años más, si doce meses antes de que expire el primer período de cinco años no fuere denunciado. En el caso de que alguno o algunos de los Gobiernos lo denunciare, seguirá en vigor entre las otras Partes Contratantes. Esta Convención será ratificada y las ratificaciones se canjearán en la ciudad de México, dentro del término de un año de su firma.

ARTÍCULO XVI

Si algunas de las Altas Partes Contratantes hubieren celebrado ya entre sí tratados de extradición,

quedarán éstos reformados solamente en la parte modificada o alterada por las disposiciones del presente.

Artículo transitorio

Los representantes de Costa Rica, Ecuador, Honduras y Nicaragua firman este Tratado con la reserva de que sus respectivos Gobiernos no entregarán a los delinquentes que merezcan pena de muerte, según la legislación de los países requerientes, sino bajo la promesa de que se les conmutará esa pena por la inmediata inferior.

Si los Gobiernos de las Delegaciones mencionadas mantienen la misma reserva al ratificar el presente Tratado, éste los ligará únicamente con aquellos que aceptan la mencionada condición.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman el presente Tratado y ponen en él el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de México el día veintiocho de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares escritos en castellano, inglés y francés respectivamente, los cuales se depōsitārān en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por
la República Argentina: ANTONIO

BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA. Por Colombia: RAFAEL REYES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQU. WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALDASAR ESTUPINIÁN. Por los Estados Unidos de América: W. I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER, VOLNEY W. FOSTER. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Haití: J. N. LÉGER. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: J. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.), JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, ALFREDO CHAVEIRO, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicaragua: F. DÁVILA. Por Paraguay: CECILIO BÁEZ. Por Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE.

1902

Uruguay — Argentina — Bolivia — Colombia — Costa Rica — Chile — República Dominicana — Ecuador — El Salvador — Estados Unidos de América — Guatemala — Haití — Honduras — México — Nicaragua — Paraguay — Perú.

**Convención sobre el Ejercicio de Profesiones
Liberales**

*Celebrada en México el 28 de Enero de 1902.
No fué ratificada.*

Sus Excelencias el Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú;

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los intere-

ses de América, a los siguientes Señores Delegados:

Por el Uruguay: Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina: Excmo. Señor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia: Excmo. Señor Doctor Don Fernando Guachalla.

Por Colombia: Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica: Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile: Excmo. Señor Don Alberto Blest Gana, Excmo. Señor Don Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana: Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador: Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador: Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Don Baltasar Estupinián.

Por los Estados Unidos de América: Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barret.

Por Guatemala: Excmo. Señor Don Antonio Lazo

Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití: Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras: Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México: Excmo. Señor Licenciado Jenaro Ravigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo, (jr.), Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado Don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua: Excmo. Señor Don Luis Felipe Correa, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay: Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú: Excmo. Señor Doctor Don Isaac Alzamora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Doctor Don Manuel Alvarez Calderón;

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el de Paraguay, los cuales obran *ad referendum*, han convenido en celebrar una Convención para el ejercicio de profesiones liberales, en los siguientes términos:

ARTÍCULO I

Los ciudadanos de cualquiera de las Repúblicas que subscriben la presente Convención, podrán ejercer li-

brememente, en el territorio de las otras, la profesión para la cual estuvieren habilitados, con un diploma o título expedido por la autoridad competente en cada uno de los países signatarios; con tal que dicho diploma o título cumpla con los requisitos establecidos en los artículos IV y V, siempre que la ley del país en que va a ejercerse la profesión no exija para su ejercicio la calidad de ciudadano.

Los certificados de estudios preparatorios o superiores, expedidos en cualquiera de los países que celebran esta Convención, en favor de nacionales de uno de ellos, producirán en todos los demás países contratantes los mismos efectos que les atribuyere la ley de las Repúblicas de donde emanen, siempre que haya reciprocidad y no resulten ventajas superiores a las reconocidas por la legislación del país en que se quiera hacer uso de esos certificados.

ARTÍCULO II

Por lo que respecta a los títulos profesionales procedentes de los Colegios o Universidades de cada Estado, territorio y distrito de Columbia, de los Estados Unidos de América, en vista de que esas instituciones no se hallan bajo el patronato del Gobierno Federal, ni en muchos casos del de los Gobiernos de los Estados, sólo se reconocerán por los países signatarios los títulos o diplomas expedidos por los Colegios o Universidades de los Estados cuya legislación ofreciere reciprocidad y que hubieren sido expedidos según las condiciones prescriptas en el artículo V de esta Convención.

ARTÍCULO III

Cada una de las Partes Contratantes se reserva, sin embargo, el derecho de exigir a los ciudadanos de las otras, que presenten diplomas o títulos de médico o de cualquiera otra profesión relacionada con la Cirugía y la Medicina, incluyéndose también la de farmacéutico, que se sometan a un previo examen general sobre los ramos de la profesión que acredita el título o diploma respectivo, en la forma que cada Gobierno determine.

ARTÍCULO IV

Cada una de las Altas Partes Contratantes pondrá en conocimiento de las otras, cuáles son sus Universidades o cuerpos docentes cuyos títulos o diplomas deban ser aceptados por los demás como válidos para el ejercicio de las profesiones de que trata esta Convención.

Por lo que respecta a la observancia de la disposición anterior por parte de los Estados Unidos de América, el Departamento de Estado de este país pondrá en conocimiento de las otras Repúblicas signatarias, todos los actos legislativos de los respectivos Estados de los Estados Unidos referentes al reconocimiento de los títulos o diplomas de los demás países firmantes, y transmitirá a los distintos Estados de los Estados Unidos, cuya legislación ofreciere reciprocidad, las informaciones que reciba, dando a conocer los títulos y diplomas de los respectivos cuer-

pos docentes o Universidades de las otras Repúblicas que éstas recomendaren como válidas.

Las demás Partes Contratantes reconocerán los títulos y diplomas de las Universidades de los Estados, territorios y el distrito de Columbia de los Estados Unidos, que cada una de ellas eligiere.

No obstante esta disposición, aquellas instituciones docentes de los Estados Unidos que no fueren reconocidas por las demás Repúblicas signatarias y que se consideren con títulos suficientes para serlo, podrán solicitar el reconocimiento de sus diplomas profesionales ante los Gobiernos respectivos, mediante una solicitud acompañada de los justificativos correspondientes, los que serán calificados por la autoridad competente de cada uno de los países contratantes.

ARTÍCULO V

El diploma, título o certificado de estudios preparatorios y superiores, debidamente autenticados, y el certificado de identidad de persona expedido por el respectivo Agente Diplomático o Consular acreditado en la nación que hubiere otorgado cualquiera de esos documentos, producirán los efectos pactados en la presente Convención después que hayan sido registrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país en que se desea ejercer la profesión; debiendo dicho Departamento de Estado poner este trámite en conocimiento de la Cancillería del país de donde el título emana.

ARTÍCULO VI

La presente Convención no altera en manera alguna los Tratados que las Altas Partes Contratantes tengan actualmente en vigor y ofrezcan mayores franquicias.

ARTÍCULO VII

La presente Convención regirá por tiempo indeterminado, pudiendo cualquiera de las Altas Partes Contratantes hacerla cesar, por lo que a ella respecta, un año después de haberla formalmente denunciado a las otras.

No será indispensable para la vigilancia de esta Convención, su ratificación simultánea por todas las Naciones signatarias. La que lo apruebe lo comunicará a las demás por la vía diplomática, y este procedimiento hará las veces de canje.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman la presente Convención y ponen en ella el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de México, el día veintiocho de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares escritos en castellano, inglés y francés respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay JUAN CUESTAS. Por la República Argentina: ANTONIO BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA. Por Colombia: RAFAEL REYES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQU. WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por el Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALTASAR ESTUPINIÁN. Por los Estados Unidos de América: W. I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER VOLNEY W. FOSTER. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Haití: J. N. LÉGER. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: J. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.), JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, ALFREDO CHAVERO, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicaragua: F. DÁVILA. Por Paraguay: CECILIO BÁEZ. Por Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE.

1902

Uruguay - España

Tratado de Arbitraje

Celebrado en México el 28 de Enero de 1902.

Canjeadas las ratificaciones en Montevideo el 21 de Noviembre de 1902.

El Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay y el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Católica en los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos para celebrar un Tratado de Arbitraje con el propósito de que ambos Estados resuelvan pacíficamente toda cuestión que pudiera alterar las relaciones de buena armonía que felizmente existen entre ambas naciones, han convenido en los siguientes artículos:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias, de cualquier naturaleza, que por cualquier causa surgieren entre ellas, en cuanto no afecten a los preceptos de la Constitución de uno u otro país y siempre que no puedan ser resueltas por negociaciones directas.

ARTÍCULO II

No pueden renovarse en virtud de este Convenio, las cuestiones que hayan sido objeto de arreglos definitivos entre ambas Altas Partes. En tal caso, el arbitraje se limitará exclusivamente a las cuestiones que se susciten sobre validez, interpretación y cumplimiento de dichos arreglos.

ARTÍCULO III

Para la decisión de las cuestiones que en cumplimiento de este Convenio se sometieren a arbitraje, las funciones de árbitros serán encomendadas con preferencia a un Jefe de Estado de una de las Repúblicas Hispanoamericanas o a un Tribunal formado por jueces y peritos españoles, uruguayos o hispanoamericanos.

En caso de no recaer acuerdo sobre la designación de árbitros, las Altas Partes Signatarias se someterán al Tribunal Internacional Permanente de Arbitraje, establecido conforme a las resoluciones de la Conferencia de La Haya de 1899, sujetándose en éste y en el anterior caso, a los procedimientos arbitrales especificados en el capítulo III de dichas resoluciones.

ARTÍCULO IV

El presente Convenio permanecerá en vigor durante diez años, contados desde la fecha del canje de sus ratificaciones.

En caso de que, doce meses antes de cumplirse dicho término, ninguna de las Altas Partes Contratan-

tes hubiese declarado su intención de hacer cesar los efectos del presente Convenio, continuará éste siendo obligatorio hasta un año después de que una u otra de las Altas Partes signatarias lo hubiere denunciado.

ARÍCULO V

Este Convenio será sometido por los infrascriptos a la aprobación de sus respectivos Gobiernos y, si mereciese su aprobación y fuese ratificado según las leyes de uno y otro país, se canjearán las ratificaciones en la ciudad de Montevideo, en el término de un año, contado desde la fecha.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios lo han firmado y sellado a los veintiocho días del mes de Enero del año mil novecientos ños.

(L. S.) JUAN CUESTAS.

(L. S.) EL MARQUÉS DE PRAT DE NANTOUILLET.

1902

Uruguay — Argentina — Bolivia — República Dominicana — Guatemala — El Salvador — México — Paraguay y Perú.

Tratado de Arbitraje

Celebrado en México el 29 de Enero de 1902.

Ratificado por el Uruguay el 15 de Abril de 1903. ()*

Los infrascriptos, Delegados a la Segunda Conferencia Internacional Americana por el Uruguay, la República Argentina, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de México y debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han acordado los siguientes artículos:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a la decisión de árbitros todas las controversias

(*) Ratificaciones:

El Salvador: 10 de Julio de 1902.

Guatemala: 12 de Agosto de 1902.

Uruguay: 15 de Abril de 1903.

México: 2 de Mayo de 1903.

Perú: 24 de Diciembre de 1903.

República Dominicana: 14 de Enero de 1905.

que existen o lleguen a existir entre ellas y que no puedan resolverse por la vía diplomática, siempre que a juicio exclusivo de alguna de las naciones interesadas, dichas controversias no afecten ni la independencia ni el honor nacional.

ARTÍCULO II

No se considerarán comprometidos ni la independencia ni el honor nacionales en las controversias sobre privilegios diplomáticos, límites, derechos de navegación y validez, inteligencia y cumplimiento de Tratados.

ARTÍCULO III

En virtud de la facultad que reconoce el artículo XXVI de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya en 29 de Julio de 1899, las Altas Partes Contratantes convienen en someter a la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje que dicha Convención establece, todas las controversias a que se refiere el presente Tratado, a menos que alguna de las Partes prefiera que se organice una jurisdicción especial.

En caso de someterse a la Corte Permanente de La Haya, las Altas Partes Contratantes aceptan los preceptos de la referida Convención, tanto en lo relativo a la organización del Tribunal Arbitral, como respecto a los procedimientos a que éste haya de sujetarse.

ARTÍCULO IV

Siempre que por cualquier motivo deba organizarse una jurisdicción especial, ya sea porque así lo

quiera alguna de las partes, ya porque no llegue a abrirse a ellas la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, se establecerá, al firmarse el compromiso, el procedimiento que se haya de seguir. El Tribunal determinará la fecha y lugar de sus sesiones, el idioma de que haya de hacerse uso, y estará en todo evento investido de la facultad de resolver todas las cuestiones relativas a su propia jurisdicción y aún las que se refieran al procedimiento en los puntos no previstos en el compromiso.

ARTÍCULO V

Si al organizarse la jurisdicción especial no hubiere conformidad de las Altas Partes Contratantes para designar el árbitro, el Tribunal se compondrá de tres jueces. Cada Estado nombrará un árbitro y éstos designarán el tercero. Si no pueden ponerse de acuerdo sobre esta designación, la hará el Jefe de un tercer Estado, que indicarán los árbitros nombrados por las Partes. No poniéndose de acuerdo para este último nombramiento, cada una de las Partes designará una potencia diferente, y la elección del tercero será hecha por las dos potencias así designadas.

ARTÍCULO VI

Las Altas Partes Contratantes estipulan que en caso de disentiimiento grave, o de conflicto entre dos o más de ellas, que haga inminente la guerra, se recurra, en tanto que las circunstancias lo permitan, a los buenos oficios o a la mediación de una o más de las potencias amigas.

ARTÍCULO VII

Independientemente de este recurso, las Altas Partes Contratantes juzgan útil que una o más potencias extrañas al conflicto, ofrezcan espontáneamente, en tanto que las circunstancias se presten a ello, sus buenos oficios o su mediación, a los Estados en conflicto.

El derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediación, pertenece a las potencias extrañas al conflicto, aun durante el curso de las hostilidades.

El ejercicio de este derecho no podrá considerarse jamás, por una o por otra de las Partes contendientes, como un pacto poco amistoso.

ARTÍCULO VIII

El oficio de mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos que puedan haberse producido entre las naciones en conflicto.

ARTÍCULO IX

Las funciones del mediador cesan desde el momento en que se ha comprobado, ya por una de las Partes contendientes, ya por el mediador mismo, que los medios de conciliación propuestos por éste, no son aceptados.

ARTÍCULO X

Los buenos oficios y la mediación, ya que a ellos se recurra por las partes en conflicto, o por iniciativa de las potencias extrañas a él, no tienen otro carácter que el de consejo y nunca el de fuerza obligatoria.

ARTÍCULO XI

La aceptación de la mediación no puede producir el efecto, salvo convenio en contrario, de interrumpir, retardar o embarazar la movilización u otras medidas preparatorias de la guerra. Si la mediación tuviere lugar rotas ya las hostilidades, no se interrumpe por ello, salvo pacto en contrario, el curso de las operaciones militares.

ARTÍCULO XII

En los casos de diferencias graves que amenacen comprometer la paz, y siempre que las potencias interesadas no puedan ponerse de acuerdo para escoger o aceptar como mediadora a una potencia amiga, se recomienda a los Estados en conflicto la elección de una potencia a la cual confíen, respectivamente, el encargo de entrar en relación directa con la potencia escogida por la otra nación interesada, con el objeto de evitar la ruptura de las relaciones pacíficas.

Mientras dura este mandato, cuyo término, salvo estipulación en contrario, no puede exceder de treinta días, los Estados contendientes cesarán toda relación directa con motivo del conflicto, el cual se considerará como exclusivamente deferido a las potencias mediadoras.

Si esas potencias amigas no lograren proponer, de común acuerdo, una solución que fuere aceptable por las que se hallen en conflicto, designarán a una tercera, a la cual quedará confiada la mediación.

Esta tercera potencia, caso de ruptura efectiva de las relaciones pacíficas, tendrá en todo tiempo el en-

cargo de aprovechar cualquier ocasión para procurar el restablecimiento de la paz.

ARTÍCULO XIII

En las controversias de carácter internacional provenientes de divergencia de apreciación de hechos, las Repúblicas signatarias juzgan útil que las partes que no hayan podido ponerse de acuerdo por la vía diplomática, instituyan, en tanto que las circunstancias lo permitan, una Comisión Internacional de Investigación encargada de facilitar la solución de esos litigios, esclareciendo por medio de un examen imparcial y concienzudo, las cuestiones de hecho.

ARTÍCULO XIV

Las Comisiones Internacionales de Investigación se constituyen por convenio especial de las Partes en litigio. El Convenio precisará los hechos que han de ser materia de examen, así como la extensión de los poderes de los Comisionados, y arreglará el procedimiento a que deben éstos sujetarse. La investigación se llevará a término contradictoriamente; y la forma y los plazos que deben en ella observarse, si no se fijaren en el Convenio, serán determinados por la Comisión misma.

ARTÍCULO XV

Las Comisiones Internacionales de Investigación se constituirán, salvo estipulación en contrario, de la misma manera que el Tribunal de Arbitraje.

ARTÍCULO XVI

Es obligación de las potencias en litigio, suministrar, en la más amplia medida que juzguen posible, a la Comisión Internacional de Investigación, todos los medios y facilidades necesarios para el conocimiento completo y la exacta apreciación de los hechos controvertidos.

ARTÍCULO XVII

Las Comisiones mencionadas se limitarán a averiguar la verdad de los hechos, sin emitir más apreciaciones que las meramente técnicas.

ARTÍCULO XVIII

La Comisión Internacional de Investigación presentará a las potencias que la hayan constituido su informe firmado por todos los miembros de la Comisión. Este informe, limitado a la investigación de los hechos, no tiene en lo absoluto el carácter de sentencia arbitral, y deja a las Partes contendientes en entera libertad de darle el valor que estimen justo.

ARTÍCULO XIX

La constitución de Comisiones de Investigación podrá incluirse en los compromisos de Arbitraje, como procedimiento previo, a fin de fijar los hechos que han de ser materia de juicio.

ARTÍCULO XX

El presente Tratado no deroga los anteriores existentes entre dos o más de las Partes Contratantes, en

cuanto den mayor extensión al arbitraje obligatorio. Tampoco altera las estipulaciones sobre arbitraje, relativas a cuestiones determinadas que han surgido ya, ni el curso de los juicios arbitrales que se siguen con motivo de éstas.

ARTÍCULO XXI

Sin necesidad de canje de ratificaciones, este Tratado estará en vigor desde que tres Estados, por lo menos, de los que suscriben, manifiesten su aprobación al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el que lo comunicará a los demás Gobiernos.

ARTÍCULO XXII

Las naciones que no suscriban el presente Tratado podrán adherirse a él en cualquier tiempo. Si alguna de las signatarias quisiere recobrar su libertad, denunciará el Tratado; mas la denuncia no producirá efecto sino únicamente respecto de la nación que la efectúe, y sólo después de un año de formalizada la denuncia. Cuando la nación denunciante tuviere pendientes algunas negociaciones de Arbitraje a la expiración del año, la denuncia no surtirá sus efectos con relación al caso aún no resuelto.

Disposiciones generales

I. El presente Tratado será ratificado tan pronto como sea posible.

II. Las ratificaciones se enviarán al Ministerio de Relaciones Exteriores de México, donde quedarán depositadas.

III. El Gobierno Mexicano remitirá copia certificada de cada una de ellas a los demás Gobiernos Contratantes.

En fe de lo cual han firmado el presente Tratado y le han puesto sus respectivos sellos.

Hecho en la ciudad de México, el día veintinueve de Enero del año mil novecientos dos, en un solo ejemplar, que quedará depositado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se remitirá, por la vía diplomática, copia certificada a los Gobiernos Contratantes.

Por el Uruguay:

(L. S.) JUAN CUESTAS.

Por la República Argentina:

(L. S.) ANTONIO BERMEJO.

(L. S.) LORENZO ANADÓN.

Por Bolivia:

(L. S.) FERNANDO E. GUACHALLA.

Por la República Dominicana:

(L. S.) FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL.

Por Guatemala:

(L. S.) FRANCISCO ORLA.

Por El Salvador:

(L. S.) FRANCISCO A. REYES.

(L. S.) BALTASAR ESTUPINIÁN.

Por Méjico:

- (L. S.) G. RAIGOSA.
- (L. S.) JOAQUÍN D. CASASÚS.
- (L. S.) PABLO MACEDO.
- (L. S.) E. PARDO (JR).
- (L. S.) ALFREDO CHAVERO.
- (L. S.) JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS.
- (L. S.) F. L. DE LA BARRA.
- (L. S.) ROSENDO PINEDA.
- (L. S.) M. SÁNCHEZ MÁRMOL.

Por Paraguay:

- (L. S.) CECILIO BÁEZ.

Por Perú:

- (L. S.) MANUEL ALVÁREZ CALDERÓN.
 - (L. S.) ALBERTO EMORE.
-

1902

Uruguay—Argentina—Bolivia—Colombia—Costa Rica—Chile—República Dominicana—Ecuador—El Salvador—EE. UU. de América—Guatemala—Haití—Honduras—México—Nicaragua—Paraguay—Perú.

Convención relativa a los Derechos de Extranjería

Celebrada en México el 29 de Enero de 1902.

No fué ratificada.

Sus Excelencias el Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú,—

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los intere-

ses de la América, a los siguientes Señores Delegados:

Por el Uruguay: Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina: Excmo. Señor Doctor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia: Excmo. Señor Doctor Don Fernando E. Guachalla.

Por Colonia: Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica: Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile: Excmo. Señor Don Alberto Blest Gana, Excmo. Señor Don Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana: Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Corbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador: Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador: Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Don Baltasar Estupinián.

Por los Estados Unidos de América: Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barrett.

Por Guatemala: Excmo. Señor Don Antonio Lazo Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití: Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras: Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México: Excmo. Señor Licenciado Don Jenaro Raigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo, jr., Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado Don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua: Excmo. Señor Don Luis F. Corea, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay: Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú: Excmo. Señor Doctor Don Isaac Alzamora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Doctor Don Manuel Alvarez Calderón.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran *ad referéndum*, han convenido en celebrar una Convención relativa a los derechos de los extranjeros, en los siguientes términos:

ARTÍCULO I

Los extranjeros gozan de todos los derechos civiles de que gozan los nacionales, y deben hacer uso de ellos, en el fondo, en la forma o procedimiento y en los recursos a que den lugar, absolutamente en los mismos términos que dichos nacionales, salvo lo que disponga la Constitución de cada país.

ARTÍCULO II

Los Estados no tienen ni reconocen a favor de los extranjeros, otras obligaciones o responsabilidades que las que a favor de los nacionales se hallen establecidas por su Constitución y por sus leyes.

En consecuencia, los Estados no son responsables de los daños sufridos por los extranjeros por causa de actos facciosos, o de individuos particulares, y, en general, de los daños originados por casos fortuitos de cualquiera especie, considerándose tales, los actos de guerra, ya sea civil o nacional, sino en el caso de que la autoridad constituída haya sido remisa en el cumplimiento de sus deberes.

ARTÍCULO III

En todos los casos en que un extranjero tenga reclamaciones o quejas del orden civil, criminal o administrativo contra un Estado, o sus nacionales, deberá interponer su demanda ante el tribunal competente del país; y no podrá reclamarse por la vía diplomática, sino en los casos en que haya habido, de parte de ese tribunal, manifiesta denegación de justi-

cia, o retardo anormal, o violación evidente de los principios del Derecho Internacional.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados, firman la presente Convención y ponen en ella el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la Ciudad de México el día veintinueve de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares en castellano, inglés y francés, respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por la República Argentina: ANTONIO BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA. Por Colombia: RAFAEL REYES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQU. WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALTAZAR ESTUPINIÁN. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: J. RAIGOSA, JOA-

QUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.),
JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PA-
BLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, AL-
FREDO CHAVERO, M. SÁNCHEZ MÁR-
MOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicara-
gua: F. DÁVILA. Por Paraguay:
CECILIO BÁEZ. Por Perú: MANUEL
ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO EL-
MORE.

1902

Uruguay — Argentina — Colombia — Costa Rica —
Chile — República Dominicana — Ecuador — El
Salvador — EE. UU. de América — Guatemala —
Haití — Honduras — México — Nicaragua — Para-
guay — Perú.

**Tratado sobre reclamaciones por daños y perjuicios
pecuniarios**

Celebrado en México el 30 de Enero de 1902.

No fué ratificado.

Sus Excelencias el Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, el de la República Argentina, el de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, el de la República Dominicana, el del Ecuador, el de El Salvador, el de los Estados Unidos de América, el de Guatemala, el de Haití, el de Honduras, el de los Estados Unidos Mexicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay y el del Perú,—

Deseando que sus países respectivos fueran representados en la Segunda Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzgaren útiles a los intere-

ses de la América, a los siguientes Señores Delegados:

Por el Uruguay: Excmo. Señor Doctor Don Juan Cuestas.

Por la Argentina: Excmo. Señor Doctor Don Antonio Bermejo, Excmo. Señor Don Martín García Mérou, Excmo. Señor Doctor Don Lorenzo Anadón.

Por Bolivia: Excmo. Señor Doctor Don Fernando Guachalla.

Por Colombia: Excmo. Señor Doctor Don Carlos Martínez Silva, Excmo. Señor General Don Rafael Reyes.

Por Costa Rica: Excmo. Señor Don Joaquín Bernardo Calvo.

Por Chile: Excmo. Señor Don Alberto Blest Gana, Excmo. Señor Don Emilio Bello Codecido, Excmo. Señor Don Joaquín Walker Martínez, Excmo. Señor Don Augusto Matte.

Por la República Dominicana: Excmo. Señor Don Federico Henríquez i Carvajal, Excmo. Señor Don Luis Felipe Corbo, Excmo. Señor Don Quintín Gutiérrez.

Por Ecuador: Excmo. Señor Don Luis Felipe Carbo.

Por El Salvador: Excmo. Señor Doctor Don Francisco A. Reyes, Excmo. Señor Don Baltasar Estupinán.

Por los Estados Unidos de América: Excmo. Señor Henry G. Davis, Excmo. Señor William I. Buchanan, Excmo. Señor Charles M. Pepper, Excmo. Señor Volney W. Foster, Excmo. Señor John Barrett.

Por Guatemala: Excmo. Señor Don Antonio Lazo Arriaga, Excmo. Señor Coronel Don Francisco Orla.

Por Haití: Excmo. Señor Doctor Don J. N. Léger.

Por Honduras: Excmo. Señor Doctor Don José Leonard, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por México: Excmo. Señor Licenciado Don Jenaro Raigosa, Excmo. Señor Licenciado Don Joaquín D. Casasús, Excmo. Señor Licenciado Don Pablo Macedo, Excmo. Señor Licenciado Don Emilio Pardo, jr., Excmo. Señor Licenciado Don Alfredo Chavero, Excmo. Señor Licenciado Don José López-Portillo y Rojas, Excmo. Señor Licenciado Don Francisco L. de la Barra, Excmo. Señor Licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, Excmo. Señor Licenciado Don Rosendo Pineda.

Por Nicaragua: Excmo. Señor Don Luis F. Corea, Excmo. Señor Doctor Don Fausto Dávila.

Por el Paraguay: Excmo. Señor Don Cecilio Báez.

Por el Perú: Excmo. Señor Doctor Don Isaac Alzamora, Excmo. Señor Doctor Don Alberto Elmore, Excmo. Señor Doctor Don Manuel Alvarez Calderón.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, y encontrándolos en buena y debida forma, con excepción de los exhibidos por los representantes de SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de América, el de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran *ad referendum*, han convenido en celebrar un Tratado para someter a la decisión de Arbitros las reclamaciones por daños y perjuicios pecuniarios que no hayan sido resueltas por la vía diplomática, en los términos siguientes:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a Arbitraje todas las reclamaciones por daños y perjuicios pecuniarios que sean presentadas por sus ciudadanos respectivos y que no puedan resolverse amistosamente por la vía diplomática, siempre que dichas reclamaciones sean de suficiente importancia para ameritar los gastos del Arbitraje.

ARTÍCULO II

En virtud de la facultad que reconoce el artículo XXVI de la Convención de La Haya, para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, las Altas Partes Contratantes convienen en someter a la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje que dicha Convención establece, todas las controversias que sean materia del presente Tratado, a menos que ambas partes prefieran que se organice una jurisdicción especial, conforme al artículo XXI de la citada Convención.

En caso de someterse a la Corte Permanente de La Haya, las Altas Partes Contratantes aceptan los preceptos de la referida Convención, en lo relativo a la organización del Tribunal Arbitral, respecto a los procedimientos a que éste haya de sujetarse y en cuanto a la obligación de cumplir el fallo.

ARTÍCULO III

El presente Tratado no será obligatorio sino para los Estados que hayan suscrito la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales,

firmada en La Haya el 29 de Julio de 1899, y para los que ratifiquen el Protocolo unánimemente adoptado por las Repúblicas representadas en la Segunda Conferencia Internacional Americana, para la adhesión a las Convenciones de La Haya.

ARTÍCULO IV

Siempre que por cualquier motivo no llegue a abrirse a alguna o a algunas de las Altas Partes Contratantes la Corte Permanente de La Haya, se obligan a consignar en un Tratado especial, las reglas conforme a las cuales se establecerá y funcionará el Tribunal que haya de conocer de las cuestiones a que se refiere el artículo I del presente Tratado.

ARTÍCULO V

Este Tratado será obligatorio para los Estados que lo ratifiquen, desde la fecha en que cinco Gobiernos signatarios lo hayan ratificado, y estará en vigor durante cinco años. La ratificación de este Tratado por los Estados que lo firmen, será transmitida al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el cual comunicará a los demás las notas de ratificación que reciba.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman el presente Tratado y ponen en él el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la Ciudad de México, el día treinta de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares escritos en castellano, inglés y francés, respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática a cada uno de los Estados signatarios.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por la República Argentina: ANTONIO BERMEJO, LORENZO ANADÓN. Por Bolivia: FERNANDO E. GUACHALLA. Por Colombia: RAFAEL REYES. Por Costa Rica: J. B. CALVO. Por Chile: AUGUSTO MATTE, JOAQU. WALKER M., EMILIO BELLO C. Por la República Dominicana: FED. HENRÍQUEZ I CARVAJAL. Por Ecuador: L. F. CARBO. Por El Salvador: FRANCISCO A. REYES, BALTASAR ESTUPINIÁN. Por los Estados Unidos de América: W. I. BUCHANAN, CHARLES M. PEPPER, VOLNEY W. FOSTER. Por Guatemala: FRANCISCO ORLA. Por Haití: J. N. LÉGER. Por Honduras: J. LEONARD, F. DÁVILA. Por México: J. RAIGOSA, JOAQUÍN D. CASASÚS, E. PARDO (JR.), JOSÉ LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, PABLO MACEDO, F. L. DE LA BARRA, ALFREDO CHAVERO, M. SÁNCHEZ MÁRMOL, ROSENDO PINEDA. Por Nicaragua: F. DÁVILA. Por Paraguay: CECILIO BÁEZ. Por Perú: MANUEL ALVAREZ CALDERÓN, ALBERTO ELMORE.

1903

Argentina—Chile

Convención Telegráfica

Celebrada en Santiago de Chile el 6 de Febrero de 1903.

El Uruguay adhiere con fecha 10 de Octubre de 1911 ()*

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Chile, deseando facilitar la comunicación telegráfica entre los habitantes de uno y

*

Instrumento de Adhesión

El abajo firmado, Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Instrucción Pública e interino en el de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, **declara**, por la presente, que el **Poder Ejecutivo**, debidamente autorizado por ley de la Honorable Asamblea General, mandada cumplir con fecha 21 de julio del presente año, **adhiera**, por lo que corresponde a las líneas oficiales que cruzan el territorio de la República a lo establecido en la Convención Telegráfica Argentino-Chilena de 6 de Febrero de 1903, respecto de transmisión, exenta de pago y preferente, de los despachos oficiales argentinos y chilenos que cita el artículo XII de dicha Convención, y **acepta** para los despachos análogos uruguayos la extensión de las mismas franquicias establecidas en el citado artículo XII conforme a lo estipulado en el artículo XXII del expresado compromiso internacional.

otro país, han resuelto celebrar con tal objeto una Convención, y al efecto, han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República Argentina, al Señor Don José Antonio Terry, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Chile; y

Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al Señor Don Horacio Pinto Agüero, Ministro de Relaciones Exteriores;

Los cuales, después de haberse exhibido sus respectivos Plenos Poderes y de haberlos encontrado en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

La Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina y la Dirección de Telégrafos del Estado de Chile prolongarán sus líneas telegráficas hasta unir las por Uspallata y por otros puntos que ambas Administraciones determinaren en lo sucesivo de común acuerdo.

ARTÍCULO II

Cada uno de los Gobiernos Contratantes prolongará sus líneas hasta los hitos provisorios que señalan su jurisdicción.

a) Si una vez fijada la línea divisoria definitiva resultare que hay línea telegráfica de un país, construí-

En fe de lo cual expide la presente declaración, que firmo en Montevideo, a tres de Agosto de mil novecientos catorce.

Baltasar Brum.

da en territorio del otro, éste abonará a aquél el importe de la sección que queda de su propiedad.

b) A este efecto se tomará por base para el cobro, el costo medio kilométrico de cada línea que se halle en las condiciones del inciso anterior, y la extensión que haya dejado de ser propiedad del Gobierno que la construyó.

ARTÍCULO III

Las Partes Contratantes podrán, de común acuerdo, unir telegráficamente las líneas de sus respectivos países como lo dispone el artículo I, pero no podrán, en ningún caso, empalmarse con ninguna otra línea particular establecida o a establecerse entre los dos países. Se exceptúa de esta prohibición el empalme actual de las líneas nacionales argentinas con la particular de Punta Arenas a Puerto Gallegos, mientras no se efectúe el empalme de las líneas nacionales en ese punto.

ARTÍCULO IV

La Administración Argentina tendrá la facultad de aplicar a los telegramas dirigidos a los Oficinas Telegráficas de Chile, la tarifa que más convenga a sus intereses; y la Administración Chilena, a su vez, gozará también de la misma facultad para proceder de igual modo con los despachos destinados a las Oficinas Telegráficas de la República Argentina.

ARTÍCULO V

Para los telegramas ordinarios redactados en español o en cualquiera de los idiomas admitidos en la

transmisión por la Convención Telegráfica de San Petersburgo, Reglamento de Budapest, computándose la dirección, el texto y la firma, las Administraciones que se convienen abonarán:

El Telégrafo de la República Argentina al Telégrafo del Estado de Chile:

(El franco será la base de reducción, entendiéndose cinco francos por un peso oro):

a) Cincuenta céntimos de franco oro (fr. 0.50), por las diez primeras palabras, y veinticinco milésimos de igual moneda (fr. 0.025), por cada una de las demás palabras subsiguientes de los telegramas dirigidos a las Oficinas del Telégrafo del Estado de Chile desde las Oficinas del Telégrafo de la Nación Argentina, o desde las de las empresas que no forman parte de la Convención Telegráfica Argentina.

b) Cuarenta céntimos de franco oro (fr. 0.40), por las diez primeras palabras, y veinticinco milésimos de igual moneda (fr. 0.025), por cada una de las demás palabras subsiguientes de los despachos dirigidos a las Oficinas del Telégrafo del Estado de Chile desde las Oficinas de los Telégrafos adheridos a la Convención Telegráfica Argentina, así como de los de Bolivia y la República Oriental del Uruguay.

c) Cincuenta céntimos de franco oro (fr. 0.50), por las primeras diez palabras y veinticinco milésimos (fr. 0.025) de igual moneda por cada una de las demás palabras subsiguientes, además de lo que corresponda a otras líneas, por los telegramas dirigidos a las Oficinas Telegráficas de Chile que no pertenezcan

al Telégrafo del Estado, desde las Oficinas del Telégrafo de la Nación Argentina o de las empresas que no forman parte de la Convención Telegráfica Argentina.

d) Cuarenta céntimos de franco oro (fr. 0.40), por las primeras diez palabras, y veinticinco milésimos (fr. 0.025) de igual moneda por cada una de las demás palabras subsiguientes, además de lo que corresponda a otras líneas, por los telegramas dirigidos a las Oficinas de Chile que no pertenezcan al Telégrafo del Estado, desde las Oficinas de los Telégrafos adheridos a la Convención Telegráfica Argentina, así como los de Bolivia y la República Oriental del Uruguay.

El Telégrafo del Estado de Chile al Telégrafo de la Nación Argentina:

e) Cincuenta céntimos de franco oro (fr. 0.50), por las primeras diez palabras, y veinticinco milésimos (fr. 0.025) de igual moneda por cada una de las demás palabras subsiguientes, de los despachos dirigidos a las Oficinas del Telégrafo de la Nación Argentina desde la República de Chile.

f) Cincuenta céntimos de franco oro (fr. 0.50), por las primeras diez palabras, y veinticinco milésimos (fr. 0.025) de igual moneda, por cada una de las demás palabras subsiguientes, además de las tarifas que correspondan a otras líneas en los despachos dirigidos desde Chile a las Oficinas de la República Argentina que no sean del Telégrafo de la Nación ni de las líneas adheridas a la Convención Telegráfica Argentina.

g) Setenta y cinco céntimos de franco oro (fr. 0.75), por las primeras diez palabras, y cinco céntimos (fr. 0.05) de igual moneda por cada una de las demás palabras subsiguientes, de los despachos dirigidos de Chile a las Oficinas de la República Argentina que no perteneciendo al Telégrafo de la Nación, forman parte de la Convención Telegráfica Argentina, así como de los despachos destinados a las Oficinas de Telégrafos Nacionales de Bolivia, Paraguay o la República Oriental del Uruguay, estando comprendida en esta tarifa la parte que el Telégrafo de la Nación Argentina abonará a las líneas que intervengan en la transmisión de esos telégramas.

ARTÍCULO VI

Por los telegramas internacionales dirigidos al exterior, el Telégrafo de la Nación Argentina abonará al Telégrafo del Estado de Chile:

a) Veinte céntimos de franco oro (fr. 0.20), por cada palabra, además de las tarifas correspondientes a otras líneas, cuando los despachos procedan de alguna Oficina del Telégrafo de la Nación Argentina.

b) Diez céntimos de franco oro (fr. 0.10), por cada palabra, además de las tarifas correspondientes a otras líneas, cuando los despachos tengan otra procedencia que las establecidas en el inciso anterior.

c) Diez céntimos de franco oro (fr. 0.10), por cada palabra, cuando los despachos sean para una Oficina de Chile y procedan del Brasil, o cualquier otro país, con excepción de las Repúblicas Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Y el Telégrafo del Estado de Chile abonará al Telégrafo de la Nación Argentina:

d) Veinte céntimos de franco oro (fr. 0.20), por cada palabra de los despachos procedentes del exterior dirigidos a una Oficina de la Nación Argentina.

e) Treinta céntimos de franco oro (fr. 0.30), por cada palabra de los despachos procedentes del exterior dirigidos a otra Oficina de la República Argentina o de las del Paraguay, Uruguay o Bolivia.

f) Diez céntimos de franco oro (fr. 0.10), por cada palabra, más las tarifas que correspondan a otras líneas, por los despachos dirigidos desde Chile al exterior, con excepción de Bolivia, Paraguay y la República Oriental del Uruguay.

ARTÍCULO VII

La tasa correspondiente a otras líneas distintas de aquellas a que se refieren los incisos c), d) y f) del artículo V, y a), b) y f), del artículo VI, será la establecida para el público por la empresa que dé curso al telegrama o la que se haya convenido con cualquiera de ambos Administraciones.

ARTÍCULO VIII

La tarifa para los telegramas especiales se establecerá de común acuerdo entre ambas Administraciones y será proporcional a lo fijado en el artículo V. Ambas Direcciones se pondrán de acuerdo respecto de las de los telegramas para la prensa.

ARTÍCULO IX

Entre la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina y la Dirección General de Telégrafos del Estado de Chile, se convendrán los detalles del servicio, tales como lo relativo a utilización de las líneas, a la designación de las oficinas de control, etc.

ARTÍCULO X

Cuando por interrupción de la red interna de cualquiera de los dos países haya necesidad de utilizar las líneas de la Administración vecina para hacer llegar los despachos a su destino, por ejemplo, de Santiago a Puerto Montt por vía de Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Puerto Moreno, se hará el servicio de "préstamo de vía", mediante la tasa uniforme para todos los casos, de veinticinco céntimos de franco (fr. 0.25), por las primeras diez palabras, computándose dirección y firma y ciento veinticinco milésimos (fr. 0.125) de igual moneda por cada una de las demás palabras subsiguientes, en los despachos simples:

a) Con las mismas condiciones podrá efectuarse la transmisión del servicio argentino, por intermedio de las líneas chilenas, por ejemplo: de Mendoza a Campana Mahuida por Santiago y Victoria.

b) Para que los despachos mencionados no entorpezcan el arreglo de cuentas, deberán ser transmitidos con la indicación de oficio por "préstamo de vía", y sólo serán controlados en las Oficinas de ambas Administraciones que les den la primera salida o entrada a la línea vecina.

ARTÍCULO XI

Para los efectos de la aplicación de la tarifa establecida en el artículo V, fijase en diez palabras el *mínimum* de extensión de un despacho, y el *máximum* en ciento.

ARTÍCULO XII

Los despachos oficiales de ambos Gobiernos se transmitirán exentos de pago y con preferencia a todos los demás.

Para los efectos de este artículo se considerarán oficiales los despachos de Sus Excelencias los Señores Presidentes de ambas Repúblicas y de sus Ministros, los de los Representantes Diplomáticos de ambos países, las contestaciones a éstos y los que por asuntos relacionados con su cometido expidan la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina, la Dirección General de Telégrafos del Estado de Chile y los Jefes de Policía de Santiago, Buenos Aires y las regiones limítrofes de ambos países.

ARTÍCULO XIII

Las cuentas se establecerán con arreglo a las transmisiones que realmente se hubieren efectuado, y se formularán del siguiente modo:

a) Cada uno de los dos países, la República Argentina o la de Chile, confeccionarán planillas mensuales con arreglo a modelos convenidos, de telegramas transmitidos y recibidos, estableciendo el precio que corresponda a cada Administración por su interven-

ción en los telegramas y por el pago que hubiere efectuado a otras líneas, y las remitirá al otro para su aprobación, acompañándolas de la cuenta respectiva, dentro de los primeros treinta días siguientes al último del mes a que correspondan.

b) Si las cuentas no fueren observadas a la expiración del mes siguiente, se considerarán aprobadas y aceptado como exacto el saldo que resulte a favor de la Administración acreedora.

ARTÍCULO XIV

El pago de las cantidades que respectivamente se adeuden ambas Administraciones, se hará en la forma siguiente:

a) Después de aprobadas las cuentas a que se refiere el artículo XIII, o de haber expirado el plazo que en él se establece, la Administración acreedora girará a ocho días vista contra la deudora por el importe que haya arrojado el saldo de su cuenta.

b) La operación a que hace referencia el inciso precedente, se realizará por intermedio de cualquiera de los bancos establecidos en el país de la Administración giradora, y los gastos que ocasione serán de su exclusivo cargo.

ARTÍCULO XV

El orden de transmisión y demás relaciones con el servicio de ambos telégrafos no previstos en este Convenio, ni establecidos de común acuerdo, se regirán por la Convención Internacional de San Petersburgo, Reglamento Budapest.

ARTÍCULO XVI

El Telégrafo de la Nación Argentina transmitirá por intermedio del Telégrafo del Estado de Chile todos los telegramas que se le presenten en sus Oficinas, dirigidos a Chile, que no tengan una indicación de vía puesta por los remitentes; y el de la República de Chile procederá de la misma manera. Exceptúanse los casos de interrupción de líneas en que se utilizarán las vías más convenientes.

ARTÍCULO XVII

Ni el Telégrafo de la Nación Argentina, ni el del Estado de Chile podrán aplicar tarifas inferiores a las establecidas en este Convenio, a los telegramas de las empresas telegráficas particulares de ambos países dirigidos a la Oficina de su respectiva propiedad.

ARTÍCULO XVIII

Las dudas que pudieran suscitarse respecto de la aplicación de este Convenio en las relaciones telegráficas que se establecen, serán aclaradas de común acuerdo entre las dos Direcciones Generales.

ARTÍCULO XIX

El horario que regirá en las Oficinas de ambos países para los telegramas que dan mérito a este Convenio, será fijado de común acuerdo entre ambas Direcciones.

ARTÍCULO XX

Cada país corre con sus gastos dentro del territorio, debiendo ponerse de acuerdo para el servicio.

ARTÍCULO XXI

La Dirección de Telégrafos de Chile iniciará las gestiones necesarias para la celebración de un Convenio entre las empresas telegráficas establecidas en territorio chileno, y procurará conseguir para la República Argentina, la Oriental del Uruguay, la de Bolivia, la del Paraguay y la del Brasil, las mismas ventajas que obtenga para el telégrafo de su propiedad. Por su parte, la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina hará las gestiones del caso ante las Administraciones brasileña, uruguaya, paraguaya y boliviana, a fin de obtener para Chile y el Perú las mismas ventajas que obtenga para su país.

ARTÍCULO XXII

Con cargo de reciprocidad, hácense extensivas al Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil y la República Oriental del Uruguay las franquicias establecidas en el artículo XII.

ARTÍCULO XXIII

Entre la Dirección General de Correos y Telégrafos de la República Argentina y la Dirección General de Telégrafos de Chile, de común acuerdo, se determinarán las poblaciones donde cada Administración

ha de instalar la Oficina terminal de su dependencia en cada una de las líneas de conexión.

ARTÍCULO XXIV

A más tardar, un año después de aprobado el presente Convenio por los respectivos Gobiernos, deberá inaugurarse el servicio de intercambio telegráfico para la conexión del paso de Uspallata.

ARTÍCULO XXV

Cada Dirección nombrará un representante para que, reunidos ambos en las épocas y lugares que éstas determinen, adopten las medidas necesarias para la ejecución de este Convenio y para las modificaciones parciales que convengan.

ARTÍCULO XXVI

La presente Convención será ratificada y las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Santiago, dentro del más breve plazo posible.

En fe de lo cual, los infrascriptos Plenipotenciarios de la República Argentina y de Chile, han firmado y sellado la presente Convención, en doble ejemplar, en Santiago, a seis de Febrero de mil novecientos tres.

(L. S.) J. A. TERRY.

(L. S.) HORACIO PINTO AGÜERO.

1903

Uruguay — Persia

Tratado de Amistad y Comercio

Celebrado en Montevideo el 19 de Mayo de 1903.

No ha sido ratificado.

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay y Su Majestad Imperial Mozaffer Eddine Schahnischah de Persia, igualmente animados del deseo de establecer y desarrollar relaciones de amistad y de comercio entre sus respectivos países, han resuelto concluir un tratado a este efecto y nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay al señor doctor José Romeu, Su Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores;

Su Majestad imperial el Schahnischah a S. E. el general Isaac Khan Mofalkhamed Dwlet Su Ayudante de Campo General, su Embajador Extraordinario cerca de la República Oriental del Uruguay;

Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

Habrá paz perpetua y amistad invariable entre Su Majestad imperial el Schahnischah de Persia, sus herederos y sus sucesores y la República Oriental del Uruguay, y entre sus súbditos y ciudadanos respectivos.

ARTÍCULO II

Su Majestad imperial el Schahnischah de Persia y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay tendrán el derecho de nombrar Agentes diplomáticos, Cónsules Generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes consulares, que residirán respectivamente en la capital y en las principales ciudades de los dos países, donde iguales agentes extranjeros sean admitidos a residir, y gozarán de los mismos derechos, privilegios, favores, inmunidades y exenciones que son o fueren acordados a los Agentes Diplomáticos y Consulares de las potencias más favorecidas.

Los Cónsules Generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes Consulares están obligados, antes de entrar al ejercicio de sus funciones, a obtener, en la forma usual, *exequatur* del Gobierno del país donde deben desempeñarlas.

ARTÍCULO III

Los súbditos o ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes gozarán para sus personas y bienes, en toda la extensión del territorio de la otra, de los mismos derechos, libertades, favores e inmu-

nidades de que gozan y gozaren los súbditos o ciudadanos de las naciones más favorecidas.

ARTÍCULO IV

Habrá libertad recíproca de comercio entre el imperio de Persia y la República Oriental del Uruguay.

Las mercaderías de cada uno de los dos países podrán entrar libremente en el territorio del otro, conforme a las leyes de éste, y ni una ni otra de las Altas Partes Contratantes impondrá sobre los productos provenientes del suelo y de la industria de la otra parte, otros ni mayores derechos de importación, consumo, depósito, reexportación o tránsito, que los que son o sean impuestos sobre los mismos productos de la nación más favorecida.

Igualmente ninguna prohibición de importación o de exportación de cualquier artículo que sea, será impuesta al comercio recíproco de las Altas Partes Contratantes, a menos que ella sea igualmente aplicada a todas las naciones, salvo por motivos especiales sanitarios o para impedir, sea la propagación de epidemias, sea la destrucción de cosechas, o bien en vista de sucesos de guerra.

ARTÍCULO V

Si surgiese entre las dos Altas Partes Contratantes una diferencia que no pudiese ser resuelta por la vía diplomática, las Altas Partes Contratantes convienen en someter la solución al arbitraje de una potencia amiga, propuesta y aceptada de común acuerdo.

ARTÍCULO VI

Este Tratado entrará en vigor dos meses después del canje de las ratificaciones.

En el caso de que ninguna de las dos Altas Partes Contratantes hubiera denunciado este Tratado, quedará en vigor y no cesará de producir sus efectos hasta el término de un año, a contar del día en que una u otra de las Altas Partes Contratantes hubiera anunciado su intención de hacer cesar sus efectos.

ARTÍCULO VII

El presente Tratado será redactado en doble ejemplar en cada una de las lenguas persa, española y francesa.

Si surgiere una diferencia en la interpretación del Tratado, ella será decidida de conformidad con el texto francés, el cual será obligatorio para los dos Gobiernos.

ARTÍCULO VIII

El presente Tratado será ratificado por Su Majestad imperial el Schahnischah y por Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo con sus legislaciones respectivas, y las ratificaciones serán canjeadas tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el presente Tratado y le han puesto sus respectivos sellos.

Hecho en Montevideo, a los diez y nueve días del mes de Mayo del año mil novecientos tres.

(L. S.) JOSÉ ROMEU.

(L. S.) ISAAC KHAN.

DECLARACIÓN

Los infrascriptos Plenipotenciarios de la República Oriental del Uruguay y de Su Majestad el Schahnischah de Persia, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos declaran:

Que las estipulaciones del Tratado de Amistad y Comercio que acaban de suscribir, no comprenden los casos en que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay acordase favores especiales, exenciones y privilegios a los ciudadanos y a los productos de los Estados Unidos del Brasil, de la República Argentina y del Paraguay en asuntos de comercio. Esos favores, exenciones y privilegios no pueden ser reclamados por el Imperio de Persia, como consecuencia del derecho de la nación más favorecida, mientras no sean extendidos a otro Gobierno.

En este último caso, el beneficio sería inmediatamente adquirido por el Imperio de Persia en las mismas condiciones, es decir, gratuitamente, si la concesión fuese gratuita; y si fuese condicional, con una compensación equivalente. Esta declaración forma parte integrante del Tratado de la referencia.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman por duplicado esta declaración y la sellan con sus sellos, en Montevideo, a los diez y nueve días del mes de Mayo de mil novecientos tres.

(L. S.) JOSÉ ROMEU.

(L. S.) ISAAC KHAN.

1903

Argentina—Uruguay

Convención que modifica el Tratado de Derecho Procesal de 11 de Enero de 1889

*Celebrada en Montevideo el 7 de Septiembre de 1903.
Canjeadas las ratificaciones en Buenos Aires el 4 de
Octubre de 1907.*

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay el señor Ministro del ramo doctor don José Romen y S. E. el señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina doctor Mariano Demaría, con el objeto de simplificar los requisitos establecidos en el Título II, artículos 3.º y 4.º del Tratado de Derecho Procesal sancionado en el Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo, el 11 de Enero de 1889, en la parte que se refiere a la legalización de exhortos, cartas rogatorias y demás documentos procedentes de uno y de otro país, y después de comunicados sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las comisiones rogatorias en materia civil o criminal dirigidas por los Tribunales de la República Oriental del Uruguay a los de la República Argentina, o por los de la República Argentina a los de la República Oriental del Uruguay, no necesitarán de la legalización de las firmas para hacer fe, cuando sean cursados por intermedio de los Agentes Diplomáticos, y, a falta de éstos, por los Consulares.

ARTÍCULO II

Si las comisiones rogatorias fuesen libradas a petición de parte interesada, se indicará en las mismas la persona que ante las autoridades del país a que se dirijan se encargará de su diligenciamiento y abonará los gastos que éste ocasione.

ARTÍCULO III

Cuando las comisiones rogatorias fueran dirigidas de oficio, los gastos que ocasione su diligenciamiento serán de cargo del Gobierno del país que las reciba.

ARTÍCULO IV

La presente Convención tendrá una duración indefinida, pero podrá ser revocada por cualquiera de las Altas Partes Contratantes, denunciándola con un año de anticipación.

ARTÍCULO V

El canje de las ratificaciones de esta Convención se realizará en la ciudad de Buenos Aires a la mayor brevedad posible.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios la firman y sellan en doble ejemplar, en la ciudad de Montevideo, a los siete días del mes de Septiembre del año mil novecientos tres.

(L. S.) JOSÉ ROMEU.

(L. S.) MARIANO DEMARÍA.

1904

Alemania—Bélgica—Dinamarca—España—Francia—Gran Bretaña—Italia—Países Bajos—Portugal—Rusia—Suecia y Noruega—Suiza.

Convenio sobre trata de blancas

Celebrado en París el 18 de Mayo de 1904.

El Uruguay adhiere en virtud de lo establecido en el artículo VIII de la Convención de 4 de Mayo de 1910 ()*

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, a nombre del Imperio Alemán; Su Majestad el Rey de los Belgas; Su Majestad el Rey de Dina-

(*) Convención Internacional sobre trata de blancas de 4 de Mayo de 1910

ARTÍCULO VIII

Los Estados no signatarios son admitidos a adherir a la presente Convención. Para este efecto, ellos notificarán su intención por medio de una Acta que será depositada en los Archivos del Gobierno de la República Francesa. Este enviará por vía diplomática copia certificada conforme a cada uno de los Estados Contratantes y les avisará al mismo tiempo de la fecha del depósito. En dicha acta de notificación se comunicarán también las leyes dictadas en el Estado adherente, relativamente al objeto de la presente Convención.

Seis meses después de la fecha del depósito del acta de notifica-

marca; Su Majestad el Rey de España; el Presidente de la República Francesa; Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y de las Posesiones Británicas allende los mares, Emperador de las Indias; Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad la Reina de los Países Bajos; Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves; Su Majestad el Emperador de todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Suecia y de Noruega, y el Consejo Federal Suizo, deseosos de asegurar a las mujeres mayores de edad, seducidas u obligadas contra su voluntad, así como a las casadas y solteras menores de edad, una protección eficaz contra el tráfico criminal conocido con el nombre de "Trata de blancas", han resuelto celebrar un Convenio a efecto de concertar medidas apropiadas para alcanzar ese objeto, y han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, a S. A. S. el Príncipe de Radolín, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

ción, la Convención entrará en vigencia en el conjunto del territorio del Estado adherente, que se volverá así Estado Contratante.

La adhesión a la Convención traerá consigo, de pleno derecho, y sin notificación especial, adhesión concomitante y entera al Convenio de 18 de Mayo de 1904, que entrará en vigencia en la misma fecha que la Convención misma, en el conjunto del territorio del Estado adherente.

No se deroga, sin embargo, por la disposición precedente, el artículo VII del Convenio precitado del 18 de Mayo de 1904, que sigue siendo aplicable en el caso en que un Estado prefiriera hacer acto de adhesión solamente a este arreglo.

Su Majestad el Rey de los Belgas, al Señor A. Leghait, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Su Majestad el Rey de Dinamarca, al Conde F. Reventlow, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Su Majestad el Rey de España, a Su Excelencia M. F. de León y Castillo, Marqués del Muni, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

El Presidente de la República Francesa, a Su Excelencia M. Th. Delcassé, Diputado, Ministro de Negocios Extranjeros de la República Francesa;

Su Majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda y de las Posesiones Británicas allende los mares, Emperador de las Indias, a Su Excelencia Sir Edmund Monson, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Su Majestad el Rey de Italia, a Su Excelencia el Conde Tornielli Brusati di Vergano, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Su Majestad la Reina de los Países Bajos, al Señor Le Chevallier de Stuers, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Su Majestad el Rey de Portugal y de los Algarves, al Señor T. de Souza Roza, Su Enviado Extraordi-

nario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, a Su Excelencia Señor de Nelióow, Su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Su Majestad el Rey de Suecia y de Noruega, por la Suecia y por la Noruega, al Señor Akerman, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Presidente de la República Francesa;

Y el Consejo Federal Suizo, al Señor Charles Edouard Lardy, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Confederación Suiza ante el Presidente de la República Francesa;

Quienes, habiendo canjeado sus Plenos Poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en las disposiciones siguientes:

ARTÍCULO I

Cada uno de los Gobiernos Contratantes se compromete a establecer o a designar una autoridad encargada de centralizar todos los datos referentes al ajuste de mujeres mayores y menores con el fin de ejercer el libertinaje en el extranjero. Esta autoridad tendrá la facultad de corresponder directamente con el servicio similar establecido en cada uno de los otros Estados Contratantes.

ARTÍCULO II

Cada uno de los Gobiernos se compromete a hacer ejercer una vigilancia con el fin de buscar, particu-

larmente en las estaciones, los puertos de embarque y en el transcurso de viaje, a los conductores de mujeres y muchachas destinadas al libertinaje. Se darán instrucciones, con este objeto, a los funcionarios o a toda otra persona que tenga calidad a este efecto, para obtener dentro de los límites legales, todos los pormenores que pueden poner sobre el rastro de un tráfico criminal. La llegada de personas que evidentemente parezcan ser los autores, los cómplices o las víctimas de un tráfico semejante será señalada, llegado el caso, ya sea a las autoridades del punto de destino, ya sea a los Agentes Diplomáticos o Consulares interesados, o a toda otra autoridad competente.

ARTÍCULO III

Los Gobiernos se comprometen a hacer tomar, dado el caso y dentro de los límites legales, declaraciones a las mujeres o muchachas de nacionalidad extranjera que se entregan a la prostitución, con el fin de establecer su identidad y su estado civil, e indagar quién las ha determinado a abandonar su país. Los datos obtenidos serán comunicados a las autoridades del país de origen de dichas mujeres o muchachas, con el fin de su repatriación eventual.

Los Gobiernos se comprometen, dentro de los límites legales y hasta donde se pueda, a confiar a título provisorio y con el objeto de una repatriación eventual, las víctimas del tráfico criminal, cuando se encuentren desprovistas de recursos, a instituciones de asistencia pública o particular o a particulares que ofrezcan las garantías necesarias.

Los Gobiernos se comprometen también, dentro de los límites legales y tanto como sea posible, a devolver a su país de origen a las mujeres o muchachas que pidan su repatriación o que fuesen reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas. La repatriación no será efectuada sino previo acuerdo sobre la identidad y la nacionalidad, así como sobre el lugar y fecha de la llegada a las fronteras. Cada uno de los Países Contratantes facilitará el tránsito por su territorio.

La correspondencia relativa a las repatriaciones se hará, en cuanto sea posible, por vía directa.

ARTÍCULO IV

En el caso en que la mujer o muchacha a repatriar no pudiese reembolsar ella misma los gastos de su traslado y cuando no tuviese ni marido, ni padres, ni tutor que pagasen por ella, los gastos ocasionados por la repatriación serán de cuenta del país en cuyo territorio reside, hasta la próxima frontera o puerto de embarque en dirección al país de origen, y el excedente por cuenta del país de origen.

ARTÍCULO V

No se derogan, por las disposiciones de los artículos III y IV citados, las Convenciones particulares que pudieran existir entre los Gobiernos Contratantes.

ARTÍCULO VI

Los Gobiernos Contratantes se comprometen, dentro de los límites legales, a ejercer, en cuanto sea po-

sible, una vigilancia sobre las oficinas o agencias que se ocupen de la colocación de mujeres o muchachas en el extranjero.

ARTÍCULO VII

Los Estados no signatarios son admitidos a adherir al presente Convenio. A tal efecto, notificarán su intención, por la vía diplomática, al Gobierno Francés, el cual dará de ello conocimiento a todos los Estados Contratantes.

ARTÍCULO VIII

El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de la fecha del canje de las ratificaciones. En el caso en que una de las Partes Contratantes lo denunciare, esta denuncia no tendría efecto más que respecto a esa parte, y eso solamente a los doce meses del día de dicha denuncia.

ARTÍCULO IX

El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones canjeadas en París, en el más breve plazo posible.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado el presente Convenio y han puesto en él sus sellos.

Hecho en París, el diez y ocho de Mayo de mil novecientos cuatro, en un solo ejemplar que quedará depositado en los Archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de la República Francesa, y del cual

una copia certificada, conforme, será enviada a cada una de las Potencias Contratantes.

(L. S.) RADOLIN.

(L. S.) A. LEGHAIT.

(L. S.) F. REVENTLOW.

(L. S.) F. DE LEÓN Y CASTILLO.

(L. S.) DELCASSÉ.

(L. S.) EDMUND MONSON.

(L. S.) G. TORNIELLI.

(L. S.) A. DE STUERS.

(L. S.) T. DE SOUZA ROZA.

(L. S.) NELIDOW.

(L. S.) Por Suecia y por Noruega:

AKERMAN.

(L. S.) LARDY.

1904

Uruguay—Italia

Protocolo relativo al embargo y desalojo de la barca “María Madre”

Celebrado en Montevideo el 9 de Junio de 1904.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay Su Excelencia el señor Ministro doctor José Romeu y Su Señoría el señor Vittor Cobianchi, Encargado de Negocios de Italia, con el objeto de poner término a los incidentes ocurridos con motivo del embargo y desalojo de la barca “María Madre”, y a las discusiones diplomática y confidencial seguidas sobre dicho asunto entre el referido Ministerio y la Legación respectiva; dichos señores, debidamente autorizados por los respectivos Gobiernos, han convenido en lo siguiente:

1.º El Gobierno del Uruguay, en vista de los antecedentes relativos a la barca “María Madre”, deplora que no se hubiese dado al R. Agente Consular de Italia en Paysandú, en tiempo oportuno, el aviso sobre el embargo de dicho buque, en la forma establecida en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil.

2.º El mismo Gobierno, para terminar este asunto, y como una demostración de sus sentimientos amistosos hacia el Gobierno Italiano, entrega en este acto a la Legación de S. M. el Rey de Italia la suma de tres mil quinientos pesos oro uruguayo, fijada de antemano con el señor Encargado de Negocios del mismo país, para cubrir los perjuicios ocasionados durante el desalojo de la barca "María Madre".

3.º Quedan a salvo los derechos de terceros que pudieran hacerse valer ante las autoridades competentes, con arreglo a las leyes del país.

En fe de lo cual firman el presente por duplicado y lo sellan con sus sellos en Montevideo, a los nueve días del mes de Junio del año mil novecientos cuatro.

(L. S.) JOSÉ ROMEU.

(L. S.) V. COBIANCHI.

1904

Uruguay—Argentina—Brasil—Paraguay

Convención Sanitaria

Celebrada en Río de Janeiro el 12 de Junio de 1904.

Canjeadas las ratificaciones en Montevideo el 21 de Junio de 1905.

Caducó el 21 de Junio de 1913.

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, Su Excelencia el Presidente de la República Argentina, Su Excelencia el Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil y Su Excelencia el Presidente de la República del Paraguay, deseando salvaguardar la salud pública, sin traer inútiles obstáculos a las transacciones comerciales y al tránsito de los viajeros, resolvieron celebrar una Convención Sanitaria para firmar las bases de profilaxis internacional tendientes a evitar la importación y diseminación en sus respectivos países de la peste de Oriente, del cólera asiático y de la fiebre amarilla; y para ese fin nombraron sus delegados, a saber:

El Presidente de la República Oriental del Uruguay, a los doctores Federico Susviela Guarch y Er-

nesto Fernández Espiro; el Presidente de la República Argentina, a los doctores Luis Agote y Pedro Lacavera; el Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, a los doctores Antonio Augusto da Azevedo Sodré y Osvaldo Gonçalves Cruz; el Presidente de la República del Paraguay, al doctor Pedro Peña; quienes, con excepción del señor doctor Federico Susviela Guarch, reunidos el 5 de Junio de 1904 en el salón de honor del Ministerio de Justicia y Negocios Interiores en la ciudad de Río de Janeiro, habiendo comunicado sus Plenos Poderes, que fueron encontrados en buena y debida forma, convinieron en las siguientes disposiciones:

TITULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO I

Cada uno de los Gobiernos Contratantes se compromete a notificar inmediatamente a los otros, la aparición de los primeros casos de peste de Oriente, fiebre amarilla o cólera asiático en sus respectivos territorios.

La notificación será hecha por vía telegráfica, por la autoridad sanitaria del país infectado, a las autoridades sanitarias de los otros países, sin perjuicio de las informaciones que puedan transmitir los Agentes Diplomáticos o Consulares; debiendo consignar los siguientes datos: indicación de la localidad en que aparezca alguna de aquellas enfermedades, fecha de su iniciación, origen cierto o probable, número de casos,

forma clínica, mortalidad y medidas puestas en práctica para extinguir la enfermedad.

Tratándose de peste, se indicará si los primeros casos fueron precedidos o no de mortandad insólita de ratas.

ARTÍCULO II

La autoridad sanitaria del país infectado enviará semanalmente a la de los otros países, informes detallados sobre la marcha de la epidemia, debiendo consignar en ellos: el número de casos y defunciones ocurridos después de la última notificación, medidas empleadas para evitar la diseminación de la enfermedad y su exportación a los otros países contratantes.

ARTÍCULO III

La autoridad sanitaria del país que se precave, comunicará a la del país infectado, las medidas que tome al efecto y la fecha en que comenzaren a regir.

ARTÍCULO IV

Para facilitar la comunicación entre las autoridades sanitarias, los Gobiernos se comprometen a confeccionar un Código telegráfico sanitario para su uso exclusivo.

ARTÍCULO V

Se considerará infectada la localidad en que ocurran casos repetidos y no importados de cólera, fiebre amarilla o peste.

ARTÍCULO VI

La aparición de los primeros casos en una localidad determinada, no motivará la aplicación de medidas de defensa contra las procedencias de ella, salvo que las respectivas autoridades no hubieran tomado las providencias necesarias para extinguir la enfermedad.

ARTÍCULO VII

Será considerada sospechosa toda localidad que, estando próxima o en fácil comunicación con otra infectada, no se precava convenientemente para evitar su contaminación.

ARTÍCULO VIII

No se podrán tomar medidas profilácticas contra las procedencias de localidades vecinas a las declaradas infectadas o que comuniquen fácilmente con ellas, desde el momento que adopten las providencias necesarias para evitar su contaminación.

ARTÍCULO IX

Dejará de considerarse infectada aquella localidad en la cual hayan transecurrido diez días después del último caso de cualquiera de las tres enfermedades referidas, siempre que los enfermos aún existentes sean mantenidos en aislamiento.

ARTÍCULO X

Las Altas Partes Contratantes podrán enviar al país que consideren infectado o sospechoso, delegados

sanitarios, a objeto de recoger los elementos de juicio que consideren pertinentes, debiendo al efecto las autoridades del país facilitarles el desempeño de su cometido.

ARTÍCULO XI

Las Altas Partes Contratantes convienen en adoptar como instrumentos más eficaces para el tratamiento profiláctico, marítimo y terrestre, el aislamiento de los enfermos o sospechosos de serlo, la desinfección, la institución de los Inspectores Sanitarios de Navío, la vigilancia sanitaria, las vacunaciones preventivas, quedando, por lo tanto, eliminados en su tratamiento los antiguos procedimientos cuarentenarios y cualquiera otra medida que no se halle explícitamente determinada en esta Convención.

ARTÍCULO XII

Se entiende por vigilancia sanitaria, la observación médica ejercida por la autoridad sanitaria sobre los pasajeros o transeuntes procedentes de puntos infectados o sospechosos, por un tiempo que no podrá exceder del período de incubación de la enfermedad de que se precave:

- a) Cuando se trate de pasajeros de primera y segunda clase, la vigilancia sanitaria será aplicada en tierra, sin afectar la libertad de tránsito de los mismos, pudiendo las autoridades recurrir al sistema de pasaportes sanitarios, exigir un depósito en dinero, el que será devuelto al término de la vigilancia sanitaria, o

a cualquier otro procedimiento análogo, que juzguen más adecuado, con objeto de garantizar la eficacia de la observación médica.

- b) Cuando se trate de pasajeros de tercera clase, la vigilancia sanitaria podrá ser hecha en los locales y bajo las restricciones que la autoridad sanitaria crea convenientes.

ARTÍCULO XIII

La correspondencia postal será admitida sin restricción alguna; únicamente podrán ser sometidas al tratamiento correspondiente, aquellas encomiendas postales que contengan objetos usados, susceptibles de contaminación.

ARTÍCULO XIV

Las Altas Partes Contratantes se obligan a recibir indistintamente en sus establecimientos destinados a la asistencia o aislamiento de enfermos, a aquellos de tránsito, cualquiera que sea su destino o procedencia.

TITULO II

Profilaxis terrestre

ARTÍCULO XV

Cuando la localidad infectada estuviera próxima a las fronteras de los países contratantes, se aplicarán medidas de defensa sanitaria, obedeciendo a los siguientes principios:

- a) No serán interceptadas las comunicaciones entre el país infectado y los que no lo estén, que-

dando abolidos los cordones sanitarios y las cuarentenas terrestres.

- b) Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de limitar los puntos de la frontera por donde podrá efectuarse el tránsito de pasajeros y mercaderías.
- c) Los pasajeros serán sometidos a inspección médica, pudiendo prohibir las autoridades el pasaje de los enfermos sospechosos o convalecientes de alguna de las referidas enfermedades.
- d) Los pasajeros serán vigilados por el término correspondiente al período de incubación de cada una de las enfermedades cuya importación se procura evitar.
- e) Cuando se trate de cólera o peste, las ropas en general y todos aquellos objetos susceptibles de transmitir la enfermedad, serán desinfectados.

TITULO III

Profilaxis marítima y fluvial

Inciso 1.º

Disposiciones generales

ARTÍCULO XVI

Las Altas Partes Contratantes acuerdan en no clausurar sus puertos, cualquiera que sea el estado sanitario de los navíos, o de los puntos de que ellos proceden. Igualmente se reservan el derecho de limi-

tar el número de los puertos habilitados para las operaciones comerciales con los países infectados.

ARTÍCULO XVII

No podrá ser rechazado ningún navío, cualquiera que sea su procedencia o su estado sanitario, siempre que se someta al tratamiento profiláctico indicado en esta Convención.

ARTÍCULO XVIII

Cuando un navío efectúe escalas en un puerto contaminado o sospechoso, el tratamiento aplicado a los equipajes será limitado al de los pasajeros que allí embarcara, siempre que aquéllos fueran acondicionados en locales distintos y completamente aislados.

Inciso 2.º

Clasificación de navíos

ARTÍCULO XIX

Las Altas Partes Contratantes convienen en reconocer como:

- a) *Navío indemne* aquel que, aunque proviniendo de un puerto infectado o sospechoso, no hubiere tenido a bordo casos o defunciones de peste, cólera o fiebre amarilla, ni tampoco epizootia de ratas, antes de la partida, durante la travesía o en el momento de la llegada.
- b) *Navío infectado* todo aquel que, partiendo o haciendo escala en un puerto infectado o sospechoso, hubiera tenido a bordo casos o de-

funciones de peste, cólera o fiebre amarilla y epizootia de ratas, antes de la partida, durante la travesía o en el momento de la llegada.

ARTÍCULO XX

A fin de gozar de las franquicias y ventajas de la presente Convención, todos los buques destinados al transporte de pasajeros deberán llevar permanentemente a bordo, médico, aparatos de desinfección para el exterminio de ratas, mosquiteros, provisión de medicamentos, desinfectantes y locales apropiados para el aislamiento de los enfermos.

Inciso 3.º

Inspectores sanitarios de Navío

ARTÍCULO XXI

Las Altas Partes Contratantes convienen en establecer un Cuerpo de Inspectores Sanitarios de Navío con funciones internacionales:

- 1.º Cada país se reserva el derecho de fijar un número determinado de Inspectores, de acuerdo con las exigencias de su navegación, salvo el caso de no poder concurrir a este servicio por circunstancias especiales.
- 2.º Sólo los médicos diplomados por las Facultades oficiales de los respectivos países podrán desempeñar el cargo de Inspector Sanitario de Navío.
- 3.º El nombramiento de estos funcionarios será hecho mediante concurso o después de un

examen especial, con arreglo al programa formulado por la autoridad sanitaria de cada país.

- 4.° La designación de cada Inspector será comunicada a las autoridades sanitarias de los otros países, debiendo referir esa comunicación el nombre de aquél, sus títulos científicos y la fecha del concurso o examen.
- 5.° Los Inspectores Sanitarios de Navío deberán presentar a la autoridad sanitaria de los puertos de escala y de destino un informe minucioso de todas las novedades ocurridas en el viaje, consignando las medidas que fueran ejecutadas en el puerto de partida y durante la travesía.
- 6.° Serán válidas ante la autoridad sanitaria de las Altas Partes Contratantes las declaraciones de los Inspectores, cualquiera que sea su nacionalidad, debiendo ser tomadas en consideración para la aplicación del tratamiento definitivo.

ARTÍCULO XXII

Toda vez que se demuestre que el Inspector Sanitario de Navío fué negligente en el desempeño de su cometido, se le suspenderá por el término de uno a tres meses. Si prestare falsa declaración a la autoridad sanitaria, será separado de su cargo.

ARTÍCULO XXIII

El navío de pasajeros que no condujere Inspector Sanitario, será sometido al tratamiento que corres-

ponda a los navíos clasificados en el artículo 19, letra b), reservándose la autoridad sanitaria en tales casos el complementar estas medidas con otras que le ofrezcan mayores garantías.

Inciso 4.º

Tratamiento de la peste de Oriente

Medidas á tomar en el puerto infectado antes de la partida

ARTÍCULO XXIV

Los navíos que hagan escala en puertos infectados o sospechosos, tomarán medidas precaucionales para impedir el pasaje de ratas por los cabos, amarras, cadenas y demás medios de comunicación entre el navío y la tierra.

ARTÍCULO XXV

Los navíos que partan de puertos infectados o sospechosos, como punto de origen, serán, una vez terminadas completamente las operaciones de carga, sometidos a los procedimientos juzgados más eficaces para el exterminio de las ratas.

ARTÍCULO XXVI

Los Inspectores Sanitarios de Navío asistirán al embarco de los pasajeros en el puerto inmediato, debiendo impedir la admisión en el navío, de aquellas personas que presenten signos evidentes o sospechosos de peste. Podrán también exigir, previamente al embarco de los pasajeros de tercera clase, la desinfección de los equipajes, cuando así lo creyeran conveniente.

Medidas á tomar durante la travesía

ARTÍCULO XXVII

Durante la travesía, el Inspector Sanitario de Navío deberá proceder a la vigilancia minuciosa de la salud de los pasajeros y tripulantes; indagará y verificará si aparecieron ratas a bordo, y recogerá todos los elementos de juicio necesarios para poder fijar, en la forma más precisa posible, el estado sanitario del navío.

ARTÍCULO XXVIII

En el caso de que se produzcan enfermos de peste a bordo durante la travesía, el Inspector Sanitario procederá al aislamiento riguroso del enfermo, en un local apropiado, y a la desinfección de los objetos de uso del mismo.

Procederá, en el caso de que esto sea aceptado, a la serovacunación de los demás pasajeros y tripulantes del navío.

Medidas á tomar en el puerto de destino

ARTÍCULO XXIX

En el puerto de destino los navíos indemnes serán sometidos al siguiente tratamiento:

Los navíos que fueren sometidos en el último puerto infectado o sospechoso a las medidas indicadas en los artículos XXIV, XXV y XXVI, y que no tuvieren durante la travesía ningún contacto infectado o sospechoso, serán recibidos en libre plática, debiendo los pasajeros y tripulantes ser sometidos a una vigi-

lancia sanitaria, la que no podrá exceder de cinco días, contados desde el último puerto o contacto infectado o sospechoso.

ARTÍCULO XXX

En los navíos que no hubieren tomado las precauciones indicadas en el artículo XXIV, o que no hubieren sido sometidos a las medidas indicadas en el artículo XXV, se permitirá el desembarco de pasajeros, teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo XXIX, y se procederá antes de su descarga, al exterminio de las ratas que púdiere contener el buque.

ARTÍCULO XXXI

Los navíos infectados serán sometidos al siguiente tratamiento:

- a) Los enfermos serán desembarcados y aislados.
- b) Los demás pasajeros serán desembarcados previa serovacunación y sometidos a la vigilancia sanitaria, que no excederá de cinco días, contados desde la hora del desembarco.
- c) Los pasajeros que no acepten la serovacunación, serán sometidos a la vigilancia sanitaria en los locales y bajo las restricciones que la autoridad sanitaria designe, durante el término dispuesto en el parágrafo anterior.
- d) Los tripulantes no podrán desembarcar sin previa serovacunación, debiendo ser sometidos a la misma vigilancia sanitaria señalada en el parágrafo anterior.

- e) Después del desembarco de los pasajeros, el navío será desinfectado, procediéndose al exterminio de las ratas antes de su descarga. Estas operaciones serán efectuadas con el aparato Clayton o cualquier otro sistema que a juicio de las Altas Partes Contratantes reúna las condiciones de éste.
- f) Las ropas y demás objetos de uso personal de los pasajeros y tripulantes serán convenientemente desinfectados.

ARTÍCULO XXXII

Los navíos de carga procedentes de un puerto infectado o sospechoso, serán sometidos a las medidas indicadas en el artículo XXXI, letra e), cualquiera que haya sido su tratamiento en el puerto de partida o en el último infectado o sospechoso. Llenadas estas operaciones, las cargas, cualquiera que sea su naturaleza, serán recibidas sin restricción alguna.

Inciso 5.º

Tratamiento de la fiebre amarilla

Medidas á tomar en el puerto infectado antes de la partida

ARTÍCULO XXXIII

Los buques que tocaren en puertos infectados o sospechosos, deberán tomar las precauciones necesarias con el objeto de evitar sean invadidos por los mosquitos de tierra.

ARTÍCULO XXXIV

Los buques que partieren de puertos infectados o sospechosos, como puntos de origen, una vez termi-

nadas las operaciones de carga, serán sometidos al tratamiento juzgado más eficaz por la autoridad sanitaria, para el exterminio de los mosquitos que en ellos pudieran existir.

ARTÍCULO XXXV

Los Inspectores Sanitarios de Navío deberán asistir al embarco de los pasajeros en el puerto indicado, debiendo impedir la admisión a bordo de las personas que presenten señales evidentes o sospechosas de fiebre amarilla.

Medidas á tomar durante la travesía

ARTÍCULO XXXVI

Durante la travesía el Inspector Sanitario de Navío deberá proceder a una minuciosa vigilancia de la salud de los pasajeros y tripulantes, inquirirá y verificará la existencia de mosquitos, larvas o linfas a bordo, empleando todos los medios que crea convenientes para destruirlos, y recogerá todos los elementos de juicio necesarios para poder fijar en la forma más precisa posible su estado sanitario.

ARTÍCULO XXXVII

Si durante la travesía apareciesen casos sospechosos o confirmados de fiebre amarilla, el Inspector Sanitario de Navío procederá a su aislamiento, por medio de mosquiteros adecuados, evitando por todos los medios que los enfermos sean picados por mosquitos, sin perjuicio de las otras medidas profilácticas que creyese oportuno ejecutar.

Medidas á tomar en el puerto de destino

ARTÍCULO XXXVIII

En el puerto de destino los buques procedentes de puertos infectados o sospechosos de fiebre amarilla sufrirán el siguiente tratamiento:

- a) Los buques indemnes que en el puerto infectado hubieren tomado las precauciones indicadas en el artículo XXX o sufrido el tratamiento del artículo XXXIV, serán recibidos en libre plática, debiendo los pasajeros y tripulantes ser sometidos a vigilancia sanitaria, que no podrá exceder de seis días, contados del último puerto o contacto infectado o sospechoso. Las ropas y objetos de uso personal de los pasajeros podrán ser sometidas a medidas profilácticas especiales, a juicio de la autoridad sanitaria.
- b) Los buques indemnes que no hubieren tomado las precauciones indicadas en el artículo XXX, o sufrido el tratamiento prescripto en el artículo XXXIV, serán igualmente recibidos en libre plática, observándose todas las prescripciones del párrafo antecedente, procediéndose antes de la descarga del buque al exterminio de los mosquitos que puedan existir a bordo.

ARTÍCULO XXXIX

Los buques infectados serán sometidos a las siguientes prescripciones:

- a) Los enfermos serán desembarcados en condiciones de no ser picados por mosquitos y convenientemente aislados.
- b) Los demás pasajeros serán desembarcados, siendo sometidos a vigilancia sanitaria, que no excederá de seis días, contados desde el momento del desembarco.
- c) Después del desembarco de los pasajeros, se procederá al exterminio de los mosquitos, larvas y linfas de a bordo, pudiendo, a juicio de la autoridad sanitaria, ser ejecutadas otras medidas profilácticas con relación a las ropas y objetos de uso personal de los pasajeros.

ARTÍCULO XL

La carga, sea cual fuere su naturaleza y la clasificación sanitaria del buque que la conduzca, será recibida sin restricción alguna.

Inciso 6.º

Tratamiento del cólera asiático

Medidas á tomar en el puerto infectado antes de la partida

ARTÍCULO XLI

Los buques que tocasen en puertos infectados o sospechosos de cólera asiático, evitarán que los pasajeros en tránsito, como los tripulantes, bajen a tierra, salvo para las operaciones imprescindibles del servicio.

ARTÍCULO XLII

Los buques que partan de un puerto infectado o sospechoso, como punto de origen, procederán, antes

de su partida, a la limpieza y desinfección de los depósitos de agua, proveyéndose de este elemento en condiciones de pureza, a juicio de la autoridad sanitaria.

ARTÍCULO XLIII

Los Inspectores Sanitarios de Navío asistirán al embarco de los pasajeros en el puerto infectado, debiendo impedir la admisión a bordo de las personas que presenten signos evidentes o sospechosos de cólera, debiendo igualmente exigir la desinfección previa del equipaje de los pasajeros, como también la de los tripulantes, antes de la partida.

Medidas á tomar durante la travesía

ARTÍCULO XLIV

Durante la travesía el Inspector Sanitario de Navío procederá a una minuciosa vigilancia de la salud de los pasajeros y tripulantes y a recoger todos los elementos de juicio para poder fijar en la forma más precisa posible su estado sanitario.

ARTÍCULO XLV

Si durante la travesía se presentan casos sospechosos o confirmados de cólera asiático, el Inspector Sanitario de Navío procederá al aislamiento de ellos y a la desinfección rigurosa de las deyecciones y de las ropas y objetos de uso personal de los mismos.

Medidas á tomar en el puerto de destino

ARTÍCULO XLVI

En el puerto de destino los buques procedentes de

puertos infectados o sospechosos de cólera asiático, sufrirán el siguiente tratamiento:

- a) Los buques indemnes que en el puerto infectado hubieran tomado las precauciones indicadas en el artículo XLI o sufrido el tratamiento prescripto en los artículos XLII y LXIII, serán recibidos en libre plática, sometiéndose a los pasajeros y tripulantes a la vigilancia sanitaria, que no podrá exceder de cinco días, contados del último puerto o contacto infectado.
- b) Los buques indemnes que no hubieran sufrido el tratamiento prescripto en los artículos XLII y XLIII, sólo tendrán libre plática después de la desinfección de los equipajes de los pasajeros y tripulantes.
- c) Los pasajeros y tripulantes serán sometidos a vigilancia sanitaria durante un término que no podrá exceder de cinco días, contados desde el momento del desembarco.

ARTÍCULO XLVII

Los buques infectados serán sometidos a las siguientes prescripciones:

- a) Cumplimiento de las determinaciones de la autoridad sanitaria en el sentido de evitar la contaminación de las aguas del puerto.
- b) Los enfermos serán desembarcados y aislados convenientemente.
- c) Los demás pasajeros serán desembarcados y

sometidos a vigilancia sanitaria, la que no excederá de cinco días, contados desde el momento del desembarco.

- d) Las ropas y demás objetos de uso personal de los pasajeros y tripulantes serán sometidas a conveniente desinfección.
- e) Después del desembarco de los pasajeros será el buque descargado y sometido a rigurosa desinfección.
- f) La carga, sea cual fuere su naturaleza, no sufrirá tratamiento alguno.

TITULO IV

Disposiciones complementarias

ARTÍCULO XLVIII

Las Altas Partes Contratantes reconocen como válidas las medidas que se apliquen a los buques en cualquiera de los cuatro países, toda vez que éstas sean acreditadas por documento oficial.

ARTÍCULO XLIX

Las Altas Partes Contratantes convienen en tomar providencias sanitarias contra los buques procedentes de puertos infectados y de países ajenos a esta Convención, de acuerdo con los principios consagrados en ella.

ARTÍCULO L

En caso que los progresos científicos suministren a la profilaxis nuevos elementos juzgados eficaces, las

autoridades sanitarias de las Altas Partes Contratantes, procediendo de común acuerdo, podrán incorporarlos a esta Convención.

ARTÍCULO LI

La duración de la presente Convención será por cuatro años, y no siendo denunciada seis meses antes de su término por cualquiera de las Altas Partes Contratantes, se considerará prorrogada por cuatro años más.

ARTÍCULO LII

La presente Convención entrará en vigor inmediatamente después de ser ratificada por las Altas Partes Contratantes.

ARTÍCULO LIII

La presente Convención deberá ser ratificada en la ciudad de Montevideo dentro de los seis meses contados desde la fecha en que fué firmada.

Los delegados firman cuatro ejemplares duplicados de la presente Convención.

Ciudad de Río de Janeiro, a los doce días del mes de Junio de mil novecientos cuatro.

E. FERNÁNDEZ ESPIRO.

LUIS AGOTE.

PEDRO LACAVERA.

A. A. DA ACEVEDO SODRÉ.

OSVALDO GONÇALVES CRUZ.

PEDRO PEÑA.

1904

Uruguay—Argentina

Protocolo por el que se solucionan varios incidentes diplomáticos

Celebrado en Buenos Aires el 6 de Diciembre de 1904.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina SS. EE. el señor Daniel Muñoz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, y el Ministro del ramo, a objeto de dar una solución amistosa y conciliatoria a los incidentes diplomáticos surgidos con motivo de los hechos que provocaron la reclamación entablada anteriormente por el señor Ministro Muñoz, en nombre de su Gobierno, en ocasión del movimiento subversivo estallado en aquel país y felizmente terminado hoy, y de allanar toda y cualquiera dificultad que pudiera obstar a ese loable propósito, los señores Ministros, después de un cambio de ideas, convinieron en lo siguiente:

1.º Considerar, de común acuerdo, como no existentes y retiradas las notas de 16 y 27 de Agosto y 16 de Septiembre del corriente año, cambiadas entre la Le-

gación de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, dejando subsistente únicamente, la de fecha 6 de Agosto, en que se iniciaban reclamaciones por ciertos actos relacionados con el movimiento subversivo estallado en la República Oriental del Uruguay, sobre los cuales el Gobierno Argentino ha tomado las medidas correspondientes respecto de los empleados inculpaos.

2.º Que con el deseo de establecer reglas fijas que sirvan de procedimiento en lo futuro, y que sean de posible y fácil aplicación en la práctica, dado el caso desgraciado de conmociones internas en cualquiera de los dos Estados, se comprometen a negociar un acuerdo especial al respecto, o bien a ampliar el de 14 de Enero de 1876.

3.º Que persiguiendo iguales propósitos y en el interés de evitar en adelante discusiones respecto al alcance e interpretación del Título II del Tratado de Derecho Penal Internacional firmado en Montevideo el 23 de Enero de 1889, en lo que se refiere al asilo, convienen en formular, por separado, declaraciones protocolizadas, que sirvan de norma de conducta para ambos países, en los casos ocurrentes.

En fe de lo cual firman, en Buenos Aires, capital de la República Argentina, el Protocolo, en doble ejemplar, a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos cuatro.

(L. S.) DANIEL MUÑOZ.

(L. S.) CARLOS RODRÍGUEZ LARRETA.

1904

Uruguay—Argentina—Brasil—Paraguay

**Acta relativa a la ratificación de la Convención
Sanitaria de 12 de Junio de 1904**

Celebrada en Montevideo el 12 de Diciembre de 1904.

Reunidos en el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, S. E. el señor don José Romeu, Ministro del ramo; el señor don Francisco Xavier da Cunha, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil; el señor don Mariano Demaría, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, y el señor don Antonio Sosa, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República del Paraguay, con el objeto de proceder al canje de las ratificaciones de la Convención Sanitaria Internacional firmada por los Plenipotenciarios de los respectivos países en Río de Janeiro el 12 de Junio de 1904:

Manifestó el señor Ministro doctor Romeu que él estaba provisto de la correspondiente Plenipotencia

y de los tres instrumentos de ratificación para proceder al canje.

El señor Ministro doctor Mariano Demaría hizo igual declaración, y al efecto exhibió el Pleno Poder y documentos correspondientes.

El señor Ministro del Brasil don Francisco Xavier da Cunha manifestó, que debido a un caso fortuito, no podía presentar los documentos indispensables para efectuar dicho canje, los cuales, según aviso telegráfico, debía recibir próximamente, por lo que podía fijarse un plazo prudencial.

El señor Ministro del Paraguay hizo, a su vez, presente, que carecía también de la Plenipotencia y de los instrumentos de ratificación respectivos, que no había recibido por el estado de guerra en que se encontraba su país, que dificultaba las comunicaciones; aceptando por su parte, el arbitrio propuesto por el Plenipotenciario del Brasil, relativamente a la fijación de un nuevo plazo para el canje.

El señor Ministro doctor Demaría declaró que él no se consideraba facultado para adherir a esa proposición; porque el plazo estaba ya estipulado en la misma Convención sancionada por el Congreso Argentino, y que se limitaría a someter el caso a su Gobierno y a esperar sus instrucciones.

El señor Ministro doctor Romeu propuso que el plazo fuera de un mes y pidió a los señores Ministros lo consultaran con sus Gobiernos, para establecerlo así, a la brevedad posible, en un nuevo Protocolo que se extendería al efecto.

En fe de lo cual, los señores Plenipotenciarios mandaron extender la presente Acta, de la que recibirán copia legalizada, y que firmaron y sellaron con sus sellos, en Montevideo, a los doce días del mes de Diciembre de mil novecientos cuatro.

(L. S.) JOSÉ ROMEU.

(L. S.) F. XAVIER DA CUNHA.

(L. S.) MARIANO DEMARÍA.

(L. S.) ANTONIO SOSA.

1905

Uruguay—EE. UU. de América

Tratado de Extradición de Criminales

Celebrado en Wáshington el 11 de Marzo de 1905.

Canjeadas las ratificaciones en Montevideo el 4 de Junio de 1908.

El Presidente de la República Oriental del Uruguay y el Presidente de los Estados Unidos de América, animados por el deseo de asegurar y favorecer la prosperidad y la tranquilidad de sus países respectivos, facilitando la administración equitativa, pronta y eficaz de la justicia, impidiendo crímenes y delitos, y reglamentando la entrega de sus autores, que pudieren buscar asilo dentro de sus territorios respectivos, han convenido en firmar un tratado y, al efecto, han nombrado sus Plenipotenciarios como sigue:

Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, al señor Eduardo Acevedo Díaz, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario acreditado en los Estados Unidos y México; y Su Ex-

zelencia el Presidente de los Estados Unidos de América, a John Hay, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América; quienes, después de comunicarse sus respectivos Plenos Poderes, que encontraron en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

Las Altas Partes Contratantes se obligan entre sí a entregarse mutuamente, en las circunstancias y bajo las condiciones estipuladas en el presente Tratado, todas las personas, excepto sus propios ciudadanos, que habiendo sido acusadas o sentenciadas por cualquiera de los crímenes o delitos enumerados en el artículo II, cometidos dentro del territorio de una de las partes, se encuentren dentro del territorio de la otra.

ARTÍCULO II

- 1.º Homicidio, comprendiendo asesinato, parricidio, infanticidio, envenenamiento y homicidio voluntario; o la tentativa de cometer cualquiera de estos crímenes.
- 2.º Aborto.
- 3.º Incendio.
- 4.º Piratería o motín a bordo, cuando la tripulación, en su totalidad o en parte, haya tomado posesión del barco por medio de fraude o violencia contra el comandante.
- 5.º Falsificación o la emisión y circulación de documentos falsificados; la falsificación de actos

oficiales del Gobierno o de las autoridades públicas, o de los Tribunales de Justicia, o la emisión de la cosa falsa o falsificada. Imitación o falsificación de la moneda, ya sea metálica o de papel, o de títulos de deuda creados por los Gobiernos del Estado, Provincias o Municipios, o de los cupones respectivos, o de billetes de banco, o la emisión y circulación de los mismos; la imitación, falsificación o alteración de los sellos del Estado.

- 6.º Defraudación de los caudales públicos por funcionarios públicos o depositarios; defraudación por personas a sueldo o asalariadas, en perjuicio de sus jefes o patrones, y hurto, cuando en cualquiera de los casos la cantidad defraudada o hurtada exceda de la suma de doscientos dólares.
- 7.º Robo con fractura y escalamiento; escalamiento o allanamiento de morada o tienda.
- 8.º Robo, o sea el acto de arrebatarse a otro criminalmente y por la fuerza, dinero o efectos, usando de violencia o intimidación.
- 9.º Rapto.
10. Bigamia.
11. Plagio y violación.
12. Perjurio y soborno para conseguirlo.
13. Cohecho, o sea el acto de dar, ofrecer o recibir recompensa para influir en el desempeño de un deber legal.
14. Destrucción u obstrucción voluntaria e ilícita de líneas férreas, que pongan en peligro vidas humanas.

También tendrá lugar la extradición por complicidad en cualquiera de los crímenes y delitos comprendidos en el presente Tratado, siempre que tal complicidad sea castigada en los Estados Unidos como crimen y en el Uruguay por prisión con trabajos forzados.

ARTÍCULO III

Quedan expresamente exceptuados de este Tratado los crímenes y delitos políticos.

La persona cuya entrega ha sido concedida, en ningún caso ha de ser perseguida o castigada por delitos políticos o actos que con ellos se relacionen, cometidos antes de la extradición.

Tampoco serán perseguidos o castigados por ningún delito cometido antes de aquel que ha servido de base para pedir la extradición, a menos que la nación a la cual se hace la solicitud así lo conceda.

Si se suscitare alguna cuestión sobre si un caso dado está comprendido dentro de las disposiciones de este artículo, la decisión de las autoridades del Gobierno al cual se ha hecho la solicitud de la entrega, o que haya podido conceder la extradición, será definitiva.

ARTÍCULO IV

Cuando se pida el arresto y la detención de un fugitivo por telégrafo o por cualquier otro medio antes de la presentación de las pruebas en debida forma, el procedimiento en los Estados Unidos será recurrir al Juez u otro magistrado facultado para librar autos

de prisión en casos de extradición, presentando la demanda bajo juramento, como lo establecen las leyes de los Estados Unidos.

Cuando, de acuerdo con las estipulaciones de este artículo, se desee el arresto y detención de un fugitivo en la República del Uruguay, el procedimiento será recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores, que inmediatamente dictará las medidas necesarias para asegurar el arresto y detención provisional del fugitivo.

La detención provisional de un fugitivo cesa, y será puesto en libertad el preso, si no se presentare una requisitoria en forma para la entrega, acompañada de pruebas suficientes de la culpabilidad, según se estipula en este Tratado, dentro del plazo de sesenta días contados desde la fecha del arresto provisional y detención.

ARTÍCULO V

La requisitoria para la extradición debe ser presentada por el Agente Diplomático, a falta de éste por el funcionario consular de más alta jerarquía del país que hace la solicitud, al Ministerio de Relaciones Exteriores, e irá acompañada—en el caso de personas acusadas o enjuiciadas—de copia certificada de la orden de prisión y de las pruebas en que ésta se funda, así como de la cláusula penal aplicable al delito motivo de la requisitoria, y, cuando sea posible, la descripción de la persona reclamada.

En el caso de personas sentenciadas se presentará copia autenticada de la sentencia condenatoria.

En la República Oriental del Uruguay el procedimiento será como sigue:

El Ministro de Relaciones Exteriores elevará los referidos documentos a la Alta Corte de Justicia, que a su vez, si juzgare que la requisitoria de extradición está suficientemente fundada, la pasará al Juez competente para conocer del delito, para su ejecución. Este último funcionario estará facultado para ordenar la detención del criminal, tomarle declaración, oír su defensa y considerar la calidada de los hechos, de acuerdo con las leyes del país. Si resultare que las pruebas presentadas son suficientes para determinar el arresto, después de llenadas las condiciones requeridas por el Tratado, el Juez librará la orden de entrega, poniéndolo en conocimiento del Ejecutivo, quien, en vista de esto, dictará las medidas necesarias para que el fugitivo sea puesto a disposición del Gobierno que lo reclama.

Los gastos ocasionados por el arresto, detención, examen y entrega del fugitivo, como lo dispone este Tratado, serán por cuenta del Estado que haya pedido la extradición.

ARTÍCULO VI

Todos los efectos que al tiempo de la aprehensión se encuentren en poder de la persona cuya entrega se ha pedido, ya sean producto del crimen o delito que se le imputa o de importancia para establecer la prueba de dicho crimen o delito, en cuanto sea practicable de conformidad con las leyes de los países respectivos, se entregarán al verificarse la extradición. Sin

embargo, se respetarán debidamente los derechos de tercero sobre los efectos referidos.

ARTÍCULO VII

Se puede rehusar la extradición cuando la pena o el derecho de acción por el delito que se imputa al reclamado, hubiere prescripto por disposición de las leyes del país donde se encuentra refugiado.

ARTÍCULO VIII

Si el acusado o sentenciado cuya extradición solicita una de las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con el presente Tratado, fuese también reclamado por otro u otros Gobiernos por motivo de delitos cometidos dentro de sus respectivos territorios, será entregado al Gobierno del país donde hubiere cometido el delito más grave, siempre que el Gobierno a quien se pida la extradición, no se halle obligado por tratado a conceder la preferencia en contrario.

ARTÍCULO IX

Si el reclamado se hallare enjuiciado por un crimen o delito cometido en el país en donde se encuentre asilado, se diferirá la extradición hasta que concluya el juicio que se le sigue, o hasta que haya cumplido la condena que se le hubiere impuesto. Estas disposiciones son aplicables si se hallare cumpliendo una condena impuesta con anterioridad al tiempo de reclamar la extradición.

ARTÍCULO X

La obligación de la extradición no se extiende, en caso alguno, a los ciudadanos de las dos partes. Sin

embargo, el Ejecutivo de una u otra de las partes, está facultado para hacer la entrega si, a su juicio, fuere procedente.

ARTÍCULO XI

El Gobierno del Uruguay y el de los Estados Unidos se comprometen a notificarse recíprocamente el resultado de los juicios de todas las personas entregadas en virtud de este Tratado.

ARTÍCULO XII

Las disposiciones del presente Tratado no son aplicables a los crímenes y delitos perpetrados anteriormente a su fecha.

ARTÍCULO XIII

El presente Tratado podrá ser denunciado con un año de anticipación por cualquiera de las Altas Partes Contratantes.

ARTÍCULO XIV

El presente Tratado será ratificado y sus ratificaciones serán canjeadas en el plazo más breve posible.

En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han suscripto los precedentes artículos en los idiomas castellano e inglés y puesto al pie sus sellos.

Hecho por duplicado en la ciudad de Wáshington, el día once de Marzo de mil novecientos cinco.

(L. S.) EDUARDO ACEVEDO DÍAZ.

(L. S.) JOHN HAY.

1905

Uruguay—Argentina

Tratado sobre supresión de loterías

Celebrado en Buenos Aires el 27 de Abril de 1905.

No fué ratificado.

El Presidente de la República Oriental del Uruguay y el Presidente de la República Argentina, deseando combatir el juego en sus respectivos países, resolvieron celebrar para ese fin un Tratado y nombraron sus Plenipotenciarios a saber:

El Presidente de la República Oriental del Uruguay al Señor Daniel Muñoz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de dicha República;

El Presidente de la República Argentina, al Señor Doctor Carlos Rodríguez Larreta, Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto;

Los cuales, canjeados sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, convinieron en lo siguiente:

ARTÍCULO I

Los Gobiernos Contratantes se obligan a suprimir, desde el 1.º de Julio de 1907, las Loterías de Caridad y Beneficencia que se sortean actualmente bajo el patrocinio oficial en las dos Repúblicas.

ARTÍCULO II

Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a prohibir y perseguir toda empresa de lotería pública o privada que pretenda establecerse o se establezca en sus territorios, aunque sea en las provincias argentinas o en los departamentos de la República Oriental del Uruguay.

ARTÍCULO III

Ninguno de los dos Gobiernos otorgará el carácter y privilegios de persona jurídica a las sociedades anónimas que bajo cualquier pretexto se propongan explotar el juego, practicando sorteos y distribuyendo premios que dependan del azar. Antes del 1.º de Julio de 1907 se comprometen igualmente los Gobiernos Contratantes a retirar la personería jurídica que tuviesen otorgada a sociedades de esta clase.

ARTÍCULO IV

Las autoridades de ambas naciones se prestarán recíproca ayuda para perseguir las loterías clandestinas y también las que estén autorizadas por los Gobiernos de otros países. Para dificultar la introducción de loterías extranjeras, las Altas Partes Contratantes negociarán de común acuerdo la adhesión de

las Repúblicas del Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, a las cláusulas del presente Tratado, que no entrará en vigencia mientras tal adhesión no se hubiese obtenido.

ARTÍCULO V

Esta Convención regirá por el término de diez años contados desde el 1.º de Julio de 1907. Pero si ninguna de las Partes Contratantes anunciase a la otra, un año antes de expirar ese plazo, la resolución de hacer cesar sus efectos, continuará en vigor hasta un año después del día en que llegue a conocimiento de una de las dos Altas Partes Contratantes la demanda hecha por la otra.

ARTÍCULO VI

El presente Tratado será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en Buenos Aires ocho meses después de esta fecha, o antes si fuera posible.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firmaron el presente Tratado por duplicado y lo sellaron en la ciudad de Buenos Aires a los veintisiete días del mes de Abril del año mil novecientos cinco.

(L. S.) DANIEL MUÑOZ.

(L. S.) C. RODRÍGUEZ LARRETA.

1905

Uruguay—Varios países

Convención para la creación de un Instituto Internacional de Agricultura

Celebrada en Roma el 7 de Junio de 1905.

Ratificada por el Uruguay el 30 de Junio de 1908. ()*

Habiendo adoptado los Delegados de las Potencias que han intervenido en la Conferencia para la creación de un Instituto Internacional de Agricultura en una serie de reuniones celebradas en Roma del 29 de

(*)

Estados adherentes

Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Congo Belga, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Estonia, Estados Unidos de América, Hawai, Islas Filipinas, Islas Virginia, Puerto Rico, Etiopía, Finlandia, Francia, Africa Occidental Francesa, Argelia, Indochina, Madagascar, Marruecos (parte francesa), Túnez, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia, Canadá, Estado libre de Irlanda, India, Nueva Zelanda, Unión Sudafricana, Grecia, Guatemala, Haití, Hungría, Italia, Eritrea, Somalia Italiana, Tripolitania, Cirenaica, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Indias Neerlandesas, Perú, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Reino de Servia, Croacia y Eslovenia, Suecia, Suiza, Checo Eslovaquia, Turquía, Uruguay.

Mayo al 6 de Junio de 1905 el texto de una Convención que lleva la fecha fija del 7 de Junio de 1905, y habiendo sido sometido dicho texto a la aprobación de los Gobiernos que han tomado parte en la Conferencia referida, los infrascriptos, provistos de Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en lo que sigue:

ARTÍCULO I

Créase un Instituto Internacional Permanente de Agricultura con asiento en Roma.

ARTÍCULO II

El Instituto Internacional de Agricultura debe ser una institución del Estado, en el que cada Potencia adherente será representada por delegados que elija.

El Instituto se compondrá de una Asamblea General y de un Comité Permanente, cuya composición y atribuciones se determinan en los artículos siguientes.

ARTÍCULO III

La Asamblea General del Instituto se compondrá de las representaciones de los Estados adherentes. Cada Estado, cualquiera que sea el número de sus delegados, tendrá derecho en la Asamblea a un número de votos que será determinado por el grupo a que pertenezca, y del que se hará referencia en el artículo X.

ARTÍCULO IV

La Asamblea General elegirá de su seno un Presidente y dos Vicepresidente para cada sesión.

Las sesiones se celebrarán en las fechas fijadas por la última Asamblea General y con un programa propuesto por el Comité Permanente y adoptado por los Gobiernos adherentes.

ARTÍCULO V

La Asamblea General tendrá la alta dirección del Instituto Internacional de Agricultura.

Aprobará los proyectos preparados por el Comité Permanente referentes a la organización y al funcionamiento interior del Instituto. Acordará la cantidad total para los gastos, contraloreará y aprobará las cuentas.

Someterá a la aprobación de los Gobiernos adherentes las modificaciones de toda clase que importen un aumento de gastos o una extensión de atribuciones del Instituto. Establecerá la fecha para la celebración de las sesiones. Hará su reglamento.

Para la validez de las deliberaciones en las Asambleas Generales se requerirá la presencia de delegados que representen dos terceras partes de los votos de los Estados adherentes.

ARTÍCULO VI

El poder ejecutivo del Instituto quedará confiado al Comité Permanente, que, bajo la dirección y el contralor de la Asamblea General, hará cumplir las

deliberaciones y preparará las proposiciones que deberán sometersele.

ARTÍCULO VII

El Comité Permanente se compondrá de los miembros designados por los Gobiernos respectivos. Cada Estado adherente estará representado en el Comité Permanente por un miembro. La representación de un Estado podrá, sin embargo, confiarse al delegado de otro Estado adherente, a condición de que el número efectivo de los miembros no sea menor de quince.

Las condiciones de voto en el Comité Permanente son las mismas que las indicadas en el artículo III para las Asambleas Generales.

ARTÍCULO VIII

El Comité Permanente elegirá entre sus miembros, por un período de tres años, un Presidente y un Vicepresidente, que serán reelegibles. Hará su reglamento interno; votará el presupuesto del Instituto, dentro de los límites de los créditos puestos a su disposición por la Asamblea General; nombrará y destituirá a los funcionarios y empleados de su Oficina.

El Secretario General del Comité Permanente desempeñará las funciones de Secretario de la Asamblea.

ARTÍCULO IX

Limitando el Instituto su acción al dominio internacional, deberá:

- a) Reunir, estudiar y publicar dentro del más breve plazo posible los datos estadísticos, técnicos o económicos referentes al cultivo, las producciones tanto animal como vegetal, el comercio de los productos agrícolas y los precios cotizados en los diferentes mercados;
- b) Comunicar a los interesados, en las mismas condiciones de brevedad, todos los datos que acaban de mencionarse;
- c) Indicar los salarios de la mano de obra rural;
- d) Hacer conocer las nuevas enfermedades de los vegetales que apareciesen en un punto cualquiera del globo, con indicación de los territorios invadidos, la marcha de la enfermedad y, si fuese posible, los remedios eficaces para combatirlas.
- f) Presentar a la aprobación del Gobierno, si hubiere lugar, medidas para la protección de los intereses comunes a los agricultores y para mejorar su condición, después de haberse munido previamente de todos los medios de información necesarios, tales como: deseos expresados por los Congresos internacionales u otros Congresos agrícolas y de ciencias aplicadas a la agricultura, Sociedades agrícolas, Academias, Sociedades científicas, etc.

Deberán excluirse de la competencia del Instituto todas las cuestiones referentes a los intereses económicos, la legislación y la administración de un Estado particular.

ARTÍCULO X

Los Estados adherentes al Instituto serán clasificados en cinco grupos según el lugar que cada uno de ellos crea deber atribuirse.

El número de votos de que cada Estado dispone y el número de unidades de cotización, se establecerán de acuerdo con las dos progresiones siguientes:

<u>Grupos de Estados</u>	<u>Número de votos</u>	<u>Unidades de cotización</u>
I	5	16
II	4	8
III	3	4
IV	2	2
V	1	1

En todo caso, la contribución correspondiente a cada unidad de cotización no podrá jamás pasar de la cantidad de 2,500 francos como máximo.

La cotización a título transitorio por los dos primeros años no podrá pasar de la cantidad de 1,500 francos por unidad.

Las colonias, a pedido del Estado de que dependan, podrán ser admitidas para formar parte del Instituto en las mismas condiciones que los Estados independientes.

ARTÍCULO XI

La presente Convención será ratificada y las ratificaciones canjeadas lo más pronto posible por medio de depósito que se hará ante el Gobierno de Italia.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos

han firmado la presente Convención y le han puesto sus sellos.

Hecha en Roma, el 7 de Junio de 1905, en un solo ejemplar, depositado en el Ministerio de Negocios Extranjeros de Italia, cuyas copias certificadas serán remitidas por la vía diplomática a los Estados Contratantes.

Por el Uruguay: JUAN CUESTAS. Por Italia: TITTONI. Por Montenegro: General MITAR MARTINOVICH. Por Rusia: KROUPENSKY. Por la República Argentina: BALD.º M. FONSECA. Por Rumania: NICOLÁS FLEVA. Por Servia: M. MILOVANOVICH. Por Bélgica: L. VERHAEGHE DE NAEYER. Por El Salvador: J. GUSTAVO GUERRERO. Por Portugal: M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS. Por los Estados Unidos Mexicanos: G. A. ESTEVA. Por Luxemburgo: L. VERHAEGHE DE NAEYER. Por la Confederación Suiza: J. B. PIODA. Por Persia: N. MALCOLM. Por el Japón: T. OHYAMA. Por el Ecuador: J. T. MERA. Por Bulgaria: D. MINTCHOVITCH. Por Dinamarca: Cte. MOLKE. Por España: DUC. DE ARCOS. Por Francia: CAMILLE BARRÉRE. Por Suecia: BILDT. Por los Países Bajos: JONKHEER VAN DER GOES. Por Grecia:

CHRIST MIZZOPOULUS. Por Alemania: A. MONTS. Por Cuba: CARLOS DE PEDROSO. Por Austria y por Hungría: H. LÜTZOW. Por Noruega: CARL LÖVENSKIOLD. Por Egipto: AZIZ IZZET. Por la Gran Bretaña e Irlanda: EDWIN H. EGERTON. Por Guatemala: THOMAS SEGARINI. Por Etiopía: GIUSEPPE CUBONI. Por Nicaragua: JUAN GIORDANO DUQUE DE ORATINO. Por los Estados Unidos de América: HENRY WHITE. Por el Brasil: BARROS MOREIRA. Por Costa Rica: RAFAEL MONTEALEGRE. Por Chile: VÍCTOR GREZ. Por Perú: ANDRÉS A. CÁCERES. Por la China: HOUANG KAO. Por el Paraguay: F. S. BENUCCI. Por Turquía: M. RÉCHID.

ÍNDICES

INDICE ALFABÉTICO

- Africa del Sud (Colonias Británicas de), págs. 143, 175.
Alemania, págs. 45, 65, 77, 97, 143, 257, 271, 301, 323, 511.
Alemania y protectorados alemanes, págs. 13, 143, 175, 181, 193, 211, 215.
América (EE. UU. de), págs. 13, 143, 175, 271, 301, 323, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 475, 481, 549.
Argentina, págs. 13, 45, 65, 95, 109, 117, 143, 175, 181, 211, 215, 233, 235, 259, 333, 339, 347, 351, 353, 357, 363, 389, 391, 393, 395, 401, 411, 419, 433, 439, 453, 465, 475, 481, 507, 521, 543, 545, 557.
Australia (Colonias Británicas de), págs. 13, 143, 175.
Austria, pág. 211.
Austria-Hungría, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 215, 271, 301, 323.
Bélgica, págs. 13, 45, 65, 77, 107, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323, 511.
Bolivia, págs. 13, 143, 175, 395, 401, 411, 419, 423, 433, 439, 453, 465, 475.
Bosnia-Herzegovina, págs. 143, 175, 181, 193, 211.
Brasil, págs. 13, 45, 65, 77, 113, 129, 143, 175, 181, 193, 215, 245, 337, 341, 521, 545.
Bulgaria, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323.
Canadá, págs. 143, 175.
Centro América (Rep. Mayor de), págs. 143, 175, 181, 193, 211, 215.
Colombia, págs. 13, 45, 77, 143, 175, 193, 211, 215, 395, 401, 411, 419, 423, 433, 439, 453, 475, 481.
Congo, págs. 13, 143, 175.
Corea, págs. 143, 175.
Costa Rica, págs. 13, 45, 65, 143, 175, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 475, 481.
Chile, págs. 13, 45, 65, 135, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 475, 481, 487.

- China, págs. 143, 175, 271, 301, 323.
- Dinamarca, págs. 77, 215, 271, 301, 323, 511.
- Dinamarca y Colonias Danesas, págs. 13, 45, 65, 143, 175, 181, 193, 211.
- Dominicana (República), págs. 13, 143, 175, 181, 193, 215, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 465, 475, 481.
- Ecuador, págs. 13, 143, 175, 401, 411, 419, 423, 433, 439, 453, 475, 481.
- Egipto, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 215.
- España, págs. 45, 111, 125, 193, 211, 271, 301, 323, 371, 461, 511.
- España y Colonias Españolas, págs. 13, 143, 175, 193.
- Francia, págs. 103, 229, 271, 301, 323, 511.
- Francia y Colonias Francesas, págs. 13, 45, 65, 143, 175, 181, 211.
- Gran Bretaña, págs. 5, 11, 267, 271, 301, 323, 381, 511.
- Gran Bretaña y diversas colonias británicas, págs. 13, 143, 175.
- Grecia, págs. 13, 45, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323.
- Guatemala, págs. 13, 143, 175, 181, 193, 211, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 465, 475, 481.
- Haití, págs. 13, 143, 175, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 475, 481.
- Hawai, págs. 13, 143, 175.
- Honduras, págs. 13, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 475, 481.
- Holanda, págs. 181.
- Holandesas (Colonias), págs. 143, 175, 181, 193, 211.
- Hungría, págs. 175, 711.
- India Británica, págs. 13, 143, 175, 193, 211.
- Italia, págs. 13, 45, 65, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 231, 271, 301, 323, 377, 511, 519.
- Japón, págs. 13, 65, 143, 175, 181, 271, 301, 323.
- Liberia, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211.
- Luxemburgo, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323.
- México, págs. 13, 143, 175, 271, 301, 323, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 465, 475, 481.
- Montenegro, págs. 13, 45, 143, 175, 193, 211, 271, 301, 323.
- Nicaragua, págs. 13, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 475, 481.
- Noruega, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323.

- Orange, págs. 143, 175.
- Países Bajos, págs. 143, 175, 193, 211, 215, 271, 301, 313, 511.
- Países Bajos y Colonias Neerlandesas, págs. 13, 45, 65.
- Paraguay, págs. 13, 45, 87, 143, 175, 369, 395, 401, 411, 419, 423, 433, 439, 453, 465, 475, 481, 521, 545.
- Persia, págs. 13, 77, 175, 271, 301, 323, 501.
- Perú, págs. 13, 175, 395, 401, 411, 419, 423, 433, 439, 453, 465, 475, 481.
- Portugal, págs. 271, 301, 323, 367, 511.
- Portugal y Colonias Portuguesas, págs. 13, 45, 65, 77, 175, 181, 193, 211, 215.
- Portuguesas (Colonias), pág. 143.
- República del Salvador (V. Salvador).
- Rumania, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323.
- Rusia, págs. 13, 143, 175, 193, 271, 301, 323, 511.
- Salvador, págs. 13, 45, 65, 395, 401, 411, 423, 433, 439, 453, 465, 475, 481.
- Servia, págs. 13, 45, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323.
- Siam, págs. 13, 45, 65, 143, 175, 193, 211, 271, 301, 323.
- Sudafricana (República), págs. 13, 143, 175.
- Suecia, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 271, 301, 323.
- Suecia y Noruega, pág. 511.
- Suiza, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 225, 271, 301, 323, 511.
- Túnez, págs. 13, 45, 65, 143, 175, 181, 193, 211.
- Turquía, págs. 13, 45, 65, 77, 143, 175, 181, 193, 211, 215, 271, 301, 323.
- Varios países, pág. 561.
- Venezuela, págs. 13, 45, 143, 175, 193, 211, 395.
-

ÍNDICE GENERAL

				Págs.
1891 Enero	22	Gran Bretaña	Convención Postal . . .	5
1891 Marzo	20	Gran Bretaña	Protocolo adicional al Tratado de Extra- dición de Crimina- les	11
1891 Julio	4	Alemania y protec- torados alem., EE. UU. de América, Argentina, Aus- tria-Hungría, etc., etc.	Convención Postal Uni- versal	13
1891 Julio	4	Alemania, Argenti- na, Austria-Hun- gría, Bélgica, Brasil, Bulgaria, etc., etc.	Convención concernien- te al canje de Bul- tos Postales	45
1891 Julio	4	Alemania, Argenti- na, Austria-Hun- gría, Bélgica, Brasil, Bulgaria, etc., etc.	Arreglo concerniente al Servicio de Giros Postales	65
1891 Julio	4	Alemania, Austria- Hungría, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Colombia, etc., etc.	Arreglo concerniente a la intervención del Correo en el abono de los diarios y pu- blicaciones periódicas	77
1892 Marzo	14	Paraguay	Convenio Postal . . .	87
1892 Mayo	14	Argentina	Protocolo relativo a la sede de las respec- tivas Legaciones . .	95
~~1892 Junio~~	~~20~~	~~Alemania~~	~~Tratado de Comercio . .~~	~~97~~
1892 Julio	4	Francia	Convención de Comer- cio y Navegación . .	103

			Págs
NR {	1892 Julio 10	Bélgica	Protocolo sobre canje de los boletines del Censo General . . . 107
	1892 Setiembre 24	Argentina	Convenio Sanitario . . . 109
NR {	1893 Noviembre 11	España	Protocolo relativo a la adhesión de España a los Tratados celebrados en el Congreso de Montevideo . . . 111
	1894 Febrero 15	Brasil	Protocolo sobre sucesos de la frontera . . . 113
	1894 Julio 5	Argentina	Acuerdo Sanitario . . . 117
	1896 Enero 31	España	Declaración relativa al Tratado de Extradición de Criminales, de 23 de noviembre de 1885 124
NR {	1896 Octubre 31	Brasil	Convención sobre Deuda y Comercio . . . 129
	1897 Mayo 10	Chile	Tratado de Extradición de Criminales . . . 135
	1897 Junio 15	Varios países	Convención Postal Universal 143
	1897 Junio 15	Varios países	Unión Postal Universal. Protocolo final . . . 175
	1897 Junio 15	Varios países	Arreglo referente al servicio de Giros Postales 181
	1897 Junio 15	Varios países	Convención referente al Canje de Encomiendas Postales 193
	1897 Junio 15	Varios países	Unión Postal Universal. Protocolo final . . . 211
	1897 Junio 15	Varios países	Arreglo sobre suscripciones a publicaciones . . . 215
	1897 Octubre 22	Suiza	Protocolo relativo al incidente "Nin-Frey" 225
D {	1898 Junio 24	Francia	Protocolo relativo al Tratado de Comercio y Navegación de 4 de julio de 1892. . . 229
NR {	1898 Diciembre 2	Italia	Protocolo relativo al Tratado de Comercio y Navegación de 19 de setiembre de 1885 . . . 231

1898 Diciembre	23	Argentina	Protocolo relativo a la reclamación por el apresamiento de los vapores argentinos "Doli", "Fram" y "Venus"	233
1899 Enero	25	Argentina	Convenio Telegráfico	235
1899 Abril	8	Brasil	Convenio Telegráfico	245
1899 Junio	5	Alemania	Convenio de Comercio	257 D
1899 Junio	8	Argentina	Tratado de Arbitraje General	259
1899 Julio	15	Gran Bretaña	Convenio de Comercio y Navegación	267 D
1899 Julio	29	Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Bulgaria, China, etc., etc.	Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales	271
1899 Julio	29	Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Bulgaria, China, etc., etc.	Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre	301
1899 Julio	29	Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Bulgaria, China, etc., etc.	Convención para la adaptación a la guerra marítima de los principios de la Convención de Ginebra de 22 de agosto de 1864.	323
1899 Agosto	—	Argentina	Acuerdo Sanitario	333
1899 Setiembre	6	Brasil	Protocolo relativo al Convenio de Extradición de Criminales de 25 de noviembre de 1878	337
1899 Octubre	26	Argentina	Convenio sobre importación y exportación de ganado	339 NR
1899 Octubre	26	Argentina-Brasil	Convenio Sanitario	343
1899 Noviembre	15	Argentina	Acuerdo Sanitario	347
1899 Diciembre	6	Argentina	Protocolo relativo al Tratado General de Arbitraje de 8 de junio de 1899	349
1900 Junio	5	Argentina	Protocolo relativo al Tratado General de	

			Arbitraje de 8 de junio de 1899 . . .	351
			Convenio Telegráfico . . .	353
			Convenio Telegráfico . . .	357
			Acuerdo Sanitario . . .	363
			Declaración relativa al Tratado de Extradición de Criminales de 27 de setiembre de 1878	367
			Convenio Sanitario . . .	369
			Notas relativas a la supresión de legalizaciones en las comisiones rogatorias . . .	371
			Convenio Postal . . .	377
			Convenio Postal . . .	381
			Protocolo relativo al Tratado General de Arbitraje	389
			Artículos adicionales al Convenio sobre importación y exportación de ganado . . .	391
			Protocolo Adicional al Tratado de Arbitraje General de 8 de junio de 1899 . . .	393
			Protocolo sobre adhesión a las Convenciones de La Haya de 1899	395
			Convención para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas	401
			Convención sobre Canje de Publicaciones Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales	411
			Convención para la reunión de un Congreso Geográfico en Río de Janeiro . . .	419
NR {	1900 Julio	28	Argentina	
	1900 Julio	30	Argentina	
	1900 Setiembre	19	Argentina	
	1901 Enero	23	Portugal	
	1901 Marzo	5	Paraguay	
	1901 Abril	13	España	
	1901 Mayo	3		
	1901 Mayo	6		
	1901 Mayo	14	Italia	
	1901 Julio	1.º	Gran Bretaña	
	1901 Junio	8	Argentina	
NR {	1901 Setiembre	25	Argentina	
	1901 Diciembre	21	Argentina	
	1902 Enero	15	EE. UU. de América, Argentina, Bolivia, Colombia, etc., etc.	
NR {	1902 Enero	27	Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	
NR {	1902 Enero	27	Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	
NR {	1902 Enero	27	Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.	

			Págs.	
1902 Enero	27.	Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	Tratados sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Marcas de Comercio y de Fábrica 423	} NR
1902 Enero	27	Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	Convención para la formación de los Códigos de Derecho Internacional Público y Privado de América. 433	
1902 Enero	28	Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	Tratado de Extradición de Criminales y Protección contra el Anarquismo 439	} NR
1902 Enero	28	Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	Convención sobre el ejercicio de Profesiones Liberales 453	
1902 Enero	28	España	Tratado de Arbitraje . 461	
1902 Enero	29	Argentina, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, etc., etc.	Tratado de Arbitraje . 465	
1902 Enero	29	Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	Convención relativa a los Derechos de Extranjería 475	} NR
1902 Enero	30	Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, etc., etc.	Tratado sobre reclamaciones por daños y perjuicios pecuniarios 481	
1903 Febrero	6	Argentina-Chile	Convención Telegráfica 487	
1903 Mayo	19	Persia	Tratado de Amistad y Comercio 501	} NR
1903 Setiembre	7	Argentina	Convención que modifica el Tratado de Derecho Procesal de 11 de enero de 1889. 507	
1904 Mayo	18	Alemania, Bélgica, Dinamarca, etc.	Convenio sobre trata de blancas 511	
1904 Junio	9	Italia	Protocolo relativo al embargo y desalojo de la barca "María Madre" 519	
1904 Junio	12	Argentina, Brasil, Paraguay	Convención Sanitaria . 521	} Caducó

				<u>Págs.</u>
1904 Diciembre	6	Argentina	Protocolo por el que se solucionan varios in- cidentes diplomáticos	543
1904 Diciembre	12	Argentina, Brasil, Paraguay	Acta relativa a la ra- tificación de la Con- vención Sanitaria de 12 de junio de 1904.	545
1905 Marzo	11	Estados Unidos de América	Tratado de extradición de criminales . . .	549
NR { 1905 Abril	27	Argentina	Tratado sobre supre- sión de loterías . .	557
1905 Junio	7	Varios países	Convención para la creación de un Insti- tuto Internacional de Agricultura . . .	561

Índices:

Alfabético	571
General	573

**PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 11 22 07 08 014 2